

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

**Departamento de Economía Aplicada IV
(Economía Política y Hacienda Pública)**



**DATOS Y COSTES DE TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN EL SISTEMA JUDICIAL PENAL ESPAÑOL**

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR**

Tatiana Torrejón Cuéllar

Bajo la dirección del doctor

Francisco Cabrillo Rodríguez

Madrid, 2013

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA IV



TESIS DOCTORAL
DATOS Y COSTES DE TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
EL SISTEMA JUDICIAL PENAL ESPAÑOL
Análisis económico

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR
Tatiana Torrejón Cuéllar

Director:
Francisco Cabrillo Rodríguez

Madrid, 2012

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

DOCTORADO EN ECONOMÍA E INSTITUCIONES

**DATOS Y COSTES DE TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
EL SISTEMA JUDICIAL PENAL ESPAÑOL
Análisis económico**

Tatiana Torrejón Cuéllar

Director:

Francisco Cabrillo Rodríguez

Febrero, 2011

Agradecimientos

A mi Director de Tesis, Dr. D. Francisco Cabrillo. A él le dedico este trabajo. Gracias por sus consejos y su constante apoyo.

A la memoria de mi abuela Da. Consuelo Bernardo de Cuéllar, profesora de escuela primaria, mujer y madre coraje. Aunque ya no te encuentres conmigo, sigues siendo fuente inagotable de inspiración.

DATOS Y COSTES DE TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SISTEMA JUDICIAL PENAL ESPAÑOL

Análisis económico

INTRODUCCIÓN

P. 1

SUMARIO

P. 4

CAPÍTULO I: LITERATURA ECONÓMICA

1. Principios generales del análisis económico del derecho penal

P. 7

2. Teoría de la Imposición óptima de la ley

P. 16

3. Modelos económicos de la violencia de pareja

P. 19

3.1. TAUCHEN H., WITTE A. D. y LONG S. (1991): "Domestic Violence, A Non random affair"

P. 19

3.2. TAUCHEN H. y WITTE A. D. (1995): "The dynamics of domestic violence"

P. 23

3.3. BLOCH F. and RAO V. (2002). "terror as a bargaining instrument: A case study of dowry violence in rural India"

P. 24

3.4. JAYARAMAN R. (2004): "Modeling domestic violence"

P. 26

3.5. BOBONIS G. J., CASTRO R. y GONZALEZ-BRENES M. (2009). "Public Transfers and Domestic Violence: The roles of Private information and spousal control"

P. 30

4. Reflexiones

P. 33

CAPÍTULO II: INDICADORES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. ANÁLISIS COMPARADO

1. Homicidios de mujeres en general
P. 37
 - 1.1. Homicidios en general en Europa
 - 1.2. Homicidios en general en América
2. Homicidios domésticos
P. 40
 - 2.1. Homicidios domésticos en Europa
 - 2.2. Homicidios domésticos en América
3. Homicidios cometidos por la pareja
P. 44
 - 3.1. Homicidios cometidos por la pareja en Europa
 - 3.2. Homicidios cometidos por la pareja en América
4. Evolución de los homicidios de mujeres en general
entre 2000 y 2006.
P. 50
 - 4.1. Evolución de los homicidios de mujeres en el entorno doméstico, entre 2000 y 2006.
 - 4.2. Evolución de los homicidios de mujeres cometidos por la pareja, entre 2000 y 2006.
5. Criminalidad (Violencia en general) en España y en Europa
P. 51
6. Conclusiones
P. 53

CAPÍTULO III: CIFRAS SOBRE LA VIOLENCIA EN GENERAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA

1. Delitos y faltas en general	
P. 55	
1.1. Delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas.....	
P. 56	
1.2. Homicidios dolosos y Asesinatos	
P. 57	
1.3. Delitos de lesiones	P. 58
1.4. Faltas de Lesiones	P. 58
1.5. Conclusiones	P. 59
2. Delitos y faltas por violencia de género	
P. 61	
2.1 Datos históricos de violencia doméstica hasta 2002	P. 61
2.2 Delitos y faltas desde 2003	P. 64
2.3 La Macroencuesta “Violencia contra las Mujeres”	P. 69
2.4 Denuncias por tipo de infracción penal y bien jurídico protegido	P. 73
a) Asesinatos.	
b) Homicidios dolosos.	
c) Delitos y faltas contra el cuerpo o la salud física o mental.	
d) Delitos y faltas contra el derecho a la libertad.	
e) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.	
2.5 Conclusiones	P. 87

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS JUDICIALES EN MATERIA PENAL

1. Las denuncias relacionadas con la violencia sobre la mujer	P. 89
2. ¿Quiénes presentan las denuncias?	P. 92

3. Denuncias por tipo delictivo	P. 93
4. ¿Qué porcentajes de denunciantes son extranjeras?	P. 94
5. ¿Qué comunidades autónomas concentran más denuncias?	P. 95
6. Las Órdenes de Protección (O.P.)	P. 96
7. Renuncias de las víctimas al proceso penal	P.102
8. ¿Cómo terminan los procesos?	P.102
9. Conclusiones	P.105

CAPÍTULO V. HOMBRES INGRESADOS A UNA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA, POR DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

1. ¿Cuántos hombres han pasado por la cárcel?	P.110
2. Situación de los hombres reclusos, relacionados con sucesos de violencia de género	P.112

CAPÍTULO VI. COSTES Y FINANCIAMIENTO DE LA TUTELA JUDICIAL PENAL Y ASISTENCIAL

1. Personal de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer	P. 115
1.1. ¿Cuánto cuesta mantener al personal judicial?	
1.2. Número de Juzgados de Violencia sobre la Mujer a nivel nacional.	
2. Los abogados del Turno de Oficio	P.119
3. Costes privados en honorarios de abogados	P.121
4. Matrimonios, separaciones y divorcios	P.123

CAPÍTULO VII. EFICIENCIA DEL DERECHO PENAL COMO INSTRUMENTO DE DISUASIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Justicia Vs. Eficiencia	P.128
2. Incentivos de la mujer víctima	P.134
3. <i>Avoidance</i> de la víctima	P.135
4. Incentivos de las víctimas extranjeras	P.139
5. El beneficio esperado del maltratador	P.142
6. Intervención del derecho penal con resultado óptimo	P.143
7. Indicadores de disuasión de delitos de violencia sobre la mujer	P.149
8. Las Órdenes de Protección	P.158
a) Relación entre denuncias presentadas, O.P. solicitadas y concedidas	P.158
b) Aproximaciones de las O.P. quebrantadas	P.160
c) Efectos de la jurisprudencia sobre la relevancia del consentimiento de la víctima cuando se ha incumplido la orden de protección	P.163
d) Eficiencia de las órdenes de alejamiento y comunicación como pena	P.167
e) Eficiencia de las órdenes de alejamiento y comunicación como O.P.	P.169

CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS	
P.171	

APÉNDICE: EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Políticas Públicas sobre violencia doméstica y de género, antes de la Ley 11/2003
..... P.179
2. Ley Orgánica 11/2003
P.184
3. Ley Orgánica 1/2004
P.185

BIBLIOGRAFÍA
P.190

INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medida de Protección Integral contra la Violencia de Género fue de los primeros proyectos legislativos aprobados por las Cortes Generales tras la victoria del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales de 14 de marzo de 2004. Contó con el apoyo de todos los partidos políticos y fue recibida con beneplácito por todos los sectores de la sociedad, no sin haber generado polémica en torno a castigar con una pena superior cuando quien comete el delito de violencia doméstica es un hombre.

La referida ley, que como su nombre lo indica, es integral porque abarca tutela judicial (de naturaleza penal, civil y familiar), asistencial, de prevención, criterios para los medios de comunicación, entre otros. Así como la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que en el orden penal, se especializan en la instrucción de los delitos de Violencia de Género¹.

Desde ese año los operadores jurídicos se enfrascaron en un intenso debate sobre la constitucionalidad de los “nuevos” delitos y sus penas. Aunque al día de hoy, todos los tipos penales puestos en entredicho han sido ratificados por el Tribunal Supremo en distintas ocasiones; a nosotros nos interesan los efectos buscados y no buscados de estas políticas, analizados desde el punto de vista del análisis económico del derecho.

Siguiendo esa línea de investigación, por el lado del análisis positivo veremos algunos costes económicos de la regulación penal de la violencia de género y algunos datos que hemos obtenido de los efectos de la referida regulación. Costes desde un punto de vista económico, y como lo vamos a enfocar en este trabajo, serían los costes de la utilización de los recursos económicos en los que incurre el estado y los particulares en la los delitos de violencia de género. Sólo nos centraremos en los costes que tienen que ver con la aplicación de las reformas penales en la materia y la respuesta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. También analizaremos los incentivos que han generado estas políticas en los afectados: los maltratadores y las víctimas, así como los costes en los que incurren para la maximización de su utilidad en el actual sistema de incentivos creado por las normas penales y criterios jurisprudenciales.

Desde luego, por el lado del análisis normativo, nos planteamos cuáles pueden ser las oportunidades de mejora de las normas jurídicas y de toda la inversión que se ha hecho en torno al sistema judicial penal creado en torno a ella.

En cuanto a costes públicos, declaramos que este trabajo es un intento de medir costes porque nos ha sido muy difícil encontrar información disgregada sobre los costes incurridos por parte de las distintas instituciones del sistema penal, aplicado a la violencia de género. A la fecha de elaboración de este

¹ Para conocer el detalle de los competencias de estos juzgados en el orden penal y civil, revísese el apéndice de este trabajo, P. 184.

trabajo, no se conoce la existencia de reporte oficial, emitido por algún organismo gubernamental, donde se detalle las inversiones realizadas en la lucha de la violencia de género. Por tal motivo hemos cuantificado solamente los gastos en salarios de funcionarios judiciales.

El otro problema con el que nos hemos encontrado ha sido la accesibilidad y fiabilidad de la información de estadísticas judiciales. Para citar un ejemplo; fue por intermedio de un periodista que nos contactó con la Oficina de Prensa de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, gracias al cual obtuvimos información de población masculina reclusa durante los últimos cinco años, cuyo delito principal cometido es la violencia de género. A la fecha de elaboración de este trabajo esa información todavía no está disponible. Por otro lado, los reportes estadísticos de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, no explican dónde están 123.825 denuncias presentadas desde 2006 a 2009, pues los procesos con sentencia y archivados por falta de pruebas al final de esos cuatro años no suman el total de denuncias presentadas ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer: 562.841.

Sin contar con las lagunas de la información oficial. Entre ellas tenemos: Registro de los incumplimientos de las órdenes de protección, duración de las órdenes de protección, duración media de la pena de prisión y duración de las órdenes de alejamiento y comunicación aplicadas, beneficiarias de las ayudas sociales por nacionalidades, entre otros.

Además de las cifras oficiales, sobre todo en cuanto a medición de violencia, hemos utilizado otra fuente de datos, el Centro Reina Sofía² que ha elaborado distintos estudios de violencia género. Un aspecto que llama nuestra atención es la disparidad entre el registro de muertes por violencia de género entre los organismos oficiales y la referida institución. Según el Instituto de la Mujer, en el año 2005 ocurrieron cinco muertes menos que lo indicado por el Centro Reina Sofía. Lo contrario sucede con el año 2009, al reportar el Instituto de la Mujer, cinco casos más.

Existe abundancia de análisis jurídico y algunos trabajos que analizan los delitos de violencia de género desde el punto de vista criminológico. Salvo error u omisión, no encontramos trabajo alguno que plantee un estudio de las citadas normas jurídicas desde el punto de vista del análisis económico del derecho en España, lo cual nos motivó a trabajar este tema.

Hay un Informe muy bueno -por su amplitud y rigurosidad- referido al coste de la violencia de género en Gran Bretaña, realizado por la Profesora Silvia Walby, por encargo de la Unidad de Mujer e Igualdad, para el Ministerio de Industria y Comercio, en el año 2004³. Hemos tomado como referencia ese trabajo, y creemos que el gobierno español mediante el Observatorio Estatal de Violencia

² Fundación de la Comunidad Valenciana para el estudio de la Violencia.

³ WALBY, Sylvia (September 2004). "The cost of Domestic Violence". Publicado por *Women and Equality Unit. Department of Trade and Industry*. Se trata de un reporte acerca del gasto público en el Sistema Penal Judicial, Sanidad, Salud Mental, Servicios sociales, Sistema Judicial Civil, impacto en el empleo, así como costes emocionales. Se puede acceder al trabajo en: <http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/walby-costdomesticviolence.pdf>

sobre la Mujer debería tener como agenda permanente elaborar este tipo de reportes de forma periódica y no sólo limitarse a publicar estadísticas de denunciantes y usuarias de los servicios puestos a disposición de las víctimas de violencia de género⁴.

Pensamos que es necesario conocer el coste de las políticas públicas en materia de violencia de género principalmente por dos razones. En primer lugar para conocer la realidad de la violencia de género a fondo y medir si los recursos empleados se están usando de forma eficiente. Porque, en segundo lugar, conociendo mejor la realidad y evaluando si las políticas públicas tienen el efecto deseado, es la única manera de mejorar toda la batería de facilidades y ayudas que se están dando a las mujeres para contrarrestar la violencia doméstica ejercida sobre ellas, por parte de la pareja en su gran mayoría.

Con este trabajo, pretendemos ofrecer un aporte más al debate sobre la eficiencia de las normas penales relacionadas con la violencia de género, para lo cual creemos indispensable hacer un resumen del aporte, enfoque, del análisis económico del derecho sobre el derecho penal y la teoría de la imposición de la ley. Asimismo presentamos los modelos económicos que formalizan las interacciones entre posibles maltratadores y las potenciales víctimas. Todo esto ocupa el primer capítulo de este trabajo.

Esta tesis consta de ocho capítulos, un apéndice y la bibliografía. El contenido del primer capítulo está mencionado en el párrafo anterior. El segundo versa sobre el análisis de la manifestación más grave de la violencia de género, que es con resultado de muerte, entre España y distintos países del mundo. El tercer capítulo compara la violencia en general con la violencia de género en España. El cuarto, hace un análisis de las estadísticas judiciales en materia penal. El quinto se refiere a los ingresos de hombres en instituciones penitenciarias por comisión de delitos de violencia de género. El sexto, sobre los costes y financiamiento de la tutela judicial y asistencial. El séptimo, dedicado a la eficiencia del derecho penal como instrumento de disuasión de los delitos de violencia de género. Y el capítulo octavo engloba las conclusiones. Finalmente está el apéndice con la evolución legislativa sobre la violencia de género y la bibliografía.

SUMARIO

¿Qué se quiere conseguir con este trabajo?

⁴ Esa es la tónica de los Informes Anuales del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Se puede acceder al último informe, el tercero que es de 2010 en:

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193049890379&pagename=MinisterioIgualdad%2FPage%2FMIGU_listado

Dado que las últimas reformas judiciales se concentran en calificar como delitos lo que antes eran faltas, y agravan las penas y medidas preventivas cuando el autor es un hombre y la víctima una mujer; nos vamos a centrar en los costes de la regulación penal sobre la violencia contra la mujer, la denominada “Violencia de género”⁵.

Este trabajo tiene como objetivo, en primer lugar, proporcionar algunos datos empíricos necesarios (sobre todo de índole judicial penal) para evaluar la eficiencia de las políticas públicas. Algunos de esos datos aunque están publicados, están sin explotar; hacía falta producir tendencias, tasas, prevalencias.

En segundo lugar analizamos los diferentes costes económicos en los que incurren los particulares y el Estado, no sin antes advertir que existe gran dificultad en conseguir datos sobre costes de investigación del delito o la financiación de los juzgados. No hay, hasta la fecha, ningún documento oficial que haya realizado un informe detallado de lo que significa para las arcas del estado financiar las políticas públicas orientadas a luchar contra la violencia de género, salvo error u omisión.

¿Cuáles son las fuentes de datos?

La información estadística ha sido tomada de varias fuentes, entre ellas:

- Balances de Criminalidad elaborados por el Ministerio del Interior.
- Estadísticas sobre denuncias, muertes y violencia sexual contra las mujeres; elaborado por el Instituto de la Mujer.
- Bases de datos de estadística judicial, publicados y actualizados por el Consejo General del Poder Judicial.
- Informes del Centro Reina Sofía (Fundación de la Comunidad Valenciana para el estudio de la violencia), para datos de violencia de pareja comparada y estudios sobre el perfil de los autores de asesinatos de violencia de género.
- Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

¿Qué consideramos violencia de género?

La violencia de género, es la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer.

Aunque el delito de malos tratos en el ámbito familiar se encuentra recogido en el artículo 153 del Código Penal, el cual literalmente dice “El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpearle o maltratarle de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor...”;

⁵ Aunque en este trabajo hablamos siempre de la violencia de género debido a su uso generalizado en la legislación y en las instituciones públicas; cabe destacar que según la Real Academia de la Lengua es mejor emplear la denominación “Violencia por razón de sexo” pues el término género es producto de la inadecuada traducción de la expresión inglesa *gender-based violence* o *gender violence*, difundida en el Congreso sobre la Mujer celebrado en Pekín en 1995. En “Informe de la Real Academia Española sobre la expresión violencia de género”. Madrid, mayo de 2004.

hay diferentes manifestaciones de violencia de género. A continuación las enumeramos según el bien jurídico protegido:

- Homicidio y asesinato.
- Delito de lesiones, falta de lesiones,
- Agresión y abuso sexual con y sin penetración,
- Amenazas, coacciones
- Malos tratos habituales y no habituales en el ambiente familiar, trato degradante.

Como hemos dicho antes, concentramos nuestro estudio en la violencia de género porque son las mujeres víctimas de violencia quienes han acaparado la atención del regulador en estos últimos tiempos. Por eso, en este trabajo excluimos a otros sujetos que también sufren violencia doméstica, como pueden ser ascendientes (padres, abuelos), descendientes (hijos, nietos) y otras personas especialmente vulnerables que comparten el hogar familiar.

¿Cuál es el objeto de estudio?

El coste de la violencia doméstica es vasto y diverso. Primero veremos cuál es la incidencia de la violencia de género comparado con otros países, y las características de la violencia de género en España.

Luego, presentaremos datos y analizaremos algunos costes del sistema judicial penal, tales como financiamiento del personal judicial de los Juzgados de Violencias sobre la Mujer (en adelante JVM), a asistencia legal gratuita y onerosa, las penas de prisión y las penas accesorias que más usan; las órdenes de protección para víctimas de violencia de género. Asimismo, intentamos encontrar los mejores indicadores de disuasión de este tipo de delitos.

Por otro lado, analizaremos:

- Incentivos de víctimas y agresores, cuando intervienen en un proceso penal por violencia de género.
- Repercusión de las políticas públicas sobre violencia de género en materia penal sobre los matrimonios, separaciones y divorcios.
- Incentivos creados en las víctimas alrededor de las ayudas dinerarias para víctimas de violencia de género.

Hay muchos más costes, pero con el ánimo de restringir el estudio, aunque no por ser menos interesantes, en esta oportunidad no desarrollaremos los siguientes costes:

- El impacto de la violencia en los hijos y nietos de familias donde hubo violencia doméstica⁶.
- El coste del sector Salud. Aquí se incluirían los costes en los que incurre la Sanidad Pública cuando hay maltrato físico.
- Costes psicológicos y psiquiátricos. No sólo es el coste que implica para la Sanidad Pública la atención a las víctimas de violencia doméstica, sino

⁶ Al respecto hay un interesante trabajo del Profesor POLLACK, Robert A.. “*An intergenerational model of domestic violence*”. Washington University in Saint Louis. October 2002.

también los costes en los que incurrirían las personas en contratar servicios particulares de asesoramiento psicológico y psiquiátrico.

- Coste emocional. La violencia doméstica causa pena, sufrimiento en las víctimas y en su entorno cercano; la metodología de estimación de este coste se basa en lo que “estaríamos dispuestos a pagar” para evitar este trauma.⁷
- Costes en la productividad nacional. Las ausencias por motivo de stress por un conflicto familiar, de larga o corta duración. También se podría incluir aquí, el tiempo que se invierte acudiendo a los Tribunales, como denunciante y como denunciado en un proceso penal.

CAPÍTULO I LITERATURA ECONÓMICA

1. PRINCIPIOS GENERALES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO

⁷ En el Reino Unido se ha hecho costumbre hacer este tipo de estudio para acompañar la estimación del análisis coste/beneficio de las normas del Ministerio del Interior (para la lucha contra el crimen) y el Departamento de Transportes (proyectos de mejoras de carreteras). La metodología consiste en estimar el coste de lo que estaría dispuesto a pagar el ciudadano para evitar un delito, o un accidente. El coste emocional estimado para el año 2001, fue de 17.086 billones de libras (WALBY, 2004).

DEL DERECHO PENAL

1. Qué entendemos por delito

El delito⁸ es la acción violatoria de una norma jurídica.

Sin embargo, no toda violación de la ley es suficiente para justificar la persecución criminal.

Cooter y Ulen⁹ señalan que el hecho criminal tiene que reunir los siguientes elementos:

1. Debe existir intención criminal. El daño causado debe ser hecho con intención, no por accidente o negligencia. *Mens rea*¹⁰ es el término legal para la intención criminal.
2. Naturaleza pública del daño.
3. Castigo. El castigo y la compensación tienen objetivos diferentes. En derecho de daños, la compensación busca que la víctima esté mejor a expensas del ofensor. La pena o el castigo en derecho penal hace que el ofensor esté peor sin beneficiar directamente a la víctima, sino en todo caso, a la sociedad.
4. Estándar de prueba requerida (evidencia). En el derecho penal, la carga de la prueba recae en el Fiscal y debe probar su argumentación más allá de la duda razonable¹¹. En cambio, en el derecho civil, se da la preponderancia de la prueba; el demandante debe tener una argumentación más creíble que el demandado.

2. Necesidad del derecho Penal

Si el derecho civil, mediante la compensación, lograra que el criminal internalizara el coste de los delitos, el derecho penal sería innecesario desde el punto de vista económico.

Las razones para justificar su existencia son:

1ero) Cuando la compensación perfecta es imposible.

Siguiendo el razonamiento de Cooter y Ulen, el derecho de los ilícitos culposos que utiliza la compensación para las víctimas se hace insuficiente cuando han perdido un hijo o cuando han perdido un órgano vital. La compensación perfecta es imposible. En estos casos, los tribunales otorgan el pago de daño para disuadir los riesgos poco razonables, no para compensar el daño efectivamente causado.

De igual modo, el castigo penal trata de disuadir los daños intencionales, no de compensarlos. En lugar de fijarle un precio al delito; la meta del castigo es su disuasión. El estado prohíbe que los individuos dañen intencionalmente a otros y sanciona esta prohibición con un castigo. Por lo tanto, el derecho penal es un

⁸ En este trabajo vamos a utilizar los términos delito y hecho criminal como sinónimos para efectos prácticos y porque la mayor parte de la literatura económica hace lo mismo. Sin embargo, hay que mencionar que jurídicamente el primero es la especie y el segundo el género.

⁹ COOTER Robert y ULEN Thomas. Derecho y Economía. Fondo de Cultura Económica. México, 1998. P. 544 a 549.

¹⁰ Expresión latina que significa “mente culpable”.

¹¹ Se exige un argumento más allá de la duda razonable por dos razones: condenar a un inocente es peor que absolver a un culpable y segundo, porque la prosecución puede hacer que todos los recursos del estado se pongan de su lado con lo cual el acusado estaría en desventaja.

complemento necesario para el derecho de los ilícitos culposos cuando la compensación perfecta es imposible.

2do) Cuando la compensación perfecta es posible

Cuando por ejemplo, la ley permite la invasión a condición de que el invasor compense a un propietario de cualquier daño que se cause, la ley protegerá el interés del dueño de la propiedad. Pero la ley no protege el derecho del dueño a usar la propiedad como le plazca sin interferencia de otros. La protección de los intereses asegura la riqueza pero si se permite la violación de los derechos disminuirá la libertad.

Además los derechos deben ser protegidos para garantizar el intercambio voluntario de los bienes, porque la sociedad está en mejor situación cuando los bienes se adquieren voluntariamente; tal intercambio origina que los bienes pasen a manos de quienes los valoran más.

Por estos motivos, los remedios del derecho penal deben estar orientados hacia la protección y estímulo del intercambio voluntario a través de los mercados.

3ero) El castigo es necesario para lograr la disuasión.

A fin de disuadir a un ladrón o a un asesino, la ley debe imponer un castigo suficiente para que el beneficio esperado del delito para el delincuente sea negativo. Retomaremos con mayor detalle el análisis de la disuasión en el sub capítulo Nro. 7.

3. Modelo Económico del comportamiento criminal

Antes de explicar el modelo económico del comportamiento criminal, recordemos los elementos del modelo micro-económico clásico¹². En primer lugar están los actores que calculan y se comportan racionalmente y están motivados para maximizar su utilidad. En segundo lugar, está la información, es decir, que los actores tienen conocimiento sobre sus gustos, precios y condiciones de mercado. En tercer lugar, la jerarquía de las preferencias que significa que los actores ordenan sus preferencias de acuerdo a sus gustos, los cuales son exógenos y están establecidos. En cuarto lugar, están los costes de transacción que se relacionan con la idea de “pérdida de utilidad”. En quinto lugar, las limitaciones institucionales que toman la forma de incentivos o desincentivos (reglas de la comunidad) para el intercambio racional entre los miembros de la sociedad. Por último, los productos sociales los cuales se dan en el momento en que el intercambio es ejecutado.

El modelo económico del comportamiento criminal¹³

1. En este modelo, los actores serían los potenciales criminales, que tratan de maximizar su utilidad evaluando los costes y beneficios esperados de cometer el delito y por el otro, los miembros de la sociedad, que pueden ser víctimas de un delito y también buscan maximizar sus beneficios, evaluando los beneficios netos de prevenir o no un delito.
2. La información en el mercado del crimen funcionaría así: el delincuente conoce o cree conocer la posibilidad de ser capturado y la severidad del

¹² Para mayor detalle, revisar Capítulos 3, sobre “La conducta de los consumidores” de PINDYCK, Robert y RUBINFELD, Daniel. “Microeconomía”. Editorial Prentice Hall. Quinta edición. España, 2001.

¹³ ROEMER, Andrés, en “Economía del Crimen”. Noriega Editores. 1era Edición. México, 2002. P. 79 y 80.

castigo, el valor que tiene el objeto del crimen, los costes que incurre al cometer el delito. Por el lado de la víctima, juega con información que el actor desconoce, puede hacer creer al agresor que se encuentra más protegida de lo que realmente está.

3. Las preferencias de los potenciales criminales ya están determinadas, sobre la premisa que sus gustos no cambian y son consistentes.
4. Costes de Transacción. Serían por un lado el tiempo y los recursos que pierde el delincuente en planear y realizar un delito, y por el otro, los recursos que gasta la sociedad en protegerse del mismo.
5. Las limitaciones institucionales. Son las reglas que la sociedad ha diseñado para la interacción de sus individuos. Las leyes marcan el precio para el demandante de oportunidades de delitos.
6. “Los productos sociales” se dan en el momento del intercambio, es decir cuando se alcanza el equilibrio entre el oferente y el demandante. En el mercado del crimen este momento se da cuando se realiza el delito. Sin embargo en el caso del crimen, el intercambio sólo es ventajoso para el agresor.

4. Beneficios del comportamiento criminal

Son dos los tipos de ganancias, que varían según el tipo de crimen y del criminal en particular.

- Ganancia Monetaria. Robar una propiedad proporciona una ganancia monetaria.
- Ganancia Psicológica. La ganancia psicológica es muy general e incluye muchas posibilidades, puede ir desde la aprobación del grupo de amigos hasta la satisfacción por una violación.

5. Costes del comportamiento criminal

Los costes son los siguientes:

- Costes Materiales. Incluyen las herramientas para cometer el delito y varían según los diferentes crímenes.
- Coste de Oportunidad del crimen. En lugar de cometer un acto ilegal, el criminal podría estar haciendo otra cosa, como trabajar para ganar un salario. El valor del tiempo usado en la planeación y ejecución del crimen debe ser considerado un coste.
- Coste Psicológico. Al igual que las ganancias psicológicas, los costes psicológicos varían según el crimen y el individuo: miedo, ansiedad, aversión al riesgo, etc.
- Coste del Castigo esperado. Los costes del castigo son incluidos para tomar en cuenta la posibilidad de que el criminal sea capturado y efectivamente sancionado. Si esto sucediera, le impondría costes al individuo en forma de multas, tiempo en prisión, trabajo comunitario, entre otros.

El castigo de los delincuentes es probabilístico. Es posible que el delincuente no sea descubierto o capturado, o que sea capturado pero no condenado. Una persona que toma decisiones racionales, toma en cuenta la probabilidad del castigo cuando considera cometer cualquier delito.

Podemos decir entonces, que el criminal potencial calcula un valor esperado del delito descontando la cantidad que espera ganar por la incertidumbre del castigo.

Entonces, decimos:

$$\text{Coste del Delito} = P \times S \quad (1)$$

Donde: P = Probabilidad de la sanción
 S = Coste de la sanción

Desde el punto de vista individual para el potencial delinciente, si el beneficio B :

- $B > P \times S$: El beneficio es mayor al valor esperado; hay delito. (2)
- $B < P \times S$: El beneficio es menor al valor esperado; no hay delito.

6. Costes para la sociedad

Los costes para la sociedad son variados¹⁴. Según Cooter y Ulen, se reducen a dos:

- Daño Neto causado por el delito. Los delincuentes ganan algo con la comisión de un delito, y las víctimas sufren un daño en sus personas o sus propiedades. “El daño social resultante, es igual a la pérdida neta del valor”¹⁵.
- Recursos gastados en la prevención del delito. El estado y las potenciales víctimas gastan recursos para protegerse contra el delito.

A manera de conclusión:

Para que el individuo internalice o tome en cuenta la pérdida social (H); el coste del delito debe ser igual a la pérdida social. Es decir:

$$H = P \times S \quad (3)$$

Así, la decisión socialmente adecuada es la adecuada para el individuo, para lo cual se requiere una disuasión eficiente.

En otras palabras, el derecho penal debe minimizar el coste social del delito, que es igual a la suma del daño que causa y el coste de su prevención.

¹⁴ BECKER, Gary (1968). “Crime and Punishment” artículo de la Revista The Journal of Political Economy, cita hasta cinco: 1º Coste de los delitos, 2º Coste que implica no poder castigar todos los delitos cometidos. 3º Gasto público de la policía y de los juzgados en perseguir el delito. 4º Coste de las prisiones y de las otras clases de castigos, y 5º Gasto de los particulares en protección y aprehensión del delito. P. 172 y 173.

¹⁵ BECKER, Gary., Ibid. P. 173, tercer párrafo. Los autores Cooter y Ulen lo ilustran con el ejemplo siguiente: Un ladrón rompe la ventana de un automóvil para robar la radio. La rotura de la ventana cuesta 100 € y la radio 75 €

Entonces: El delincuente gana 75 €

La víctima pierde 175 €

Por tanto, la Pérdida Neta es $175 - 75 = 100$ €

Con este ejemplo se demuestra que la pérdida social neta es igual al valor destruido, no al valor redistribuido.

7. Teoría de la Disuasión

El más influyente estudio que aplica la teoría microeconómica de la demanda pertenece a Gary Becker (1968) titulado *Crime and Punishment*. Su tesis fundamental es que los criminales son racionales maximizadores de utilidad y que por tanto los índices de criminalidad responden a los costes y beneficios (incentivos) de cometerlos, lo cual está directamente relacionado con el sistema judicial.

Las aplicaciones de la teoría de la disuasión serían las siguientes¹⁶:

7.1. La Disuasión Marginal

En la realidad se da la cuestión que un individuo al cometer un crimen, comete varios a la vez. Un ladrón al querer robarle el coche a alguien, lo mata. En este sentido, las sanciones deben estar orientadas para que el criminal potencial “escoja” cometer el delito que cause menos daño.

La disuasión marginal, se da cuando la sanción esperada de un delito más grave debería ser mayor a la sanción esperada por un delito menor¹⁷.

Lograr esto en la práctica presenta dos inconvenientes. Primero porque la probabilidad de la sanción a veces es igual entre un delito grave y uno menos grave, puestos en este punto al criminal le va a resultar lo mismo cometer el delito grave o el menos grave. Segundo, porque con el propósito de aumentar la sanción a los delitos más graves, las sanciones para los delitos menos graves pueden resultar muy bajas: sobre-disuasión y sub-disuasión en ese orden.

7.2. La intención.

Habíamos dicho al principio, que para que se de un delito tiene que haber intención criminal. La intención del agente está directamente relacionada con la expectativa de la sanción.

Por eso, cuando el fracaso de la consecución de un delito cuando ha sido por causas externas al delincuente, hay que imponerle la misma pena que si tuviera éxito. En cambio, cuando fue en contra de su voluntad, debería tener un descuento en la sanción. Con esto se lograría la disuasión marginal.

7.3. Avoidance (Evitar ser sancionado)

Habíamos asumido que cuando un individuo comete un delito, es descubierto y encontrado responsable, será automáticamente sancionado.

Sin embargo, en la realidad los delincuentes ocultan pruebas, corrompen a la policía, a los jueces, etc. Si hay una sanción alta, el individuo tendrá incentivos para evitar la condena mediante una o varias de las acciones descritas anteriormente. De esta manera, la probabilidad de la condena disminuye.

Para evitar la corrupción a nivel policial, judicial, o inclusive para evitar todo el gasto de recursos que implica un proceso judicial, es que el *Common Law* ha

¹⁶ Se presenta el desarrollo de las aplicaciones de la teoría de la disuasión, según GAROUPA, N. (2000), Draft “An economic analysis of criminal law”. *Department d’Economia I Empresa, Universitat Pompeu Fabra*.

¹⁷ SHAVELL, Steven. POLINSKY, Mitchell. “*The Economic Theory of Public Enforcement of Law*”. *Journal of Economic Literature*, Vol., Nº 38. Pp. 63.

creado figuras como el *Plea Bargaining*, donde el delincuente se admite culpable por un delito menos gravoso pero igual va a la cárcel.

Es verdad que se reducen los costes *ex-post* del delito, pero ¿qué pasa con los costes *ex ante*?; es decir, ¿cómo afecta a la disuasión?. Shavell y Polinsky dicen que la disuasión se diluye porque los individuos saben que la probabilidad de la condena disminuye, por eso prefieren hacer este acuerdo. Además los fiscales también tienen incentivos para aceptar estos acuerdos, por carga de trabajo o porque les interesa tener un caso resuelto con condena ahora antes que uno resuelto en un año y sin la seguridad de una condena efectiva.

El estado debe contrarrestar esta reducción de la disuasión con un aumento de la sanción.

7.4. Tratamiento de la reincidencia

Hemos visto que por diferentes motivos las leyes no tienen un nivel óptimo de disuasión, sino que generalmente se da la sub-disuasión. Los estados sacrifican algo de disuasión por reducir los costes de imposición de las leyes.

Por tal motivo, hacer que las sanciones dependan del historial delictivo del individuo es beneficioso en primer lugar, porque se logra la disuasión hacia los potenciales criminales que tendrán incentivos para no violar la ley no sólo por la probabilidad de la condena, sino por la probabilidad de una condena mayor por un segundo delito; entonces el potencial criminal está disuadido de no cometer el delito en el presente. En segundo lugar, la sociedad y el estado se ven beneficiados pues se tiene información acerca de la peligrosidad de ciertos individuos, por su re-incidencia.

7.5. El error Judicial

El error judicial se da en dos sentidos, absolver a un culpable o condenar a un inocente. Los efectos del error judicial son importantes porque en primer lugar, reducen la disuasión y segundo, puede haber coste social derivado de este error:

- Reducción de la disuasión.- Suponiendo que en ambos casos la probabilidad de la sanción es la misma, absolver a un culpable reduce la disuasión porque para el infractor disminuye la sanción esperada. Condenar a un inocente, en cambio, reduce la disuasión porque reduce el coste de oportunidad del hecho criminal (lo que dejaría de ganar al no cometer el delito).

¿Cómo se contrarresta el error judicial?. Aumentando recursos para conseguir una mayor precisión: mejor acusación, persecución del delito (para no absolver a un culpable), y una buena defensa y estándar de prueba (para no condenar un inocente).

- Coste social derivado del error.- Suponiendo que condenar a un inocente sea más probable que absolver a un culpable, la pena a aplicar debería ser menor para paliar esta situación.

El coste del error judicial, cuando se absuelva a un culpable, aumenta junto con la pena a aplicar. Mientras más severa sea la sanción, el error judicial es socialmente más costoso.

Escoger entre una y otra política dependerá del daño causado por el criminal Vs. el coste del error legal. Este es un caso típico de *trade-off* entre disuasión y evitar penas severas para individuos inocentes.

7.6. Precaución de las víctimas

El comportamiento de las víctimas es importante porque pueden tomar precauciones para evitar el delito. Ahora veremos si es eficiente la precaución desde un punto de vista social.

Los beneficios y costes privados son distintos de los beneficios y costes sociales.

El coste de oportunidad de víctima también lo es de la sociedad. El problema son los beneficios¹⁸.

Cuando el privado no quiere saber del efecto de su precaución en terceros, hay exceso de precaución. La solución a esto es regular este mercado o poner impuestos.

Cuando el privado sobreestima la precaución pública, la gente no tendrá suficiente precaución (riesgo moral). Aquí la solución es subvencionar.

8. El castigo eficiente

Habíamos dicho anteriormente, que para lograr la disuasión de un delito es fundamental la sanción, tanto para prevenir la existencia de nuevos ofensores como para los que quieran repetir la ofensa cometida.

Podemos decir, entonces, que el coste social producto de aplicar la sanción es igual a una proporción del coste del criminal.

Para las multas, esta proporción tenderá a cero (no incluimos el coste burocrático), mientras que para la encarcelamiento, el coste será mayor para los contribuyentes.

Las principales variables que influyen en la oferta de crímenes son la probabilidad de captura y el monto de la sanción.

Si aumentamos el gasto en estrategia eficaz en los objetivos policíacos, estaremos aumentando la probabilidad de sancionar y por ello, caería la cantidad de crímenes y el daño social producto de éstos, aún cuando se verifique un aumento en el coste social debido al incremento en el gasto en policía y el número de prisioneros en las cárceles. En otras palabras, si hacemos más efectivas las sanciones impuestas, cae la oferta de crímenes y el daño social pero aumenta el coste social.

Por tanto, la política criminal tendrá como objetivo minimizar los costes anteriormente señalados, a través de la manipulación del nivel de probabilidad de ser sancionado y el monto de la sanción. Dicho de otra manera, **el nivel de sanción óptima será la combinación entre probabilidad y monto de la sanción que minimice el coste social del crimen.**

La hipótesis de disuasión dice que los índices de criminalidad responden al riesgo de ser sancionado y los beneficios del comportamiento criminal.

Sin embargo, hay una hipótesis que sostiene lo contrario: que las variaciones de la certeza y la severidad del castigo no disuaden significativamente a los

¹⁸ Cooter y Ulen, Ibid, clasifican a los beneficios de las precauciones en tres: disuasión privada, disuasión pública y redistribución del delito. En el primer caso, la precaución beneficia sólo al inversionista privado. Para el segundo caso, cuando beneficia a la sociedad y la tercera cuando con la precaución se ha beneficiado sólo al inversionista privado pero se ha perjudicado a un tercero, esto no tienen ningún beneficio social neto. P. 575 a 576.

delincuentes.¹⁹ Esta hipótesis nos dice que el delito es el resultado de un conjunto complejo de factores socioeconómicos o posiblemente biológicos; por ello, el método apropiado para minimizar los costes sociales es atacando las causas básicas del delito, como pueden ser, dedicar recursos a la creación de empleo, el mantenimiento del ingreso, asesoría familiar, entre otros.

Estas dos hipótesis, estas dos políticas de justicia penal y programas socioeconómicos son ciertas, y la combinación de ambas sería una política pública óptima para la reducción del delito.

Es posible que se elimine casi totalmente la comisión de un delito, imponiendo penas severas con alta probabilidad de detección. Sin embargo, esto podría tal vez conllevar violaciones de los derechos humanos y altos costes en los que incurriría la sociedad.

En general, la cantidad óptima de disuasión no elimina el crimen, porque erradicarlo por completo es costoso y tiene un beneficio negativo para la sociedad.

8.1. Sanciones Monetarias como política eficiente de disuasión

Cuando se quiere conseguir la disuasión mediante el uso de multas, la sociedad debe decidir cuánto debe gastar en la imposición de la norma y cuántos criminales deberían pagar. Presentamos las consideraciones a tomar en cuenta:

- Las sanciones monetarias se aplican a aquellos casos en los que el daño social no es tan grave
- La multa debe ser igual al daño multiplicado por la inversa de la probabilidad de su imposición. En la literatura, esto es conocido como el principio multiplicador. La explicación de este principio parte de la premisa que no hay probabilidad de sanción igual a uno (sanción segura), porque es costoso identificar y penalizar a los criminales.²⁰

Aplicar este principio presenta restricciones. La primera por razones de equidad. Si por ejemplo, la probabilidad de sanción es 1%, la multa sería de 10,000 para un acto que ha causado un daño de 100. Para mucha gente es multa es excesiva. La segunda es la dificultad de estimación exacta de la probabilidad de sanción, porque también conlleva a aumentar la multa y será mucho mayor el problema cuanto mayor sea el daño causado.

- La multa debería tener una sanción alta y una probabilidad baja para que sea eficiente. La probabilidad de la sanción depende del esfuerzo, de los

¹⁹ COOTER Robert y ULEN Thomas, Op. Cit., P. 585.

²⁰ GAROUPA Nuno, en “*An Economic Analysis of Criminal Law*”, lo demuestra con un ejemplo muy sencillo: La ganancia de un criminal de cometer un delito es de 80.

El daño causado es de 100. Por tanto, hay que disuadir este delito.

Entonces: cuando la probabilidad de detección es 100%, cualquier multa entre 80 y 100 disuade a los individuos. Bajo la regla de responsabilidad objetiva, el infractor paga por el daño causado, es decir que paga una multa de 100. Bajo la regla de responsabilidad por culpa, la multa también es de 100 porque el hecho es indeseable para la sociedad.

Ahora consideremos una probabilidad de detección más real: 50%. Si la multa es de 100; la multa esperada es de 50. Una persona neutral al riesgo cometerá el delito porque el beneficio de 80 es mayor a la multa esperada de 50. Para disuadir a este individuo, hay que aplicar una multa de 200, así 200 por la probabilidad del 50% es igual a una multa esperada de 100.

recursos que se invierten para la imposición de la ley. Entonces, estos costes se ahorran porque las multas se aplican con baja probabilidad pero al mismo tiempo, las sanciones pueden ser incrementadas para evitar que se diluya la disuasión.

- El castigo óptimo es la multa máxima que el delincuente puede pagar. En general, la eficiencia requiere que se agote la capacidad de castigar a los delincuentes en forma barata, con multas, antes de recurrir al costoso castigo de la prisión²¹.

A manera de conclusión podemos decir que para empezar, la aplicación del principio multiplicador no siempre es eficiente, porque de todas maneras siempre habrá algún coste social de aplicar multas, por tanto mientras más alta la probabilidad de sanción, más se gastará en la imposición. Por tanto, la probabilidad eficiente debería ser menor al daño multiplicado por la inversa de la riqueza total del individuo. Es decir, que habrá una sub-disuasión en aras de ahorrar recursos.

8.2. Sanciones No-Monetarias como política eficiente de disuasión

Aunque hay varias formas de sanciones no monetarias, como pueden ser trabajos para la comunidad, limitación de derechos, órdenes de alejamiento, entre otros. Nos vamos a centrar en esta parte, en la pena de prisión. Se diferencian unas de otras, del coste social y la desutilidad que generan.²²

Si para el caso de la multa, el coste social del crimen era el daño causado por el delito; en el caso de la prisión, el coste social del crimen es el daño causado por el delito más el coste de imponer la sanción. Recordemos, que para el caso de la multa, igualando la multa con el daño, serán cometidos sólo los delitos que son socialmente deseados. En cambio, con una sentencia de prisión, algunos delitos deseados no son cometidos, por tanto se logra la disuasión pero resulta costoso.

Las ventajas del uso de una regla de responsabilidad por culpa se hacen más claras, cuando la sanción es de encarcelamiento, porque cuando la ganancia del delincuente es mayor al daño, la sentencia de prisión debería ser cero.

Entonces, el valor óptimo de la sentencia debe estar dado por la comparación de su impacto en la disuasión con el coste de imposición y la desutilidad creada entre los individuos que serán sancionados.

Por tanto, a manera de conclusiones, decimos:

- Cuando el daño social es considerable, será necesario acompañar a la multa de la pena de cárcel.
- Las sanciones no-monetarias deberían ser usadas como suplemento de las multas. Y las multas deben ser aplicadas hasta el máximo posible.

²¹ Esta conclusión fue sostenida primero por Bentham, luego por Becker, y le siguieron luego Posner y Polinsky y Shavell.

²² “La efectividad de la sanción en términos de disuasión, será mayor en tanto la sanción genere más desutilidad”. En GAROUPA Nuno, “*An economic analysis of criminal law*”, 2000. P. 9, cuarto párrafo.

- Cuando la riqueza del individuo está por encima de la multa, la sanción debe ser la multa. Pero, si la multa está por encima de la riqueza, la sanción debe ser multa igual al total de su riqueza más la encarcelación. Por eso se dice, que cuando el delincuente potencial tiene una riqueza reducida, al no tener nada que perder, decide cometer el delito, entonces el efecto disuasivo de una sanción monetaria también es pequeño.²³
- Cuando la multa esperada es baja. Si la probabilidad de detección es muy baja, mayor tendrá que ser el monto de la sanción, para que la sanción esperada se encuentre dentro de un rango efectivo, con lo cual nos estamos acercando al problema descrito en el párrafo anterior, cuando la multa es alta y el delincuente no la puede pagar.

2. LA TEORÍA DE LA IMPOSICIÓN ÓPTIMA DE LA LEY²⁴

Esta teoría fue por primera vez desarrollada por Becker²⁵. Como habíamos dicho antes, Becker afirma que los criminales son racionales y deciden cometer o no el delito dependiendo de las condiciones de riesgo a las que se ven sometidos en caso de ser capturados. Todo su diseño del modelo, así como quienes le siguieron (como Shavell y Ponlinsky 1979, 1984), tiene como base la maximización del bienestar social como objetivo de las políticas públicas.

Resumiendo²⁶ lo expresado por Becker, tenemos:

$$EU = p U(b-f) + (1 - p) U(b) \quad (4)$$

Donde:

p = Probabilidad de ser capturado y penado

U = Utilidad

EU = Utilidad esperada

b = Renta

$1 - p$ = Renta si eres penado

Se desprende del enunciado que el problema de la imposición óptima de la ley está centrada en cómo conseguir la maximización del bienestar social. En otras palabras, se busca la eficiencia. Nos encontramos pues ante un concepto de justicia como sinónimo de eficiencia.

²³ La mayoría de los estudios concluyen que las personas que cometen crímenes graves (homicidio, violación, etcétera) generalmente tienen un bajo nivel de riqueza, por lo que el efecto disuasivo de una sanción monetaria es muy pequeño.

²⁴ Aunque es conocida como la teoría de la imposición de la ley, se refiere en realidad a la imposición del derecho penal.

²⁵ Becker (1968). En ese trabajo, por primera vez se introdujo la opción de la probabilidad de detección (captura) y expresó en términos económicos formales lo que Jeremy Bentham había dicho en 1789 en su trabajo "*An introduction to the principles of morals and legislation*".

²⁶ Garoupa, Nuno. (1997). P. 268. Usamos el enunciado que hace el autor donde se expresan las bases del modelo "beckeriano".

El problema de la imposición de la ley es cómo maximizar el bienestar social mediante: la elección del coste de la imposición de la norma (o su equivalente, la probabilidad de detección), el nivel de la multa, la duración del encarcelamiento y el estándar de responsabilidad requerida.

En este capítulo estudiaremos las diferentes combinaciones, tomando como base el trabajo de Shavell y Polinsky, en *The Economic Theory of Public Enforcement of Law*.

A) Premisas

1º) Los individuos son neutrales al riesgo, en las multas y en la pena de prisión. Sin embargo también se analizará qué pasa con los que son aversos al riesgo de multa y de prisión, y los que prefieren el riesgo de cárcel. Los aversos al riesgo del encarcelamiento lo serán si la desutilidad de la cárcel aumenta más que proporcionalmente con la duración del periodo, o sea que aceptan mejor un mes en la cárcel que un año. Por el contrario, los que prefieren el riesgo de la cárcel, prefieren este riesgo a un periodo determinado igual al riesgo del periodo esperado; es decir que la desutilidad de la cárcel aumenta menos que proporcionalmente con respecto a la duración del periodo en prisión. Para estas personas, la desutilidad del estigma de ser encarcelado puede ser más importante que el hecho mismo de estar en la cárcel el tiempo que sea. Este tipo de individuos consideran más importantes los primeros años de cárcel que los últimos.

2º) La sanción dependerá de la regla de responsabilidad que se aplique. Bajo la regla de responsabilidad objetiva, la sanción le será impuesta al infractor sin tomar en cuenta su comportamiento. En cambio, bajo la regla de responsabilidad por culpa, la sanción es impuesta sólo si el hecho criminal es socialmente indeseable²⁷.

B) Comportamiento del individuo según:

B.1. Regla de responsabilidad objetiva

Una persona neutral al riesgo, cometerá el hecho criminal si y solo si la ganancia del hecho criminal excede la suma de la multa esperada y la desutilidad esperada del periodo de encarcelamiento:

$$g > p(f + \lambda t) \quad (5)$$

Donde:

g = ganancia

p = probabilidad de detección

f = multa

t = duración del periodo de cárcel

λ = desutilidad de un prisionero por unidad de periodo de cárcel

Para un individuo con aversión al riesgo, tanto para las multas como para la prisión, su ganancia tendrá que ser mayor a la indicada en el enunciado Nro. 4. Y para el que prefiere el riesgo de prisión la ganancia requerida será menor.

²⁷ “Un acto será socialmente indeseable si el beneficio social de cometerlo es menor al coste o daño social que el mismo produce”. En ROEMER, Ibid. P.388, segundo párrafo.

B.2. Regla de responsabilidad por culpa

Habíamos dicho que un individuo que causa un daño, bajo esta regla, sólo será encontrado responsable si el hecho criminal es socialmente indeseable. Esto significa que será responsable cuando al momento de cometer el daño su ganancia sea relativamente baja. Llamaremos a este nivel de *ganancia estándar* de culpa.

\hat{g} = ganancia estándar

Por tanto, si un individuo comete el daño cuando su ganancia es menor a \hat{g} , actuó por culpa y será encontrado responsable.

C) El bienestar social

Se dice que el bienestar social es la suma de las utilidades esperadas de todos los individuos. La utilidad esperada de un individuo depende si comete un hecho delictuoso, o si es sancionado, o si es la víctima de alguien y sobre el pago de sus impuestos; todo lo cual reflejará los costes de la imposición de la ley menos cualquier multa aplicada a la renta.

Si los individuos son neutrales al riesgo, el bienestar social puede ser expresado simplemente como las ganancias que los individuos obtienen de cometer sus actos, menos el daño causado y menos el coste de la imposición de la norma.

De esta manera, asumimos que las multas son socialmente menos costosas porque son meras transferencias de dinero²⁸, mientras que la prisión envuelve costes sociales positivos porque el gasto asociado a la ejecución de la prisión y la desutilidad de este tipo de pena no se compensan con las ganancias que se podrían obtener de la encarcelación.

Vamos a diferenciar a los individuos por las ganancias que obtienen de cometer un hecho criminal. Habrá una *ganancia crítica*, por encima de la cual los individuos cometerán el hecho criminal y a un nivel menor a la ganancia crítica, serán disuadidos.

Esta ganancia crítica está determinada por la probabilidad de detección, el nivel de sanción y el estándar de responsabilidad impuesto.

Bajo la regla de responsabilidad objetiva, si los individuos son neutrales al riesgo, el bienestar social sería la ganancia agregada por aquellos que cometieron delitos menos el daño agregado causado por estos individuos, más la desutilidad sufrida por aquellos que son capturados y puestos en prisión, más el gasto de la administración en mantenerlos en la cárcel.

Bajo la regla de responsabilidad por culpa, recordemos que si la ganancia del individuo iguala o excede \hat{g} , participará del hecho criminal porque no será encontrado culpable. Mientras que, si su ganancia es menor que \hat{g} , él cometerá el hecho criminal si y solo si g (enunciado 4) se mantiene. En otras palabras, bajo la regla de responsabilidad por culpa, la ganancia crítica es inferior a \hat{g} , es decir menor a la suma de la multa esperada y la desutilidad esperada del periodo de encarcelamiento. Entonces, el bienestar social, en este caso será sólo la ganancia agregada de los que cometieron delitos y

²⁸ En la práctica sí que hay costes, para recolectar estas multas por ejemplo.

fueron capturados y encarcelados, con el gasto privado y público que ello implica.

3. MODELOS ECONÓMICOS DE LA VIOLENCIA DE PAREJA

En esta sección, vamos a hacer un breve recuento de la literatura sobre el análisis económico del delito de violencia doméstica.

El desarrollo de la modelización de la violencia doméstica en la literatura económica tiene apenas veinte años y no es prolífica. Vale la pena por tanto, destacar los aportes de cada uno de esos trabajos.

Aunque hay *papers* anteriores que sí dan un enfoque económico a las dinámicas de la violencia de pareja²⁹, sobre todo son descriptivas; los intentos serios de modelizar el delito de violencia de pareja son:

3.1. Tauchen H., Witte A. D. y Long S. (1991): “Domestic Violence, A Non random affair”

Los autores, antes de presentar el modelo, rescatan algunos resultados de la literatura económica sobre la violencia doméstica:

- Correlaciones bivariadas sobre violencia familiar y divorcio muestran que las relaciones violentas son menos estables que otras relaciones, pero que muchas de esas relaciones son perdurables. (Pagelow 1981).
- A pesar de la violencia, las mujeres encuentran ventajas en continuar con la relación (Nye, 1979).
- Hay factores correlacionados con la violencia doméstica, como el stress, particularmente el stress económico, entorno social, baja auto-estima del agresor, e ideas tradicionales sobre los roles de los sexos. Asimismo, la ayuda social parece ser importante para que la víctima enfrente la violencia, inclusive ayuda a reducir la violencia. (Fagan, 1989).

Desarrollan un modelo “no cooperativo de la familia”³⁰ para incluir la violencia como fuente de gratificación -del maltratador- e instrumento para controlar el comportamiento.

Asumen que al agresor le produce beneficios infringir violencia por dos motivos: **expresivos e instrumentales**.

²⁹ Véase FRIEZE, I. and BROWNE A. (1989), “Violence in marriage”. in L. Ohlin and M. Tonry eds., *Family Violence*, Vol. 11, *Crime and Justice: A review of Research*, University of Chicago Press, pp. 163-218; y OHLIN, L. and TONRY M. (1989) “Family Violence in perspective”, in L. Ohlin and M. Tonry eds., *Family Violence*, Vol. 11, *Crime and Justice: A review of Research*, University of Chicago Press, pp. 1-18.

³⁰ Hay tres modelos de asignación y distribución entre los miembros de la familia que han desarrollado temas como la demanda y oferta de las familias, explicación del matrimonio y divorcio, la distribución de bienestar entre miembros de familia. Así, tenemos el modelo consensual de la familia de Samuelson (1956), el modelo altruista de Becker (1974, 1981) y el modelo cooperativo o de teoría de juegos de Manser y Brown (1980); y McElroy y Horney (1981).

El agresor obtiene beneficios directos de la violencia que van desde el sadismo hasta la liberación de frustración o para descargar estrés; a todas estas motivaciones las han agrupado y denominado fin expresivo. La segunda utilidad es instrumental, es decir que la violencia es la forma del agresor de controlar el comportamiento de la pareja.

Incorporan la violencia expresiva considerando el nivel de violencia directamente en la función de utilidad del agresor. Incorporar la violencia instrumental es más difícil porque el nivel de utilidad del hombre depende de algunos comportamientos de su pareja.

Para simplificar el modelo inicial, asumen que no hay intervención externa y la relación de equilibrio que se describe es consecuente con 1º La oportunidad de las decisiones en la relación y 2º La evidencia empírica de que el hombre es el agente dominante de la relación.

1ª premisa) El hombre realiza sus preferencias para maximizar su utilidad. Enfocándose en los aspectos violentos de la relación, asumen que su utilidad, si la relación sigue intacta, depende solo del comportamiento de su pareja (z), la violencia que ejerce en su pareja (v) y los costes de ambos en el mercado de bienes y servicios (para la mujer c^m y para el hombre c^f).

La renta del hombre es y^m es y su utilidad fuera de la relación es \hat{U}^m

$$U^m(z, v, c^m, c^f, y^m)$$

Entonces:

La utilidad del hombre aumenta con el comportamiento de ella (z). Inicialmente aumenta, pero decrece en violencia.

La renta de la mujer es y^f y su utilidad fuera de la relación es \hat{U}^f .

2ª Premisa) La utilidad de la mujer es una función con los mismos argumentos y sería denotada así:

$$U^f(z, v, c^m, c^f, y^f)$$

La renta de la mujer es y^f y su utilidad fuera de la relación es \hat{U}^f .

El aumento de utilidad es también el coste en los que incurre en el mercado de bienes, puede ser positivo o negativo y puede depender también de los gastos que él realiza en ella.

Ambos partes toman dos decisiones. La mujer elige su comportamiento y la cantidad de renta que le transfiere a él (t^f); el hombre luego elige el nivel de violencia y la cantidad de renta que transfiere a ella (t^m). Por tanto, los costes de ella en los bienes y servicios serían: $y^f + t^m - t^f$.

Los de él serían $y^m - t^m + t^f$.

Como sólo importa las transferencias netas, asumen que en equilibrio al menos una de las partes hace transferencias.

3ª Premisa) La mujer “escoge” su comportamiento y cualquier transferencia antes que su pareja.

Luego él escoge la violencia y la transferencia para maximizar su utilidad:

$U^m(z, v, y^m - t^m + t^f, y^f + t^m - t^f)$, con la salvedad que la utilidad de ella es al menos \hat{U}^m .

Cuando ella escoge su comportamiento y la transferencia de renta a su pareja, es consciente que él escoge la violencia que ejerce y la transferencia que realiza. Es decir, ella sabe que el nivel óptimo de violencia varía según su comportamiento y que al menos será \hat{U}^m (La utilidad que obtendría fuera de la relación).

Si alguna de las partes no llega al nivel \hat{U} , la relación continúa.

Los datos y el modelo empírico

Usan entrevistas realizadas en 125 mujeres que sufrieron agresión física de su pareja, entre 1982 y 1983 en el condado de Santa Bárbara. La muestra, como todos los estudios de violencia doméstica, no fue elegida al azar.

Hicieron una regresión sobre un cuestionario de preguntas que buscaban obtener datos sobre si la pareja tenía opiniones estrictas sobre cómo ella debería comportarse y si ella está de acuerdo con la opinión de él sobre siete tipos de comportamiento que incluyen el uso de las tarjetas de crédito, ver a la familia y amigos, hablar por teléfono y actividades sexuales. Su medición se centra en las áreas donde ella está en desacuerdo con la opinión de él pero aún así se comporta de acuerdo con sus preferencias.

Los factores exógenos serían la naturaleza de la relación, las oportunidades externas del hombre y la mujer, los gustos y preferencias de ambos y el coste de intervención externa como resultado de la violencia.

Su interés está en la distribución del bienestar en la relación, y cómo las variables económicas afectan la violencia, incluyen medidas de las rentas de la pareja, si tienen empleo o no y las ayudas públicas que reciben.

Conclusiones

- Acerca de la renta.-

Sus resultados empíricos indican que la naturaleza del equilibrio en relaciones violentas depende de dos cosas: El nivel y la fuente de los recursos de la familia.

Encontraron que para las familias de renta baja y media, los resultados sugieren un equilibrio donde uno de los individuos es retenido al nivel de utilidad que podría obtener en ausencia la relación.

Para las familias de rentas altas, el equilibrio parece que depende de quién tiene la mayor parte de la renta. Cuando la mayor parte de la renta es de él, ambos individuos tienen utilidades positivas de la relación y hay transferencia de renta entre ellos. Cuando la mayor parte de la renta es de ella, los resultados empíricos no son congruentes con el modelo pues el aumento de su renta está relacionado con el aumento de la violencia. Este resultado podría ser

consistente con un equilibrio donde hay ganancias de la relación pero no hay transferencias de renta entre los individuos.

La asimetría entre quienes están más dispuestos a hacer transferencias de renta no sería contradictoria con su modelo. Por eso, afirman que es posible que el nivel y la fuente de financiación afecten la utilidad del hombre.

En su modelo, como en la mayoría de los modelos económicos asumen que la utilidad de cada persona es una función del consumo de los individuos, de bienes y servicios pero no dependiente de la fuente de la renta. En consecuencia, tal vez la renta relativa de ambos afecta la utilidad del hombre de forma directa.

Otro resultado de su trabajo empírico que apoyaría esta tesis, es la mayor violencia que existe en casos donde el hombre parece estar en relativa desventaja, como cuando ella es más joven que él, o ella continúa educándose.

- La variable empleo.-

Según su estudio, incrementos en el empleo tiene repercusión mayor en la violencia que los incrementos de renta. Mientras que si el empleo mejora para la mujer, no afecta la violencia; la situación cambia dependiendo de familias con altos ingresos altos y bajos. En los primeros, un incremento en el tiempo que la mujer pasa en el trabajo se asocia con aumento significativo de la violencia. En familias trabajadoras de renta baja, el incremento del empleo de la mujer, reduce la violencia³¹.

Para aquellas familias que viven de los subsidios del estado, es más probable que los incrementos en el empleo de la mujer generen más violencia.

- La variable hijos.-

Los efectos de los hijos varían según la edad de los mismos y la relación con la pareja. Los hijos menores reducen la violencia mientras que los mayores, la incrementa; al igual que los hijastros.

Siguiendo la línea del análisis económico del matrimonio, el concepto de inversión que hace la pareja en forma de hijos; las parejas con hijos pequeños disminuyen las posibilidades de separación mientras que en familias con dos o más niños, los mayores aumentan esas posibilidades. Esto se debe a que los padres pasan más tiempo con los hijos pequeños y que por tanto representan más toda esa inversión específica del matrimonio.

Al parecer este argumento entraría en contradicción con el hecho de que las mujeres que tienen menos alternativas fuera de la relación (\hat{U}^f), están más propensas a aceptar la violencia.

- La ecuación de la obediencia.-

Llaman así a la medida en que ella se comporta conforme a las preferencias de él. Como el resultado era estadísticamente poco relevante, aducen que es principalmente porque no se conocen las creencias de ella o la importancia de su obediencia.

³¹ No se inclinan por la típica explicación que mientras menos tiempo compartan, menos probabilidad de violencia, sino más bien por los beneficios psicológicos (mejora del autoestima) y físicas (cansancio mayor por el trabajo).

Sin embargo, el factor renta relacionado con la obediencia ofrece las siguientes conclusiones: Ella está más dispuesta a comportarse de acuerdo a las preferencias de la pareja, si la renta de él es mayor. Además, ella está más dispuesta a obedecer si la pareja tiene menos niños pequeños. Otro interesante hallazgo es que los hombres hispanos tienen más probabilidad de ser obedecidos³².

3.2. TAUCHEN H. y WITTE A. D. (1995): "The dynamics of domestic violence"

En este paper se plantean los efectos de la intervención de la policía en los casos de violencia doméstica.

Usan como fuente de datos un experimento realizado en Minneapolis, sobre incidentes menores de violencia doméstica donde las mujeres fueron agredidas por sus parejas.

La novedad respecto al paper anterior radica en que el modelo que presentan es dinámico donde incluyen el tratamiento de la policía (que pueden ser de tres formas: primero, asesoramiento de la pareja; segundo, separación de la pareja de forma temporal y tercero, el arresto del sospechoso), el historial de arrestos del hombre, y el status de empleo -previo al momento del incidente de violencia y durante- de cada uno de los individuos.

El modelo que elaboran es dinámico estocástico que permite a los efectos de las acciones de la policía variar con el tiempo.

Conclusiones

Sus resultados muestran, de forma consistente con el trabajo anterior, que el empleo es una variable importante. Encontraron que los hombres con empleo tienen menos propensión a golpear a su pareja que los hombres sin empleo. No sucede lo mismo para el caso de las mujeres, de hecho el empleo de la mujer no afecta significativamente la violencia. Tampoco influye en la violencia el historial de empleo del hombre.

El arresto es más efectivo que el consejo, o la separación por un corto periodo de tiempo; pero, el efecto diferencial es transitorio. Según el modelo dinámico, el arresto disuade de forma temporal el delito (el efecto desaparece completamente a los doce meses); mientras que, aplicando métodos estáticos, el resultado es que el arresto disuade la violencia doméstica.

3.3. BLOCH F. and RAO V. (2002). "Terror as a bargaining instrument: A case study of dowry violence in rural India"

³² Aunque sí contaban con la variable de otros grupos étnicos (hispanos y no hispanos), no encontraron diferencia en la frecuencias de violencia por razón de raza. La justificación sería porque los datos contienen características que deberían ser analizadas de forma independiente como diferencia de actitudes ante la violencia y la percepción de probabilidad de ser detenido. Mencionan que en EEUU, los hombres negros y hombres casados con mujeres de minorías étnicas tienen más probabilidades de ser arrestados por violencia doméstica.

El trabajo de BLOCH y RAO se ha centrado las relaciones de la violencia doméstica y la dote en las zonas rurales de India.

Se alejan del enfoque de los modelos cooperativos -tradicionales- de familia, tales como los de Manser & Brown (1980) y McEroy & Horney (1981), empleando información etnográfica que proviene de la violencia relacionada con la dote, subyacente en las entrevistas realizadas en tres pueblos del sur de India, Karnataka; para desarrollar un modelo No Cooperativo de negociación y señalización.

Las predicciones del modelo son económicamente testadas. Los datos provienen de la misma población donde se hicieron las entrevistas etnográficas.

Los aportes del *paper* serían dos:

1. Introduce la información asimétrica en el modelo de familia, donde la violencia es usada como señal de la satisfacción del hombre con el matrimonio.
2. Combina métodos antropológicos y económicos para examinar la violencia dentro del contexto del mercado de matrimonios en India.

Hallazgos:

1. La violencia de pareja está muy relacionada con los pagos de la dote.
2. Las mujeres que provienen de una familia acomodada, pudiente; son más proclives de sufrir violencia física de sus maridos. Por tanto, ellos ejercitan violencia para obtener más dinero de los padres de ella.

Contexto Cultural:

Lo primero es conocer la naturaleza del mercado de matrimonios en India. El trabajo de campo se ha centrado en una comunidad de alfareros en el estado de Karnataka. Es una comunidad donde tradicionalmente han vivido de la alfarería durante generaciones. Estos últimos tiempos son trabajadores ocasionales. Las principales características son:

- Mujeres y hombres, no pueden casarse con alguien que pertenezca a una comunidad distinta a la suya.
- Las mujeres, cuando se casan, dejan para siempre el hogar de los padres para irse a vivir a casa del marido.
- Los matrimonios son concertados entre los padres del novio y la novia.
- El matrimonio es para siempre. El divorcio no existe. Aunque en la práctica el marido puede abandonar a la mujer; hace que viva aislada, sin contacto alguno con su familia -y el contacto con la familia para una mujer india es sumamente importante- y no recibe apoyo económico alguno de parte del marido. Inclusive en estas condiciones, la mujer seguirá con el marido porque regresar a casa de sus padres sería un estigma social demasiado costoso para ella y para su familia.
- Ellos pueden casarse otra vez, ellas no.
- Para una familia india con una hija, su deber prioritario es conseguir que ella se case. Lo contrario es sinónimo de desgracia con altos costes sociales y económicos.
- En los últimos 20 años, el precio de la dote de la mujer ha subido mucho. En la comunidad de alfareros, refiere el autor que, la dote es 6 veces el ingreso

anual de la familia. Uno de los principales motivos de esta subida de precios es porque los novios escasean. El aumento de la población ha generado que haya más mujeres jóvenes intentando emparejarse que hombres jóvenes.

- Una vez celebrada la boda, la mujer que ahora vive con el marido se convierte en una rehén en potencia, pues como el divorcio no existe y no puede regresar a casa de sus padres de forma indefinida, la violencia puede ser utilizada como mecanismo para obtener dinero, o bienes de la familia de la mujer.
- No se registraron homicidios relacionados con la dote.

El modelo teórico

Para construir su modelo, no consideran que el hombre ejerce violencia simplemente por el placer de golpear a su mujer, sino que la violencia doméstica es un instrumento usado por el marido en el amplio contexto de la negociación entre la familia del marido y la mujer, sobre la distribución de recursos.

Los modelos teóricos de negociación con información completa predicen que el resultado del proceso de negociación es eficiente, descartando el ejercicio de la violencia doméstica, en equilibrio.

Por tanto, con el fin de explicar el hecho de violencia, los autores consideran un modelo con información asimétrica donde la violencia es interpretada como señal enviada por el marido a la familia de la mujer, sobre el grado de satisfacción del matrimonio.

Método y resultados econométricos

- Realizan una regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS sus siglas en inglés) en base a 142 mujeres casadas, pertenecientes a tres pueblos, las tres son comunidades de alfareros.
- Los resultados son:
- El incremento de 10,000 rupias sobre la media de los ingresos anuales de los padres de la esposa, incrementa la violencia en un 3,3%.
- Tener hijos varones, entre los vástagos de la pareja, reduce la violencia. La reduce en un 10%, por cada hijo varón. Por otro lado, no se ve impacto en la violencia, cuando hay hijas mujeres.
- El incremento de 10,000 rupias en la dote esperada sobre la media de dotes, reduce la probabilidad de violencia en un 5%.
- Mientras que el modelo teórico no daba predicciones claras sobre capital humano, los datos dicen que el incremento de un año en la media de tiempo de educación del hombre, el riesgo de violencia aumenta en casi el 4%. Según los autores, una de las razones es que los pocos hombres que se educan en estas comunidades, aunque inicialmente tienen grandes expectativas pues la llave para salir de sus pueblos e ir en busca de mejores oportunidades, la discriminación y las limitaciones económicas hacen que vuelvan a sus hogares, a vivir con sus padres; esto conlleva a mayores niveles de depresión y alcoholismo, lo cual aumenta la probabilidad de violencia doméstica.

3.4. JAYARAMAN R. (2004): "Modeling domestic violence"

Se basa en tres tipos de motivaciones (preferencias) de agresores, siguiendo la clasificación del famoso psicólogo social Berkowitz³³, de las cuales las dos primeras son las mismas de las que se sirven Tauchen, Witte y Long para desarrollar su modelo. 1º Agresores instrumentales, 2º Agresores expresivos y 3º Agresores por normas sociales, que se daría cuando en una sociedad donde la violencia doméstica es la norma; el individuo ejerce la violencia por miedo a las sanciones sociales que pueda sufrir.

La parte experimental, la han realizado sobre datos obtenidos de cuestionarios realizados a 8906 mujeres casadas entre 15 y 49 años, que son parte de la encuesta nacional de India sobre salud de los hogares de 1998-1999 (NFHS en sus siglas en inglés), para Uttar Pradesh; uno de los estados más grandes del norte de India.

La diferencia con los *papers* anteriores, como el de Tauchen, Witte y Long citado antes, es que inserta en el modelo los tres tipos de motivaciones de agresiones. Sus resultados son por tanto tres implicaciones que son comprobables con los de Uttar Pradesh.

Sus resultados son consistentes con la agresión expresiva, instrumental y normativa. Desarrollan 3 modelos alternativos pero no excluyentes de la violencia doméstica. Aunque contrastando estos modelos con los datos, se presentan algunas inconsistencias, sí que aporta un elemento innovador con el desarrollo de la agresión normativa.

Que el 48% de las mujeres consideran la sospecha de infidelidad como motivo suficiente para golpear a una mujer, el 39% considera no informar al marido que va a salir motivo suficiente también, luego el 35%, descuidar la casa o los niños; el 33% no respeta a los suegros, y el 5% no dar a la familia dinero, joyas o bienes que se esperaban de ella; todos estos datos sugieren que la violencia doméstica en esta parte del mundo es una herramienta legítima de disciplina y control.

El primer modelo, el instrumental, llamado también de Disciplina y control, es un modelo de violencia doméstica, mediante un juego estático no cooperativo donde participan dos agentes, la mujer y el marido $i = w, h$ (iniciales de *wife* y *husband*).

Ambos tienen preferencias sobre el comportamiento de la mujer y la violencia doméstica.

La utilidad tendría esta forma:

$$U_i(a, d) = -(a - a_i)^2 - dK_i$$

Donde $a \in A$ denota las acciones de la esposa, a_i es el punto de maximización de utilidad del jugador i , luego $i \in \{w, h\}$, $a_w \neq a_h$; la decisión del marido de

³³ BERKOWITZ, L. (1993). *Aggression: Its causes, consequences and control*. Philadelphia, Temple University Press.

cometer violencia o no es denotado por $d \in \{0, 1\}$; y K_i denota el coste de imponer a un jugador i como resultado de la violencia sobre la mujer.

Para simplificar asume el autor, que a puede tomar uno de dos valores, $a \in \{a_h, a_w\}$ y el valor $\pi = (a_h - a_w)^2$. Para asegurarse que la disciplina es el enfoque central del modelo, también asume que $K_w > \pi$. Y $\pi > -K_h$. La primera desigualdad implica que a una mujer no le gusta ser golpeada, pero el daño que sufre es mayor que la desutilidad de actuar de acuerdo a los deseos del marido. La segunda desigualdad captura la idea de que el marido recibe más ganancias de la obediencia de su esposa que ejerciendo violencia sobre ella. Los pagos que realizan se describen en la siguiente matriz:

	a_h	a_w
0	0, - π	- π , 0
1	- K_h , - π , - K_w	- π - K_h , - K_w

El marido es el jugador de la fila y tiene para escoger entre 0 y 1; es decir $d \in \{0, 1\}$, y la mujer es la jugadora de la columna y escoge entre $a \in \{a_w, a_h\}$. El juego tiene un único equilibrio (a^*, d^*) cuyo valor depende de si la utilidad del marido crece o decrece con la violencia:

$$(a^*, d^*) = \begin{cases} (a_w, 1) & \text{si } K_h < 0 \\ (a_h, 0) & \text{si } K_h > 0 \end{cases}$$

Ambos, marido y mujer tienen una estrategia dominante en este juego estático. Para la esposa, $a = a_w$ y para el marido es $d = 0$ si $K_h > 0$ y $d = 1$ si $K_h < 0$. Efectivamente, las decisiones de cada uno de los jugadores, no depende de las acciones del otro.

Como este modelo no se ajusta a la motivación de disciplina y control, el autor desarrolla un juego dinámico repitiendo hasta el infinito este juego estático.

Considera una versión repetida (infinita) de este juego $G(\beta)$, donde β es un factor de descuento común. Se denota el equilibrio de este juego por (a^{**}, d^{**}) . Por tanto, en la versión infinita del juego anterior, existirían dos equilibrios de Nash:

$$G(\beta): (a^{**}, d^{**}) \in \{(a_w, 1), (a_h, 0)\}$$

El primer equilibrio $(a^{**}, d^{**}) = (a_w, 1)$ -como se ha visto anteriormente, el único equilibrio de Nash del juego donde $K_h < 0$ - y el segundo equilibrio sería: $(a^{**}, d^{**}) = (a_h, 0)$, que se podría traducir en la siguiente estrategia del marido: "Empezaré con $d = 0$, en un nivel determinado, si el resultado de los juegos anteriores ha sido $(a_h, 0)$ -es decir que la mujer actúa conforme a los deseos del hombre-, luego escogerá la estrategia $d = 0$. De lo contrario, escogerá $d = 1$, es decir que infligirá violencia.

Un modelo no cooperativo donde la violencia doméstica es usada como herramienta de disciplina y control predeciría que la ausencia de violencia estaría asociada con actuar de acuerdo a los deseos del esposo, pidiendo permiso para salir de casa, por ejemplo. Sin embargo, los datos indicaban lo contrario: las mujeres que pedían permiso eran más proclives a ser golpeadas que aquellas que no lo hacían.

Esta inconsistencia entre el modelo no cooperativo y los datos le llevan al autor a sostener que la respuesta a pedir permiso o no está situado en el presente, mientras que la cuestión de golpear a la mujer es histórica, o que las mujeres que fueron golpeadas fueron desobedientes en el pasado y desde ese momento ya no han vuelto a desobedecer.

De ahí a que desarrollen los siguientes modelos, que serían más consistentes con los datos, pues toman a la violencia doméstica como un problema de modelo colectivo de familia:

Modelo que contempla la Afición a la violencia

El autor se basa en el modelo colectivo de familia, siguiendo la misma línea de Browning and Chiappori (1998), para desarrollar este modelo y el siguiente.

La utilidad de la mujer y el hombre se denota por $U_i(d)$, donde $i = w$ (wife), h (husband), y la decisión del marido de cometer o no el delito viene denotado por $d \in \{0, 1\}$.

Asumiendo que el marido disfruta perpetrando violencia sobre la mujer y la mujer no lo disfruta, tenemos que la violencia doméstica se presenta como:

$$\max_{d \in \{0, 1\}} \mu(z) U_h(d) + (1 - \mu(z)) U_w(d)$$

Donde $\mu(z)$ y $1 - \mu(z)$ representan que el bienestar favorece al hombre o a la mujer respectivamente, depende del vector exógeno caracterizado por z . La solución al problema sería:

$$d = \begin{cases} 1 & \text{Si } \frac{\mu}{1 - \mu} \geq \frac{U_w(0) - U_w(1)}{U_h(1) - U_h(0)} \\ 0 & \text{No se comete} \end{cases}$$

El modelo dice que d debería crecer en μ . Esto lleva al autor a concluir que la violencia doméstica es más probable que ocurra mientras mejor sea la posición del hombre, o peor la de la mujer.

Problema: Contrastando estos resultados con los datos, existen diferentes medidas de z , tales como el nivel de educación de ambos, si él posee tierras, y el año del matrimonio. El coeficiente de educación de la mujer y el año del matrimonio sí son variables significativas; por el contrario el coeficiente de posesión de tierras es positiva pero no relevante, y el coeficiente del nivel de educación del hombre aunque es significativa, tiene signo negativo; lo cual indica que este z no es un indicador, o que el modelo no es correcto.

Modelo que contempla el Alivio de Frustración

Formalizan la idea del uso de la violencia doméstica como alivio de la frustración, de la siguiente manera:

Tenemos a y que representa una variable al azar que toma el valor de 1 cuando el marido experimenta un suceso de frustración, es decir que comete violencia, y 0 lo contrario. Para un individuo j , tendríamos:

$$p_j = Pr(y_j=1)$$

Y luego, $(1 - p_j) = Pr(y_j = 0)$

Para el hombre, experimentar frustración no es placentero, por tanto es un coste: $F > 0$. Recurrir a la violencia doméstica alivia este coste. Entonces:

$F(d)$, donde como antes $d \in \{0, 1\}$, y $F(1) < F(0)$.

Finalmente, le da al marido derecho a sentir altruismo hacia su esposa, por tanto el asume un coste de $0 < c < F(0) - F(1)$, cuando él sucumbe a la agresión.

Relacionando todo lo anterior, la utilidad ex - post del marido sería:

$$U_h(d) = -yF(d) - dc$$

En esta ecuación se ve que el marido con un mínimo nivel de altruismo escogerá $d=y$.

Es más, el ex - ante $Prob(d=1) = p_j$

Desafortunadamente esto último no puede ser contrastado con los datos, porque no se puede saber la incidencia directa de la violencia por este motivo. De todas formas, el estrés que producen los problemas económicos está relacionado con una probabilidad mayor de frustración o, en palabras del autor, tiene menos capital emocional para lidiar con ciertas cosas.

Para formalizar esto último, supongamos que

$$p_j = p(x_j), \text{ donde } p_{x_j}^{\ell} > 0$$

Con esta ecuación se esperaría que los maridos que tiene más dificultades económicas muestren más violencia, lo cual sí puede ser corroborado por los datos, pues los individuos que tienen menor nivel de educación, las castas en desventaja y los trabajadores ocasionales presentan más probabilidad de

golpear a sus mujeres que aquellos que tienen un mejor nivel de educación, el resto de castas no desfavorecidas y los trabajadores no ocasionales.

Finalmente, en las conclusiones del *paper*, el autor reconoce que el modelo que internaliza la violencia puramente instrumental no concuerda con los resultados de la regresión estadística; sostiene que sería la estructura del juego que emplea y no tanto la motivación en sí misma la que no sería la correcta en un entorno de matrimonio o vida de pareja. Por otro lado, el modelo que internaliza la agresión por frustración es la que mejor cuadra con los datos; aunque la variable frustración es especulativa, la conclusión es que los maridos que afrontan condiciones de vida en desventaja tienen índices de violencia contra las mujeres mayores que los hombres.

3.5. BOBONIS G. J., CASTRO R. y GONZALEZ-BRENES M. (2009). "Public Transfers and Domestic Violence: The roles of Private information and spousal control".

Estudian el impacto de OPORTUNIDADES; el programa gubernamental que da ayuda financiera a mujeres, en los índices de violencia de pareja y amenazas de violencia en el México rural.

Varios países en desarrollo han introducido programas de ayudas dinerarias "condicionales"; es decir, a cambio de llevar a los niños al colegio, que su desarrollo académico sea bueno, llevarles al médico, entre otros ejemplos.

El programa OPORTUNIDADES está dirigido a mujeres adultas, madres del objetivo de la población: los niños.

Existe consenso entre los académicos y los reguladores, que los beneficios de este tipo de ayudas dirigidas exclusivamente a mujeres, van desde promover la igualdad de las mujeres, y mejorar su posición dentro de la familia y en su comunidad; como ayudar al desarrollo humano de la niñez. Sin embargo, una consecuencia no buscada podría ser un incremento de la violencia doméstica.

Fuente de datos:

Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones dentro de los hogares (ENDIREH), del 2003. Incluye información detallada de la violencia de pareja y amenazas contra la mujer.

Las preguntas van relacionadas a los tres diferentes tipos de violencia; física, sexual y maltrato psicológico, durante los últimos doce meses previos a la entrevista. Está dirigido a mujeres mayores de 15 años.

El 20% de la muestra, son mujeres indígenas.

Los resultados de estas encuestas son: El 40% de las mujeres de la muestra ha experimentado alguna forma de violencia física, sexual, emocional (psicológica), o económica.

Un 8% de las encuestadas recibieron amenazas de sus maridos; que abandonarían el hogar (con o sin los hijos), o que les pegarían o matarían. Estas formas manipulación y violencia psicológica pueden resultar tan dañinas como la violencia física misma.

El 8% de las encuestadas nunca fue a la escuela, aunque dos tercios de toda la población femenina encuestada completaron la escuela primaria.

Las parejas-hombres, tienen casi los mismos niveles de educación que ellas.

Un 19% de las parejas no están casadas, pero viven juntas. Afirman los autores que casarse en el medio rural de México representan unos costes muy elevados.

De todos los hombres entrevistados, al menos un 18% dijo haber sufrido violencia en sus hogares cuando eran niños.

Contexto cultural:

Lo primero sería conocer los patrones de distribución de la renta de la familia y el rol de las mujeres en la participación de la misma en el medio rural de México. Como se verá, la mujer tiene un poder muy limitado en el hogar:

- En la mayoría de las familias pobres, el hombre-pareja controla su propia renta y contribuye al fondo común del hogar sólo para los gastos de manutención básica. Es decir, los hombres tratan de guardar la información sobre sus niveles de renta porque así pueden destinar cantidades mayores a su consumo personal. Esta estrategia les permite controlar la cuantía de su contribución al hogar y los fines de dicha contribución.
- Las mujeres, por el contrario, si ganan algo de dinero, lo destinan íntegramente al hogar, al fondo común. La ideología del altruismo materno estaría detrás de este comportamiento.
- Los hombres pueden, inclusive, llevarse dinero del fondo común para destinarlo al alcohol por ejemplo. Las desavenencias sobre el aporte económico del marido, es una de las principales causas de la violencia de pareja.
- Sin embargo, los últimos años hay más mujeres trabajadoras debido al desarrollo de algunos sectores como la industria textil en las zonas rurales de México. Por tanto, al mismo tiempo, se está dando un ligero incremento de la participación del hombre en actividades del hogar.
- Lo anterior, lamentablemente no ha significado una mejora en la posición de la mujer en el hogar. Todo indica que el progreso económico tardará un poco más en hacer efecto en las dinámicas de los hogares indígenas y la población rural.

Aporte:

Los hallazgos de este trabajo, se convertirían en una evidencia más en contra de las teorías económicas tradicionales de la familia, las cuales proclaman que mejorando la posición de la negociación de la mujer dentro del hogar puede hacer que disminuya la violencia física y emocional³⁴.

Método y resultados econométricos y contrastación con el modelo:

Los resultados de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS, en sus siglas en inglés) son:

³⁴ Por ejemplo THOMAS 1990; SCHULZ 2004; DUKFLO 2003 Y 2005; Banco Mundial 2003; 2007.

1. Las mujeres que tienen un salario, tienen un 30% más de probabilidades de sufrir cualquier algún tipo de violencia por parte de su pareja, comparadas con mujeres no trabajadoras³⁵.
2. Consistente con el modelo teórico, el impacto de OPORTUNIDADES en los hogares de mujeres beneficiarias del programa, da como resultado una reducción substancial del abuso físico, pero se registra un aumento del uso de amenazas por parte del hombre. También se registra un aumento de la violencia emocional no asociada con violencia física o sexual. Por tanto, un aumento en las oportunidades socioeconómicas de la mujer generan un mayor incentivo en los hombres para usar la violencia psicológica o amenazas de violencia física para extraer rentas de la dotación de la mujer y una reducción e la incidencia de abuso físico o sexual.
3. Los efectos antes mencionados, se concentran en mujeres beneficiarias que ostentan un poder de decisión muy reducido en el hogar.
4. El programa aumenta los recursos del hogar, no sólo en cuanto a oportunidades socio-económicas de las mujeres adultas, sino que también conduciría a una reducción de los niveles de estrés en la pareja y mejoraría la salud emocional de toda la familia, adultos y niños, según el modelo. Aunque se enfrentaban al problema de no saber ex ante el bienestar emocional de los miembros adultos de la familia; los autores encontraron un posible indicador sustituto, como es la violencia ejercida por cada uno de los padres hacia los hijos. El resultado de la regresión, sugiere que no hay impacto de las ayudas sobre el uso de la violencia contra los niños.

REFLEXIONES

Como hemos dicho en la introducción de este trabajo, nuestra pretensión es usar la metodología del análisis económico del derecho para estudiar los efectos de las normas jurídicas (análisis descriptivo) y en todo caso cómo

³⁵ Refieren los autores que hay teorías sociológicas sobre la reacción violenta del hombre (“male backlash”) cuando su mujer trabaja. Para éstos, que ella trabaje representa una amenaza a su poder; pues ella podría ser más independiente, pasar más tiempo fuera de casa, etc. Para más detalle se puede revisar CASTRO, RIQUEY y MEDINA (2006), Y CASTRO Y CASIQUE (2008).

deberían ser las mismas (análisis normativo). Los modelos económicos sirven para desarrollar estos análisis.

Siguiendo esta línea de investigación consideramos que la regulación en materia de violencia de género debería ser un objeto de estudio con resultados fecundos, porque se pueden desarrollar aspectos como el efecto disuasorio de las políticas públicas de índole penal sobre la el mercado de la violencia de género (análisis descriptivo). En el mercado de los delitos de violencia de género, que van desde el asesinato hasta las coacciones leves; donde la interacción de los actores (potenciales maltratadores y potenciales víctimas) producen la comisión de delitos (los productos). La teoría del análisis económico del derecho, nos ayudaría a conocer conocer las influencias de las reformas legales recientes en esas relaciones y sus efectos en la maximización de utilidad de los agresores y las víctimas.

Para valorar esto último, debemos conocer primero los incentivos de los actores, lo cual aplicado al delito de violencia de género, es un gran reto. Partimos de la premisa que todos los actores son racionales, y dependiendo de la realidad social a la que pertenezcan, las preferencias pueden variar. Desde luego, la evidencia de los resultados en distintas realidades sociales nos sugiere, que sólo el análisis económico del derecho no es suficiente para explicar las preferencias del hombre para ejercer la violencia. Como bien nos dicen BLOCH y RAO (2002), resulta necesario combinar métodos antropológicos y sociológicos para explicar las dinámicas de la violencia en los pueblos rurales de India, pero que en realidad se podría aplicar esto mismo a cualquier otra sociedad.

Relacionado con la contribución de la economía al estudio de la violencia doméstica, creemos que un aporte directo sería la exposición de las consecuencias no buscadas de las políticas que benefician sólo a un sector de los actores, en este caso las mujeres. Recordando las conclusiones del *paper* de BOBONIS, CASTRO y GONZÁLEZ-BRENEZ, en las zonas rurales de México las ayudas dinerarias a mujeres madres de familia, si bien es cierto ayudan a reducir la incidencia de agresiones físicas, también puede ocasionar un incremento de la violencia psicológica, que al final es violencia. Una mejora en las oportunidades económicas de la mujer, en ese entorno social, puede dar incentivos al hombre a usar la violencia como respuesta a la amenaza de pérdida de control de recursos del hogar y las decisiones familiares

Otro campo que nos interesa y desarrollaremos, desde el punto de vista del bienestar social, es si estas políticas son deseables (análisis normativo). Una norma es superior que otra, si esa norma produce un incremento del bienestar social en el que se encontraba. De por sí, el análisis normativo por tanto, viene condicionado por la noción de bienestar social. Si se considera, por ejemplo, que el objetivo de bienestar social es minimizar el número de delitos de violencia doméstica, lo ideal sería tener una regla que establezca penas más severas; pero si se desea incluir en bienestar social, la consideración de las circunstancias sociales de las parejas, el bienestar de los niños, los derechos constitucionales de las personas, no sería adecuado una norma excesivamente rigurosa.

Todo parece indicar que el regulador se ha inclinado por la primera opción. Nosotros nos inclinamos por la segunda, no sin antes advertir que los errores que cometamos de interpretación de lo que es bienestar social en la actualidad, es responsabilidad enteramente nuestra.

Una de las conclusiones que hemos obtenido de la literatura económica en materia de violencia de género, es que no resultaría eficiente extrapolar una política pública de una realidad social determinada a otra. En los últimos 30 años lo que empezó en Estados Unidos con la *Family Violence Prevention and Services Act* (1984) y sobre todo con la *Violence against Women Act* de 1994 que originó una cantidad ingente de legislaciones estatales, guías sobre prácticas locales y fondos para financiar programas para víctimas; se ha convertido en una tendencia mundial. Paralelamente, el uso del derecho penal para la violencia de género se ha institucionalizado en casi todos los países desarrollados, tanto para la violencia doméstica en general como la violencia de género en particular³⁶. Muchas de las políticas que se han implementado en Estados Unidos han sido copiadas por otros países, como es el caso de las órdenes de protección, por citar un ejemplo. Y esta tendencia sigue evolucionando. En los últimos años, han interpretado normas procesales en un sentido favorable a las víctimas de violencia doméstica, tales como otorgar eficacia probatoria en juicio a una llamada telefónica al 911 efectuada por una víctima de violencia doméstica que no declaró en el proceso penal incoado con posterioridad contra su agresor (*Davis v. Washington* 547 US No. 05-5224, June, 19 2006). En el caso español, tenemos algo parecido, aunque todavía no es un hecho a fecha de elaboración de este trabajo; el grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial (Informe de 2011), ha recomendado que se modifique el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorga la dispensa en la declaración de la víctima contra su agresor y que se obligue a la mujer a declarar, o en su caso que se valore como prueba el testimonio inculminatorio de la mujer en la etapa de la instrucción, en caso que ésta opte por retractarse durante el juicio.

Finalmente, tenemos el reto de conseguir los datos, que son necesarios para hacer cualquier tipo de evaluación. Como veremos más adelante con profundidad, existe la necesidad de más información, fiable sobre los resultados de la política judicial penal. La forma de mostrar los datos, no es algo baladí. No es lo mismo decir solamente que el 77% de las sentencias de los Juzgados Especializados de la Mujer son condenatorias³⁷, porque ésta sería una lectura incompleta. También se tendría que decir que prácticamente el 50% de las denuncias que entran a estos juzgados se archivan por falta de pruebas y que el porcentaje de procesos donde este tipo de Juzgados puede sentenciar es mínimo, porque es un juzgado de instrucción. La percepción de la sociedad sobre la incidencia de delitos y el éxito de las medidas es importante, pero tampoco hay que caer en el abuso de los datos empíricos.

³⁶ También ha contribuido a esta campaña, los tratados, acuerdos, convenciones, recomendaciones de las Naciones Unidas y del Parlamento Europeo. Para mayor detalle de la evolución histórica de la regulación internacional de la violencia de género y algunos ejemplos de políticas públicas como Gran Bretaña, Austria y Alemania, se puede revisar TORREJÓN (2007)

³⁷ Para citar un ejemplo reciente, recomendamos la lectura de la nota de prensa del jueves 20 de octubre de 2011, titulado “El Observatorio informa: datos de violencia de género en el segundo trimestre de 2011”, con fecha 20 de octubre de 2011.

Existe en los Estados Unidos una corriente crítica relativamente reciente que está cuestionando algunos argumentos (supuestos hechos probados con estudios sociológicos sobre la materia) que se tenían por verdades absolutas³⁸, las cuales inspiraron toda la batería de legislaciones federales y estatales creadas para luchar contra la violencia doméstica, la cual despertaba cada vez más interés, sobre todo desde la década de los 90.

Creemos conveniente citar algunas de esos argumentos y sus críticas, que por cierto, todos se aplican a los E.E.U.U. y se han basado en estudios sociológicos la gran mayoría:

- Según una estimación realizada por el FBI, cada 15 segundos una mujer es golpeada en los Estados Unidos.-

Es verdad que ellos sí hicieron tal cálculo, pero fue en base a un trabajo realizado por un grupo de sociólogos (el conocido Murray A. Straus entre ellos³⁹), pero que definían el abuso como hechos de violencia que son probables de causar lesiones lo cual es un concepto bastante amplio.

- Hay cuatro millones de mujeres maltratadas cada año en los E.E.U.U.-

En ese mismo trabajo de Straus, especularon que si incluían como ofensores a los ex esposos y novios, el número podría ser ése: cuatro millones.

Sin embargo, ningún estudio posterior que utilicen muestras representativas de población ha concluido que sean más de dos millones de mujeres maltratadas cada año.

- La violencia doméstica es la principal causa de lesiones a mujeres entre los 15 y 44 años -más que accidentes de coche, asaltos y violencias juntas-.

Resulta que este argumento se basó en un estudio realizado en una Sala de Emergencias (ni dos, ni tres; sólo una) y los autores del estudio dijeron que la violencia doméstica “podía ser” la causa más común por la cual las mujeres pasen por la Sala de Emergencias.

- El 75% de las mujeres que son asesinadas por sus parejas son asesinadas después de intentar dejar a sus parejas.-

Es verdad que las mujeres tienen mayores probabilidades de ser asesinadas cuando están separadas de los maridos que cuando viven con ellos. Sin embargo, el 75% de los homicidios no son porque las mujeres han dejado a sus maridos.

- La violencia no conoce raza ni condición social.-

Este argumento es acertado, pero también es verdad que la violencia doméstica se da más en hogares que están por debajo de la línea de la pobreza, en minorías étnicas y entre hombres y mujeres entre 18 y 30 años, en E.E.U.U..

³⁸ Por ejemplo GELLES, R. (2007); reflexiona y busca las fuentes de argumentos que se daban por ciertos y también se puede revisar JOHNSON y FERRARO (2000) que hacen hincapié en el celo con el que deberían realizarse los estudios teniendo en cuenta los diferentes tipos de maltrato a la mujer, según el grado de violencia y no caer en la generalización.

³⁹ STRAUS, M. A , GELLES, R.J., and STEINMETZ, S.K. (1980), *Behind closed doors: Violence in the American family*. New York: Doubleday/Anchor.

- El asesoramiento de la pareja no es apropiado para los casos de violencia de pareja.-

En realidad no hay evidencia que indique que el asesoramiento de las parejas que acuden a programas de asesoramiento, incrementa el riesgo para la mujer. De hecho, en E.E.U.U. hay evidencia que para ciertas parejas bajo ciertas circunstancias, tiene efectos positivos.

I. INDICADORES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA ANÁLISIS COMPARADO

En este capítulo mostramos indicadores elaborados por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la violencia, realizado con datos de 44 países por sucesos ocurridos entre 2000 y 2006⁴⁰.

⁴⁰ CENTRO REINA SOFÍA PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA (2010): III Informe Internacional, Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Estadísticas y Legislación.

Es el estudio comparado con datos más actualizados y con la muestra más amplia que hemos encontrado; el 63,64% son europeos, el 31,82% son americanos, el 2,27% son africanos y el 2,27% de Oceanía.

Presentamos algunos de los gráficos de ese estudio, donde se comparan las tasas de homicidios por millón de mujeres⁴¹, por tipo de autor del crimen. Con estos datos comparativos, podremos saber dónde se encuentra España, en cuanto a incidencia de homicidios de mujeres en manos de su pareja.

1. Homicidios de mujeres en general

La tasa media de homicidios, al margen del autor, por millón de mujeres, es de 19,14.

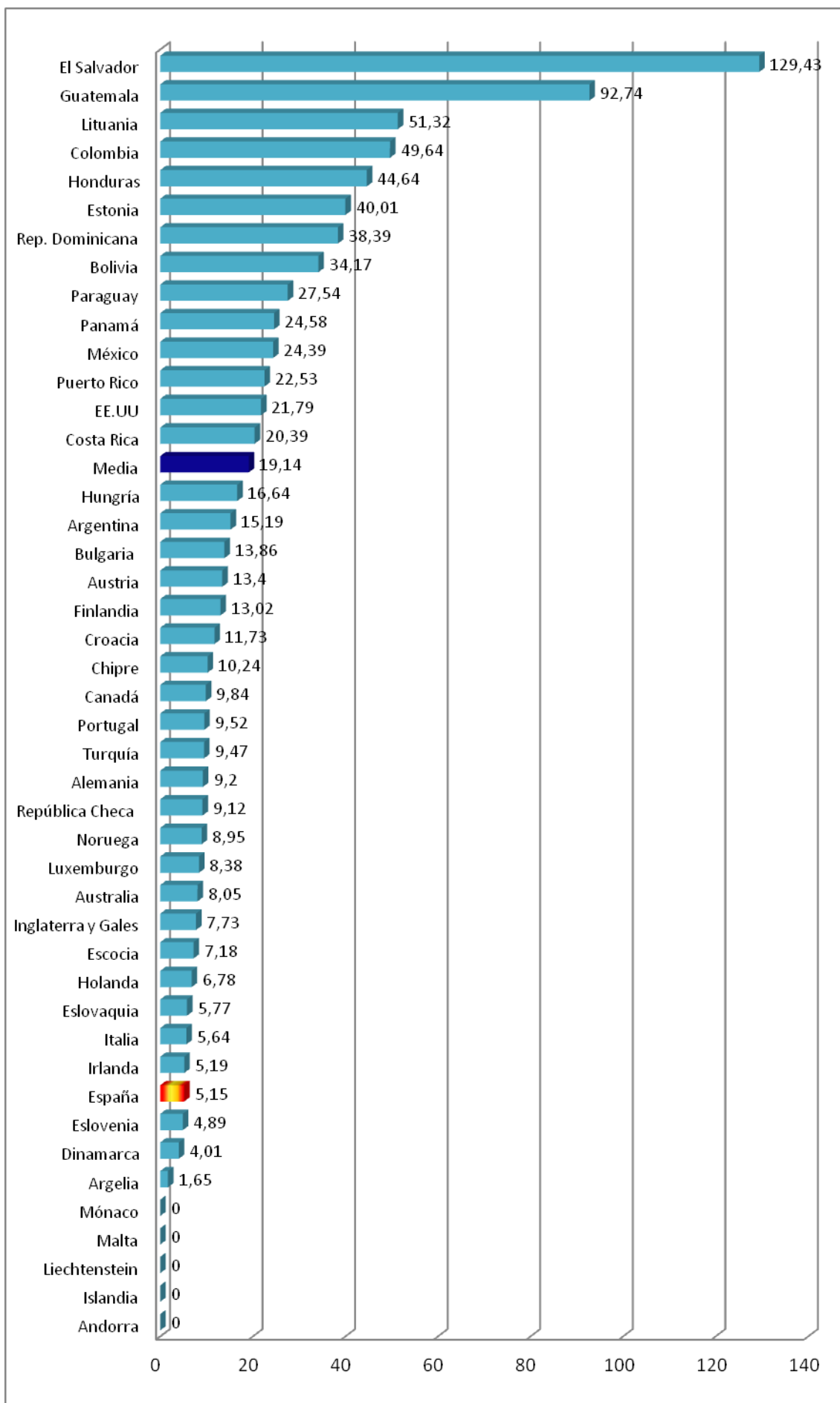
El primer lugar lo ostenta El Salvador con 129,43 muertes por cada millón de mujeres.

En este primer gráfico, se muestra el ranking de tasa de homicidios en general por millón de mujeres. A la vista de estos datos, se comprueba que la mayoría de los que están por encima de la media, son países latinoamericanos; a excepción de Lituania, Estonia y Estados Unidos.

España presenta una de las tasas más bajas de homicidios de mujeres, de 44 países en total. Se encuentra en la posición 35, con 5,15 homicidios por cada millón de mujeres. Está por debajo de Italia, Escocia, Inglaterra, Noruega, Alemania y Finlandia, por mencionar algunos ejemplos. Por cierto, Francia no está incluida en este gráfico, aunque sí lo está en otros.

Gráfico 1. Ranking de países según tasa de homicidios de mujeres en general, por millón de mujeres (2006)

⁴¹ El homicidio tiene distintas variantes, puede ser doloso (con intención de matar), culposo (sin intención de matar aunque el resultado sea ése) y el homicidio con alevosía y demás agravantes es el denominado asesinato. Dado que sólo al final de un juicio se puede conocer qué tipo de homicidio fue y no disponían de información tan detallada; usan indistintamente los términos asesinato y homicidio. IBID, P. 25.



Homicidios en general en Europa

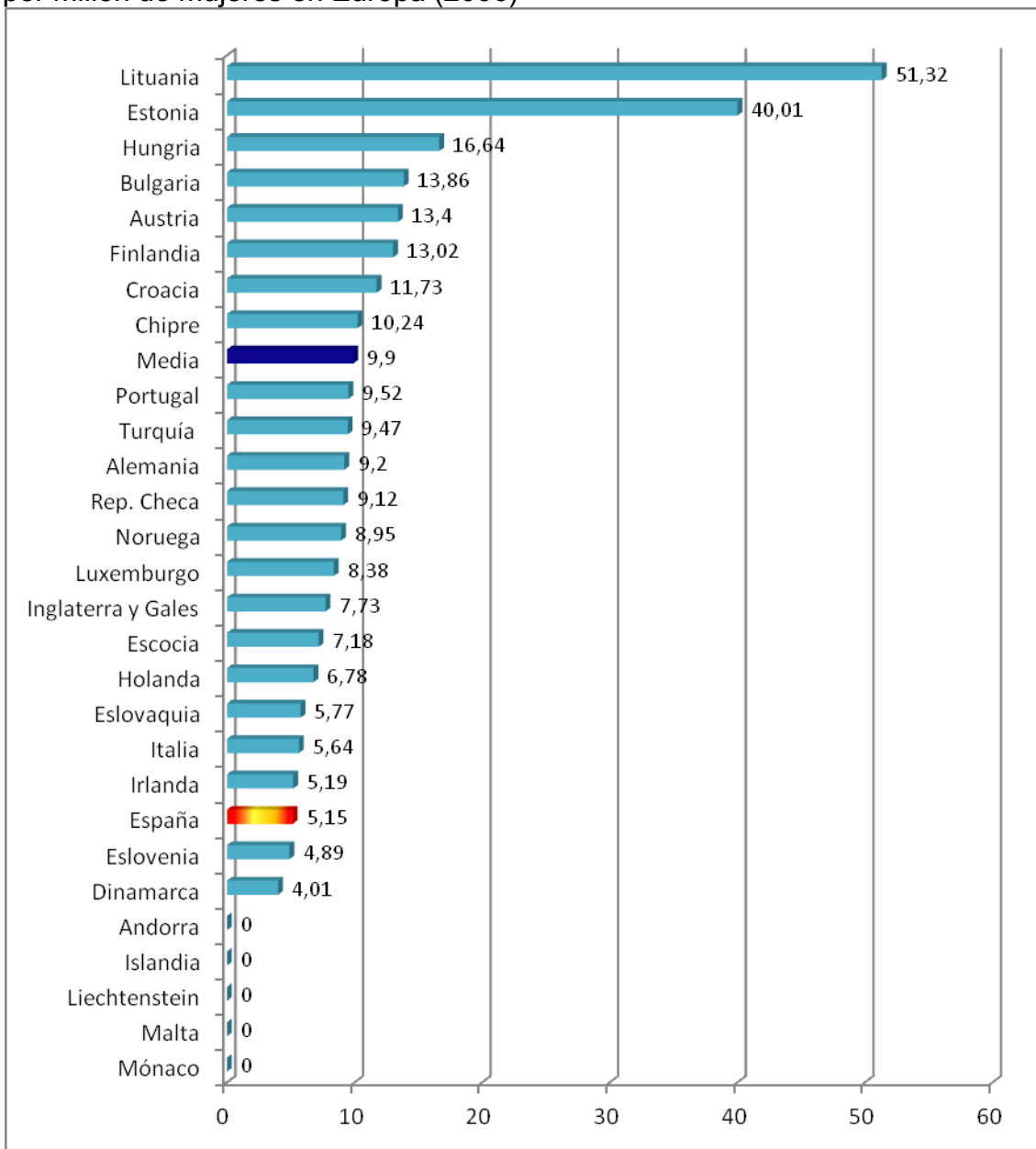
En este gráfico donde se comparan 29 países europeos que proporcionaron información, la tasa media por cada millón de mujeres de de 9,9.

Los países que están por encima de la media son países ex miembros de la Unión Soviética, como Lituania y Estonia, que ocupan el primer y segundo lugar respectivamente.

Llama la atención que Austria y Finlandia, tienen tasas que sobrepasan la media europea en 4 puntos.

Quitando a los países con resultado cero, España es el ante penúltimo del ranking. Se encuentra por debajo de países como Alemania, Noruega, Inglaterra e Italia, por mencionar algunos ejemplos.

Gráfico 2. Ranking de países según tasa de homicidios de mujeres en general, por millón de mujeres en Europa (2006)



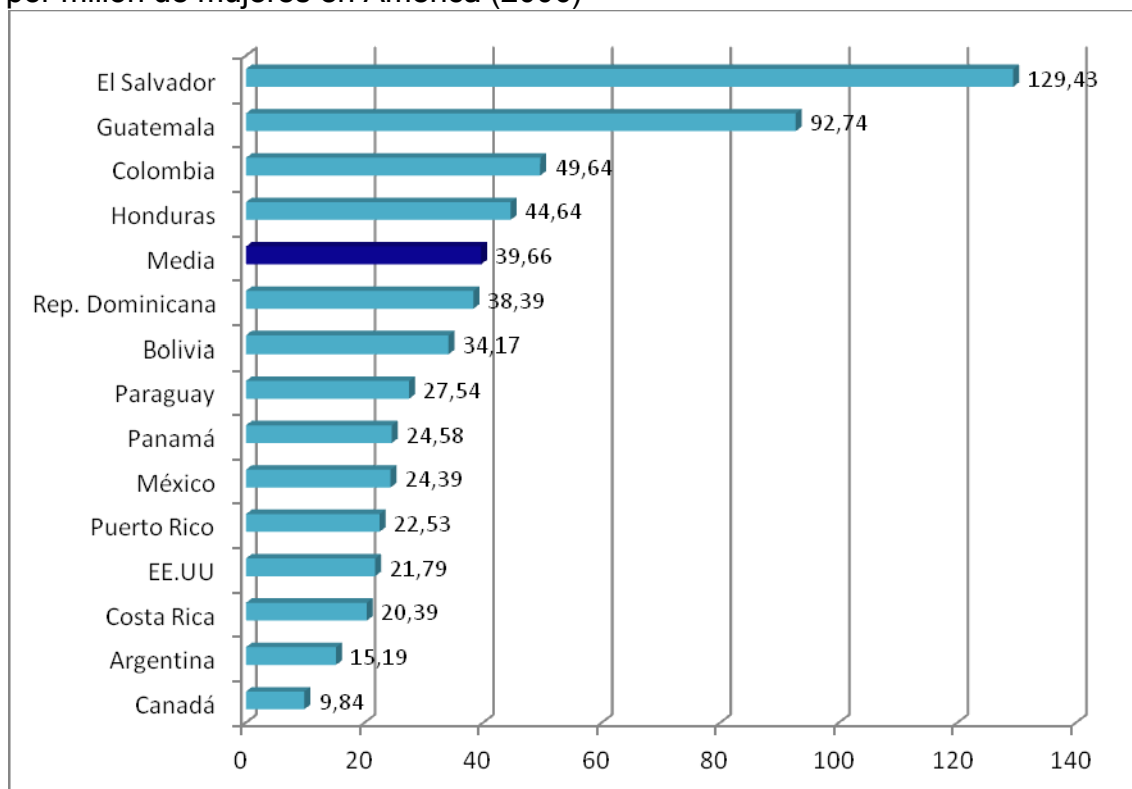
Fuente: Centro Reina Sofía. Tercer Informe Internacional.

Homicidios en general en América

La media de homicidios de mujeres en los países americanos es mucho mayor que la media europea. Mientras que la media americana está en 39,66, la europea está en 9,90. El país americano (no están todos los países americanos en el estudio, cabe anotar) con menor tasa es Canadá con 9,84.

Los dos primeros lugares son para El Salvador (129,43) y Guatemala (92,74), que están bastante alejados del tercer lugar: Colombia con 49,64.

Gráfico 3. Ranking de países según tasa de homicidios de mujeres en general, por millón de mujeres en América (2006)



Fuente: Centro Reina Sofía. Tercer Informe Internacional.

2. Homicidios domésticos

El Centro Reina Sofía ha elaborado tasas de homicidios cometidos en el ambiente familiar; es decir cometidos por algún miembro de la familia y eso incluye a la pareja. En el siguiente acápite nos dedicaremos a comentar las tasas de los homicidios cometidos por la pareja exclusivamente.

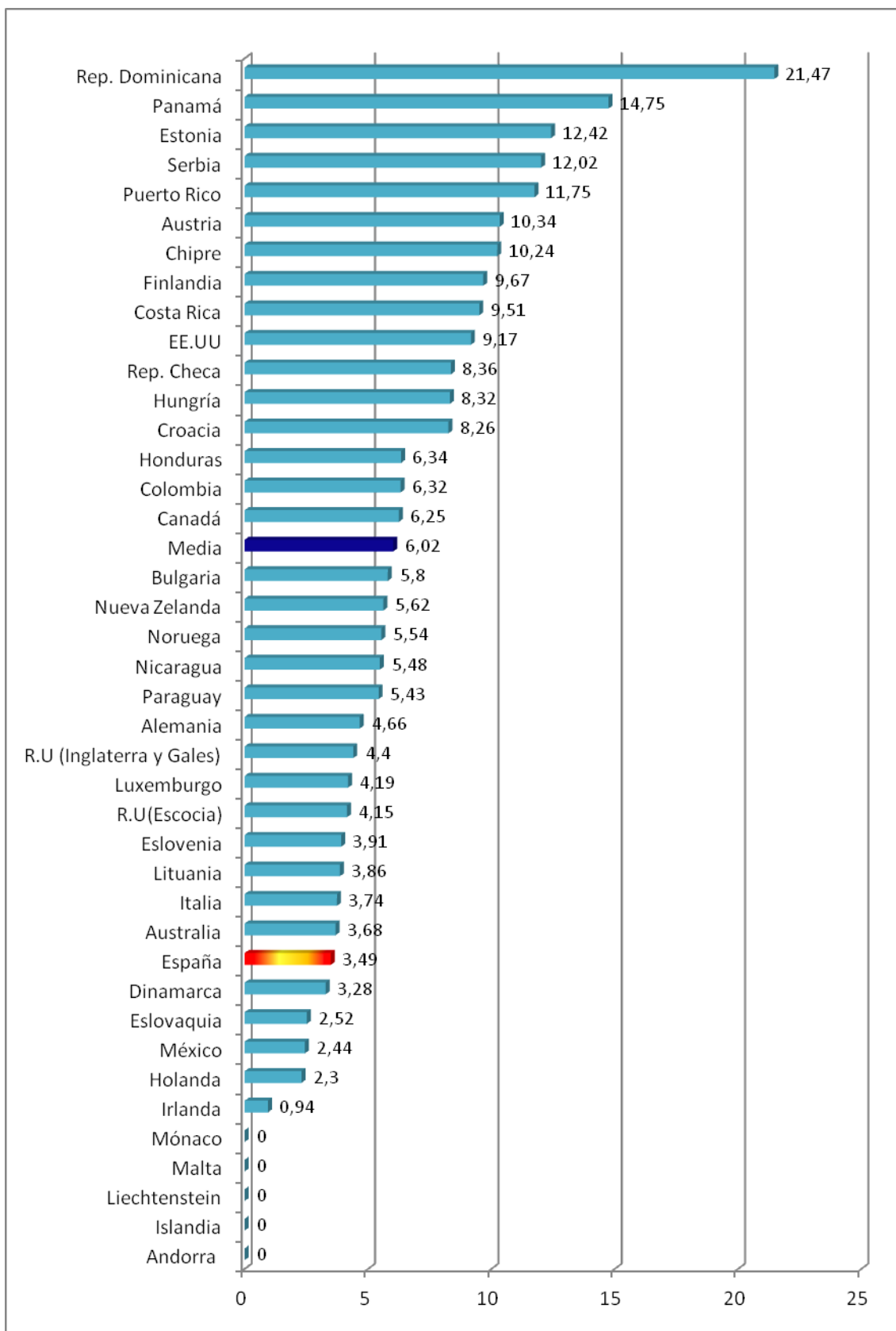
La tasa de homicidios de mujeres en el entorno doméstico de los 40 países que han dado información, se encuentra en 6,02 por millón de mujeres.

Aquí también observamos que la mayor parte de los países que están por encima de la media son países americanos. Casi todos menos E.E.U.U. son países caribeños. República Dominicana ostenta el primer lugar con una tasa de 21,47.

También en este gráfico, observamos que España posee una de las tasas más bajas, 3,49; por debajo de Noruega, Alemania, Luxemburgo e Italia, por mencionar algunos ejemplos.

México en este gráfico se encuentra entre los últimos, mientras que en cuanto a homicidios en general, se encuentra entre los primeros; es más, se encuentra por debajo de España.

Gráfico 4. Ranking de países según tasa de homicidios de mujeres en el entorno doméstico, por millón de mujeres (2006)



Fuente: Centro Reina Sofía. Tercer Informe Internacional.

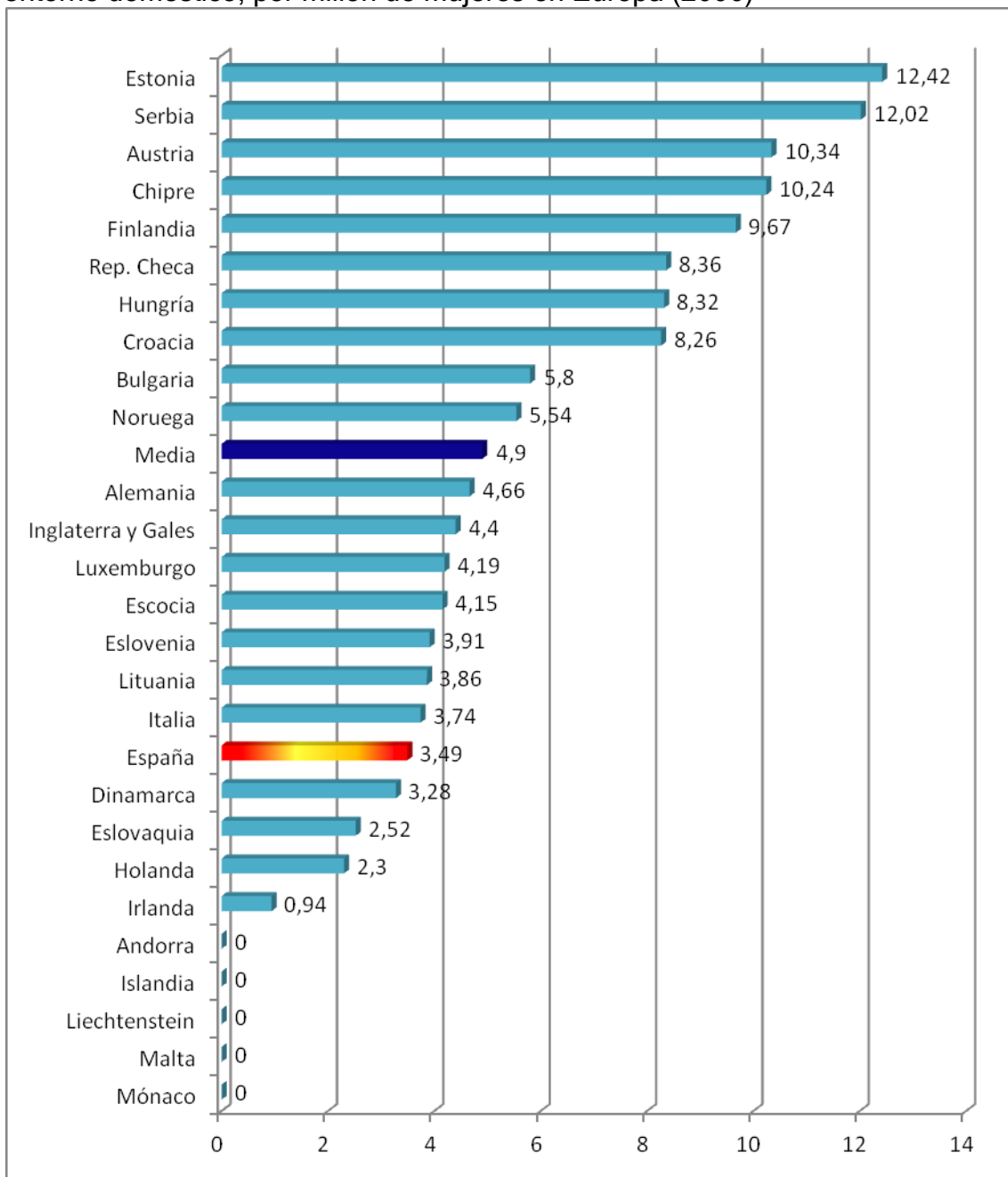
Homicidios domésticos en Europa

Al igual que en los gráficos anteriores, España tiene una posición por debajo de la media europea, con una tasa de 3,49; mientras que la media está en 4,90 por millón de mujeres.

Estonia y Serbia lideran este listado, en primer y segundo lugar respectivamente, seguidos de Austria.

Otro dato a destacar son los resultados de Finlandia, Noruega que también se encuentran por encima de la media.

Gráfico 5. Ranking de países según tasa de homicidios de mujeres en el entorno doméstico, por millón de mujeres en Europa (2006)



Fuente: Centro Reina Sofía. Tercer Informe Internacional.

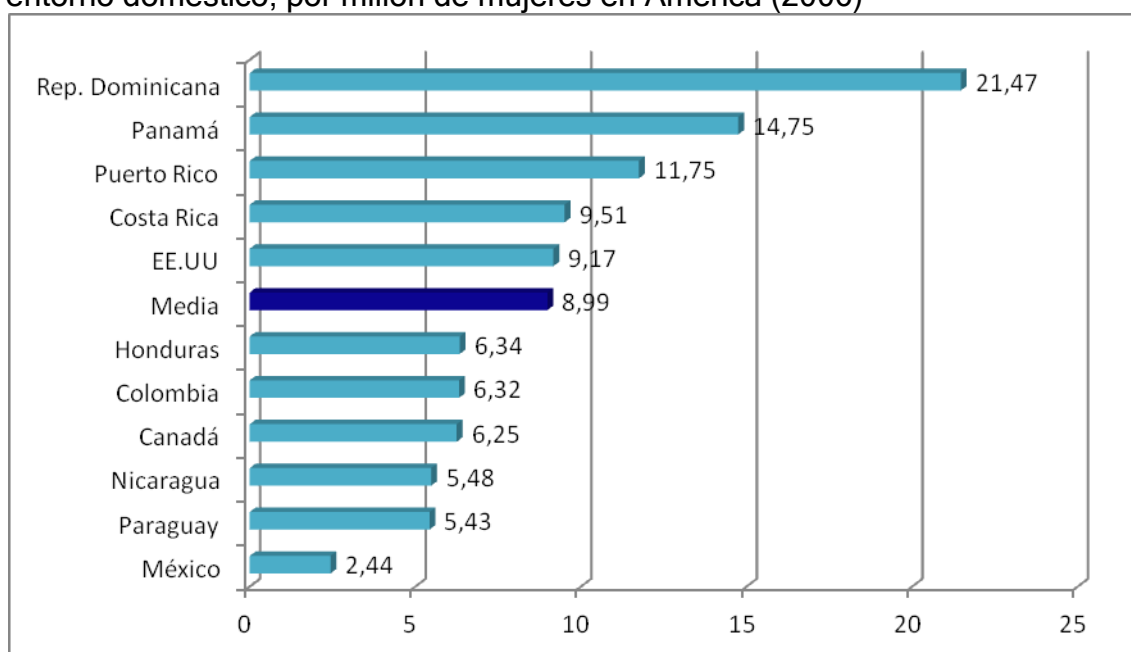
Homicidios domésticos en América

Mientras que la prevalencia media europea de homicidios es de 4,90, América prácticamente dobla esa cantidad, con una tasa del 8,99.

En primer lugar se encuentra República Dominicana con una tasa de 21,47 homicidios. En segundo lugar y lejos está Panamá con 14,75 de homicidios por cada millón de mujeres.

Otro dato a resaltar es que de los 11 países americanos, México ostenta el último lugar de homicidios de mujeres cometidos en el entorno doméstico.

Gráfico 6. Ranking de países según tasa de homicidios de mujeres en el entorno doméstico, por millón de mujeres en América (2006)



Fuente: Centro Reina Sofía. Tercer Informe Internacional.

3. Homicidios cometidos por la pareja

Comparativa elaborada en base a información proporcionada por 35 países.

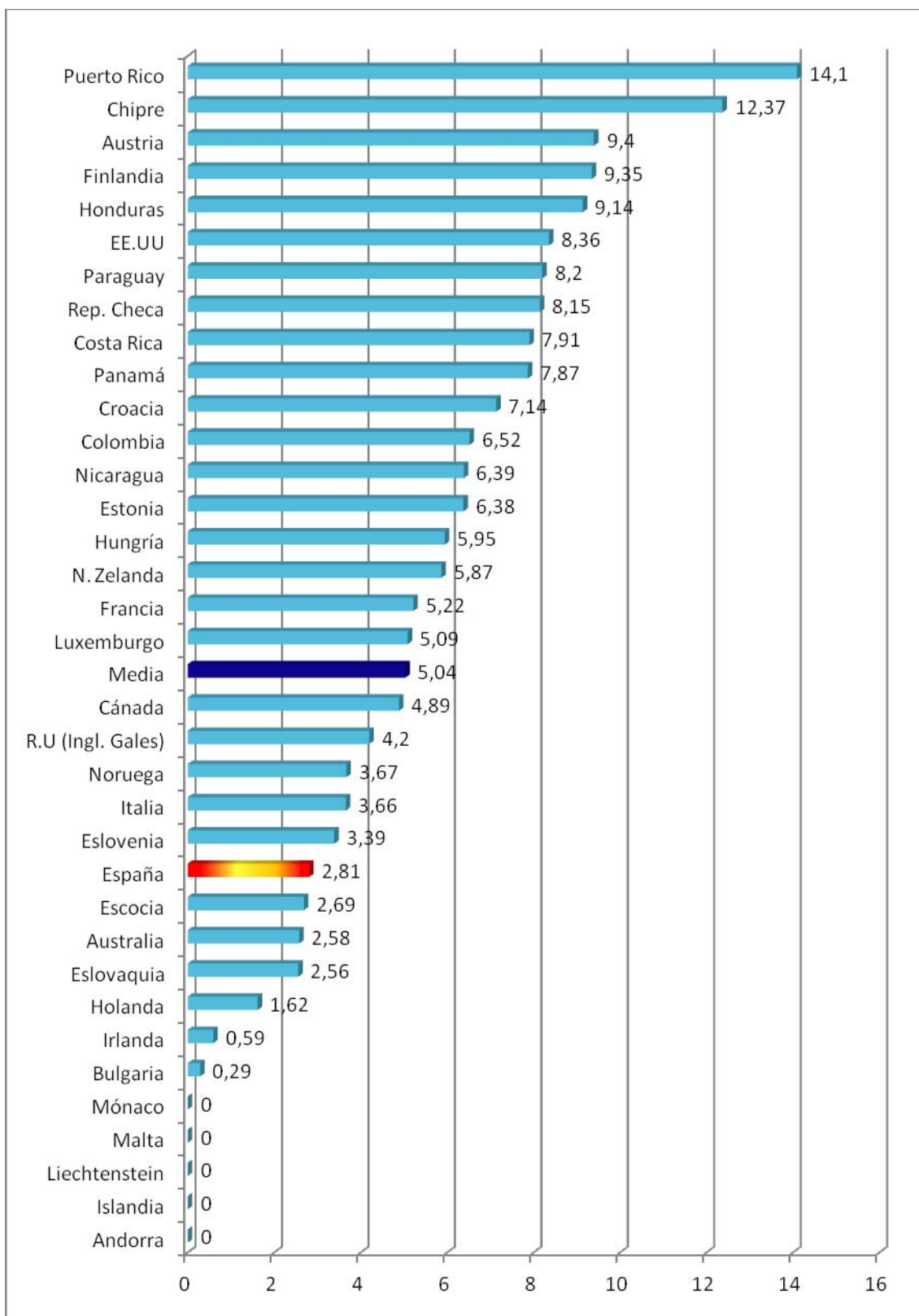
Nótese que hasta ahora, en los gráficos donde se comparan países de distintos continentes, no están los 44 países en su totalidad. Esto se explica porque hay países que no disponen de la información segmentada por tipo de autor, como es el caso de República Dominicana, que no está en este gráfico.

Centrándonos en el gráfico que ofrecemos a continuación, referido a víctimas asesinadas por sus parejas por cada millón de mujeres mayores de 14 años,

Puerto Rico lidera este ranking, con 14,10 por cada millón de mujeres. Austria, Finlandia siguen estando por encima de la media. De hecho Austria tiene el tercer lugar con una tasa de 9,40.

La media se sitúa en 5,04 y España está por debajo de Noruega, Reino Unido, e Italia con una tasa del 2,81.

Gráfico 7. Ranking de países según tasa de homicidios de mujeres cometidos por la pareja, por millón de mujeres mayores de 14 años (2006)



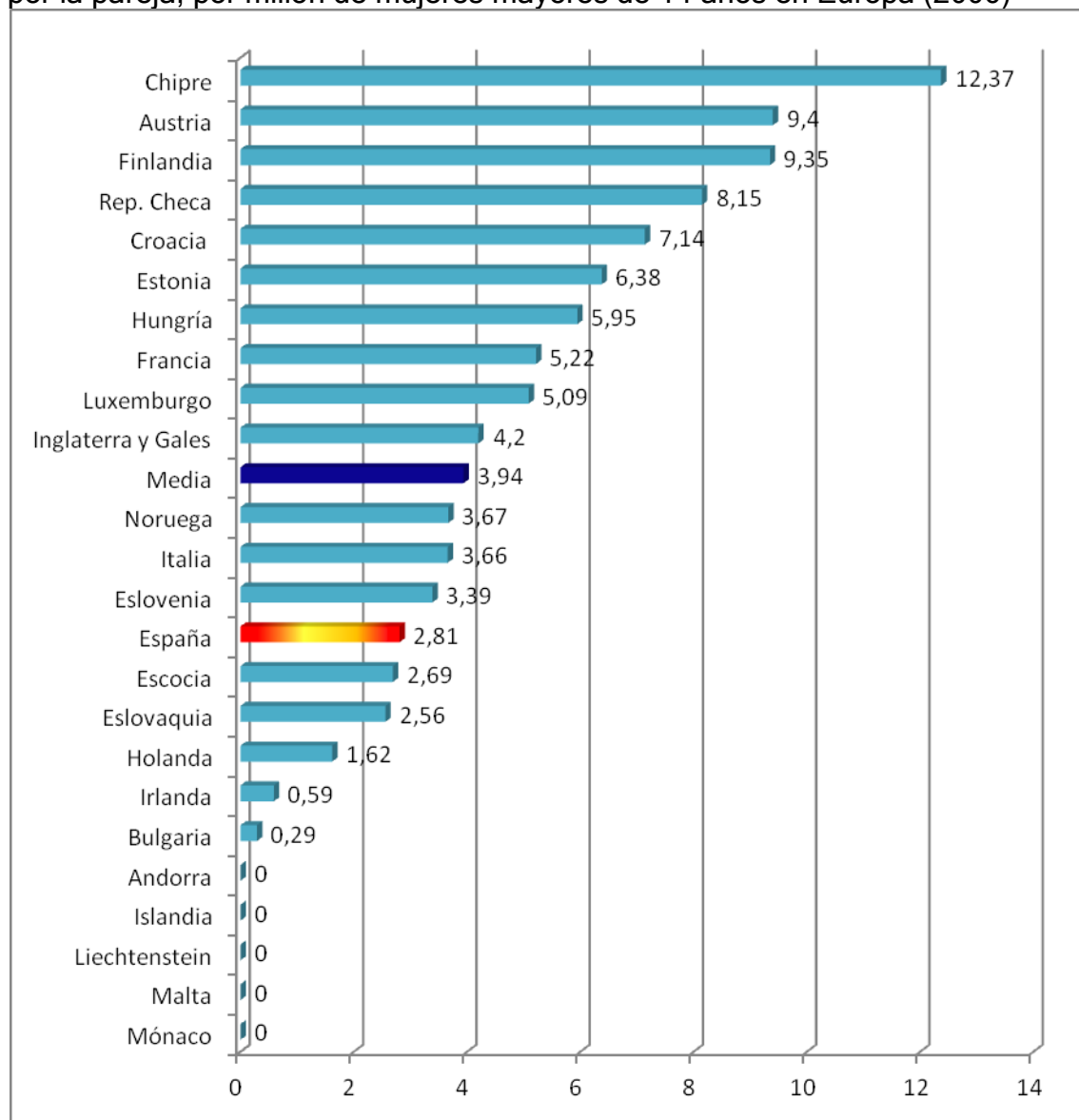
Fuente: Centro Reina Sofía. Tercer Informe Internacional.

Homicidios cometidos por la pareja en Europa

Entre los países europeos, la tasa media de homicidios de pareja es de 3,94. También en esta lista Austria y Finlandia lideran las primeras posiciones, ostentando el segundo y tercer lugar respectivamente.

En España por cada millón de mujeres, 2,81 son muertas de forma violenta a manos de su pareja. Por comparar España con otros países, vemos que Italia, Inglaterra, y Francia tienen tasas de homicidios de pareja más altos que España.

Gráfico 8. Ranking de países según tasa de homicidios de mujeres cometidos por la pareja, por millón de mujeres mayores de 14 años en Europa (2006)



Fuente: Centro Reina Sofía. Tercer Informe Internacional.

Homicidios cometidos por la pareja en América

Entre los países americanos, la tasa media de homicidios de mujeres en manos de la pareja es de 8,15, que dobla la media europea.

Puerto Rico es el país con más incidencias de homicidios de mujeres comparado con su población, con una tasa de 14,10.

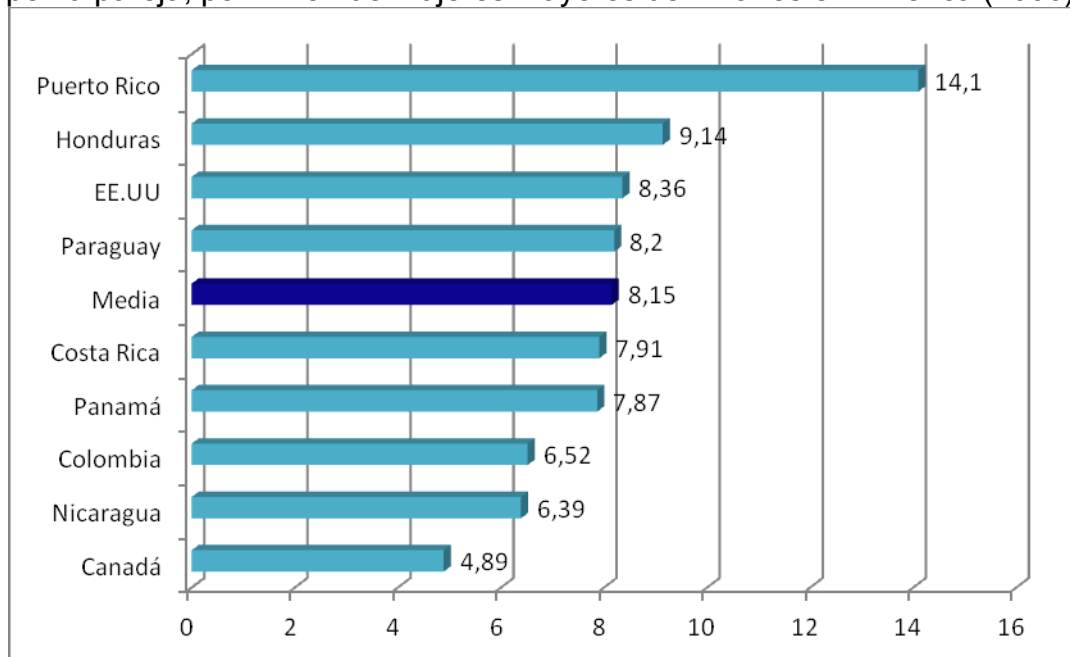
Llama la atención los casos de Panamá y Honduras. Mientras en los reportes de homicidio en el plano doméstico Panamá está por encima de la media y en

segundo lugar (véase gráfico 6); en cuanto a homicidios cometidos por la pareja se encuentra por debajo de la media americana.

Con Honduras sucede lo contrario, mientras que en la prevalencia de homicidios a nivel doméstico está por debajo de la media; en cuanto a homicidios de pareja, está en segundo lugar.

Los grandes ausentes de este gráfico son México y República Dominicana. Hubiera sido interesante conocer sus tasas en este tipo de delitos, aunque muy probablemente se parezcan a las del cuadro 6.

Gráfico 9. Ranking de países según tasa de homicidios de mujeres cometidos por la pareja, por millón de mujeres mayores de 14 años en América (2006)



Fuente: Centro Reina Sofía. Tercer Informe Internacional.

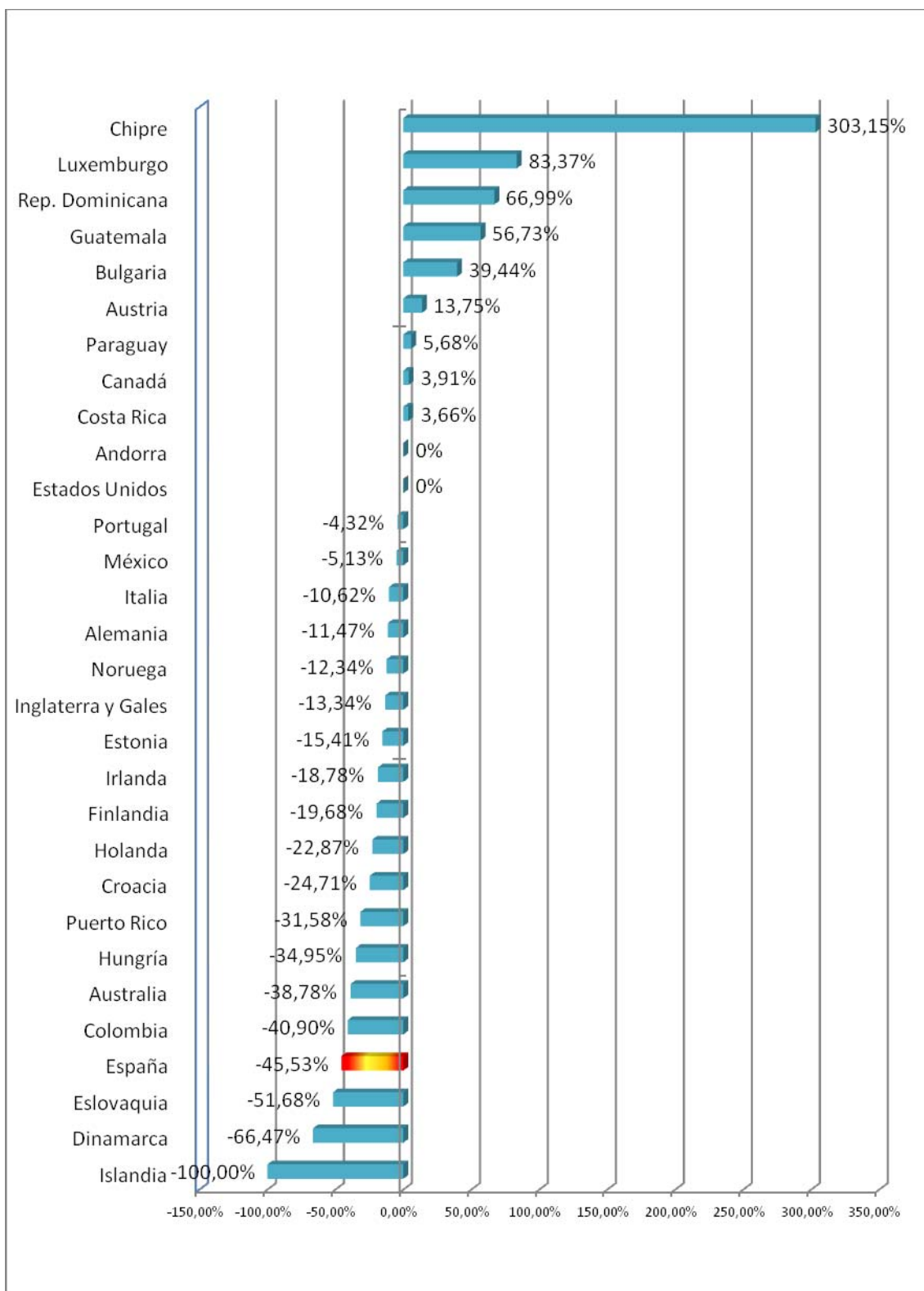
4. Evolución de los homicidios de mujeres en general, entre 2000 y 2006.

La evolución de homicidios de mujeres en general entre 2000 y 2006 de los 30 países aquí mencionados, vemos que para el 60% de ellos -afortunadamente- la incidencia de homicidios ha disminuido.

España se encuentra entre uno de ellos y ostenta el cuarto lugar, seguido de Colombia entre los que más ha disminuido.

Por otro lado, aquellos donde ha aumentado de forma preocupante son, en primer lugar Chipre con un impresionante 303,15%, seguido de Luxemburgo (83,37%) y República Dominicana (66,99%).

Gráfico 10. Evolución de la tasa de homicidios de mujeres cometidos por cualquier agresor (2000-2006)



Fuente: Centro Reina Sofía. Tercer Informe Internacional.

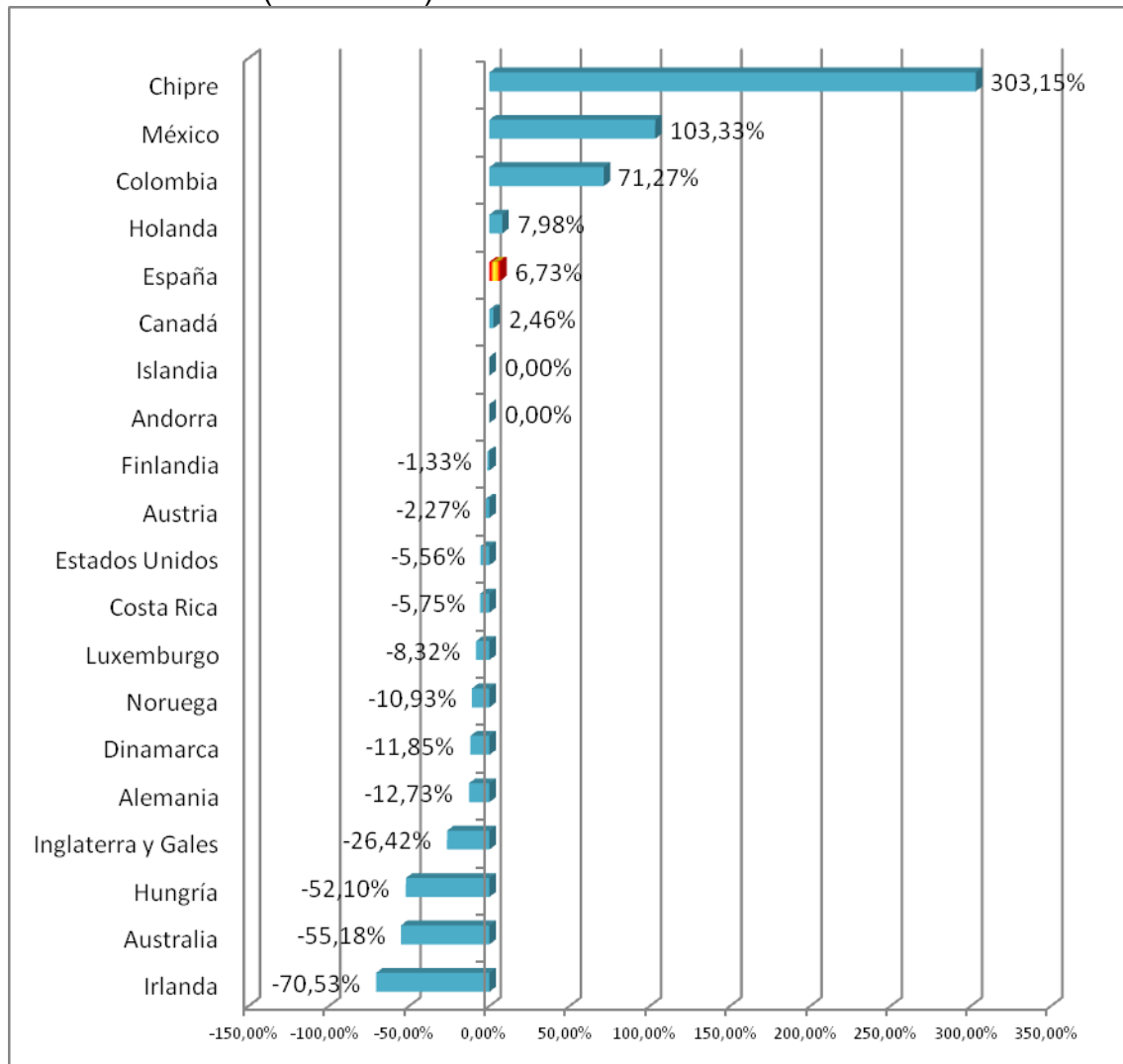
Evolución de los homicidios de mujeres en el entorno doméstico, entre 2000 y 2006.

Para medir la evolución de los homicidios de mujeres en el ambiente doméstico, sólo 20 países de los 44 proporcionaron información. Así tenemos que además de Chipre, México (103,33%) lidera la lista de aquellos donde aumentó la prevalencia de muertes, al igual que en Colombia (71,27%).

Vemos que en el caso español del año 2000 a 2006 tuvo un ligero ascenso de 6,37%.

Por otro lado, entre los que más ha disminuido están Irlanda y Australia, primer y segundo lugar respectivamente.

Gráfico 11. Evolución de la tasa de homicidios de mujeres cometidos en el ámbito doméstico (2000-2006)



Fuente: Centro Reina Sofía. Tercer Informe Internacional.

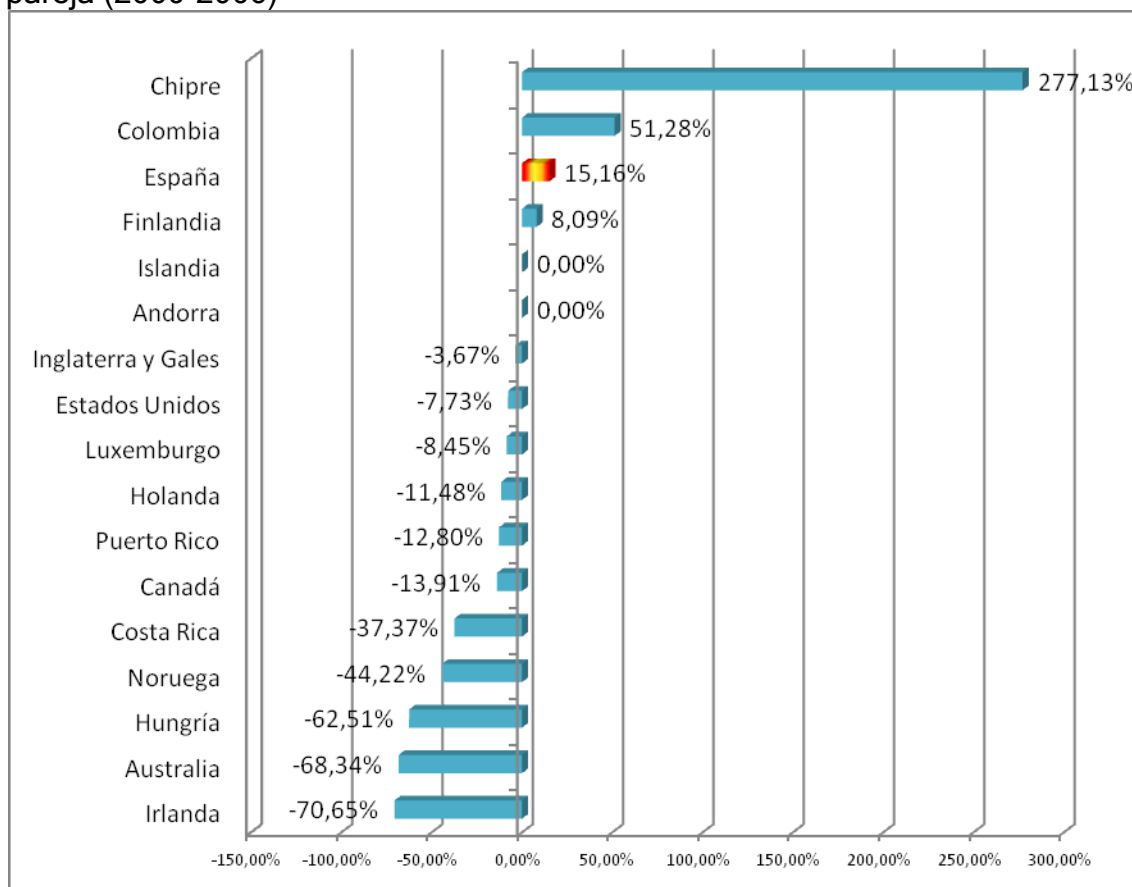
Evolución de los homicidios de mujeres cometidos por la pareja, entre 2000 y 2006.

Para este estudio, sólo han podido recopilar datos de 17 países. Vemos que Chipre (277,13%) lidera la lista de los países donde más ha aumentado las muertes de mujeres por cuenta de sus parejas.

Luego está Colombia, donde aumentó un 51,28% y bastante lejos, en tercer lugar se encuentra España donde creció un 15,16% en 2006, con respecto a 2000.

Los mayores decrementos se han producido en Australia (68,34%) e Irlanda (70,65%).

Gráfico 12. Evolución de la tasa de homicidios de mujeres cometidos por la pareja (2000-2006)



Fuente: Centro Reina Sofía. Tercer Informe Internacional.

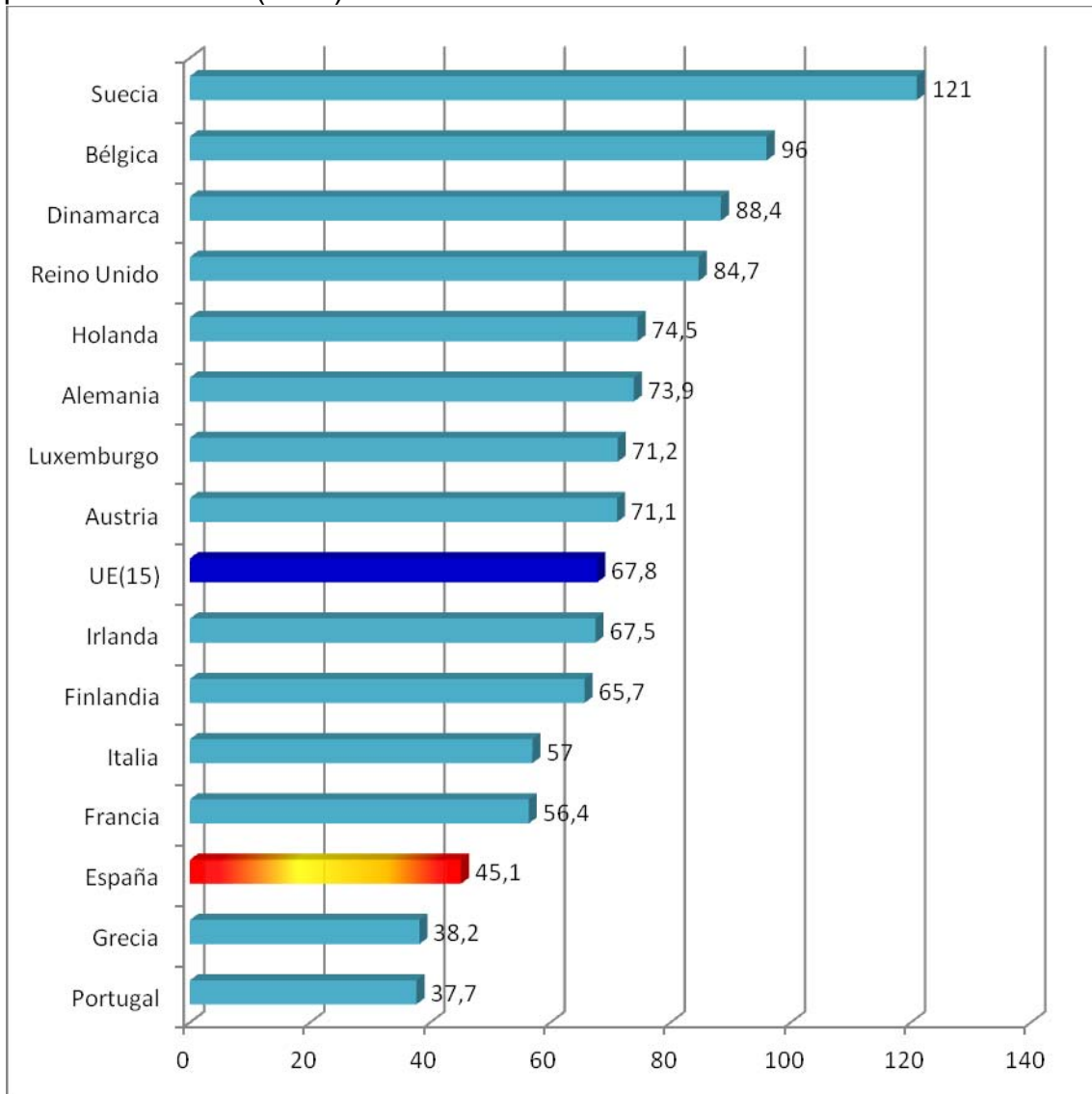
5. Criminalidad (Violencia en general) en España y en Europa

La tasa media de criminalidad de Europa es 67,8 infracciones por cada mil habitantes, según el último Balance de Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior⁴².

Según este gráfico, podemos decir España que tiene una tasa por debajo de la media de 45,1 es un país relativamente más seguro que Alemania, Reino Unido y Suecia, por mencionar algunos ejemplos.

⁴² “Balance de Criminalidad 2010 Junio de 2009 a Julio de 2010”. En Gabinete de Prensa. Ministerio del Interior. <http://www.mir.es/DGRIS/Balances/>. Nota de la fuente: Las tasas corresponden a los años 2008 o 2009, según cada país, y la de España corresponde a junio de 2010.

Gráfico 13. Tasa de Criminalidad comparada en Europa: Infracciones penales por mil habitantes (2010)



Fuente: Ministerio del Interior. Balance de Criminalidad 2010.

6. Conclusiones

La tasa media americana (39,66) de homicidios de mujeres cometidos por cualquier persona, es cuatro veces la media europea (9,90).

La media americana (8,15) dobla a la media europea (3,94) en violencia de pareja con resultado de muerte.

Aunque deberíamos decir que en realidad los que tienen índices altísimos son los países latinoamericanos, con diferencia, sobre Estados Unidos o Canadá.

Los países americanos son bastante más violentos que los europeos. Aunque esto no es nada nuevo, sí hay ejemplos que cuestionan lo que ciertos sectores, no sólo del gobierno, defienden como “La perspectiva de género”, mediante la cual se fundamenta la agravación de penas en delitos que tengan como víctima a la mujer, por las siguientes causas deterministas: “Violencia por desigualdad del género femenino”, y/o por “El modelo patriarcal de educación”.

Así tenemos a países como Austria y Finlandia que además, presentan tasas bastante elevadas de homicidios de mujeres en general y cometidos por la pareja.

También se vería cuestionado aquel mito que dice que en países pobres hay más violencia, por tanto en países ricos hay menos. Tenemos los datos de Noruega, Inglaterra y Canadá para dudar de tal afirmación. Aunque no se caracterizan por tener tasas muy elevadas de violencia con resultado de muerte de mujeres, sí que muestran tasas superiores a las de España, aunque ni son países que adopten modelos especialmente patriarcales de educación, ni son países pobres; todo lo contrario.

Menos alguna excepción, en general podemos decir que donde hay altos índices de violencia en general, por supuesto que hay altos índices de violencia en el entorno familiar.

Por citar algunos ejemplos de países europeos; como vimos en el gráfico correspondiente a la Tasa de Criminalidad comparada que ha publicado el Ministerio del Interior en 2010; comprobaremos que las infracciones penales por cada mil habitantes de Austria, Luxemburgo e Inglaterra son bastante más altas que las de España y están por encima de la media europea. Igualmente, estos países, en las estadísticas de homicidios de mujeres en manos de su pareja; están también por encima de la media europea.

Finalmente, hay algo que no se ha considerado en el estudio elaborado por el Centro Reina Sofía y es un factor importante a tener en cuenta, que es el peso y la tipología de la población inmigrante del país. El fenómeno de la inmigración tiene sus propias características, dependiendo de cada país.

Aquel que es violento en su país, será violento allá donde vaya. No por su nacionalidad, sino por las características socio-económicas y culturales de su

entorno de origen, lo cual se puede aplicar a cualquier persona, un nacional o un extranjero.

Como hemos comprobado, la tasa de homicidios de España no es especialmente alarmante, comparado con otros países europeos. La media europea por millón de mujeres está en 3.94 mientras que España tiene el 2,81.

CAPÍTULO III

CIFRAS SOBRE LA VIOLENCIA EN GENERAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA

Siempre se ha dicho que las denuncias registradas por los cuerpos de seguridad del estado, así como por las instituciones judiciales, son un indicador inferior a lo que realmente ocurre en las calles. Se presupone que esto pasa con todos los delitos en general y en concreto con los delitos comunes tales como lesiones y robos.

Aunque esta afirmación es prácticamente un dogma, especialmente a lo relacionado con el registro de incidentes de violencia doméstica⁴³. ¿Hasta qué punto esto se aplica a la curva de demanda de denuncias relacionadas con violencia sobre la mujer, por malos tratos de su pareja?

Para responder esta pregunta, presentaremos los datos de delitos de lesiones y con resultado de muerte en general -es decir, al margen de la motivación del delito y al margen del sexo de la víctima-, para luego compararlo con la prevalencia de lesiones y homicidios de mujeres cometidos por su pareja. Todo esto partiendo de primera conclusión del capítulo anterior: España no es un país con índices de violencia con resultado de muerte especialmente alarmante, pero sí ha aumentado progresivamente en estos últimos años.

Expondremos los datos que hemos conseguido en series históricas. Las estadísticas han experimentado varianzas importantes durante estos últimos años, no solo desde que se promulgó la Ley Orgánica 1/2004, sino desde la vigencia de la Ley 11/2003, como se comprobará en los siguientes capítulos.

1. Delitos y faltas en general

En este acápite haremos una comparativa de evoluciones temporales recientes entre los delitos de asesinato, homicidio doloso y lesiones en general; y asesinato y lesiones en el ámbito de la pareja (diferenciando entre delitos y faltas). Esto con la finalidad de encontrar si las tendencias son las mismas o difieren una de la otra.

El último Balance de Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior⁴⁴ ha hecho una distinción entre delitos y faltas en base a lo tipificado en el Código Penal, que mejor reflejan percepción de inseguridad de los ciudadanos y que sean homologables con los datos a nivel de la Unión Europea. Los criterios de los indicadores principales son:

- Los delitos contra la vida, integridad y libertad de las personas

⁴³ “No se denuncian todos los sucesos de violencia sobre la mujer”. Ellas denuncian poco o retiran la denuncia presionadas por el qué dirán”.

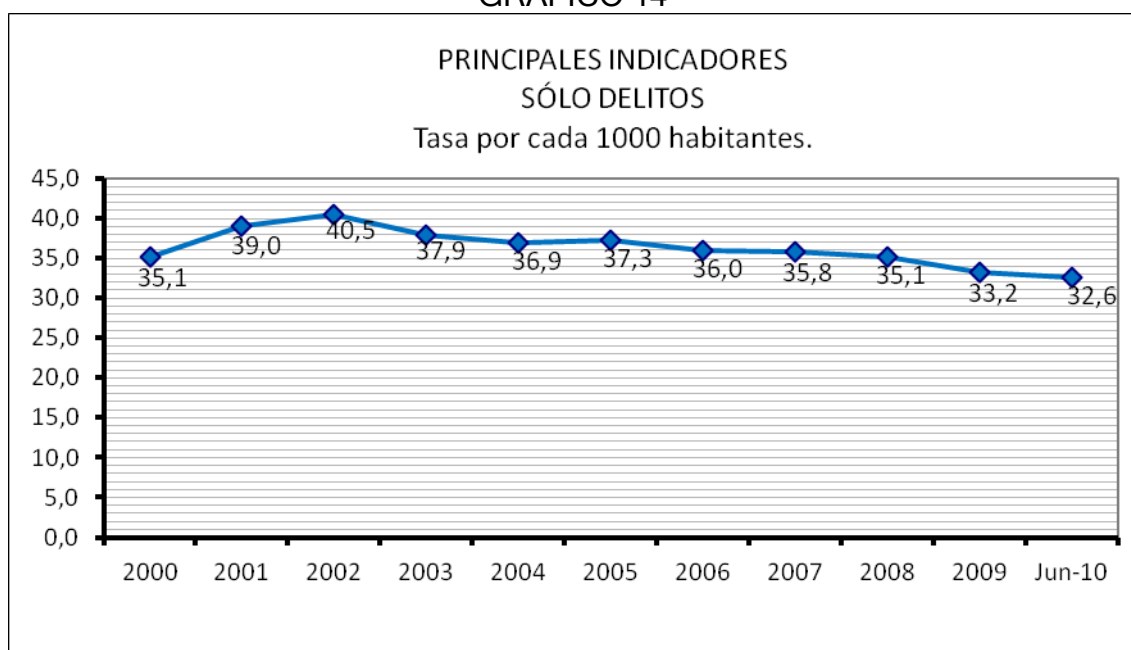
⁴⁴ Lo encontramos disponible en la página web del Ministerio del Interior: <http://www.mir.es/DGRIS/Balances/>. Acceder a Balance 2010 (Entre junio de 2009 y julio de 2010).

- Delitos contra el patrimonio
- Faltas de lesiones
- Falas de hurto

A continuación, ofrecemos la tasa de criminalidad de los principales indicadores mencionados párrafo arriba, desde 2000 a junio de 2010.

Pese a que ha habido un incremento de reporte de delitos en el año 2005, llegando a 37,3 por cada mil habitantes, a partir de 2006 ha mostrado una tendencia descendente que de forma paulatina hace que a cierre de junio de 2010 se ha llegado a la tasa más baja de los últimos diez año: 32,6.

GRÁFICO 14



Fuente: Ministerio del Interior. Balance de Criminalidad 2010.

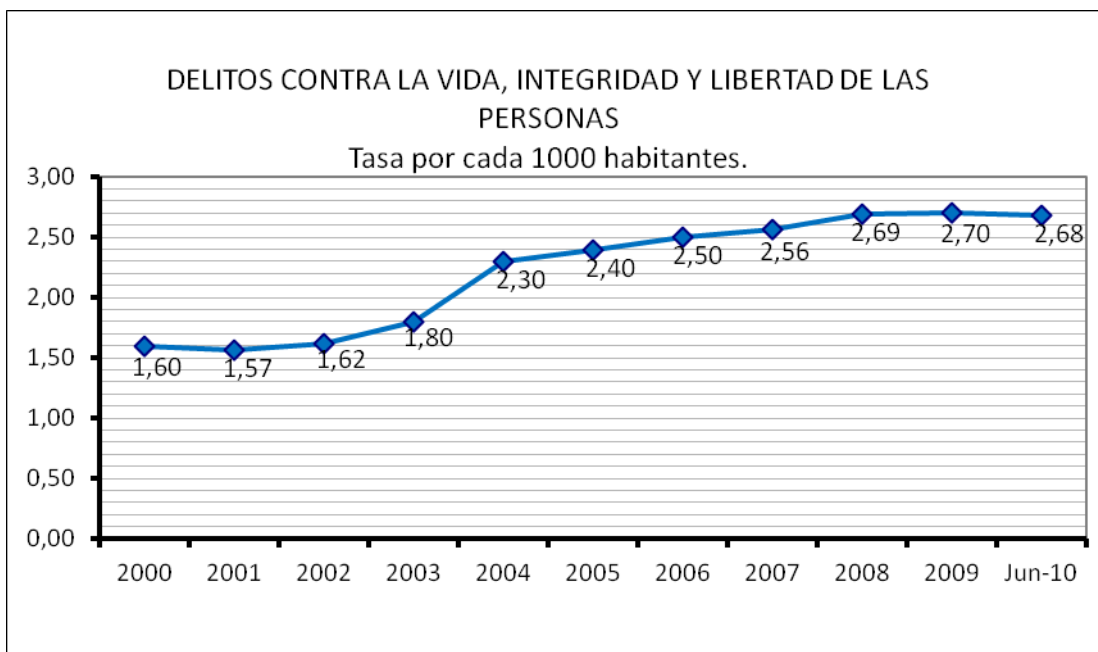
1.1. Delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas.

No vamos a mencionar todos los indicadores, sólo los que nos interesan. Por eso, empezamos con este cuadro que nos muestra la prevalencia de delitos cometidos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas.

La tasa ha subido desde 2004. A cierre de junio de 2010 ha quedado en 2,68 incidentes por cada mil habitantes. Aquí sí que se nota la introducción de nuevos tipos penales que han convertido en delitos lo que antes se consideraban faltas.

Esto lo digo porque como se verá más adelante, la prevalencia de faltas ha decrecido desde el año 2007.

GRÁFICO 15



Fuente: Ministerio del Interior. Balance de Criminalidad 2010.

1.2. Homicidios dolosos y Asesinatos

Desde el año 2004, la incidencia de homicidios dolosos y asesinatos por cada mil habitantes ha descendido de forma paulatina.

El año 2002 se llegó al punto más alto con 3,23 homicidios por cada cien mil habitantes y a junio de 2010 se está alcanzando la tasa más baja de los diez años de la muestra: 2,35.

GRÁFICO 16



Fuente: Ministerio del Interior. Balance de Criminalidad 2010.

1.3. Delitos de lesiones

Aunque en los últimos balances de Criminalidad del Ministerio del Interior no han incluido la variable tasas de lesiones, lo que hay son el total de incidencias por año, hemos elaborado la tasa del delito de lesiones por cada mil habitantes desde 2000 hasta 2009.

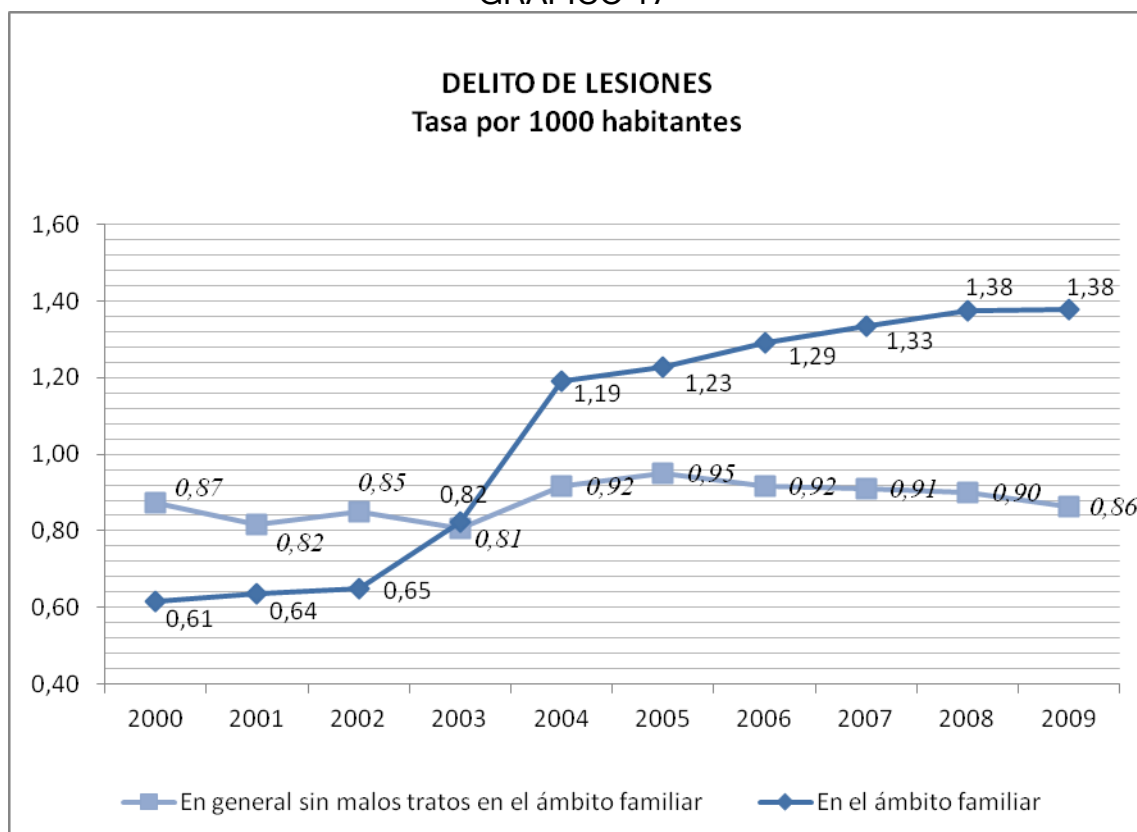
En este cuadro hemos querido diferenciar entre la prevalencia de los delitos de lesiones en general sin los de índole doméstico y los de índole doméstico exclusivamente.

Esto con la intención de ver si ambas tendencias son las mismas o difieren.

Con los resultados de este gráfico podemos decir que la prevalencia de lesiones en general empezó a disminuir desde el año 2006 de forma paulatina, hasta alcanzar una tasa de 0,86 en 2009, retornando prácticamente a los niveles del año 2003. Esto es una buena noticia.

Ha ocurrido lo opuesto con la prevalencia del delito de lesiones en el ámbito familiar. Desde el año 2003 ha mostrado una tendencia ascendente (ese año con respecto al anterior, mostró un incremento del 23%, aunque el incremento más alto se dio en el año 2004 pues con respecto al 2003 aumentó un 46%) y al parecer se ha estabilizado desde el 2008, pues tanto en ese año como el siguiente, el resultado es el mismo: 1,38 delitos de lesiones en el ámbito familiar por cada mil habitantes.

GRÁFICO 17



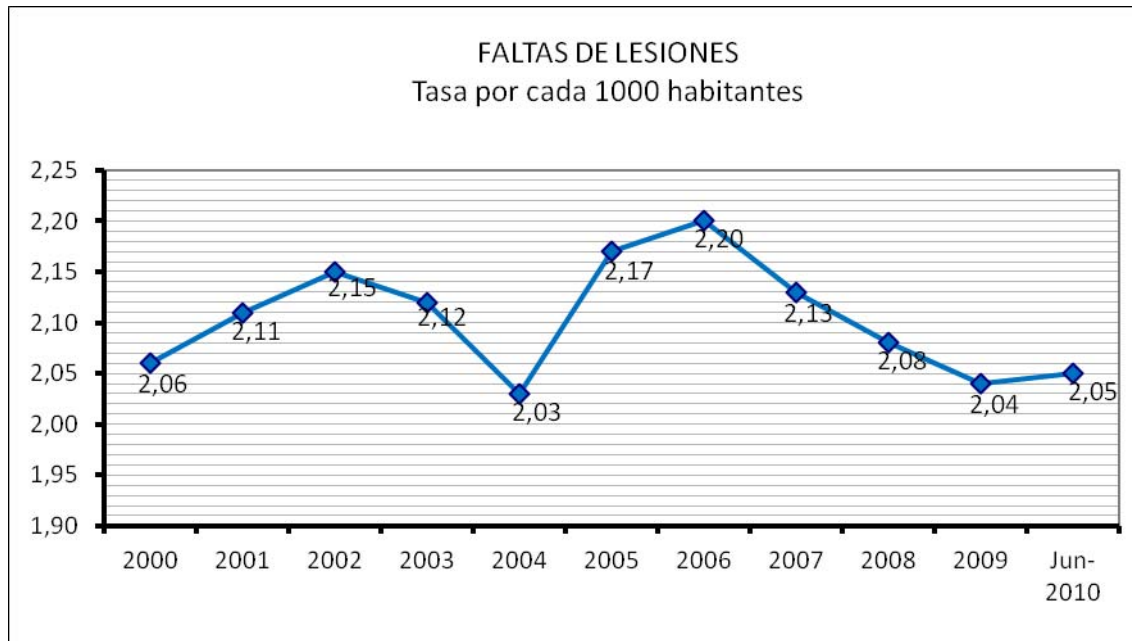
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio del Interior. Balance de Criminalidad 2010.

1.4. Faltas de Lesiones

La tasa de faltas de lesiones en general antes del año 2004 nunca fue especialmente alta, como todos los indicadores hasta ahora mostrados (Recuerden que la tasa de criminalidad de España es de las más bajas de la Unión Europea).

El punto más bajo fue en 2004 con una tasa de 2,03 luego subió al punto más -alto en 2006 para luego bajar -de forma paulatina- a los niveles más bajos registrados en los últimos diez años: 2,05 a junio de 2010.

GRÁFICO 18



Fuente: Ministerio del Interior. Balance de Criminalidad 2010.

1.5. Conclusiones

La tasa de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, se ha incrementado desde el año 2004 por la variable delitos de lesiones sobre todo, porque como hemos visto, la prevalencia de asesinatos y homicidios dolosos desde ese año no ha hecho más que descender.

Si la tasa de delitos de lesiones en general ha aumentado de forma paulatina pero nada alarmante desde 2004 y la tasa de faltas de lesiones está descendiendo desde 2006, podríamos decir que la prevalencia de los delitos de lesiones en general se ha estabilizado, mientras que las faltas de lesiones cada vez ocurren menos.

La excepción a estas tendencias son los delitos de lesiones en el ámbito familiar. Como hemos dicho antes, va en aumento desde el año 2003 aunque parece haberse estabilizado desde el año 2008.

Por tanto, la tasa de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud ha subido principalmente por las lesiones en el ámbito familiar.

Pero esto último es la explicación de cuál variable tiene más peso en el indicador delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

En esta etapa nos surge la siguiente pregunta ¿Realmente ahora hay más violencia doméstica que hace 10 años? ¿Y a qué se debe que haya más violencia en el hogar que en la calle?

La respuesta inmediata a la primera pregunta es que sí, porque esa es la “sensación” que tenemos, principalmente por lo que nos transmiten los medios de comunicación y la atención que ha prestado el gobierno actual al tratamiento de un tipo de violencia en concreto: contra la mujer en el entorno social y en el entorno de la violencia de pareja.

A nosotros nos interesa esto último, pues las reformas legislativas más polémicas han sido las relacionadas con consecuencias penales más graves que antes.

No nos parece que sea casualidad que los años donde se ha visto mayores incrementos de la tasa de los delitos de lesiones en el entorno de la familia, coincida con reformas penales importantes: la Ley de 2003 y la Ley Orgánica 1/2004.

Cuando la ley establece nuevos tipos penales, ampliando los comportamientos que antes eran hechos calificados como faltas y a partir de esas leyes son calificados delitos, sería una consecuencia “natural” que los reportes de denuncias crezcan. Por eso, consideramos que no disponemos de indicadores suficientes que nos lleven a concluir que hoy en día hay más violencia de pareja que hace diez años.

Lo que sí es un hecho es que ahora se han agravado las penas y se ha creado una jurisdicción especial se denuncia más, como veremos en el capítulo siguiente.

En cuanto a la segunda pregunta ¿A qué se debe que haya más violencia en el hogar que en la calle?, para contestarla habría que antes responder la primera pregunta de forma exhaustiva y no dejarse llevar por percepciones, para luego hacer un estudio sociológico, criminológico acerca del por qué habría más violencia dentro de casa que en la calle.

Como la finalidad de este trabajo es la medición de algunos costes de la política criminal en materia de violencia de género, dejamos estas preguntas suspendidas para que sean otros quienes averigüen las causas.

2. DELITOS Y FALTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Ahora nos introduciremos en las cifras de violencia doméstica. Como verán, la forma cómo están elaborados ahora no tienen nada que ver con los realizados hace 10 años.

Para mayor ilustración, vamos a presentar los datos históricos para luego entrar en detalle con los datos actuales.

2.1. Datos Históricos de violencia doméstica hasta 2003

a) Denuncias de los años 1983 a 1996

El cuadro 11 está elaborado en base a la diferencia entre denuncias por malos tratos psíquicos, físicos y los que incluyen los dos. El periodo de tiempo que cubre son catorce años. Luego, hemos graficado estos datos (ver gráficos VIII y IX) para ver de forma clara las tendencias.

CUADRO 1. DENUNCIAS POR MALOS TRATOS DE MARIDOS A SUS ESPOSAS. 1983-1996

	Denuncias malos tratos psíquicos y físicos	Denuncias malos tratos psíquicos	Denuncias malos tratos Físicos	TOTAL
1983 *	3.930	2.581	5.005	11.516
1984 *	5.667	3.691	7.083	16.441
1985 *	5.695	3.879	7.236	16.810
1986	6.363	3.813	6.880	17.056
1987	5.887	3.642	5.667	15.196
1988	5.607	3.671	5.183	14.461
1989	7.179	4.722	5.837	17.738
1990 *	6.849	4.384	4.856	16.089
1991 *	7.122	4.851	4.974	16.946
1992 *	6.934	4.814	4.774	16.520
1993	6.555	4.874	4.479	15.908
1994	6.650	5.052	4.582	16.284
1995	6.799	4.882	4.441	16.122
1996	6.785	5.105	4.488	16.378

Fuente. Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de datos del Ministerio de Interior. Dirección General de Policía

(*) 1983: Datos a partir de abril

1984: Falta agosto

1985: Falta julio

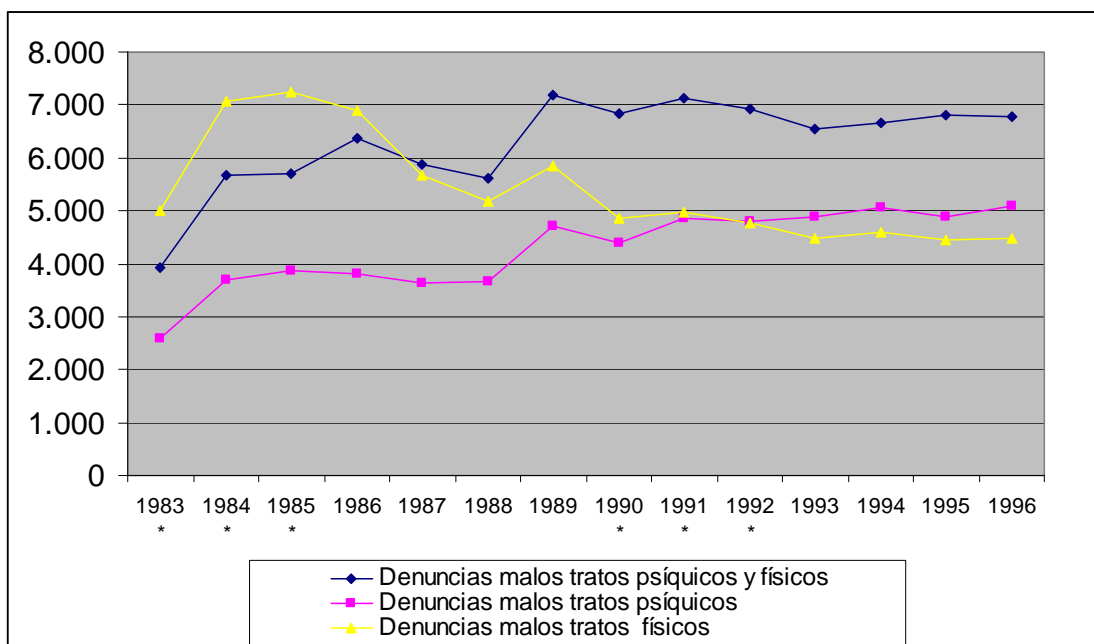
1990: Falta julio.

1991: Falta agosto

1992: Falta abril

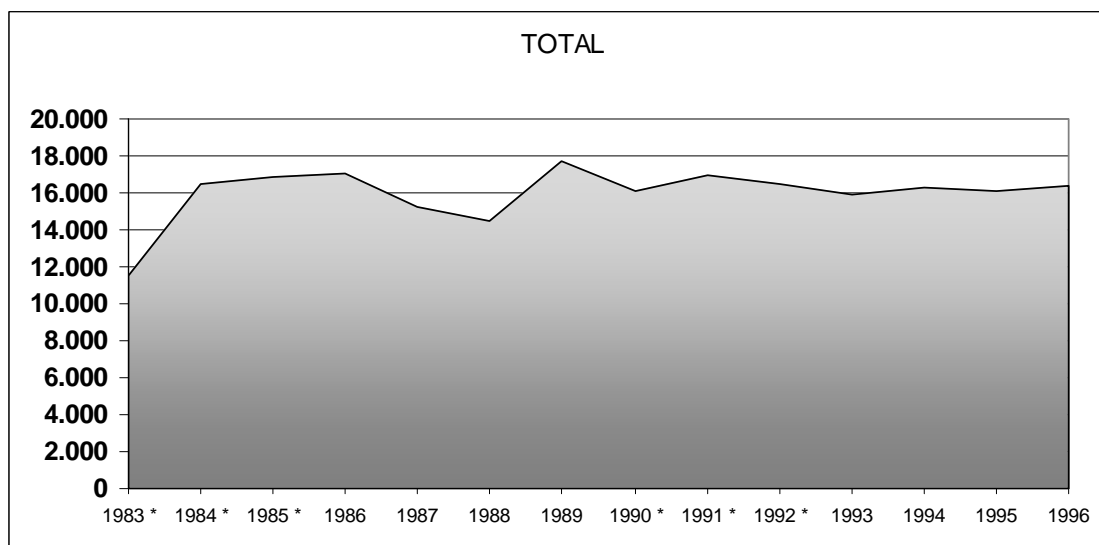
Nota. Todos los meses que faltan han sido estimados a partir de las medias anuales corregidas con el mismo mes del año anterior y posterior.

GRÁFICO 19. DENUNCIAS POR MALOS TRATOS DE MARIDOS A SUS ESPOSAS. ANÁLISIS POR RUBROS. 1983-1996.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior. Balance 2005: Criminalidad y Delincuencia

GRÁFICO 20. EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE DENUNCIAS POR MALOS TRATOS DE MARIDOS A SUS ESPOSAS. 1983-1996.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior. Balance 2005: Criminalidad y Delincuencia

- Un análisis por rubros nos dice que el aumento más significativo, lo ha presentado el número de denuncias por malos tratos psíquicos en el año 1989, luego a partir del año 1994 se contaron más de cinco mil casos.
- En cuanto a los malos tratos físicos, la tendencia ha sido la disminución paulatina. La primera disminución significativa se dio en el año 1987 y la segunda en el año 1990.

- Las denuncias que implican malos tratos físicos y psíquicos a la vez ha ido en aumento desde 1983 hasta 1989. A partir de ahí, el número baja, aunque la tendencia no es muy clara porque presenta altas y bajas hasta que a partir del año 1993, el número se estabiliza.

b) Denuncias de los años 1997 a 2001

A partir de 1997, encontramos una estadística del Instituto de la Mujer también, que clasifica y registra las denuncias ya no diferenciándolas por agresión física o violencia psíquica, sino por la distinción legal entre delitos y faltas:

CUADRO 2. DENUNCIAS POR MALOS A MUJERES, POR EL CÓNYUGE O ANÁLOGO. 1997-2001

	Delitos	Porcentaje de delitos respecto del total	Faltas	Porcentaje de faltas respecto del total	TOTAL
1997	3.343	19,12%	14.145	80,88%	17.488
1998	5.546	28,39%	13.989	71,61%	19.535
1999	6.603	30,46%	15.077	69,54%	21.680
2000	6.224	27,79%	16.173	72,21%	22.397
2001	5.983	24,77%	18.175	75,23%	24.158

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de datos del Ministerio del Interior
 (*) Hasta Enero de 2002, en el concepto "Análogo" sólo se incluía a la Pareja de Hecho.
 A partir de esta fecha, bajo este epígrafe, se incluyen: Excónyuge, (incluido separado, Divorciado), compañero sentimental, excompañero sentimental, novio o exnovio
 Nota 1: No se incluyen datos del País Vasco, Girona y Lleida.
 Nota 2: hasta el año 2002 solo se incluían datos relativos a mujeres.

- Las denuncias por faltas, representan en promedio casi el 80% del total de denuncias presentadas.
- Las faltas han mostrado un incremento desde el año 1998.
- Los delitos han ido disminuyendo desde el año 1999.
- El total de denuncias presentadas ha ido aumentando en forma moderada, a un ritmo en promedio del 8% anual.
- Se comprueba que hasta el año 2001, las denuncias han sido en su mayoría por faltas, presentadas ante la Policía y en un reducido porcentaje al Juzgado de Guardia⁴⁵. Esto no concuerda con el hecho de que en esa época, las medidas cautelares y determinados procedimientos no se exigía la existencia de atestado policial como requisito.

⁴⁵ Un 51% de las denuncias se presentaban ante la Policía, el 18% ante la Guardia Civil y un 15% ante otras Fuerzas y Cuerpos de seguridad. Ver "El tratamiento de la violencia familiar de género en la Administración de Justicia, resultados del a Investigación y primeras conclusiones" 2000-2002. Estudio realizado por el Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. P. 25 y 26. El estudio anota que esta estadística no es del todo exacta, porque por lo general deja fuera las denuncias presentadas ante el juzgado y algunas de las que se presentan ante las fuerzas policiales autonómicas.

2.2. DELITOS Y FALTAS DESDE 2003.

En el cuadro 3 se muestran las denuncias sólo de mujeres maltratadas⁴⁶. Como se ve, el número de faltas ha descendido desde 2004, mientras que los delitos aumentaron también a partir de ese año.

Esto podría explicarse, en parte, por la Ley Orgánica de 2003 anteriormente mencionada, lo que ciertas acciones eran faltas a partir de esa ley son considerados delitos. Por tanto, no es verdad que los delitos hayan aumentado. Para saber el impacto real, habría que considerar la posibilidad de medir con el baremo anterior (lo que antes era falta y ahora es delito, medirlo como falta).

En cualquier caso, lo que está claro es que el aumento tan dramático de denuncias en general, empezó a desacelerar en 2006.

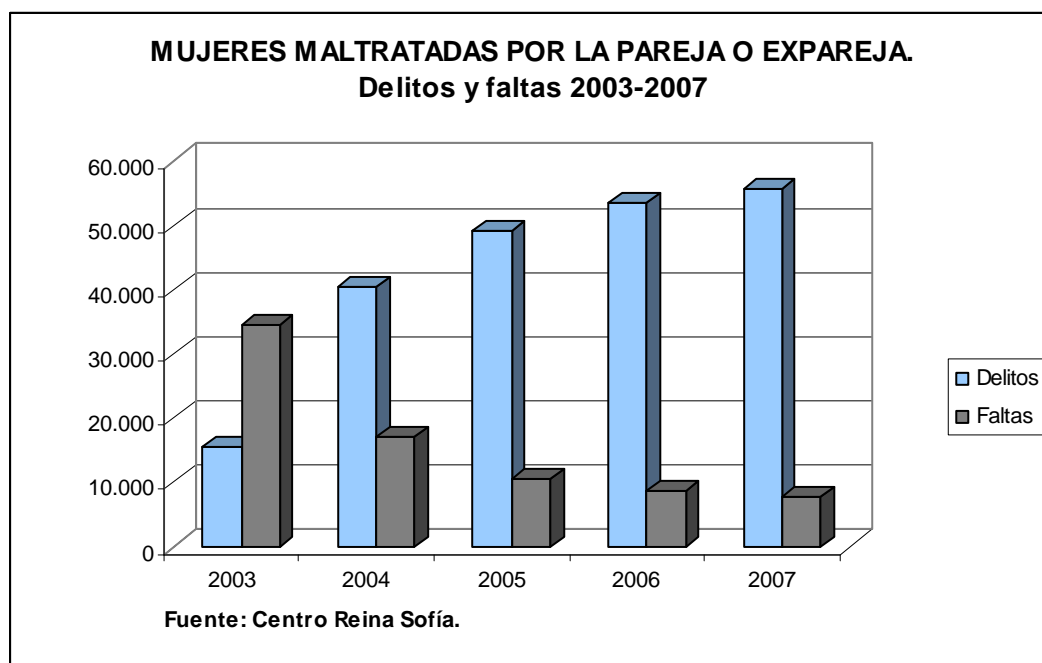
Cuadro 3

Mujeres maltratadas por la pareja o expareja. Delitos y Faltas 2003-2007.

	2003	2004	2005	2006	2007
Delitos	15.464	40.518	49.237	53.551	55.618
Faltas	34.626	17.009	10.521	8.617	7.729

Fuente: Centro Reina Sofía

GRÁFICO 20: MUJERES MALTRATADAS POR LA PAREJA O EXPAREJA. Delitos y faltas 2003 - 2007.



Estos últimos tiempos se denuncia más, lo cual es algo muy bueno, porque en principio parece que las víctimas ya no tienen temor para denunciar. Puede parecer

⁴⁶ Acuérdense que hasta el 2002, sólo se incluían datos relativos a mujeres.

lo óptimo; sin embargo, creemos que la respuesta, dependiendo de la gravedad de los hechos y desde el punto de vista del análisis económico del derecho, es variable. Además tenemos que ver cómo están resolviendo los juzgados toda esta avalancha de denuncias.

a) Mujeres denunciantes, según relación con el autor

Nos interesaba saber en qué tipo de relaciones se daba la mayor incidencia de violencia.

Para conocer este dato, citamos en primer lugar un cuadro elaborado por el Instituto de la Mujer, en base a datos del Ministerio del Interior que hace un recuento de todas las denuncias presentadas ante las fuerzas de Seguridad del Estado. Abarca denuncias por todo tipo de delitos y faltas realizados por un hombre contra una mujer, desde lesiones y maltrato psicológico, hasta homicidio.

CUADRO 4: DENUNCIAS POR TIPO DE RELACIÓN VÍCTIMA-AGRESOR. 2002-2007.

RELACIÓN	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%
CÓNYUGE	22.430	52%	22.640	45%	23.263	40%	22.252	37%	22.174	36%	21.400	34%
EXCÓNYUGE(*)	4.674	11%	5.605	11%	6.289	11%	6.466	11%	6.372	10%	6.121	10%
COMP. SENTIMENTAL	8.166	19%	11.124	22%	14.633	25%	16.255	27%	17.360	28%	18.675	29%
EXCOMP. SENTIMENTAL	5.640	13%	7.630	15%	9.648	17%	10.827	18%	11.985	19%	12.697	20%
NOVIA	822	2%	1.132	2%	1.494	3%	1.733	3%	1.958	3%	2.076	3%
EXNOVIA	1.581	4%	1.959	4%	2.200	4%	2.225	4%	2.321	4%	2.378	4%
TOTAL	43.313	100%	50.090	100%	57.527	100%	59.758	100%	62.170	100%	63.347	100%

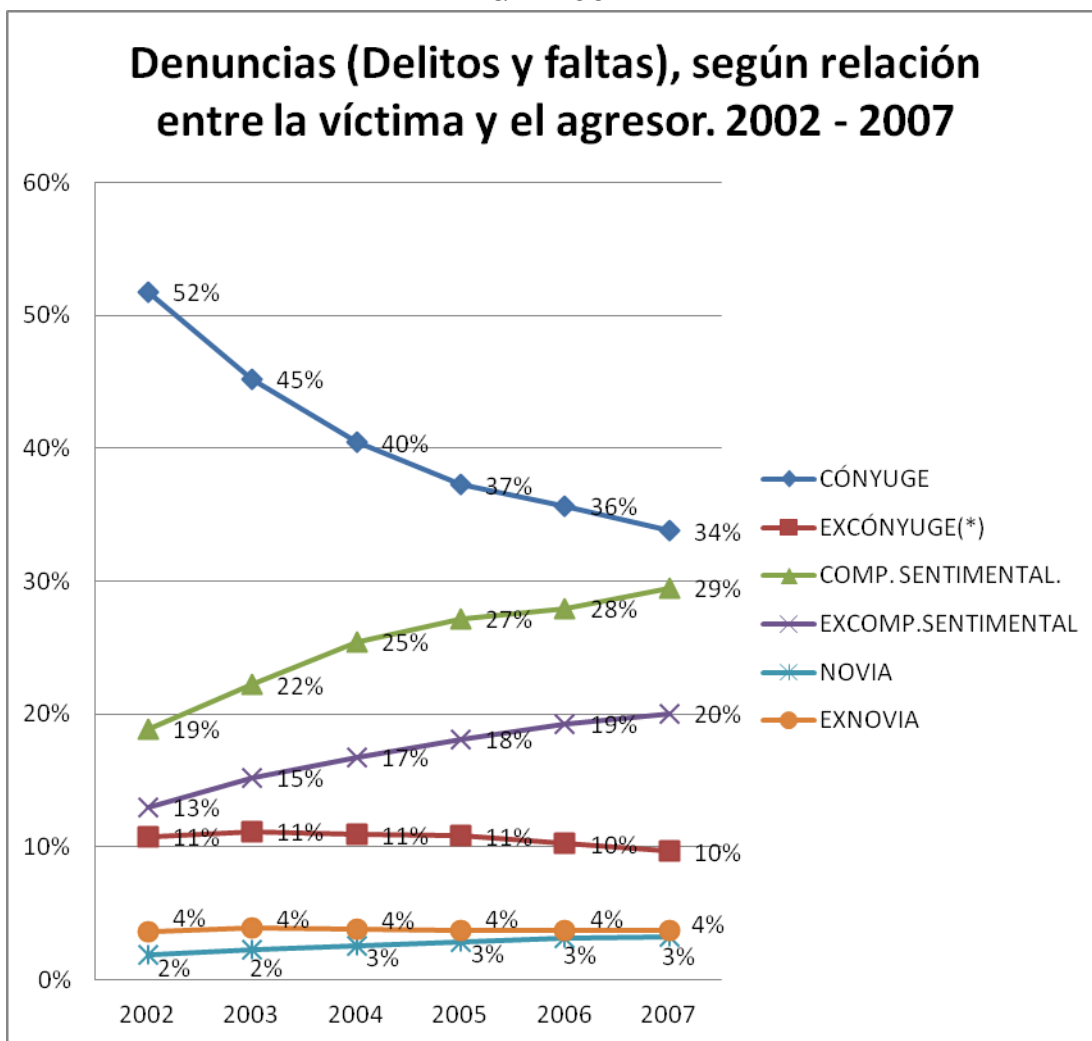
Fuente: Instituto de la Mujer. Notas de la fuente:

(*) Incluido Separado/a-Divorciado/a

(1) Se incluyen los delitos de Lesiones y de Malos Tratos en el ámbito familiar. (2) Se incluyen las faltas de Lesiones, Malos Tratos en el ámbito familiar y Malos Tratos de Obra sin Lesión. (3) En el País Vasco y Cataluña sólo se incluyen datos en relación con las denuncias presentadas ante los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. (4) Desde Enero de 2004, se incorporan nuevos tipos delictivos, a partir de las modificaciones legales aprobadas durante el año 2003. Así, se añaden los delitos de "Mutilación genital", y "Sustracción de Menores". Por su parte, la nueva redacción del art. 153 quita la habitualidad a los "Malos Tratos", concediéndosela al 173 que pasa a tipificarse como "Malos Tratos Habituales en el Ámbito Familiar". Por último, el delito de "Coacción a la prostitución" amplía su ámbito, al pasar a denominarse "Coacción/Lucro sobre la prostitución". Además, buena parte de las infracciones consideradas, hasta este momento, como faltas, pasan a tipificarse como "delitos".

Para ver de forma más clara las tendencias, año tras año, hemos elaborado el siguiente gráfico:

GRÁFICO 21



La violencia tiene se da más en aquellas relaciones donde hay mayor estabilidad o compromiso, como se puede comprobar. Entre cónyuges, y compañeros sentimentales, el año 2007, suman más del 60% de las denuncias.

Las denuncias en aquellas parejas donde hay un vínculo además de sentimental, legal; han decrecido de 52% en 2002 al 34% en 2007. Aunque desde 2003 los incentivos para denunciar son mayores (por las reformas penales), por tanto cada año hay más denuncias; posiblemente nos indique que en este tipo de relaciones la violencia es cada vez menor. Haría falta saber la tendencia de los años siguientes, pero el Instituto de la Mujer ha dejado de elaborar esas estadísticas; el último año que muestran los datos es de 2007. Por tal motivo, completaremos este análisis trayendo datos del Consejo General del Poder Judicial, para el siguiente cuadro.

Por el contrario, la violencia entre compañeros sentimentales –uniones de hecho– ha ido en aumento; pasando del 19% al 29% en 6 años. Asimismo, las denuncias entre ex convivientes han aumentado del 13% al 20% en 6 años.

Se puede decir que en cuanto a novios y ex novios; la prevalencia se ha mantenido. En el primer caso con 3% en promedio y con 4% a través de los años, los ex novios.

En cuanto a las estadísticas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer; lamentablemente, han juntado los novios con los convivientes en un solo grupo: relación afectiva. No nos parece acertado juntarlos pero teniendo en cuenta el cuadro anterior, se puede decir que más del 90% de los casos son de parejas de hecho (que comparten la vivienda).

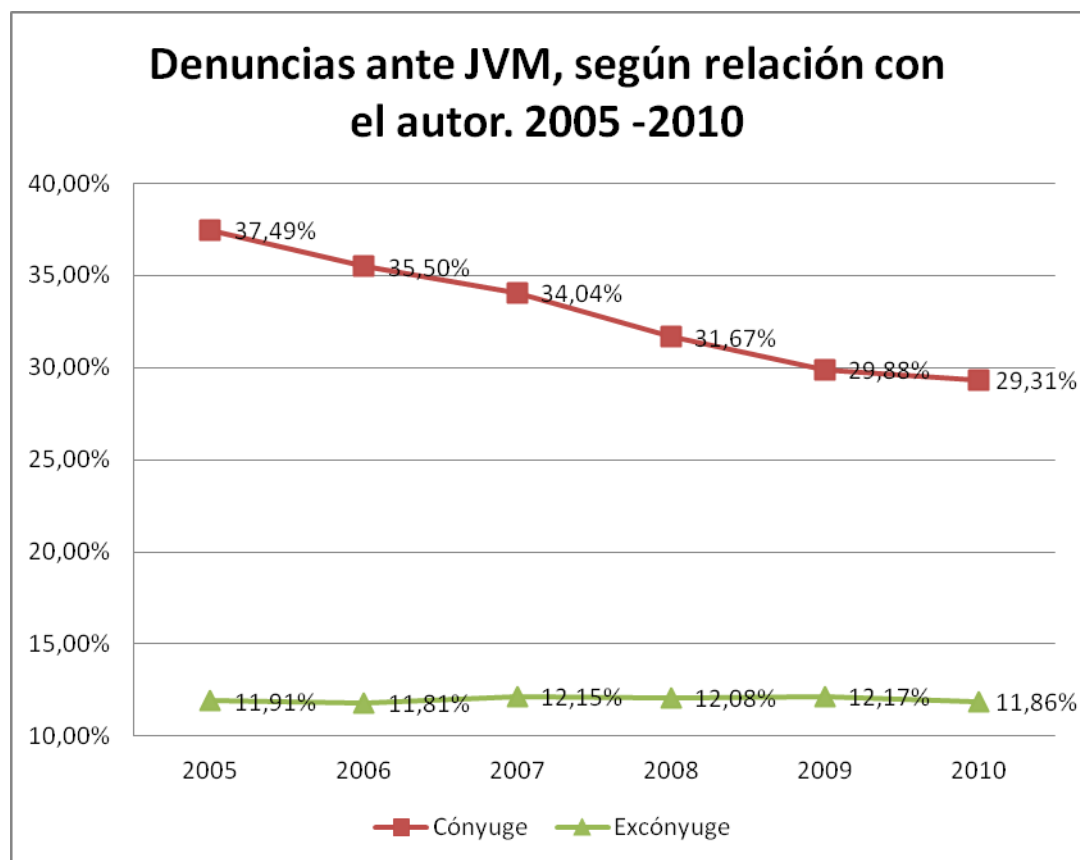
CUADRO 4: DENUNCIADOS ANTE LOS JVM, SEGÚN TIPO DE RELACIÓN 2005 -2010

RELACIÓN	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	Total
Cónyuge	6559	37,49%	12876	35,50%	12877	34,04%	13124	31,67%	12295	29,88%	11124	29,31%	68855
Excónyuge	2084	11,91%	4284	11,81%	4595	12,15%	5005	12,08%	5009	12,17%	4502	11,86%	25479
Exrelación afectiva	3761	21,50%	8039	22,16%	9003	23,80%	10395	25,09%	11048	26,85%	10866	28,63%	53112
Relac. Afectiva	5092	29,10%	11076	30,53%	11357	30,02%	12915	31,17%	12794	31,09%	11457	30,19%	64691
Total	17496	100,00%	36275	100,00%	37832	100,00%	41439	100,00%	41146	100,00%	37949	100,00%	212137

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo General del Poder Judicial.

Elaboramos dos gráficos, diferenciando el tipo de relación:

GRÁFICO 22: CÓNYUGES Y ÉXCÓNYUGES DENUNCIADOS ANTE JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. 2005 - 2010



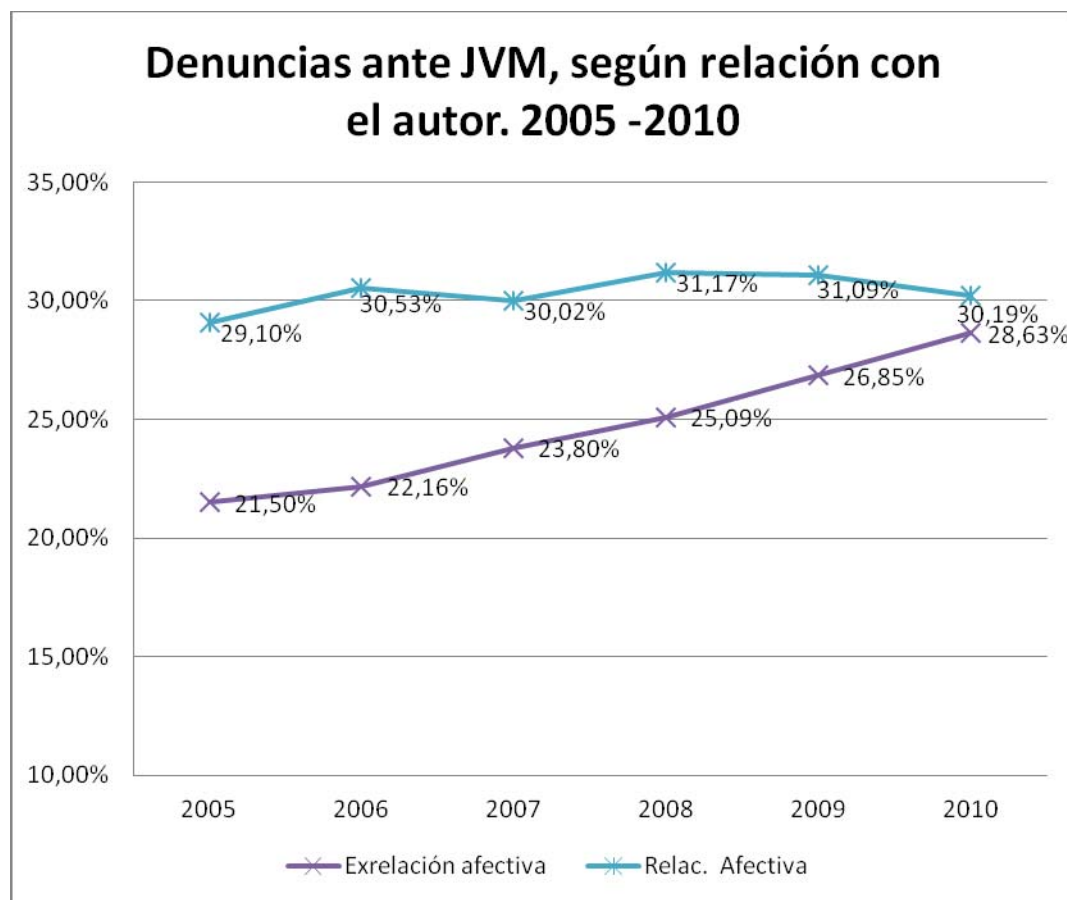
Teniendo en cuenta que los Juzgados empezaron a funcionar en 2005, las denuncias entre parejas con vínculo matrimonial vigente, han descendido del 38% en 2005, cayendo a 29% en 2010. Han sido mayoría, hasta que desde 2008 tienen

casi el mismo peso relativo que las parejas de hecho, como se puede comprobar si relacionamos este cuadro con el siguiente.

Otra dato a resaltar es que el porcentaje de ex cónyuges se ha mantenido a través de los años, en torno al 12%.

Con estos datos, podemos decir entonces, que se mantienen las tendencias de estos dos tipos de relaciones, si las comparamos con las denuncias ante las Fuerzas de Seguridad del Estado, realizadas hasta 2005.

GRÁFICO 23: DENUNCIADOS ANTE JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, SEGÚN RELACIÓN AFECTIVA TERMINADA Y VIGENTE. 2005 - 2010



Aunque ya lo hemos advertido antes, debemos tomar con cuidado estos datos pues el Consejo General del Poder Judicial ha juntado los novios con las parejas de hecho. De todas formas, se puede decir que la gran mayoría son relaciones de hecho, si nos remitimos a los datos de las Fuerzas de Seguridad del Estado (2002-2007). Aunque así sea; a diferencia de los esposos, viendo el cuadro se podría interpretar que los que tienen una relación sentimental sin vínculo legal, parecen más propensos a desarrollar violencia después de terminada la relación. Aunque no muestra un incremento exagerado, sí ha aumentado de forma paulatina.

Por otro lado, parece que cuando los sucesos de violencia se dan durante la vigencia de la relación, la incidencia sigue siendo prácticamente la misma durante estos 5 años.

Prevalencia de denuncias por Comunidades Autónomas

Hemos elaborado este cuadro entre las comunidades que tienen mayor tasa de denuncias por cada 1000 habitantes. Son 9, sin incluir Cataluña⁴⁷: Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Valencia, Murcia, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Comparamos la evolución de las denuncias desde 2003 a 2007. Se ve que en Castilla-La Mancha es donde más aumentó la tasa de denuncias; le sigue Andalucía, Islas Baleares y Madrid en cuarto lugar.

Aunque la tasa de Ceuta y Melilla ha disminuido, lo cierto es que tienen las tasas más altas de denuncias de todo el país.

Cuadro 5. Comunidades Autónomas con mayor prevalencia de denuncias.

C.C.A.A.	Año 2007	Variación entre 2003 y 2007
Castilla - La Mancha	3,45	+ 39,68%
C. de Madrid	3,95	+ 19,70%
Andalucía	4,38	+ 31,53%
C. Valenciana	4,44	+ 27,59%
Región de Murcia	4,96	- 1%
Illes Balears	5,96	+ 27,35%
Canarias	6,11	+ 2%
C. A. de Ceuta	6,16	- 21,43%
C. A. de Melilla	7,58	- 21,12%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Centro Reina Sofía.

2.3. La Macroencuesta “Violencia contra las Mujeres” - 2006⁴⁸.

Hubo dos anteriores en 1999 y 2002. Sus objetivos son cuantificar los actos violentos contra la mujer en el ámbito doméstico, conocer las características sociales y personales de las **mujeres maltratadas** y determinar las secuelas físicas y psicológicas del maltrato.

Evalúa la violencia contra las mujeres en forma exclusiva, durante el último año, por alguna de las personas que conviven en su hogar, o por su novio o ex pareja, aunque no conviva con ella. La encuesta entonces, no está orientada para medir exclusivamente la violencia entre mujer y pareja, sino en el ámbito del hogar.

Realizada sobre una muestra de 32.426 entrevistas; las entrevistas se realizaron por la vía telefónica, utilizando el sistema CATI (*Computer Assisted*

⁴⁷ Según la fuente, los datos de Cataluña de los que disponían no son exactos, arrojaban una tasa de 0.84 por cada mil habitantes en 2007, pero no eso no es real porque no disponen de información de los Mossos d'ESquadra, quienes en los últimos tiempos han asumido mayores competencias que tradicionalmente estaba en manos del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

⁴⁸ III Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres. Estudio realizado por Sigmados para el Instituto de la Mujer. Abril, 2006. Se puede acceder a él desde la página web <http://www.inmujer.migualdad.es> y entrar a la parte de Estudios e Investigaciones 2006.

Telephone Interviewing), que implica la automatización de la entrevista telefónica. Se llevaron a cabo entre enero y marzo de 2006.

Considera dos tipos de maltrato, el técnico (tipo A) y el declarado (tipo B). En el técnico, se considera así a las mujeres que han respondido “frecuentemente” o “a veces” al menos a 1 de 13 frases escogidas de las 26 que había, que describían situaciones más graves que las demás, como por ejemplo te impide ver a la familia o tener relación con amigos o vecinos, te quita el dinero, en ciertas ocasiones te produce miedo, cuando se enfada llega a empujar o golpear, entre otros. Entonces, si alguna persona de su hogar es causante de al menos 1 de estas situaciones, se considera maltrato técnico.⁴⁹

En el tipo de maltratado declarado, las mujeres se auto clasifican como maltratadas porque durante el último año afirmaron haber sufrido algún incidente por causa de algún familiar, por su novio o por alguna persona con la que conviven en su hogar.⁵⁰

CUADRO 6. PORCENTAJE DE MUJERES MALTRATADAS, SEGÚN GRUPO DE EDAD AÑOS 1999, 2002 Y 2006

		1999	2002 (*)	2006	Variación entre 2002 y 1999	Variación entre 2006 y 2002
MUJERES TIPO A (1)	TOTAL	12,4%	11,1%	9,6%	-10,48	-13,51
	18-29	11,8	10,3	8,9	-12,71	-13,59
	30-44	12,3	10,4	10	-15,45	-3,85
	45-64	15,6	15,1	12	-3,21	-20,53
	65 y más	9	8,2	6,9	-8,89	-15,85
MUJERES TIPO B (2)	TOTAL	4,2%	4%	3,6%	-4,76	-10,00
	18-29	3,8	3,3	3,2	-13,16	-3,03
	30-44	4,4	4,2	4,4	-4,55	4,76
	45-64	5,3	4,9	4,5	-7,55	-8,16
	65 y más	2,7	3,3	2,1	22,22	-36,36

(1) Mujeres consideradas técnicamente como "Maltratadas"

(2) Mujeres Autoclasificadas como "Maltratadas" durante el último

⁴⁹ Para mayor detalle, IBID. P. 10-15.

⁵⁰ Un ejemplo de encuesta más completo sería la *Bristish Crime Survey self-completion module on Inter-Personal Violence* (BCS IPV); que está dirigido a medir la sensación de seguridad y violencia por tanto abarca distintos delitos, no sólo la violencia doméstica por supuesto y eso da una perspectiva mejor a la hora de hacer análisis comparativos. La muestra es de 40 mil encuestas, se hace cada año, dirigido a hombres y mujeres, y se les pregunta qué tipo de crímenes ha sufrido. La mayoría de las preguntas son respondidas por los encuestados en formato “cara a cara”, pero las preguntas relacionadas con violencia doméstica, agresión sexual y acecho son respondidas por los encuestados leyendo en la pantalla de un ordenador las preguntas e introduciendo sus respuestas directamente al ordenador (esta es la parte que se llama *BCS Self Completion methodology*). Es la fuente de datos de indicadores de violencia doméstica más grande y fiable en Gran Bretaña y ciertamente con gran reputación en el mundo entero.

año

* A partir del año 2002, los datos de Ceuta y Melilla aparecen de forma conjunta.

Fuente: Instituto de la Mujer: III Macroencuesta sobre "Violencia contra las mujeres".
2006

El cuadro 6 nos dice que en el año 2006, el 9,6% de las mujeres españolas mayores de 18 años son consideradas técnicamente como "Maltratadas". Mientras que el 3,6% declara haber sido víctima de malos tratos.

Analizando la evolución entre el periodo 2002 y 2006 vemos que en general el porcentaje de mujeres técnicamente maltratadas ha disminuido, especialmente en el tramo de 45 -64 años. Lo que menos ha disminuido es la violencia en el tramos 30 - 44.

Luego, el porcentaje de mujeres que declaran ser víctimas, también ha disminuido. Llama mucho la atención el tramo de 65 y más años porque en 2006 con respecto a 2002; disminuyó un 36%, cuando en la comparativa de 2002 con 1999; aumentó un 22%.

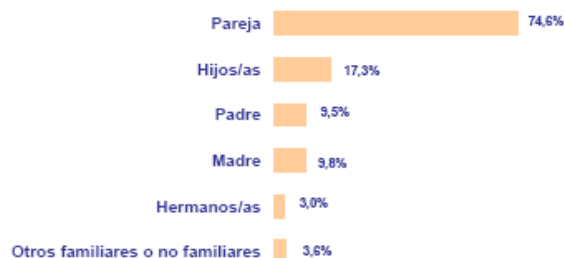
Otro dato a resaltar es que en 2006, el porcentaje de mujeres entre 30 y 44 años que considera haber sufrido maltrato el último año aumentó 4,76% con respecto al 2002.

En líneas generales podemos decir que ha disminuido un poco más significativamente el número de mujeres técnicamente "Maltratadas" con un 13,51% con respecto al año 2002. Mientras que las mujeres que afirman haber sufrido algún tipo de violencia disminuyó un 10%.

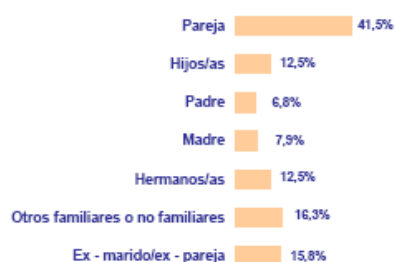
Otro dato interesante de esta encuesta, son los resultados sobre la persona que causa el maltrato. Los datos son sorprendentes pues varían bastante según el tipo de maltrato.

GRÁFICO 24: PERSONA QUE CAUSA EL MALTRATO.

TIPO A: MALTRATO TÉCNICO



TIPO B: MALTRATO DECLARADO



Fuente: Instituto de la Mujer: III Macroencuesta sobre "Violencia contra las mujeres". 2006.

En el gráfico 24, vemos que las encuestadas al responder a la pregunta sobre el causante de la agresión (está disgregado por tipo de agresor de forma independiente, por eso si se suma el conjunto no da 100%), las que son consideradas técnicamente como maltratadas por el agresor representan el 74,6% de las respuestas. En segundo lugar están los hijos, presentes en el 17,3% de las respuestas que les señalan como agresores, y en tercer lugar está la madre con un 9,8%. Muy cerca de la madre, está el padre con un 9,5%.

En cuanto a las que se autocalifican como maltratadas, el mayor porcentaje está concentrado en la pareja, con un 41,50%. En segundo lugar están "otros familiares o no familiares" con un 16,3%. Terceros son los ex maridos y ex parejas con un 15,8%. Nótese la diferencia con el maltrato técnico; pues en ese escenario en ningún caso el agresor es una ex pareja, siempre la pareja actual.

Y, definitivamente, lo que más nos llama la atención es el maltrato técnico, de los hijos hacia las madres. Es una cifra alarmante que merece un estudio y una dedicación especial por parte de las autoridades y los investigadores.

2.4. DENUNCIAS POR TIPO DE INFRACCIÓN PENAL Y BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.

a) Asesinatos

Las estadísticas de asesinatos, que no son lo mismo que los homicidios, son proporcionados de forma -en nuestra opinión- más fiable por el Centro Reina Sofía que el Instituto de la Mujer. Aunque ambas instituciones utilizan como fuentes los medios de comunicación, los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del

estado; el Centro Reina Sofía menciona que también utiliza información de los juzgados encargados de la tramitación de los casos.

También es verdad que el Centro Reina Sofía ha hecho estudios para establecer tendencias, elaborar conclusiones en base a las estadísticas elaboradas por ellos desde 2003.

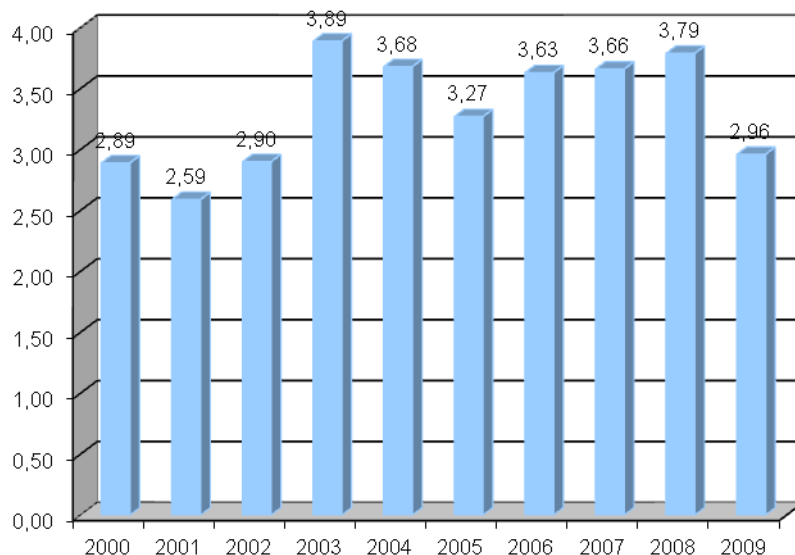
De todas maneras, mostramos primero los del Instituto de la Mujer, para ver los datos históricos, y para analizar los datos recientes, nos basaremos en las proporcionadas por el Centro Reina Sofía.

GRÁFICO 25



GRÁFICO 26

**PREVALENCIA DE MUJERES ASESINADAS POR
LA PAREJA O EXPAREJA POR MILLÓN DE MUJERES
2000-2009**



Fuente: Centro Reina Sofía
Estudio: Mujeres asesinadas por su pareja, España 2000-2009"

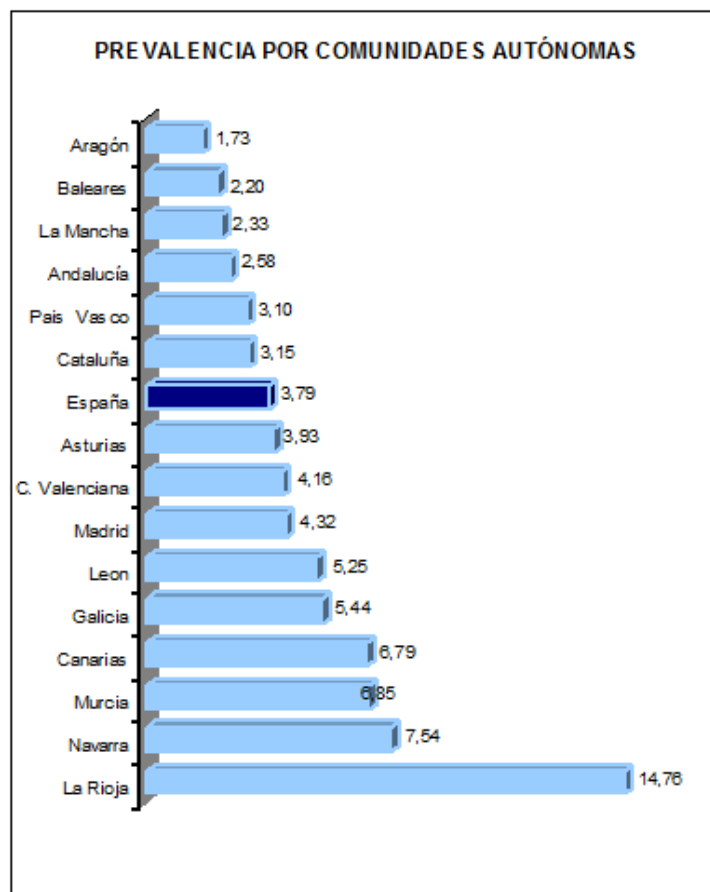
Como vemos, la tasa de asesinatos de mujeres a manos de su pareja o ex pareja, desde -la fecha en que tomó como referencia este estudio- 2004, no ha subido de 4 por cada millón de mujeres mayores de 14 años.

a.1. Prevalencia por Comunidades Autónomas

En el siguiente gráfico comprobamos que La Rioja es la comunidad que presenta la mayor tasa de asesinatos. Casi 15 mujeres asesinadas por su pareja, por millón de mujeres mayor de 14 años, situándose muy por encima de los dos que le siguen: Navarra y Murcia.

Además esta comunidad supera prácticamente cinco veces la media de España: 3,79 por cada millón de mujeres.

GRÁFICO 27.



Fuente: Centro Reina Sofía. Estudio: Mujeres asesinadas por su pareja 2003-2007.

a.2. Vinculación de la pareja

GRÁFICO 28



Fuente: Centro Reina Sofía. Estudio: Mujeres asesinadas por su pareja 2000-2009.

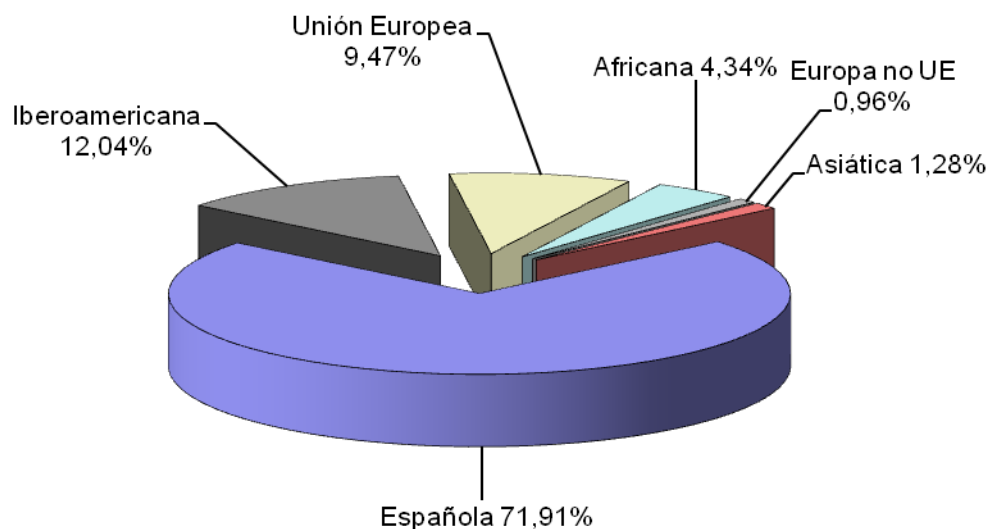
Este gráfico revela que prácticamente el 80% los asesinatos se llevan a cabo cuando existe o existía una mayor estabilidad en la relación y un vínculo de convivencia. Si sumamos los cónyuges y convivientes, hacen juntos el 62,2% de los asesinatos. Luego, sumando a los ex cónyuges y ex convivientes hacen un 18,15% de los asesinatos.

Y se podría agrupar a las parejas de novios y ex novios, los cuales hacen un 19,65%, para mencionar que no son nada desdeñables las cifras correspondientes a las relaciones de noviazgo. Concordando esta información con lo expuesto el capítulo de los datos históricos, se puede comprobar que la violencia en las relaciones de noviazgo ha aumentado considerablemente en el tiempo.

a.3. Nacionalidad del agresor

Este cuadro muestra la nacionalidad del agresor, por continentes. A la vista de este cuadro, podemos decir que el 30% de los agresores son extranjeros. De ellos, quienes tienen mayor presencia son los iberoamericanos y ciudadanos de otros países de la Unión Europea.

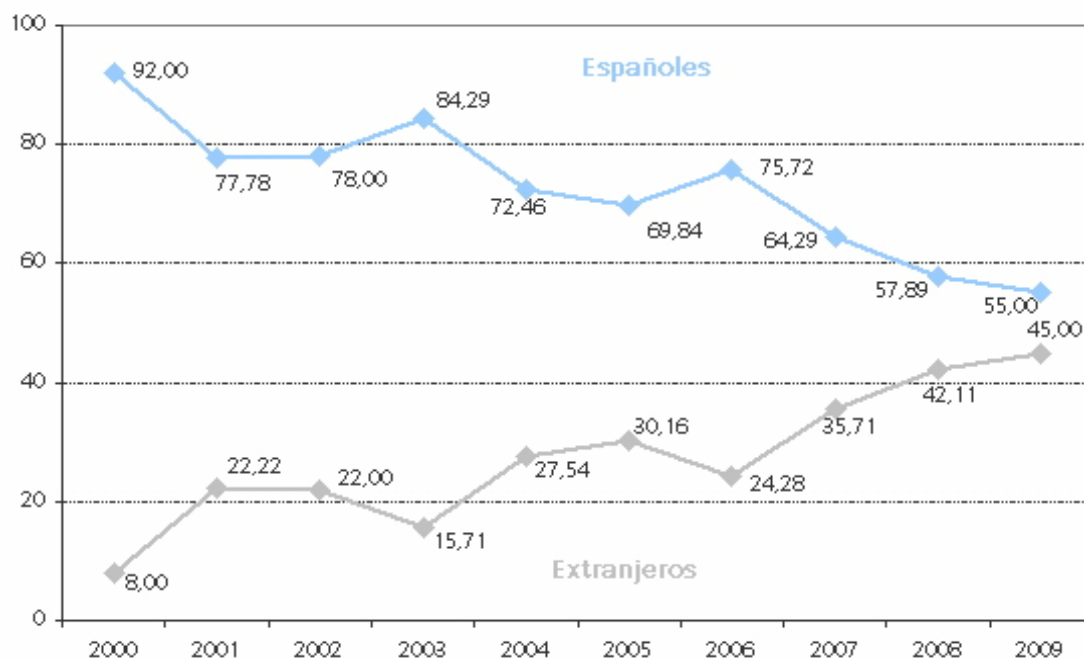
GRÁFICO 29. ASESINATOS: NACIONALIDAD DEL AGRESOR



Fuente: Centro Reina Sofía. Estudio “Mujeres asesinadas por su pareja. 2000-2009”.

Luego, en el siguiente gráfico, vemos que el porcentaje de agresores extranjeros ha ido en aumento, sobre todo desde el año 2005.

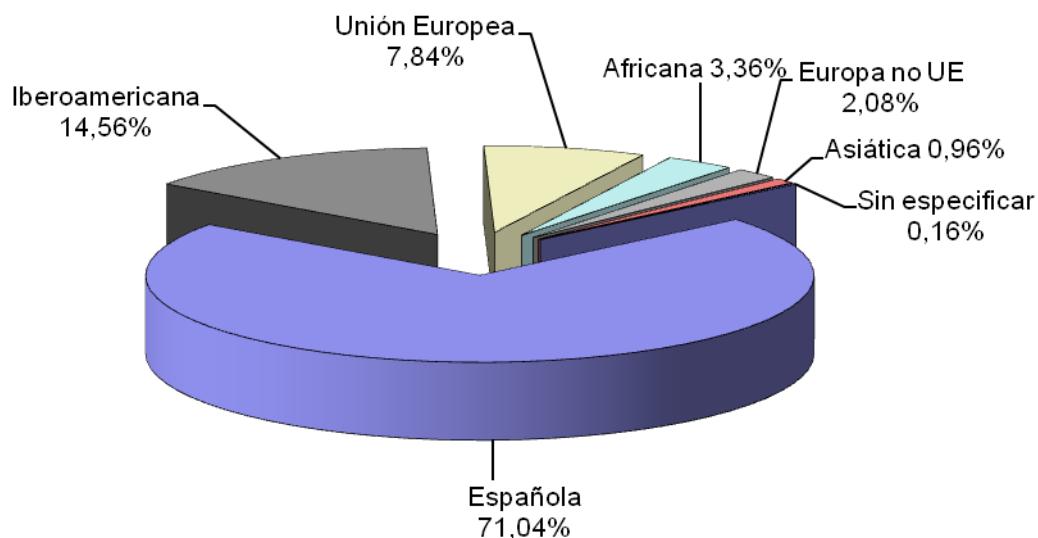
GRÁFICO 30: COMPARATIVA DE PORCENTAJES ENTRE HOMICIDAS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS. 2000 A 2009.



Fuente: Centro Reina Sofía. Estudio “Mujeres asesinadas por su pareja. 2000-2009”.

a.4. Nacionalidad de la víctima

GRÁFICO 31: ASESINATOS: NACIONALIDAD DE LA VÍCTIMA



Fuente: Centro Reina Sofía. Estudio “Mujeres asesinadas por su pareja. 2000-2009”.

El estudio elaborado en base a datos entre 2000 y 2009 revela que la situación de maltrato es peor en lo que respecta a las mujeres iberoamericanas⁵¹ que representan casi la mitad de las víctimas extranjeras asesinadas por su pareja o ex pareja.

Nota: Peso de población extranjera femenina

Para hacer una lectura correcta del gráfico “Nacionalidad de la víctima”, veamos el peso de la población femenina inmigrante.

A continuación, tenemos la población inmigrante por país de nacimiento, con y sin nacionalidad española al 1 de enero de 2011.

CUADRO 7. PORCENTAJE DE MUJERES EXTRANJERAS EN ESPAÑA

POBLACIÓN POR SEXO FEMENINO	
Población femenina total	23.883.355
Mujeres extranjeras	3.263.790
Extranjeras Vs. Españolas	15,83%

Elaboración propia en base a datos del INE. Datos provisionales a 1/01/2011

Luego, en este cuadro, por continentes a 1 de enero de 2011, nos encontramos que la mayoría de las mujeres inmigrantes son de países americanos:

CUADRO 8. POBLACIÓN FEMENINA EXTRANJERA POR CONTINENTES

POR CONTINENTES	Población	%
PAISES EUROPEOS (quitando españolas)	1325650	40,62%
PAISES AMERICANOS	1381154	42,32%
PAISES AFRICANOS	399029	12,23%
PAISES ASIATICOS	154581	4,74%
PAISES DE OCEANIA	3376	0,10%
Total	3263790	100,00%

Elaboración propia en base a datos del INE. Datos provisionales a 1/01/2011

Por cierto, las mujeres nacidas en E.E.U.U., representan el 1% del total de la población femenina proveniente del continente americano. Por tanto, se puede decir que prácticamente todas son mujeres latinoamericanas.

Y por último, mostramos el ranking de los 20 primeros puestos, por país de nacimiento:

⁵¹ Iberoamericanas es sinónimo de latinoamericanas. Nos ceñimos a la definición que da la Real Academia Española de la Lengua a la palabra latinoamericano: “Se dice del conjunto de los países de América colonizados por naciones latinas, es decir, España, Portugal o Francia”.

**CUADRO 9. RANKING DE LOS 20 PRIMEROS PUESTOS
POR PAÍS DE NACIMIENTO**

País de nacimiento	Población	% con respecto al total mujeres extranjeras 3.263.790
Rumania	387507	11,87%
Marruecos	307412	9,42%
Ecuador	248827	7,62%
Reino Unido	195505	5,99%
Colombia	212961	6,52%
Argentina	139192	4,26%
Alemania	126552	3,88%
Francia	117350	3,60%
Bolivia	117561	3,60%
Perú	105788	3,24%
Bulgaria	77076	2,36%
China	81538	2,50%
Venezuela	85428	2,62%
Portugal	58430	1,79%
República Dominicana	86438	2,65%
Brasil	85821	2,63%
Paraguay	61180	1,87%
Cuba	60872	1,87%
Uruguay	41906	1,28%
Italia	37780	1,16%

Fuente: INE. Datos provisionales a 1/01/2011

Advertimos que mientras en el caso de las muertes, las mujeres latinoamericanas cuadruplican el porcentaje de homicidios de las africanas. Por peso de población, la proporción es prácticamente la misma, las mujeres latinoamericanas son casi cuatro veces más. Esto contradice uno de las afirmaciones del estudio del Centro Reina Sofía, cuando menciona que las mujeres latinoamericanas están sobre representadas, lo que pasa es que en términos relativos, son más numerosas que las africanas.

Menciona también el Centro Reina Sofía, que al menos el 23,53% de los homicidas tenía empleo y de ellos el 61,70% tenía un empleo no cualificado. Y por parte de las víctimas, al menos el 29,25% tenía empleo y de ellas el 76,57% tenía un trabajo no cualificado.

Como reflexión final pensamos que para analizar la violencia de ciudadanos europeos y guiados por el dato del párrafo anterior, habría que diferenciar aquellos que tienen un PIB más bajo que España, o que la media de la Unión Europea para comprobar si se cumple un posible denominador común: que tanto las víctimas como los agresores pertenecen mayoritariamente, a los sectores con menos rentas de la sociedad.

Otros datos relevantes que vale la pena mencionar, del estudio elaborado por el Centro Reina Sofía son:

Víctimas.-

- Nacionalidad. El 72,3% de las mujeres asesinadas por sus parejas eran españolas, frente al 27,7% que provenían de otros países.
- Al menos 29,36% tenía empleo. De ellas el 72,45% tenía un trabajo no cualificado.

Historial del maltrato.-

- Al menos el 34% de las mujeres asesinadas había sufrido previamente malos tratos.
- El 25,58% de todas las mujeres asesinadas denunció a su agresor.
- La vinculación más habitual entre el agresor y la víctima es la de cónyuges: 44,34%.

Perfil del agresor.-

- Nacionalidad: El 73,39% de los asesinos de sus parejas eran españoles. El 26,61% restante eran extranjeros procedentes, principalmente, de países iberoamericanos y de la Unión Europea.
- Al menos el 22,74% de los asesinos tenía empleo. De ellos el 56,16% tenía empleo no cualificado.
- Al menos dos de cada diez de estos asesinos tenía antecedentes policiales, antes de cometer el feminicidio.
- Un 29,76% de los asesinos cometió su crimen, tras romper con la víctima.
- El 70,36% de los asesinatos se cometió en el domicilio de la víctima.
- Los asesinos suelen matar de cerca y utilizan métodos muy crueles: el 51,66% usó arma blanca, el 10,81% estranguló a la víctima, el 10,21% utilizó algún objeto contundente, el 5,11% dio una gran paliza a la víctima; el 3% la quemó, el 2,4% la arrojó por un balcón, el 1,50% la asfixió y el 0,90% la atropelló. Sólo el 14,41% puso distancia con la víctima utilizando arma de fuego.

a.5) Comentarios Finales

Una situación que han cuestionado algunos actores del propio sistema judicial, es que se incluyan en estas estadísticas sucesos con resultado de muerte entre adultos mayores, que se encuentran en evidente estado de abandono, con alguna enfermedad crónica, degenerativa de la víctima, del agresor, o de ambos, que nunca tuvieron antecedentes de maltrato y donde el agresor después de perpetrar el homicidio de su pareja, procede con el suicidio o intento del mismo⁵². En realidad, es el juez quien tendría que determinar en una sentencia cuál habría sido la motivación real del agresor para cometer el crimen, si ha sido como producto del machismo, o se trata de un delito de homicidio con un móvil distinto. De todas formas lo referenciamos porque en casos los organismos oficiales lo considerasen, estas estadísticas descenderían, aunque creemos que no más del 15%, porque revisando los datos, en promedio, éste es el porcentaje de homicidios que se producen entre parejas de adultos mayores de 64 años⁵³.

⁵² SANAHUJA, María. en “Las últimas reformas legislativas y su repercusión en la violencia doméstica.”, *Revista La Factoría*, Nro. 32, Enero – Abril 2007, P. 18 y siguientes.

⁵³ Informe Mujeres asesinadas por su pareja 2000-2009. Centro Reina Sofía. P. 11

a.6) Asesinatos de hombres, en manos de su pareja

Siguiendo el esquema del Instituto de la Mujer, a partir de este su capítulo se señalarán primero los reportes de denuncias de mujeres víctimas de violencia doméstica y luego de hombres víctimas.

En cuanto a los asesinatos de hombres, encontramos la siguiente estadística de Denuncias por asesinato, elaborado por el Instituto de la Mujer:

Cuadro 10

AÑO	2002	2003	2004	2005	2006	2007
TOTALES	6	1	3	4	1	1

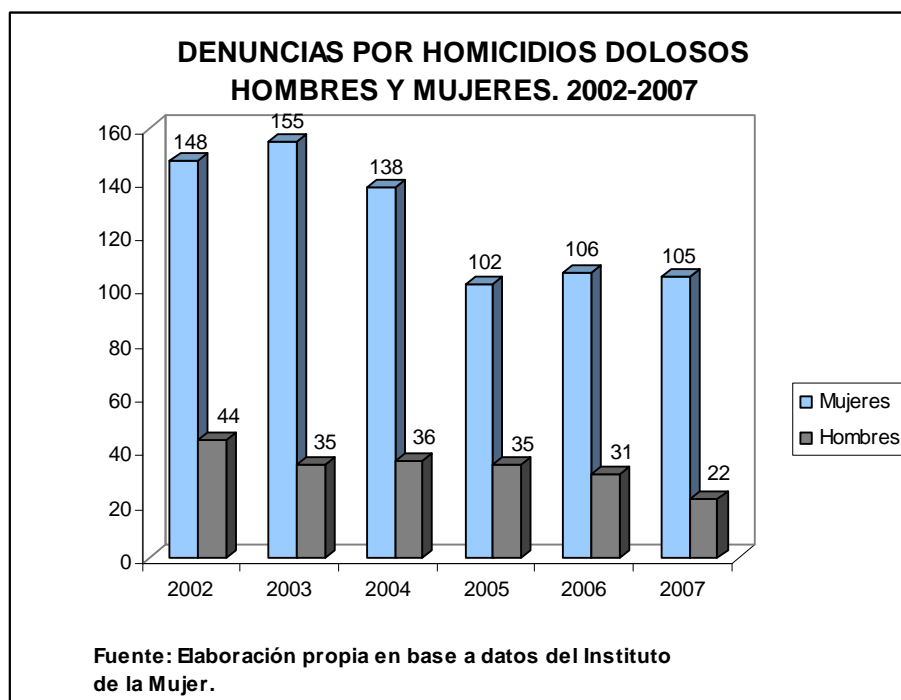
Fuente: Instituto de la Mujer

Desde el año 2006 sólo se produjo una denuncia. La cifra de denuncias por asesinato es, con respecto al de las mujeres, el 5% en promedio. De todas formas, en el siguiente sub capítulo veremos las denuncias por homicidio que son más numerosas

b) Homicidios Dolosos

Lo que vamos a mostrar a continuación, son las denuncias por homicidios dolosos (Art. 138 del Código Penal: “El que matare a otro, será castigado como reo de homicidio”), según el Instituto de la Mujer:

GRÁFICO 32



En promedio el 80% de las denuncias de homicidio por parte de la pareja tienen a la mujer como víctima.

En el caso de las mujeres lo más resaltante es que las denuncias por homicidio tuvo su punto más alto en 2003 con 155 denuncias y a partir de ahí bajó hasta el año 2005 situándose en 102 denuncias. Desde el 2004, observamos que la tendencia se ha más o menos mantenido, situándose el año 2007 en 105.

Para el caso de los hombres el porcentaje de denuncias por homicidio es mucho menor y ha ido descendiendo desde el 2005 quedando en 22 denuncias el 2007.

c) Delitos y faltas contra el cuerpo o la salud física o mental.

Presentamos datos publicados por el Instituto de la Mujer sobre denuncias por tipo de infracción penal.

Nosotros lo hemos separado por el bien jurídico protegido, y diferenciando entre mujeres y hombres víctimas. Empezamos con lo relativo a las lesiones contra el cuerpo, o la salud física o mental:

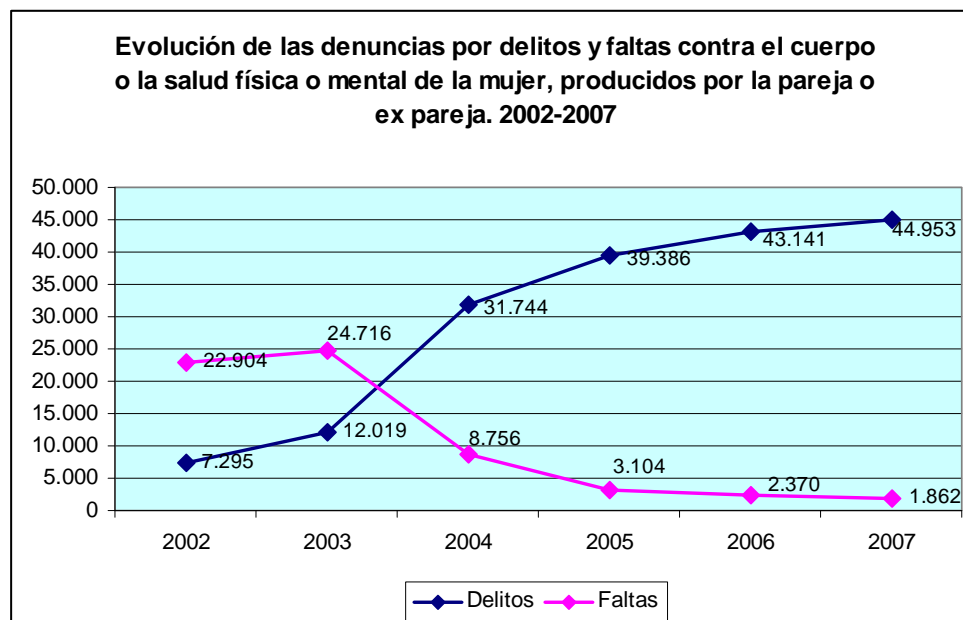
CUADRO 11: Denuncias por delitos y faltas de Lesiones y análogos, producidos por la pareja o ex pareja. 2002-2007. Mujeres víctimas.

Delitos contra el cuerpo o la salud física o mental.	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	7.295	12.019	31.744	39.386	43.141	44.953
LESIONES	1.260	1.654	3.365	3.855	3.927	3.590
MUTILACIÓN GENITAL			7	7	11	6
MALOS TRATOS EN AMB. FAMILIAR	6.035	10.365	28.372	35.524	39.203	41.357

Faltas contra el cuerpo o la salud física o mental.	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	22.904	24.716	8.756	3.104	2.370	1.862
LESIONES	6.446	6.093	1.853	1.315	1.109	801
MALOS TRATOS AMBITO FAMILIAR	15.199	17.230	5.788	0	0	0
MALOS TRATOS OBRA SIN LESIÓN	1.259	1.393	1.115	63	14	15
VEJACIONES LEVES	0	0	0	1.726	1.247	1.046

Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por el Instituto de la Mujer.

GRÁFICO 33



Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por el Instituto de la Mujer.

- Si comparamos las denuncias presentadas de 2005 con las de 2003, se produjo un aumento del 328%.
- Los incrementos más significativos de las denuncias por delitos contra el cuerpo, o la salud física o mental se produjeron en 2004 y 2005⁵⁴.
- A partir de 2005, el promedio es de 42.493 denuncias al año y la tendencia es que las cifras sigan creciendo aunque de forma moderada; De 2006 a 2007 el incremento fue del 4,20%.⁵⁵
- La mayor parte de los delitos son de Malos Tratos en el ámbito familiar (Art. 153 del Código Penal). A simple vista, se nota que el aumento de las denuncias, fue más notorio en 2004 con respecto al 2003 (incremento del 173,73%) que en 2005 con respecto al 2004 (incremento del 25,21%). Concordando las varianzas con las leyes anteriormente citadas, podemos decir entonces que más impacto tuvo la Ley Orgánica 11/2003 que la presente Ley en el incremento de las denuncias.
- A partir de 2005, el promedio es la presentación de 38.694,67 denuncias por Malos tratos en el ambiente familiar y la tendencia aquí también se ha moderado de 2006 a 2007: 5,49% de crecimiento.
- En el cuadro 11 se observa que los delitos de Lesiones (Arts. 147 y 148 del CP) aumentaron al doble en el año 2004⁵⁶.
- La incidencia de las denuncias por faltas de malos tratos en el ámbito familiar, es escasa. Ocurre lo mismo con las faltas de malos tratos de obra sin lesión. Está claro que todas esas denuncias se hacen ahora en forma de delito de malos tratos en el ambiente familiar (que incluye menoscabo psíquico). Por tanto, se podría decir que ha habido un traslado de denuncias de un tipo penal hacia otro, porque la nueva figura tiene una sanción mayor. El escenario jurídico vigente desde 2003 ha dado los incentivos necesarios para que los denunciante (Ministerio Público y víctimas) prefieran denunciar por art. 153 porque tiene una sanción mayor.
- Las vejaciones leves previsto en el art. 620 del CP, cada vez se invoca menos en las denuncias. El año 2007 casi no supera las mil denuncias a nivel nacional.

⁵⁴ Coincide con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 11/2003 y la Ley Integral 1/2004 respectivamente.

⁵⁵ Sin embargo, debemos tener en cuenta que un incremento de 1800 denuncias, ante los Juzgados dependiendo de las provincias donde se concentren más, puede generar una importante carga procesal para éstos; lo cual es otro coste que analizaremos en el capítulo correspondiente a los datos judiciales.

⁵⁶ Recordemos que la diferencia entre el delito de Lesiones y el delito de Malos tratos en el ambiente familiar, está en la gravedad del delito y la consecuente mayor pena del primero. Recomendamos revisar el apartado correspondiente a reformas legislativas en el apéndice.

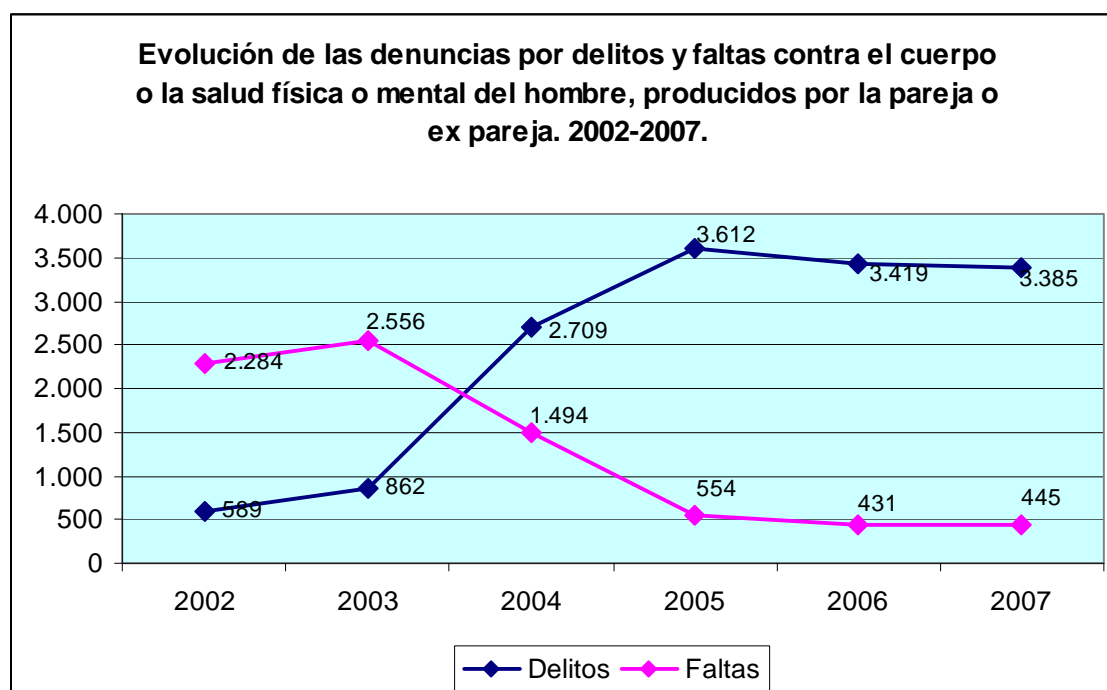
CUADRO 12: Denuncias por delitos y faltas de Lesiones y análogos, producidos por la pareja o ex pareja. 2002-2007. Hombres víctimas.

Delitos contra el cuerpo o la salud física o mental.	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	589	862	2.709	3.612	3.419	3.385
LESIONES	195	219	415	428	401	375
MUTILACIÓN GENITAL			2	1	0	0
MALOS TRATOS EN AMB. FAMILIAR	394	643	2.292	3.183	3.018	3.010

Faltas contra el cuerpo o la salud física o mental.	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	2.284	2.556	1.494	554	431	445
MALOS TRATOS AMBITO FAMILIAR	1.975	2.246	1.192	0	0	0
MALOS TRATOS OBRA SIN LESIÓN	309	310	302	16	3	10
VEJACIONES LEVES	0	0	0	538	428	435

Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por el Instituto de la Mujer.

GRÁFICO 34: HOMBRES VÍCTIMAS



Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por el Instituto de la Mujer.

En el cuadro 12 y gráfico 34 vemos que en las estadísticas de los hombres como víctimas ha sucedido lo mismo; se han trasladado las denuncias por Falta de Malos Tratos en el ambiente familiar a Delitos. Esto empezó en el año 2004, año en que se puso en vigencia la Ley Orgánica 11/2003. Si comparamos el año 2005 con 2003, se produjo un incremento del 419% de denuncias por delitos.

d) Delitos y faltas contra el derecho a la libertad

En este apartado, vamos a ver los delitos contra el derecho a la libertad, en el marco de las relaciones de pareja. Tenemos: Detención ilegal, secuestro, amenazas, coacciones, trato degradante, malos tratos en el ambiente familiar y allanamiento de morada.

Las amenazas y las coacciones se agravaron cuando el autor sea hombre que mantuvo o mantiene relación sentimental con la víctima y el delito de los malos tratos en el ambiente familiar es un tipo penal nuevo introducido por la Ley Orgánica 1/2004.

Vemos que las denuncias contra el derecho a la libertad, se incrementaron en un 256% principalmente por la aparición del delito descrito en el párrafo anterior. A partir de 2005 el crecimiento ha sido moderado, para el 2006, 14%; y el 2007, un 6%.

En cuanto a las faltas, comprobamos que van disminuyendo de forma progresiva. Aunque el decrecimiento más notorio se ve en 2005, si comparamos 2007 con 2002, ha significado una caída en el número de denuncias del 62%.

CUADRO 12: Denuncias por delitos y faltas contra el derecho a la libertad, producidos por la pareja o ex pareja. 2002-2007. Mujeres víctimas.

Delitos contra la libertad.	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	2.936	2.603	8.007	9.162	9.724	9.970
DETENCIÓN ILEGAL	202	186	167	171	104	125
SECUESTRO	15	15	14	8	6	7
AMENAZAS	2.400	2.152	2.131	1.997	2.000	1.985
COACCIONES	185	137	152	200	230	220
TRATO DEGRADANTE	21	21	78	71	90	141
MALOS TRATOS HABITUALES EN EL AMB. FAM.	-	-	5.390	6.635	7.230	7.432
ALLANAMIENTO DE MORADA	113	92	75	80	64	60

Faltas contra la libertad.	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	8.357	8.819	7.044	5.127	3.690	3.186
AMENAZAS	7.329	7.724	6.121	4.441	3.168	2.677
COACCIONES	1.027	1.090	920	683	519	504
ALLANAMIENTO DE MORADA	1	5	3	3	3	5

Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por el Instituto de la Mujer.

Ciertamente, las denuncias de delitos cometidos contra hombres significan prácticamente el 10% comparado al de las mujeres pero hay que decir que desde 2004 han aumentado, principalmente por el delito de Malos Tratos en el ambiente familiar, tal como se comprueba en el cuadro 22.

Y para mencionar algo destacable de las denuncias por faltas es que ocurre lo contrario comparado con las estadísticas de mujeres víctimas: que en este caso hay más denuncias por faltas que por delitos. El número es hasta tres veces mayor.

Además, pasa lo mismo que en las estadísticas de mujeres víctimas, que el grueso de las denuncias en lo que a delitos se refiere es por malos tratos en el

ambiente familiar y en cuanto a las faltas, la mayoría son denuncias de amenazas.

CUADRO 13: Denuncias por delitos y faltas contra el derecho a la libertad, producidos por la pareja o ex pareja. 2002-2007. Hombres víctimas.

Delitos contra la libertad.	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	308	298	692	833	844	800
DETENCIÓN ILEGAL	11	12	5	1	4	6
SECUESTRO	0	5	3	0	-	1
AMENAZAS	241	220	219	263	232	250
COACCIONES	40	45	53	53	72	65
TRATO DEGRADANTE	1	1	11	18	12	18
MALOS TRATOS HABITUALES EN EL AMB. FAMILIAR	-		389	479	502	438
ALLANAMIENTO DE MORADA	15	15	12	19	22	22

Faltas contra la libertad.	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	2.064	2.213	2.294	2.514	2.530	2.479
AMENAZAS	1.565	1.694	1.812	2.031	2.077	2.024
COACCIONES	499	519	481	482	452	454
ALLANAMIENTO DE MORADA	0	0	1	1	1	1

Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por el Instituto de la Mujer.

La mayoría de las denuncias de delitos cometidos contra hombres son por Amenazas y Malos Tratos habituales en el ambiente familiar. Desde que entró en vigencia este último tipo penal, las denuncias se han incrementado año tras año, aunque comparado con las denuncias de las mujeres, son el 5 % prácticamente. Para el resto de delitos; apenas se presentan denuncias por ellos.

Las denuncias por faltas de amenazas desde el año 2006 ya no crecen, todo lo contrario. Lo mismo ocurre para las amenazas de coacciones.

C.5. Delitos contra la libertad e Indemnidad Sexual

Las denuncias por este tipo de delitos, en el marco de las relaciones de pareja con mujeres víctimas, han ido disminuyendo de forma progresiva desde el 2004 y vemos que en 2007 con 526 denuncias a nivel nacional, subió un poco con respecto a 2006. Obviamente las de agresión y abuso sexual concentran poco más del 90% de las denuncias. Las de coacción/lucro sobre la prostitución y corrupción de menores o incapaces son situaciones poco habituales en una relación de pareja en España.

CUADRO 14: Denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, producidos por la pareja o ex pareja. 2002-2007. Mujeres víctimas.

Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	629	645	560	521	500	526
AGRESIÓN Y ABUSO SEXUAL (CON/SIN PENETRACIÓN)	579	610	529	498	480	486
CORRUPCIÓN DE MENORES/INCAP.	2	0	2	2	2	3
COACCIÓN/LUCRO SOBRE LA PROSTITUCIÓN	48	35	27	21	18	37

CUADRO 15: Denuncias por faltas contra la libertad e indemnidad sexual, producidos por la pareja o ex pareja. 2002-2007. Hombres víctimas.

Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	25	22	32	16	14	9
AGRESIÓN Y ABUSO SEXUAL (CON/SIN PENETRACIÓN)	24	22	30	11	14	8
CORRUPCIÓN DE MENORES/INCAP.	0	0	0	1	-	1
COACCIÓN/LUCRO SOBRE LA PROSTITUCIÓN	1	0	2	4	-	0

Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por el Instituto de la Mujer.

Los casos sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual en la pareja no son numerosos, tanto para mujeres como hombres. Para ambos, las cifras han disminuido desde el año 2005, aunque con un ligero incremento para el caso de las mujeres víctimas el año 2007.

2.5. CONCLUSIONES.

CUADRO 16: Las denuncias sobre violencia en total, según tipo de infracción penal y sexo de la víctima, en las relaciones de pareja. 2005-2007

TIPO DE VIOLENCIA	Denuncias por víctimas		Número total de denuncias
	Mujeres	Hombres	
Homicidios dolosos	313	88	401
Delitos y faltas de lesiones	134.816	11.846	146.662
Delitos de Secuestro, amenazas, coacciones malos tratos en el ambiente familiar, allanamiento de morada. Faltas de amenazas, coacciones y allanamiento de morada.	40.859	10.000	50.859
Delitos contra la indemnidad sexual: agresión, abuso sexual y análogos	1.547	39	1.586
En 3 años			199.508
Media por año			66.503

En este cuadro realizamos la suma de todas las denuncias realizadas en el escenario de las relaciones de pareja.

Sólo hemos contado las denuncias realizadas desde 2005 porque queremos cuantificar el impacto de las últimas reformas legales que se aprobaron a finales de

2004 y empezaron a ejecutarse durante todo el 2005. De esta manera, contamos con datos que están medidos de manera uniforme.

En total, se presentaron 199.508 denuncias ante distintos órganos policiales y judiciales, lo cual significa una media de denuncias por año de 66.503.

A continuación veremos cómo han sido resueltas estas denuncias por los Juzgados..

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS JUDICIALES

EN MATERIA PENAL

Lo primero que haremos en este capítulo es conocer las potestades que le otorgó la Ley a este nuevo órgano jurisdiccional.

Luego, para adentrarnos en el análisis de las estadísticas judiciales, resulta imprescindible conocer la definición de algunos términos procesales importantes así como tener una idea general de cómo funciona el proceso penal y en materia de familia, en España. De esta manera, estaremos en condiciones de comparar eficiencias con los resultados de los procesos que conoce el Juzgado de Violencia sobre la Mujer (en adelante también lo mencionaremos por sus siglas JVM).

A continuación, elaboramos un resumen de la competencia de estos juzgados especializados, establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica 1/2004:

1. En el orden penal, los JVM conocerán:
 - a) De la **instrucción** de los delitos relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiese cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad aún sin convivencia, así como los cometidos contra los descendientes propios o de la pareja, menores e incapaces que con él convivan o que se hallen bajo alguna forma de guarda y protección legal de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.
 - b) De la **instrucción** de los delitos contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas en el párrafo anterior.
 - c) De la **adopción** de las correspondientes medidas de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.
 - d) Del **conocimiento y fallo** de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas en el apartado a.
2. En el orden civil, conocerán:
 - a) Los de filiación, maternidad y paternidad.
 - b) Los de nulidad de matrimonio, separación y divorcio.
 - c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales.
 - d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar.
 - e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores.
 - f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.
 - g) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.
3. De forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando:

- a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2.
- b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima o imputado de los actos de violencia de género en los términos a que hace referencia el apartado 1.a.
- c) Que se haya iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer, actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer.

Comentario: La competencia que la ley ha otorgado a estos juzgados, en materia penal, es básicamente para realizar la instrucción (sinónimo de investigación). Pueden juzgar (emitir sentencias) sólo para las faltas.

En materia civil, conocen todo tipo de procesos relacionados con el derecho de familia. Además que conocerán de forma exclusiva y excluyente aquellos donde haya involucrada una mujer víctima de malos tratos o un presunto autor de los mismos.

Aunque no lo enumeramos arriba, es necesario mencionar que el legislador ante la cantidad de carga procesal que puede generar todas estas sendas competencias, dejó la puerta abierta para que cuando el Juez de VM apreciara, de forma notoria, que la pretensión no constituye violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano jurisdiccional competente (numeral 4 del artículo 44 de la Ley Orgánica 1/2004).

Conceptos jurídicos importantes:

A continuación, enumeramos los tipos penales más habituales relacionados con la violencia doméstica, comentarios sobre la prueba y las formas de terminar un proceso penal.

- Aunque en el apéndice de este trabajo, relatamos la evolución histórica de la regulación penal en materia de violencia familiar; aquí sólo vamos a mencionar la conclusión de esa parte del apéndice, que es la siguiente: Desde la entrada en vigencia de la Ley 1/2004, para los delitos calificados como Malos Tratos (Art. 153 del C.P.), Amenazas (Art. 171), Coacciones (Art. 172); se ha dado pie a que siendo la única prueba inculpatoria el testimonio de la mujer, hay más probabilidades de condenar a un acusado que antes. De todas formas, el derecho ha establecido unas reglas, de tal manera que no se vulnere el derecho al debido proceso del denunciado, ni dejar en situación de indefensión a la presunta víctima. Se trata de criterios jurisprudenciales que han establecido una serie de requisitos para declarar la validez, legitimidad en los casos donde sólo exista esta tipo de prueba⁵⁷.
- El sobreseimiento libre (Art. 637 de la LECRIM) es un auto, no una sentencia. Pero es como si se tratara de una sentencia absolutoria adelantada en el tiempo, porque se determina en la etapa de la investigación y se da por cualquiera de los siguientes motivos: 1º En caso de que el hecho aparentemente delictivo cuya noticia motivó la incoación del proceso penal no haya existido, por lo que no tiene sentido que el proceso penal siga adelante. 2º Cuando el hecho investigado no sea

⁵⁷ Persistencia en la imputación, credibilidad y verosimilitud.

constitutivo de delito, lo que implica que no puede encajarse dentro de ninguno de los tipos penales previstos en el Código Penal, 3º Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los imputados, lo que implica que aunque se haya comprobado la existencia del hecho y su carácter delictivo, no tiene sentido abrir el juicio oral cuando a las personas a las que se imputó su comisión o no participaron en él, o concurre respecto de ellos alguna de las causas de exención de responsabilidad penal.

El auto de sobreseimiento libre provoca la terminación anticipada del proceso con fuerza de cosa juzgada material, lo que impide se pueda volver a iniciar un proceso penal contra el imputado por los mismos hechos.

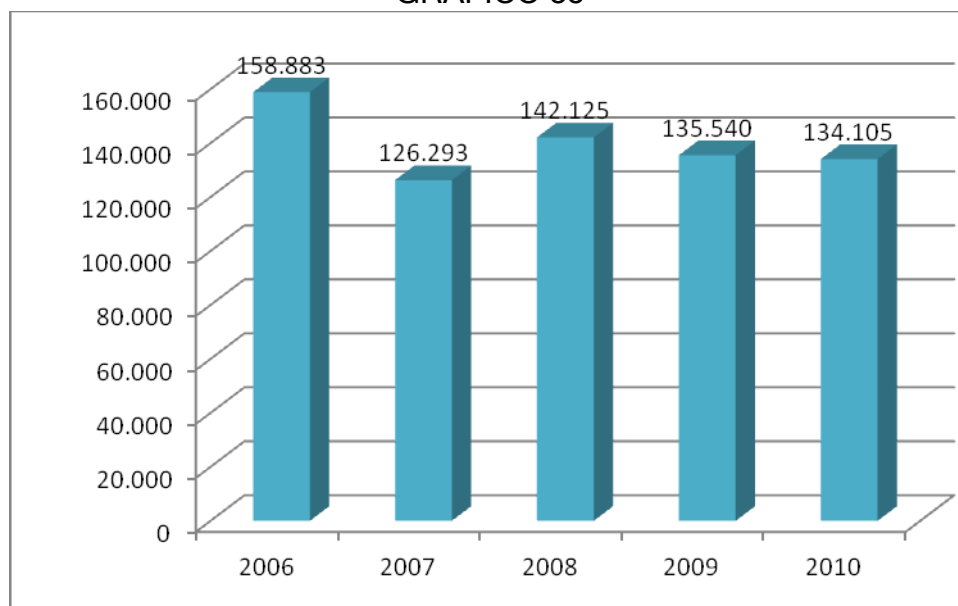
- El sobreseimiento provisional (Art. 641 de la LECRIM) es auto, no una sentencia. Cuando el juez ordena el sobreseimiento provisional es porque se han dado las siguientes condiciones: 1º Cuando de la instrucción se observa que se ha cometido un delito, pero no hay motivos suficientes para acusar a una determinada persona como autor o cómplice, 2º Cuando no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la apertura de la causa. Existen indicios racionales de haberse perpetrado el hecho pero faltan pruebas suficientes para mantener la acusación o las pruebas de que se disponen para demostrar la comisión del hecho son tan poco fiables que si se abriera el juicio oral lo más seguro es que finalizara con una sentencia absolutoria por insuficiencia de prueba, lo que es contrario al interés de la persecución penal puesto que si realmente hay apariencia de delito, el que se dicte una sentencia absolutoria con fuerza de cosa juzgada, supone la impunidad del delito. Se prefiere suspender el proceso a la espera de que se pueda disponer en el futuro de nuevos elementos de prueba que permitan que se celebre el juicio oral con mayores garantías de que se verá satisfecho el interés de la persecución penal.
- La renuncia al proceso por parte de la víctima, no implica necesariamente que el proceso finalice, el proceso continúa porque al tratarse de un delito de persecución pública la acción continúa. Tampoco es verdad que implique una sentencia donde se determine la inocencia del denunciado. Lo que sí es posible es que la renuncia al proceso por parte de la presunta víctima puede generar sobreseimiento provisional, libre o declaración de inocencia. Veremos más adelante cuál es la tendencia de los jueces en ese sentido.

1. Las denuncias relacionadas con la violencia sobre la mujer

Según los datos del Informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, en 2009 se han presentado 135.540 denuncias ante los Juzgados de

Violencia sobre la Mujer (JVM)⁵⁸. Esto significa que ha disminuido un 15% con respecto al año 2006⁵⁹.

GRÁFICO 35



Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Consejo General del Poder Judicial.

- En cinco años, se han presentado más de 696.946 denuncias ante los Juzgados.
- Se observa un aumento del 13% de denuncias en el año 2008 con respecto a 2007. En cambio, lo que ocurrió en 2009, con respecto a 2008, es que las denuncias se redujeron en un 5%.

Estas cifras se ven alarmantes porque estas cantidades son muy considerables. Las denuncias generan procesos judiciales y la primera pregunta que nos surge es cómo están manejando este volumen los JVM. Vamos a analizar cómo administran los juzgados toda esta carga procesal, valorando las siguientes cuestiones:

2. ¿Quiénes presentan las denuncias?

CUADRO 17. QUIÉNES PRESENTAN LAS DENUNCIAS

Denuncias recibidas	2007	2008	2009	Total
Atestado policial con denuncia de víctima	83601	90724	87638	261963

⁵⁸ Ver Informe: Datos de denuncias, procedimientos penales y civiles registrados, órdenes de protección solicitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y sentencias dictadas por los Órganos jurisdiccionales en esta materia en el año 2009. Estadísticas Judiciales de los Juzgados de la Violencia sobre la mujer. Elaborado por Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. *Consejo General del Poder Judicial*. www.poderjudicial.es

⁵⁹ Aunque empezaron a funcionar desde el 29 de junio de 2005, hemos creído conveniente mostrar los datos desde 2006 con el fin de hacer una comparativa uniforme.

Atestado policial por intervención directa	13072	17576	17442	48090
Parte de lesiones	13321	16528	16138	45987
Presentada por la víctima en el Juzgado	14166	13672	10872	38710
Atestado policial por denuncia familiar	964	1606	1436	4006
Servicios asistencia-Terceros general	706	1150	1563	3419
Presentada por familiares en el Juzgado	463	869	451	1783
Total Suma de Ingresados directamente	126293	142125	135540	403958

Consideraciones Preliminares.-

No hemos mostrado los diferentes tipos de denuncias del año 2006 porque no están disponibles⁶⁰.

Es posible que exista más de una denuncia de parte o de un tercero en un mismo proceso. Desde el punto de vista jurídico procesal, si existe duplicidad de denuncia de parte por ejemplo: en la Comisaría y en el Juzgado, no tiene ningún efecto en el proceso, simplemente se aúna la denuncia actual a la anterior.

Análisis:

- Los atestados policiales con denuncias de las víctimas representan el grueso de las denuncias, un 65 % en promedio. Vale la pena mencionar, que se produjo un aumento del 8% de estas denuncias en el año 2008, con respecto a 2007.
- Otro dato destacable es del atestado con denuncia familiar. Creció un 67% en 2008, con respecto a 2007. Aunque es verdad que en 2009, bajó un 10%, con un resultado final de 1436 denuncias.
- De todos estos tipos de denuncias, el único que ha disminuido progresivamente con los años, es la denuncia presentada por la víctima directamente ante el Juzgado. El saldo final nos lo dice el 2009: un 21% menos que el año anterior.

4. Denuncias por tipo delictivo

Ahora pasamos a reseñar las denuncias ingresadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para hacernos una idea de su peso en las denuncias donde hay una mujer como víctima.

CUDRO 18. DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, POR TIPO DELICTIVO. 2007 - 2010.

TIPO DE DELITO	2007	2008	2009	2010	2010 en porcentajes	Total
TOTAL	136873	148213	142867	139522	100%	567475
Malos tratos Art. 153 CP	71892	81377	88487	84740	60,74%	326496
Violencia habitual Art. 173 CP	13427	15580	17121	18519	13,27%	64647

⁶⁰ Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial, esos datos no se recogieron porque los boletines estadísticos de esos años no pedían esta información.

Contra la libertad (amenazas y coacciones)	13181	14215	12260	12296	8,81%	51952
Otros	13060	12636	6461	6560	4,70%	38717
Lesiones. Art. 148 y stes. CP	5639	3951	5705	5310	3,81%	20605
Quebrantamientos De Medidas	3123	3638	3795	3657	2,62%	14213
Contra la integridad moral	8179	8411	4122	3566	2,56%	24278
Quebrantamientos De Penas	3646	4129	2427	2403	1,72%	12605
Contra derechos y deberes familiares	3049	2038	1551	1423	1,02%	8061
Contra la libertad e indemnidad sexual	1131	1283	836	928	0,67%	4178
Homicidio	137	126	92	116	0,08%	471
Aborto	3	3	1	3	0,00%	10
Lesiones al feto	406	826	9	1	0,00%	1242

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo General del Poder Judicial.

Como se puede comprobar comparando el cuadro 18 con el 17, el número de denuncias totales no coincide.

El cuadro 18 corresponde a denuncias presentadas ante los JVM. Se advierte que:

- El 60% de las denuncias de 2010 fueron del delito de Malos Tratos, en segundo lugar de violencia habitual y en tercer lugar los delitos de amenazas y coacciones, que por cierto no viene disgregado.
- Es reseñable que se den más denuncias por quebrantamientos de Medidas de protección que de Penas de protección. Los primeros han ido en aumento paulatino y los quebrantamientos de penas tuvo una subida importante en 2008.

5. ¿Qué porcentajes de denunciante son extranjeras?

No hay esta disgregación en los datos del Consejo General del Poder Judicial. Lo que hemos encontrado hasta el momento, son datos del Instituto de la Mujer, que a su vez utiliza como fuente, datos proporcionados por el Ministerio del Interior. Aunque, en una nota aclaratoria, el Consejo Técnico de Estudios del Ministerio de la Mujer, nos ha advertido que:

Sólo hay datos disponibles desde 2002 hasta 2007,

Se trata de denuncias presentadas ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por lo que no recogen, no ya solo las denuncias presentadas ante el juzgado directamente por la víctima, por ejemplo, sino ni tan siquiera las presentadas ante policías autonómicas como es el caso, entre otras, de las Comunidades de Cataluña o País Vasco.

Además, existen diferencias metodológicas derivadas de la forma de contabilizar las denuncias. Hasta la fecha no sabemos cuáles son o cuáles fueron esas diferencias metodológicas.

Lo que es un hecho es que el Ministerio del Interior dejó de elaborar esta estadística y el CGPJ no lo lleva con tanto detalle aunque nos confirman que está en proyecto seguir mejorando la información del CGPJ.

Ahora nos toca comentar el presente cuadro, una vez hechas las advertencias anteriormente mencionadas. Resulta comprensible la diferencia del 200% del año 2007 entre el total de denuncias registradas por el CGPJ (126.293 en total) y lo registrado por el Ministerio del Interior (63.347).

Sin perjuicio de de ello, este cuadro nos sirve para afianzar lo que venimos diciendo cada vez que vemos cifras del año 2004: El incremento importante de las denuncias que se producen ese año.

Por último, el porcentaje de mujeres extranjeras que presentaban denuncias ante los cuerpos de seguridad del estado, empezó con un 23% en 2002, mientras que en el año 2007, fueron el 33%.

CUADRO 19. MUJERES VÍCTIMAS POR NACIONALIDAD

MUJERES VÍCTIMAS Datos Absolutos (Delitos + faltas)	2002	2003	2004	2005	2006	2007
NACIONALES	33.452	39.597	43.186	43.294	43.400	42.264
EXTRANJERAS	9.861	10.493	14.341	16.464	18.770	21.083
TOTAL	43.313	50.090	57.527	59.758	62.170	63.347
% de extranjeras sobre el total	23%	21%	25%	28%	30%	33%

Fuente: Instituto de la Mujer en base a datos proporcionados por el Ministerio del Interior.

La información sobre denunciados extranjeros, no está disponible. Sin embargo podemos conseguir esa información mediante las órdenes de protección impuestas, lo cual veremos con profundidad más adelante.

6. ¿Qué comunidades autónomas concentran más denuncias?

En este cuadro, hemos ordenado las denuncias, de mayor a menor, por comunidades autónomas, tomando como referencia los datos de 2009.

CUADRO 20

CCAA	2007	2008	2009
Total	126293	142125	135540
Andalucía	28266	29102	26838
Madrid	18975	22480	20863
Valencia	15614	19003	19350
Cataluña	18424	20365	18218
Canarias	8894	9087	8982
Murcia	4872	6189	6085
Galicia	5181	5959	6068
Castilla-La	3885	5193	5370

Mancha			
Castilla y León	5265	5459	5090
Baleares	3910	4690	4453
País Vasco	3444	3739	4058
Aragón	2853	3336	2848
Asturias	1926	2387	2373
Extremadura	1536	1632	1702
Navarra	1377	1490	1236
Cantabria	1122	1214	1172
La Rioja	749	800	834

Vemos que ocupa el primer lugar en número de denuncias, la Comunidad Autónoma de Andalucía, luego Madrid. Desde el año 2009, Valencia le ha quitado el tercer puesto a Cataluña. En cuarto lugar está Canarias, seguida de Murcia.

En cuanto a población, según los datos del INE, al 1 de enero de 2010, las comunidades más pobladas son en el siguiente orden: 1º) Andalucía, 2º) Cataluña, 3º) Madrid, 4º) Valencia, 5º) Galicia.

Por tanto, podemos decir que cantidad de denuncias presentadas en Valencia, Canarias y Murcia, no corresponde al tamaño de la población que tiene.

5. Las Órdenes de Protección

En este acápite, mostremos datos de las órdenes de protección de naturaleza penal exclusivamente.

Conceptos Preliminares

La Orden de Protección (O.P.) se puede interponer en el momento de la presentación de la denuncia generalmente. Puede ser acordada a pedido de parte, del Ministerio Fiscal o de oficio por el Juez.

Los diferentes tipos de órdenes, como son la de Alejamiento, Prohibición de Comunicación, Prohibición de volver al lugar del delito, salida del domicilio, suspensión de la tenencia y uso de armas, privativa de libertad y otras de naturaleza penal, pueden darse en dos etapas distintas del proceso:

- Inmediatamente después de interpuesta la denuncia: En esta etapa cuando el Juez acuerda el alejamiento y la comunicación -generalmente como veremos más adelante-, y se les denomina **Orden de Protección o Medida Cautelar**.
- En la sentencia condenatoria: Generalmente, además de la pena en forma de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) se da siempre una pena accesoria que puede ser una orden de alejamiento y/o Comunicación.

Aunque la naturaleza de una medida cautelar, orden de protección y pena son distintas, el incumplimiento de cualquiera de ellas cuando la víctima es alguna

de las personas a las que se refiere el art 173.2., la consecuencia es la misma: pena de prisión de 6 meses a 1 año.

Los artículos del Código Penal relevantes para este sub-capítulo son:

Art. 468 (a)

1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos.

2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2⁶¹, así como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada. (b)

(a) Modificado por L.O. 1/2004

(b) Modificado por L.O. 5/2010

Art. 48 (a)

1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito o falta, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. (b)

2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena.

3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.

4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan.

(a) Modificado por L.O. 15/2003

(b) Modificado por L.O. 5/2010

⁶¹ Recuerden que las personas a las que se refiere el art. 173.2 del CP, son: Cónyuge o persona que esté o haya estado ligada al autor del hecho criminal por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.

a) ÓRDENES DE PROTECCIÓN ACORDADAS

A continuación, mostramos las órdenes de protección adoptadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer -al inicio del proceso-, ordenados de forma descendente:

CUADRO 21. MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN ADOPTADAS DE 2005 A 2010, POR TIPO DE ORDEN.

Tipo de orden	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Alejamiento	15076	29617	30431	33515	31760	27734	168133
Prohibición de comunicación	13279	27205	28685	32508	31203	27701	160581
Prohibición volver lugar delito	4448	7483	6671	7484	6620	5523	38229
Salida del domicilio	2920	6370	6193	6411	5747	5146	32787
Suspensión tenencia, uso armas	3022	5827	5826	6403	5970	6178	33226
Privativa de libertad	2020	3200	2896	3100	2455	2352	16023
Penal. Otras	1716	3642	3010	3261	3689	3720	19038
Total naturaleza penal	42481	83344	83712	92682	87444	78354	468017

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo General del Poder Judicial.

Estas cantidades son abrumadoras, pero no lo son tanto si consideramos que generalmente por cada expediente puede haber dos o inclusive tres medidas cautelares al mismo tiempo.

Ahora bien, tomando las órdenes de alejamiento, prohibición de comunicación y la pena privativa de libertad, que son las que más se usan, tenemos los siguientes porcentajes:

CUADRO 22. COMPARATIVA ENTRE ALEJAMIENTO, PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRIVATIVA DE LIBERTAD. 2005 - 2010.

Tipo de orden	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Alejamiento	15076	29617	30431	33515	31760	27734	168133
	35%	36%	36%	36%	36%	20%	32%
Prohibición de comunicación	13279	27205	28685	32508	31203	27701	160581
	31%	33%	34%	35%	36%	20%	30%
Privativa de libertad	2020	3200	2896	3100	2455	2352	16023
	5%	4%	3%	3%	3%	2%	3%
Total naturaleza penal	42481	83344	83712	92682	87444	78354	468017

A la vista de este cuadro, podemos decir que:

- Se usan al mismo tiempo las órdenes de alejamiento y la prohibición de comunicación, aunque la diferencia era poca desde 2005, con los años ambos se han ido alineando, hasta el punto que en 2010 las cantidades prácticamente son iguales.
- La orden privativa de libertad, cada vez se usa menos. Era el 5% en 2005 y en 2010 significa el 2%.

Por estos datos, es que hemos ceñido este trabajo a las órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación.

Luego, quienes piden las O.P., como habíamos señalado antes, son casi siempre las víctimas. Vemos en este cuadro que casi en 95% de los casos, es la mujer quien ha solicitado la orden de protección.

CUADRO 23. ÓRDENES DE PROTECCIÓN ADOPTADAS SEGÚN PERSONA QUE LO SOLICITA. 2005 - 2010.

Año	A instancia de la víctima/s	%	A instancia de otras personas	A instancia del Minist. Fiscal	De oficio	A instancia de la Administración	Total
2005	13244	95%	37	378	240	1	13900
2006	26154	97%	74	584	258	8	27078
2007	26625	95%	111	895	308	17	27956
2008	28366	93%	217	1410	399	13	30405
2009	26642	93%	151	1539	443	7	28782
2010	23527	92%	193	1407	386	18	25531
Total	144558	94%	783	6213	2034	64	153652

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo General del Poder Judicial.

A mediados de 2005 empezaron a funcionar los JVM, por eso sólo hay 13900 órdenes concedidas. Quitando ese año, durante 2010 se expidieron la menor cantidad de órdenes de protección: 25 mil, cuando en 2008 se llegaron a los 30 mil.

b) EL OTRO LADO: ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE SE DENIEGAN

La “foto” de las O.P. no sería completa si no mostramos el otro lado. Es importante saber cuántas O.P. se deniegan porque es otra forma de comprobar cómo están reaccionando los juzgados ante estas solicitudes.

CUADRO 24. ÓRDENES DE PROTECCIÓN DENEGADAS. 2005 - 2010.

Año	A instancia de la víctima/s	%	A instancia de otras personas	A instancia del Minist. Fiscal	De oficio	A instancia de la Administración	Total
2005	3360	99%	1	24	6	0	3391
2006	8235	99%	16	33	57	0	8341
2007	9196	98%	67	115	23	12	9413
2008	9833	95%	97	225	15	152	10322
2009	12223	98%	77	105	17	8	12430
2010	12085	98%	48	146	28	46	12353
Total	54932	98%	306	648	146	218	56250

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo General del Poder Judicial.

Año, tras año, en términos absolutos, las O.P. denegadas han ido creciendo, empezaron siendo 8 mil en 2006 y el año pasado fueron más de 12 mil. Casi todas esas solicitudes fueron presentadas por las víctimas, como se ven en los porcentajes de la tercera columna de la izquierda.

Si comparamos el cuadro que nos precede, con el inmediatamente anterior, tenemos:

CUADRO 25. ÓRDENES DE PROTECCIÓN ADOPTADAS Y DENEGADAS. 2005 2010.

Año	Adoptadas	Denegadas	%	Total
2005	13900	3391	20%	17291
2006	27078	8341	24%	35419
2007	27956	9413	25%	37369
2008	30405	10322	25%	40727
2009	28782	12430	30%	41212
2010	25531	12353	33%	37884
Total	153652	56250	27%	209902

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo General del Poder Judicial.

Este cuadro nos dice que cuando empezaron a funcionar estos juzgados, sólo se denegaba el 20% de las solicitudes, mientras que ahora se deniega el 33%. Esto nos dice que los jueces están cada vez más, observando que no en todos los casos hay motivos suficientes que justifiquen una O.P.

Como acotación final, presentamos el porcentaje de las solicitantes de O.P. por nacionalidad:

c) PORCENTAJE DE MUJERES EXTRANJERAS SOLICITANTES DE O.P.

Desde el año 2007, de todas las solicitudes de O.P. realizadas por mujeres, el 35% son extranjeras.

Teniendo en cuenta que el 14,12%⁶² de la población es extranjera, advertimos que las mujeres inmigrantes -una vez más- están sobre representadas en las estadísticas de violencia.

CUADRO 26: MUJERES SOLICITANTES DE O.P. POR NACIONALIDAD 2005 - 2010.

Años	Víctima mujer española	Víctima Mujer Extranjera	Porcentaje del total	TOTAL
2005	12291	5208	30%	17499
2006	24807	11364	31%	36171

⁶² Cálculo realizado en base a los datos provisionales del padrón, a 1 de enero de 2011.

2007	24670	13165	35%	37835
2008	26447	15001	36%	41448
2009	26927	14219	35%	41146
2010	24805	13153	35%	37958
Totales	139947	72110	34%	212057

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo General del Poder Judicial.

7. Renuncias de las víctimas al proceso penal

Comparando las renunciaciones, que pueden darse en cualquier momento del proceso, vemos que está alrededor del 10%. Ha ido incrementándose de forma poco significativa, año tras año.

CUADRO 27

Año	Total de Denuncias	Total Renuncias	Porcentaje
2009	135540	16762	12,37%
2008	142125	16100	11,33%
2007	126293	12694	10,05%

No existen datos de renunciaciones anteriores a 2006, en la base de datos del Observatorio de la Violencia doméstica.

El siguiente cuadro, desglosamos qué porcentaje de estas renunciaciones, corresponden a víctimas extranjeras y españolas:

CUADRO 28

Año	Total renunciaciones	Renunciaciones por Extranjera	Porcentaje	Renunciaciones por Española	Porcentaje
2009	16762	7577	45,20%	9185	54,80%
2008	16100	7078	43,96%	9022	56,04%

Las cifras están entre el 40 y 45% de renunciaciones entre las presuntas víctimas extranjeras.

En este punto, habría sido positivo saber qué porcentaje de las denuncias corresponden a extranjeras, para así compararlo con la incidencia real de las renunciaciones, en este colectivo.

De todas formas, como ya lo hemos mencionado en el capítulo de los asesinatos de mujeres; hacen falta más datos para hacer un análisis pormenorizado entre parejas mixtas (español y extranjera y viceversa) y parejas de la misma nacionalidad.

8. ¿Cómo terminan los procesos?

A continuación presentamos cómo terminan los procesos, según datos proporcionados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género⁶³.

a) En los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.-

CUADRO 29. FORMA EN QUE TERMINAN LOS PROCESOS, ANTE LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Año	TOTAL	Sobreseimiento Libre		Sobreseimiento Provisional		Elevación al Órgano competente		Sentencia Absolutoria		Sentencia Condenatoria		Sentencia Condenatorias de Delitos: CONFORMADAS		Otros	
2009	107755	4384	4%	46565	43%	36850	34%	4364	4%	4183	4%	11409	11%	0	-
2008	98347	3620	4%	41069	42%	33832	34%	4135	4%	3924	4%	11767	12%	0	-
2007	86615	3736	4%	38111	44%	25412	29%	4221	5%	3695	4%	11440	13%	0	-
2006	95478	2703	3%	26620	28%	18786	20%	4195	4%	3595	4%	12111	13%	27468	29%
2005	28542	1486	5%	10075	35%	6903	24%	1790	6%	1630	6%	6658	23%	0	-

Elaboración propia en base a las tablas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.

Lo primero que llama la atención es la cantidad de procesos judiciales que pasaron por estos juzgados. Si sumamos la segunda columna, los totales, encontramos que han sido 416.737 los procesos que han pasado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. No es de extrañar que se demandara la creación de más juzgados (inclusive turnos de guardia), al poco tiempo de su implantación⁶⁴.

- La última columna de la derecha se refiere a otras formas de terminación del proceso, que hasta donde sabemos puede ser muerte o desaparición del denunciado. Todavía estamos a la espera que el CGPJ nos confirme qué otras figuras pueden estar detrás de estos números. La razón por la que hay datos sólo del año 2006 es porque los Boletines que tienen que cumplimentar los JVM dejaron de requerir esta información a partir de 2007. Seguiremos intentando conseguir información para el resto de años, porque en el 2006 resultó que este “Otros” es inclusive mayor que el peso de los sobreseimientos provisionales.
- La tendencia de sentencias condenatorias conformadas de los JVM es hacia la baja. El año 2005 se empezó con 23% con respecto al total de sentencias emitidas por los JVM, y en el año 2009 llegaron al 11%.

⁶³ El gráfico y el cuadro que integran este sub-capítulo, toman como fuente las bases de datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial, llamadas en la página web Tablas Estadísticas, pues a diferencia de los informes que elabora cada año el Observatorio contra la Violencia doméstica y de Género, las bases de datos se actualizan constantemente.

⁶⁴ Se empezaron con 15 juzgados especializados en 2005 y en 2007 se crearon 24 juzgados más para toda España. Para mayor detalle de la creación de estos juzgados y su ampliación, ver los Reales Decretos 233/2005, 339/2007 y 1132/2007.

- Aunque los primeros años no se ve una tendencia clara, se puede decir que desde 2008 el 34% de los procesos se elevan al órgano competente para que realice el juicio⁶⁵.

A partir de aquí, para obtener tendencias y comparar datos uniformes, vamos a mostrar resultados, cogiendo los datos de las formas cómo terminan los procesos de los últimos tres años: 2007 a 2009.

- En los últimos tres años que se muestran, el resultado de más del 40% de las denuncias es un auto de sobreseimiento provisional, que implica que no está suficientemente justificado que realmente se ha cometido un delito. El número es impresionante.
- El 4% termina en sobreseimiento libre, que podemos decir que es más contundente que el sobreseimiento provisional. Los motivos pueden ser
- Tomando como referencia el número total de procesos que pasan por los JVM, en promedio, sólo el 20% terminan en sentencias emitidas por ellos mismos.
- En cuanto a sentencias condenatorias, sólo el 4% son sentencias condenatorias (faltas); frente al 12% de sentencias condenatorias conformadas (sólo para delitos y cuando el acusado se declara culpable).

Como antesala del análisis de la forma cómo los juzgados penales terminan los procesos de violencia sobre la mujer, aquí les presentamos el número de procedimientos que elevan los JVM a los órganos competentes, para que realicen el enjuiciamiento:

CUADRO 30

Año	ELEVADOS A LA AUDIENCIA PROVINCIAL	ELEVADOS AL JUZGADO DE LO PENAL	TOTAL
2009	154	36341	36495
2008	190	33325	33515
2007	189	24966	25155
2006	179	18490	18669
2005	30	6876	6906
Total general	742	119998	120740

Vemos que en los años 2007 y 2008 el número de elevaciones crecía a un ritmo superior del 30%, hasta que el año 2009, el crecimiento fue sólo del 9%. Casi el 100% de las elevaciones para celebraciones del juicio, como es lógico, se derivan a los juzgados penales.

b) En los Juzgados Penales.-

⁶⁵ En estos casos, el juzgado sólo está ejerciendo el papel para el que fue creado: Para realizar la instrucción; la investigación en otras palabras.

Primero veamos qué tipo de procesos son derivados de los JVM a los Juzgados Penales:

CUADRO 31

Año	Juicios Rápidos registrados		Fase de Juicio Oral de Procesos Abreviados		Total Suma de Registrados	Total Suma de Resueltos
2006	10240	49%	10597	51%	20837	18001
2007	12475	47%	14073	53%	26548	24063
2008	15828	48%	17466	52%	33294	30165
2009	17012	45%	20492	55%	37504	33893

Está probado, que está bastante equilibrado el peso de los juicios rápidos y procesos abreviados elevados desde el JVM a los Juzgados Penales. Recordemos que la diferencia entre

CUADRO 32. FORMA EN QUE TERMINAN LOS PROCESOS, ANTE LOS JUZGADOS PENALES A NIVEL NACIONAL

Año	TOTAL	Sentencia Absolutoria		Sentencia condenatoria con Conformidad		Sentencia condenatoria SIN conformidad		Sobreseimiento Libre		Sobreseimiento Provisional		Por otras causas	
2009	33893	16640	49%	6885	20%	9706	29%	47	0,1%	91	0,3%	524	1,5%
2008	30165	14224	47%	6063	20%	9134	30%	50	0,2%	90	0,3%	604	2,0%
2007	24063	10426	43%	5282	22%	7747	32%	23	0,1%	65	0,3%	520	2,2%
2006	17987	7009	39%	4532	25%	6049	34%	16	0,1%	26	0,1%	355	2,0%

Elaboración propia en base a las estadísticas judiciales del Consejo General del Poder Judicial.

Dejamos constancia, que no hay datos disponibles de 2005.

- Desde el año 2006, el porcentaje de sentencias condenatorias han mostrado un descenso paulatino, se empezó el 2006 con el 59% de sentencias condenatorias y el 2009 cerró con un 49%.
- Exactamente lo contrario ha sucedido con las sentencias absolutorias. Se empezó el 2006 con un 39% y el 2009 acabó con un 49%.
- En promedio, el 41% de las sentencias condenatorias son conformadas.
- Analizado la tendencia de las sentencias conformadas, observamos que en estos últimos cuatro años, ha disminuido un poco. Se empezó con un 25% en el año 2006, y en el año 2009, se conformaron el 20% de las sentencias condenatorias.
- A diferencia de los JVM, los Juzgados Penales casi no declaran sobreseimientos; como se aprecia en las estadísticas no significan ni el 1%.
- En el apartado “por otras causas”, pueden encontrarse las otras formas de extinción de la acción penal, como muerte y desaparición, que en promedio significan un 2%.

c) En las Audiencias Provinciales.-

CUADRO 33. FORMA EN QUE TERMINAN LOS PROCESOS, ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Año	TOTAL	Sentencia Absolutoria		Sentencia Condenatoria	
2009	450	83	18%	367	82%
2008	353	63	18%	290	82%
2007	237	37	16%	200	84%
2006	30	4	13%	26	87%

Poco se puede comentar sobre la contundencia de estos números. Por la gravedad de los delitos que llegan a estos juzgados, es lógico que condenen más. Prácticamente, el 80% de los casos son sentencias condenatorias.

Por el poco tiempo de implantadas las modificaciones del Código Penal, referidos a los delitos de violencia sobre la mujer, en 2006 se resolvieron 30 causas en la Audiencia Provincial, llegando hasta los 450 en 2009.

9. Conclusiones

Aunque, como hemos mencionado anteriormente, hay lagunas en los datos obtenidos del Consejo General del Poder Judicial, porque a la fecha de elaboración de este trabajo, sí se puede saber la cantidad de denuncias que han entrado a los JVM, pero de lo que no estamos seguros es la forma cómo han terminado de procesar realmente todas esas denuncias. La única incógnita que mantenemos al día de hoy entonces, es de qué otra forma, además de las sentencias, sobreseimientos y elevaciones pueden terminar los procesos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, porque los números no nos cuadran.

No obstante, sí podemos sacar conclusiones de las sentencias y de los autos de sobreseimiento, porque esas cantidades son inamovibles. En todo caso, si hay más procesos que se quedan en los JVM, los porcentajes del cuadro FORMA CÓMO TERMINAN LOS PROCESOS se reducirían, pero las proporciones entre las sentencias y sobreseimientos, siguen siendo los mismos.

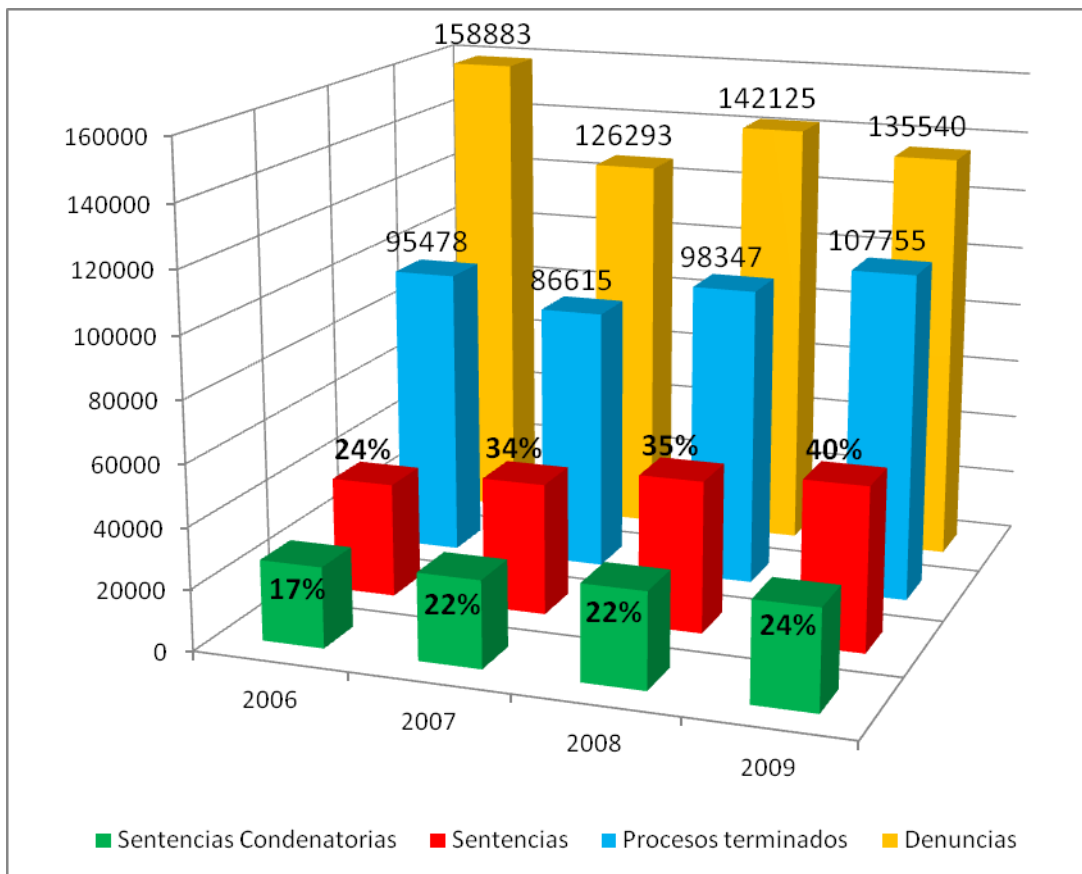
- Comparando el número de procesos terminados (sentencias, autos de sobreseimiento y otras formas de terminación de proceso), con el número de denuncias ingresadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, salen los siguientes resultados: El 44% de las denuncias termina en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el 18% termina en los Juzgados Penales y menos del 0.5% termina en la Audiencia Provincial. Esto significa que nos queda un restante de 38%. ¿Dónde están esas denuncias?
- Tomando como fuente de datos el apartado de las estadísticas del CGPJ, por tipo de procedimientos pendientes de resolver al finalizar el año 2009 en los JVM, hacen un total de 90856, es decir el 16% del total de denuncias presentadas ese año.
- Nos falta localizar el 22% de las denuncias presentadas. Pueden ser denuncias “dobles”; es decir, aquellas donde presenta denuncia ante el Juzgado un familiar, pero también hay un parte de lesiones, o el atestado

policial de la Comisaría del sector. Si es así, son muchas denuncias que se repiten, porque el 22% del total de los cuatro años son: 123.825 denuncias, que en promedio serían 30956 denuncias cada año.

Respecto a este tema, albergamos la posibilidad que alguna denuncia se quedara en la Comisaría y no pasara al JVM. Pero esto es imposible que se dé, primero porque en materia de Violencia sobre la Mujer las comisarías tienen un protocolo mediante el cual deben remitir al juzgado cualquier incidente, ya sea con las formalidades de un atestado policial (lo que ocurre en la mayoría), o mediante oficio en casos excepcionales cuando la presunta víctima: Estando en la Comisaría o si mediante operativo se detectó que hubo un incidente de violencia sobre la mujer y ella se niega a denunciarle, incluso a prestar declaración; aún así la Comisaría remite oficio informando de los hechos al Juzgado, y cuando ella hace una denuncia telefónica aunque luego no se acerque al Juzgado.

- Desde 2006 hasta 2009, y contando a todos los juzgados, en promedio el 40% de los procesos terminan en sentencias (condenatorias o absolutorias).
- Desde 2006 hasta 2009, y contando a todos los juzgados, en promedio el 21% de los procesos terminan en sentencias condenatorias.
- Desde 2006 hasta 2009, de los procesos terminados de alguna de las formas previstas por la ley, en promedio, el 22% terminan en sentencias emitidas por los Juzgados Penales, frente al 18% de los JVM.
- La tendencia de las sentencias conformadas, ha ido disminuyendo, tanto a nivel de JVM, como de JP.

GRÁFICO 35: COMPARATIVA ENTRE NÚMERO DE DENUNCIAS, PROCESOS TERMINADOS, SENTENCIADOS Y SENTENCIAS CONDENATORIAS.



Elaboración propia en base a las estadísticas judiciales del Consejo General del Poder Judicial.

De todas estas estadísticas conviene hacer varias reflexiones sobre un par de cuestiones fundamentales:

- **Sobre la forma cómo terminan los procesos:**

Anteriormente, hemos anotado que el 40% de los procesos que han pasado por los JVM, termina en sobreseimientos provisionales, y el 4% en sobreseimiento libre⁶⁶.

Podemos decir entonces prácticamente el 45% de los casos que llegan a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en la etapa de la investigación se determina que no hay elementos de juicio suficientes para proseguir con la causa porque el delito o no se cometió, y si se cometió, no hay pruebas razonablemente suficientes que determinen que el delito lo cometió el autor es él.

Cada año, el número de procesos que entra a estos juzgados aumenta. El 45% de todos los procesos que pasaron por los JVM, en el año 2009 fueron 48.489,75.

Refiriéndonos sólo a los archivos provisionales, con un 40% de casos que se quedan archivados por los motivos expuestos anteriormente, ¿Cómo podrá

⁶⁶ Los conceptos jurídicos están en la página 3.

el estado proteger a las mujeres que realmente están sufriendo maltrato pero que no hay pruebas suficientes para ir a juicio?

Al final, toda la tutela judicial penal (orden de protección, de alejamiento, prisión provisional, etc) que se utilizó fue en vano, no hay ningún efecto para el presunto autor ni para la víctima.

Como nunca podremos saber si todas esas denuncias fueron realmente ciertas (analizaremos el tema de las denuncias falsas más adelante), lo cierto es que hay un conflicto en la relación de pareja, y estamos comprobando que la respuesta penal para el maltrato psicológico y físico no resulta eficiente.

- **Reflexión acerca de las renunciaciones al proceso**

Las renunciaciones al proceso, así como las denuncias, crecen cada año. Para el año 2009, el porcentaje fue del 12,37% del total de denuncias presentadas ante los JVM,

No hemos podido conseguir los datos, pero por las declaraciones de los abogados litigantes entrevistados para la elaboración de esta tesis, y lo que se puede leer de las noticias de prensa, es que en los casos donde sólo existe como prueba de la denuncia, el testimonio de la mujer; en casi todos los casos donde se declaró el sobreseimiento o la sentencia absolutoria, ella ejerció su derecho a la no comparecencia, recogido en el Art. 416 de la LECRIM.

Estamos hablando de un impedimento que la propia víctima o presunta víctima genera para que se pueda procesar debidamente y en su caso, condenar al acusado.

Por la naturaleza de la relación que le unía o quizás le une a su pareja o ex pareja (hijos, hipoteca, otras deudas), es evidente que le resulta muy difícil a la presunta víctima, seguir con la denuncia penal por las consecuencias que trae para el hombre en su trabajo, en su reputación.

Si ella al final desiste en castigarle así, y se trata de una lesión no grave (consideramos que no es grave cuando se ha producido un daño a la salud física o mental, de tal manera que para su sanidad se requiera además de una asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, tal y como lo establece el Art. 147 del C.P.); ¿Cómo podrá tutelar a esa víctima, la Administración de Justicia?

Por este motivo, afirmamos que para aquellas víctimas aversas al riesgo (las que presentan renunciaciones), la solución de reproche penal a estos casos, no es eficiente.

Nosotros pensamos que una denuncia por violencia dentro de la relación de pareja, cuando se trata de hechos no graves, en vez de que el Estado intervenga como castigador, -que al final tampoco es tal porque la probabilidad de sanción es reducida-, debería actuar como mediador para que esa relación de pareja que está en crisis, termine o continúe de forma pacífica, sin dejar de proteger a la presunta víctima, los hijos y sin atentar contra la presunción de inocencia de los denunciados.

Un seguimiento por parte de un Psicólogo y un Asistente Social, con revisiones periódicas, con seguimiento del Juez Civil, todos con la formación necesaria para este tipo de casos, haría que se identifique mejor qué caso

remitir al Juzgado Penal, y qué casos merecen un seguimiento simplemente para que los comportamientos, los hechos no se tornen graves.

Si se apercibiera al presunto maltratador que si no asiste puntualmente a las revisiones periódicas y a las entrevistas con el Juez, se remitirá la causa al Juez Penal con todo lo actuado, pensamos que se estaría posicionando la respuesta estatal de forma marginal, según la gravedad de los hechos. Desarrollaremos el tema del papel del derecho penal como instrumento de disuasión, con más profundidad en el capítulo V de este trabajo.

CAPÍTULO V

HOMBRES INGRESADOS A UNA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA, POR DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

1. ¿Cuántos hombres han pasado por la cárcel?

Antes de referirnos a los datos de hombres en prisión por delitos de violencia sobre la mujer, vamos a mostrar el total de población reclusa en las cárceles españolas para luego hacer una comparativa.

a) Población reclusa por sexo. Total Nacional. Periodo 2004-2009.

CUADRO 32

Año	Hombres	Mujeres	Total
2009	70.003	6.076	76.079
2008	67.608	5.950	73.558
2007	61.508	5.592	67.100
2006	58.912	5.109	64.021
2005	56.291	4.763	61.054
2004	54.805	4.570	59.375

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2009. Capítulo de Asuntos Penitenciarios.

Para todos los años existe la misma proporción: El 92% de la población reclusa, son hombres.

b) Situación de los hombres reclusos, para todo tipo de delitos

CUADRO 33. Hombres reclusos según situación procesal penal. Todos los delitos.

Situación	2006	2007	2008	2009
Preventivos	13567	14428	16073	14179
Penados	44508	46120	50626	54895
Total	58075	60548	66699	69074

Notas:

* Los datos son a cierre de diciembre de cada año en cuestión.

** Estamos quitando las medidas de seguridad, arrestos de fin de semana, tránsitos e impago de multas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en el link de Estadística Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias⁶⁷.

- Tomando los totales de cada año, podemos decir que la población de hombres reclusos en cárceles españolas ha ido en aumento progresivo, año

⁶⁷ El link es: <http://www.institucionpenitenciaria.es>

tras año. No mostramos datos anteriores a 2006 porque no están disponibles.

- El ritmo de crecimiento, desde 2007 ha sido del 4%, con excepción del año 2008, que con respecto al 2007, significó un aumento del 10%.
- El año 2008 fue hasta ahora, cuando se alcanzó el máximo de presos preventivos: 16703 en todo el territorio nacional.
- Los presos preventivos han crecido a un ritmo mayor que los penados, excepto en el año 2009 que disminuyó a un ritmo de crecimiento del 6% en 2007 con respecto al año anterior, y al 11% en 2008, con respecto al año anterior.
- De todas formas, en promedio, la cantidad de presos preventivos en los cuatro años analizados ha sido del 23% con respecto al total de reclusos. Podríamos decir que este porcentaje no está mal. Si fuera una cantidad mayor, como por ejemplo superior al 50% como sucede en varios países latinoamericanos, sería un indicador que el sistema judicial penal es muy lento⁶⁸.
- Tenemos el dato de población reclusa hasta octubre de 2010: 64698.

c) Tipología delictiva de hombres reclusos en general.

Aportamos ahora, los hombres reclusos, por tipo de delitos, cruzando información entre el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio del Interior (MIR).

CUADRO 34. TIPOLOGÍA DELICTIVA DE LA POBLACIÓN MASCULINA RECLUSA, PENADA LEY ORGÁNICA 10/95 (CÓDIGO PENAL)

Tipología delitos	2005	2006	2007	2008	2009
Delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico	19.542	19.747	19.568	20.993	21.618
Salud pública	10.738	11.165	11.641	12.752	13.979
Contra la libertad sexual	2.376	2.690	2.975	3.277	3.563
Homicidio y sus formas	1.962	2.179	2.404	2.572	2.858
Lesiones	1.812	1.983	2.177	2.413	2.879
Contra el orden público	943	999	1.164	1.306	1.644
Contra las relaciones familiares	548	738	911	1.282	1.516
Contra la Administración de Justicia	403	577	752	1.035	1.167
De las falsedades	382	414	532	562	663
Contra la libertad					

⁶⁸ Se puede revisar estadísticas elaboradas sobre los presos preventivos en Latinoamérica, por ejemplo la revista costarricense www.cienciaspenales.org, en el siguiente link: <http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2016/carran16.htm> se pueden ver cuadros comparativos de la década de los 90.

	404	483	496	621	626
No consta delito	465	347	380	344	437
Seguridad del tráfico	273	210	270	597	1.001
Por faltas	84	91	63	99	104
Contra la Administración Pública	53	43	37	56	62
Contra el honor	5	9	7	10	10
Deber de prestación del servicio militar	-	-	-	-	-
Resto de delitos	738	956	1.220	1.428	1.656
Total	40.728	42.631	44.597	49.347	53.783

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio del Interior.

De estos números, se lee lo siguiente:

- El 40% del motivo de ingreso de hombres en las cárceles, es por de delitos contra el patrimonio. El segundo motivo de ingreso en los penales es por delitos relacionados con tráfico de drogas (Delitos contra la Salud Pública), con un 25% en promedio.
- De los 5 años de la muestra, los delitos contra la libertad sexual, han sido el tercer motivo de hombres reclusos en las cárceles.
- En cuarto y quinto lugar se encuentran los homicidios y las lesiones, respectivamente. Siempre ha habido una cierta distancia entre ambos, pero en 2009 prácticamente se han igualado, pues porcentualmente representan el 5% cada uno, con respecto al total.
- Desde el año 2009, se ha duplicado el ingreso a los Penales, de los delitos de seguridad del tráfico.
- El motivo de ingreso a los penales correspondientes a los delitos contra la libertad se han incrementado en un 25% desde 2008.

2, Situación de los hombres reclusos relacionados con sucesos de violencia de género

Queremos dejar constancia, que por ahora sólo está publicada de manera oficial datos de enero a noviembre de 2010, presentadas por la actual Subdirectora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria del Ministerio del Interior, Dña. Concepción Yagüe Olmos, durante su intervención en el Primer Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres, celebrado el 30 de noviembre último en Sevilla⁶⁹. Según la Subdirectora, la violencia contra las mujeres se ha convertido en la tercera causa, que lleva a los hombres a prisión.

⁶⁹ “La Reeduación del agresor en las Instituciones Penitenciarias”. Intervención de la representante de la **Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias**. En Primer Congreso para el

Sin embargo, nosotros hemos tenido acceso a información de ingresos por tipología de delito, desde el año 2005, por cortesía del Gabinete de Prensa de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior. Los datos que hemos obtenido de ellos son referidos a los ingresos en Penales, por tipología de delitos, desde 2005 hasta 2010. El resultado de esa información, lo hemos aglutinado en este cuadro:

CUADRO 35. TIPOLOGÍA DELICTIVA DE LA POBLACIÓN MASCULINA RECLUSA, POR DELITOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA DE GÉNERO COMO DELITO PRINCIPAL

Tipología delitos Violencia contra la Mujer	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Abusos sexuales de VG	1	0%	12	1%	17	1%	27	1%	37	1%	37	1%
Agresión sexual de VG	4	2%	46	4%	69	4%	91	3%	160	4%	180	5%
Amenazas de VG	15	7%	103	10%	186	11%	405	15%	580	15%	552	14%
Asesinato		0%	14	1%	37	2%	55	2%	85	2%	103	3%
Coacciones de VG	3	1%	14	1%	24	1%	31	1%	49	1%	63	2%
Contra la Integridad Moral de VG	2	1%	5	0%	9	1%	13	0%	12	0%	7	0%
Detención ilegal de VG	1	0%	7	1%	12	1%	21	1%	33	1%	39	1%
Falta de amaneza, coacción, injuria o vejación injusta de VG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	22	1%	25	1%
Falta de lesiones de VG	2	1%	7	1%	12	1%	17	1%	29	1%	18	0%
Homicidio de VG	2	1%	25	2%	38	2%	72	3%	118	3%	155	4%
Lesiones al feto de VG	14	6%	2	0%	1	0%	1	0%	2	0%	1	0%
Lesiones de VG	0	0%	116	11%	183	11%	348	13%	508	13%	587	15%
Malos tratos de VG	129	59%	495	48%	757	46%	1183	45%	1233	32%	1073	28%
Quebrantamiento de pena o medida de alejamiento VG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	576	15%	633	16%
Violencia habitual de género	45	21%	181	18%	283	17%	351	13%	404	10%	380	10%
Total	218	100%	1027	100%	1628	100%	2615	100%	3848	100%	3853	100%

Nota.- Para cada año, la fuente de la información ha registrado el número de internos al 1 de enero del año siguiente. A excepción del año 2010, donde los datos se tomaron hasta el 20 de enero de 2011.

estudio de la Violencia contra las Mujeres. Sevilla, 30 de noviembre de 2010.
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Sevilla.
www.congresoestudioviolencia.com/ponencias/18_concepcion_yague.ppt

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Secretaría de Asuntos Penitenciarios.

- El ingreso a los Penales por motivo delito de lesiones de VG ha ido en aumento.
- El porcentaje del delito “Malos tratos de VG”, ha empezado a caer desde el año 2009. Al mismo tiempo desde ese año empiezan a registrarse ingresos por quebrantamiento de pena o medida de alejamiento.
- La incidencia del delito de malos tratos ha ido en aumento hasta el año 2009. En 2010 ha descendido. Para las amenazas ha sucedido lo mismo.
- Aunque la incidencia de ingresos por homicidios y asesinatos, porcentualmente hablando, sigue siendo prácticamente la misma; lo cierto es que sí que ha aumentado en números absolutos. En el año 2010 se internaron por asesinato 103 personas, prácticamente el doble que el año 2008. Lo mismo ha ocurrido con los homicidios.
- Los ingresos por asesinato subieron de un 2 a un 3· de 2009 a 2010 y en cuanto a los homicidios tuvieron también un ligero incremento en 2010.
- Los ingresos a cárceles por amenazas de género, se incrementaron al doble en el año 2008, volvió a subir en 2009 y finalmente en 2010 se ha reducido un poco.
- En el año 2009, fueron 29 hombres por falta de lesiones a la cárcel, en 2010 disminuyó a 18.
- Hasta antes de 2009, no habían presos por Faltas de amenazas, coacciones, injurias o vejaciones injustas de Violencia de género.
- Hasta antes de 2009, no habían presos por Quebrantamiento de pena o medida de alejamiento. Se empezó con 576 en 2009 y en 2010 fueron 633. Es alarmante comprobar que el último año se ha convertido en el segundo motivo de ingreso en las cárceles, comparado con el total de delitos de VG.

Otros datos importantes

Hay otros datos⁷⁰ que merecen la pena destacar:

- La cuantía media de la pena es de 3 años y 10 meses.
- El 40% tiene penas inferiores a dos años.
- Del total de los Nuevos Ingresos al sistema en 2010, el 10,1% está en prisión por delitos relacionados con VG.
- El 88% de la población son penados. El 11,7% son preventivos. (En la población interna en general, la situación preventiva se sitúa en 21,5%).
- Disfruta de tercer grado el 9,7% (En la población general el 17,3% de los varones).
- El 13% disfruta de permisos de salida.
- El interno y la víctima tienen aún áreas en común: Hijos en el 57,9%, Bienes y propiedades en el 21,5% de los casos.

⁷⁰ Idem.

CAPÍTULO VI

COSTES Y FINANCIAMIENTO DE LA TUTELA JUDICIAL PENAL Y ASISTENCIAL

5. Personal de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

El presupuesto para el sector justicia, en 2010 fue de 1.819 millones de Euros⁷¹.

Para reseñar un poco la historia del personal judicial, contada por las distintas personas que hemos entrevistado para este trabajo; cuando estos juzgados empezaron a funcionar, los funcionarios de carrera no solicitaban estos juzgados como destino porque no era muy atractivo, se venía venir que sería complicada la aplicación de competencias nuevas. Por eso, al inicio, el personal judicial era casi en su totalidad, interino que, están más dispuestos a cubrir el puesto que se les ofrezca, sea el que sea.

Lo mismo pasaba con los jueces. La tendencia ha sido que los titulares de los juzgados de violencia sobre la mujer sean jueces que acababan de obtener la oposición, o algunos jueces con años de experiencia que encontraron en estos juzgados la única forma de conseguir el destino que siempre quisieron.

En 2008⁷² se instauró el régimen de guardias en los JVM, en los partidos judiciales donde existan cuatro o más juzgados de esta índole.

Por motivo de ese trabajo adicional de las guardias y para incentivar la promoción interna a estos juzgados, motivar la ocupación, retención de personal más experimentado en estos juzgados; el Ministerio de la Presidencia en 2009⁷³ estableció un incentivo para las guardias de los JVG: acreditarán 285,20 euros por cada servicio de guardia y 55,20 euros diarios adicionales cuando dicho servicio se realice en sábados, domingos o festivos, a los secretarios judiciales, médicos forenses y los miembros de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, así como al funcionario de Fiscalía que asista al fiscal de guardia.

5.1. ¿Cuánto cuesta mantener el personal judicial de los JVM?

⁷¹ En www.lamoncloa.es, Presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 para el Congreso de los Diputados.

⁷² El Acuerdo de 17 de julio de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, el cual modifica el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre.

⁷³ Orden PRE/1118/2009, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden PRE/1417/2003, de 3 de junio, por la que se regula las retribuciones complementarias por servicios de guardia del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Existen tres principales tipos de costes: Gasto Público, Costes Privados y Coste Oculto que resulta de las disfunciones de la Justicia. En cuanto a gasto público, hablaremos del gasto en plantilla del personal judicial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) y la Justicia Gratuita. De costes privados, hablaremos de costes en los que incurren las partes en asesoramiento legal y finalmente hablaremos de los sobre costes en los que incurrirían los que acuden al sistema judicial como denunciante o denunciado por delito de violencia de género, como costes ocultos.

Debemos decir que no hemos encontrado ningún tipo de informe del Ministerio de Justicia o Consejo General del Poder Judicial, o de las Comunidades Autónomas, donde se hable de los costes de los JVM, No solamente de nóminas sino, de costes de mantenimiento como alquileres, material de oficina, etc. Hemos comprobado que esta situación se aplica a todos los juzgados en general. Sólo hay notas de prensa donde cada cierto tiempo se anuncia la inversión que se hace para modernizar instalaciones, inaugurar la creación de nuevos juzgados, pero no información acerca del gasto realizado con detalle.

De todas formas aquí van algunos datos. En Madrid, por ejemplo, el coste de las obras de 21 juzgados exclusivos de la Mujer en toda la Comunidad, en cuanto a infraestructuras, fue de 2,04 millones de euros, en 2010. En cuanto a gasto de personal (tanto funcionario como laboral) tiene un coste casi de 13 millones de euros al año. A estas grandes cifras habría que añadir otros 2 millones de euros en concepto de mobiliario y sistemas informáticos. Es decir, 17 millones de euros al año que se destina a estos juzgados.⁷⁴

Pero, no son solamente 17 millones, recordemos que el 20% de las denuncias terminan siendo resueltas en los Juzgados Penales, Hasta el cierre del año 2010, existen otros 8 juzgados de primera instancia e instrucción con competencias compatibles en Violencia sobre la Mujer⁷⁵.

A los 17 millones de euros más lo descrito en el párrafo anterior; para el 2011 habría que considerar también a los 5 nuevos juzgados de lo Penal que asumirán “Con carácter de exclusividad, el enjuiciamiento y fallo de los delitos de quebrantamiento de condena o de medidas de seguridad relacionados con la violencia sobre la mujer”⁷⁶.

Jueces y Secretarios

Los salarios de los jueces, fiscales y secretarios son financiados por el Ministerio de Justicia, mientras que los del resto del personal judicial, están a cargo de las Comunidades Autónomas.

El único estudio “oficial” que hemos encontrado es un informe internacional. El Informe “Eficiencia y Calidad de la Justicia: 2010”, elaborado por la Comisión

⁷⁴ Cifras expuestas por el Director General de Justicia Gonzalo Quiroga durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, en *Terra Noticias*, Fuente: *Europa Press*, 6 de abril de 2010.

⁷⁵ En www.madrid.org/prensa, Nota de Prensa del 1 de febrero de 2011.

⁷⁶ En europapress.es, 29 de diciembre de 2010.

Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ)⁷⁷. Este reporte, que muestra una serie de indicadores para medir la eficiencia y calidad de la justicia, se hacen comparativas sobre gasto público destinado a Justicia, costes de salarios de jueces, acceso a la justicia, asistencia legal gratuita, entre otros, para valorar el status de la justicia en los países miembros de la Unión Europea.

En el citado reporte de la CEPEJ, que ha usado como fuente de información datos proporcionados por el Ministerio de Justicia de España, señalan el salario bruto anual de jueces y fiscales al inicio de la carrera del año 2008 es de 49.303,00⁷⁸.

Sin embargo, desde la Secretaría General de Recursos Económicos del Ministerio de Justicia, nos han enviado información actualizada en base a los últimos Presupuestos Generales del Estado:

Salario Bruto Anual	
Magistrado	72.085,50 €
Secretario 2da Categoría	43.825,24 €

Fuente: Datos proporcionados por el Ministerio de Justicia

Por cierto, estas cantidades no incluyen el complemento por guardias. Además, el salario va a variar hacia arriba, dependiendo de la antigüedad del funcionario, si ha sido destacado a una zona distinta de su lugar de residencia, entre otros complementos salariales.

Resto del personal del Juzgado

Luego, tenemos la Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda que publica los salarios de los funcionarios, aplicable al año 2010⁷⁹. Como el sueldo base varía en función del lugar de destino, vamos a mencionar sólo los del Tipo 1: Madrid y Barcelona provincias, y otras localidades de ambas provincias con Juzgados servidos por Magistrados.

Además, no contamos con la variable antigüedad, y absolutamente todos los complementos que tengan cada uno de los funcionarios, sólo mencionaremos el salario con los complementos básicos que podría percibir un funcionario que hace labores administrativas varias sin tener la categoría de un Secretario Judicial:

⁷⁷ “Efficiency and quality of Justice”. Edition 2010 (Data 2008), European Commission for the Efficiency of Justice. Ministerio del Interior. Disponible en:

[https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ\(2010\)Evaluation&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBC2F2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864](https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)Evaluation&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBC2F2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864)

⁷⁸ Ibid, P. 205 y 206.

⁷⁹ Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan con efectos de 1 de junio de 2010 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio.

Funcionario (*)	Sueldo Base	Complemento General de Puesto (Tipo 1)	Añadido al Complemento General de Puesto (Antes de Especial Dificultad)	Complemento Variable (CCAA Madrid)	Complemento Juzgados VM (CCAA Madrid)	Paga Extra	Total Bruto Aproximado
Gestión Procesal y Administrativa (Antes: Oficiales)	1.185,17	238,4	111	616,42	759,08	841	35.761,74
Tramitación Procesal y Administrativa (Antes: Auxiliares)	948,15	192,27	111	616,42	704,86	734	31.606,88
Auxilio Judicial (Antes: Agentes)	829,64	127,23	111	616,42	650,64	687	28.705,74

Elaboración propia en base a datos del Boletín “Retribuciones 2010”, elaborado por el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ)

Se han tomado datos del complemento variable y el complemento de JVM, que correspondería a Madrid solamente porque para cada Comunidad son distintos.

Las guardias son de la misma cuantía para toda España, menos para la CCAA de Cataluña.

Número de Juzgados en toda España, y en Madrid y Barcelona

Ahora nos falta saber de cuánto personal disponen los juzgados, pero antes nos gustaría reseñar que en relación a la población, España cuenta con menos jueces y menos fiscales que otros países europeos. Sin embargo, contamos con más funcionarios judiciales por habitantes, comparados con otros países de nuestro entorno⁸⁰.

Los últimos resultados de 2008⁸¹, dicen que en España, por cada 100 mil habitantes, tenemos 101 individuos de personal judicial, mientras que la media en Europa es de 67.5.

La financiación de los mismos, corresponde en cuanto a volumen, sobre todo a las Comunidades Autónomas pues todo el personal de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial dependen de las Comunidades, por delegación de competencias.

5.2. Número de Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM)

En el año 2009, existían 93 juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM). Al día de hoy, existen 106 Juzgados en 76 partidos judiciales.

En Madrid capital, existen 11 y en Barcelona capital existen 5 JVM.

Se debe tener en cuenta que estamos hablando de una parte -muy importante- de los costes de los procesos donde hay una denuncia relacionada con un hecho tipificado por el Código como violencia de género; pero hay más.

⁸⁰ PASTOR PRIETO, Santos (2008). “¿Penuria de Medios? Un análisis empírico de los costes públicos y privados visibles y ocultos de la justicia”, en *La justicia procesal, Cuadernos de Derecho Judicial VI-2008*, Consejo General del Poder Judicial., Madrid. P. 369-371 Y “Efficiency and quality of Justice”, en base a datos de 2004.

⁸¹ “Efficiency and quality of Justice” (2010), Op. Cit., P. 131.

Recordemos que si la instrucción se llevó a cabo en el JVM y el denunciado “No conforma”, el juicio oral se va a celebrar en el Juzgado Penal, ése es otro coste que tendríamos que añadir, con la salvedad que por la gravedad del caso hay procesos van a la Audiencia Provincial inclusive.

Luego, por la poca población, existen también Juzgados Únicos (Mixtos), que conocen procesos de violencia de género, al igual que Juzgados Penales que conocen la instrucción y enjuiciamiento de este tipo de procesos.

Por eso hemos decidido centrarnos en Madrid y Barcelona capitales, para relacionar número de juzgados con personal y obtener un aproximado de costes de salarios de este tipo de juzgados especializados.

CUADRO 36

Capital	Magistrado	Secretario	Gestión	Tramitación	Auxilio	Sub Total	TOTAL
MADRID	1	1	4	6	2		11 JVM
	72.085,50	43.825,24	143.046,96	189.641,28	57.411,48	506.010,46	5.566.115,06
BARCELONA	1	1	3	5	1		5 JVM
	72.085,50	43.825,24	93.007,98	136.551,40	24.934,50	370.404,62	1.852.023,10

Con los datos anteriores de salarios por cada tipo de funcionario, podemos decir que en costes de personal del juzgado solamente, tenemos que en Madrid el gasto asciende a: 5.566.155,06 (Cinco millones, quinientos setenta mil y ciento cincuenta y cinco y 06/100 euros).

En Barcelona, el gasto asciende a 1.852.023,10 (Un millón ochocientos cincuenta y dos mil y 23/100 euros)

2. Los Abogados del Turno de Oficio

Todo ciudadano tiene derecho a la orientación jurídica. Asimismo, el Estado garantiza el acceso a la justicia a quienes carecen de recursos económicos poniendo a su alcance los medios necesarios para la defensa de sus derechos ante los Tribunales.

La financiación de la justicia gratuita va por cuenta de las Comunidades Autónomas, en su mayor parte.

El gasto en justicia gratuita para el año 2007 fue de 191 millones de euros, que representaba el 0,02% del PIB.

La justicia gratuita representaba apenas el 6% del presupuesto público para el sector justicia, que en total ese año fue de 3.184 millones de euros.

Para el año 2009, se destinaron 265.412.715 millones a la Justicia Gratuita, que abarcan las Guardias/Asistencia Letrada al detenido, Turno de Oficio y Violencia de Género y Gastos de Infraestructura para toda España⁸².

Se realizaron más de 64.000 casos/actuaciones del Turno de Oficio, durante el año 2009.

Del total de la subvención que recibieron los Colegios de Abogados, el 68,9% (182,8 millones de euros se destinan al Turno de Oficio y a los servicios de asistencia a las víctimas de violencia de género y un 23,5% se aplica a los servicios de Asistencia Letrada al Detenido y guardias (62,2 millones de euros)⁸³.

Según el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), para el año 2010, esperaban que los “Gastos de infraestructura del Turno de Oficio” sean atendidos esencialmente por la subvención recibida por el Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid que asciende a 4.768.000 € para este concepto, El ICAM estimaba que para 2010, tramitarían 158.600 expedientes de Justicia Gratuita, lo que supone un incremento del 12% con respecto al año 2009. Además, mencionan que la remuneración por expediente es de 30,05€⁸⁴.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid afirmaba en declaraciones de Francisco Granados, en octubre de 2009, que se destinarían para el año 2010; 34 millones de Euros para la Justicia Gratuita, al igual que el año pasado.

Remuneración del turno de oficio, según la Comunidad de Madrid

Vamos a citar el caso madrileño porque disponemos de más información de esta Comunidad.

Hemos usado como fuente la “Hoja Informativa” que proporciona el Colegio a los abogados del Turno de Oficio, donde se detalla la remuneración por cada tipo de procedimiento en los que actúen. Aplicable a un proceso por delitos de violencia de género tendríamos:

CUADRO 37

Asuntos Penales	Cuantía
Procedimiento Penal General	360,61 €
Procedimiento Abreviado	300,51 €
Juicios de Faltas	120,2 €
Procedimiento Abreviado de Enjuiciamiento Rápido	330,56 €

En este cuadro, se ven las cantidades que un abogado del Turno de Oficio cobraría si acredita la participación del 100% del proceso, con la copia de la sentencia que pone fin al proceso o resolución que ponga fin al procedimiento. Luego, el abogado cobraría el 70% de dichas cuantías si ha acreditado participación en el proceso con: Cualquier diligencia ante el Juzgado de

⁸² “IV Informe del Observatorio de Justicia Gratuita” (2009), Consejo General de la Abogacía Española y La Ley, P.26. En www.abogados.es.

⁸³ Ibid, P. 21 y 22.

⁸⁴ En “Proyecto de Presupuesto 2010” del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, P. 15. En www.icam.es.

Instrucción posterior a la primera declaración prestada ante el mismo, escrito de petición anticipada de prueba, escrito de petición de libertad, recurso contra el auto de prisión, auto de apertura de juicio oral, escrito de conclusiones provisionales.

También cobraría el 70% si presenta copia de de la providencia que tiene por formalizada la *Apelación o por impugnado el recurso*, o citación del señalamiento para vista.

Teniendo en cuenta que la mayor parte de procesos que entran a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se tramitan principalmente, **por la vía del juicio rápido y del proceso abreviado, se puede decir que: el coste promedio de los honorarios del Abogado de Oficio es de 316€.**

¿CUÁL ES EL COSTE DEL SISTEMA JUDICIAL CREADO ALREDEDOR DEL TRATAMIENTO PENAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

No hemos logrado conseguir esta información. Nos hemos encontrado no sólo con que hay costes que corresponden a las Comunidades Autónomas y no al gobierno central, sino que en realidad yo creo que ni el Ministerio de Justicia, ni el Ministerio del Interior saben lo que cuesta mantener el personal judicial, el personal policial y los medios que se han puesto a disposición para que funcionen todas las herramientas previstas en las leyes para proteger a la mujer víctima de violencia de pareja.

Aunque lo mencionamos en el capítulo de financiamiento de la tutela judicial para hacernos una idea, sólo en Madrid gastaron 17 millones de euros en el año 2009, de los cuales 13 millones fueron para gastos de personal de los JVM (tanto funcionario como laboral). A esto habría que sumarle el gasto en salarios de jueces, secretarios y fiscales que van aparte pues los asume el Ministerio de Justicia.

La conclusión es que la inversión de recursos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y en los mecanismos, protocolos creados para que funcione todo el sistema, no tiene parangón en la historia del Poder Judicial y creemos que en la historia de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Personal y Mantenimiento de los Juzgados

Como habíamos dicho anteriormente, el gasto está repartido entre el Estado y las Comunidades Autónomas, por delegación de competencias.

El 80% del coste de los juzgados los asumen las Comunidades Autónomas, porque ellos pagan las nóminas del personal administrativo del juzgado - recordemos que en Madrid cada juzgado tiene 12 funcionarios en plantilla-, al margen del Secretario y el Juez, además de los gastos de infraestructura.

3.COSTES PRIVADOS EN HONORARIOS DE ABOGADOS

El coste de la asistencia legal gratuita va por cuenta de las Comunidades Autónomas en su mayor parte.

En el apartado anterior, dejamos claro que aunque todos los ciudadanos tienen derecho a la asistencia legal cuando lo requiera y no tenga Abogado en ese momento, mediante un Letrado de Guardia. Sin embargo, tener acceso a un Abogado de Oficio no implica que sea gratis.

Se debe que acreditar, como regla general, percibir de ingresos una cantidad inferior a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional 641,40€/mes⁸⁵ ; es decir 1.282,80 (MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 80/100 EUROS) Brutos mensuales. En este rango, los “*Mileuristas*”, se encuentra la mayoría de la población que tiene trabajo.

Por tanto, aquellos que se encuentren por encima de este umbral, y aunque la negociación del salario de Abogado y Procurador es libre, pagan por la asesoría legal. Creemos conveniente mostrar un indicador oficial en este sentido. Según los criterios del Colegio de Abogados de Madrid⁸⁶, y suponiendo que se trate de un proceso sencillo, por los delitos de VG (No incluimos los Juicios de Faltas), que empieza en el JVM y termina en el Juzgado Penal (No en la Audiencia Provincial) tenemos:

Costes aproximados que asumiría el Denunciado (*)

Asistencia al Detenido	210€
Comparecencia para resolver sobre la situación personal	210€
Escrito solicitando el sobreseimiento y/o archivo de las actuaciones	45€
Escrito relativo a la situación personal del imputado	270€
Escrito sobre la solicitud de diligencias de prueba	120€
Escritos de acusación y defensa	390€
Asistencia a interrogatorio de imputados y testigos, incluida la labor de preparación de los interrogatorios, por cada sesión	150€
Total	1.395€

Costes aproximados que asumiría el Denunciante (*) (**)

Otros escritos que no sean de mero trámite (Como solicitud de medidas cautelares)	120€
Escritos de mero trámite	60€
Instrucción de la causa y alegaciones a la conclusión del sumario	240€
Escritos de acusación y defensa	390€
Total	810€

(*) Suponiendo, desde la perspectiva de cada parte, que ganan el juicio, y no hay apelación.

⁸⁵ Real Decreto 1795/201 del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2011

⁸⁶ ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID (2001): “*Criterios del Colegio de Abogados de Madrid en la emisión de dictámenes sobre honorarios profesionales a requerimiento judicial*”. P. 56 – 61. En www.icam.es. Cuando existe litigio de cobro de honorarios profesionales entre el Abogado y el defendido, el Juez pide al Colegio dictamen sobre los honorarios que corresponden en cada caso en base a este documento. Hemos tomado como referencia los baremos de Madrid, aunque es verdad que cada Colegio de cada comunidad tiene su propio baremo.

(**) Suponiendo que no haya sido necesario elaborar la denuncia, porque existe atestado policial de por medio. Elaborar una denuncia sencilla está valorado en 210€.

En el caso del denunciado de Violencia de género, como le llevan detenido a la Comisaría, el coste resulta previsiblemente superior.

Decía el Observatorio de Justicia Gratuita, que durante el 2009. En el Turno de Oficio, se atendieron a más de 64.000 casos en materia de violencia de género.

Si lo relacionamos con los 107.755 procesos que “terminaron” de alguna forma (sobreseimientos, sentencias, elevaciones al órgano competente) en el año 2009. Por tanto, tenemos que $107.755 \times 2 = 215.510$ potenciales litigantes (Denunciante y denunciado).

Si dividimos 64000 casos entre 215.510, es igual a 29.70%. Lo cual tampoco quiere decir que esos 64000 casos terminaron siendo gratuitos; eso no lo podemos saber.

Por tanto, podríamos afirmar que en un 70% de los casos, las partes asumieron los costes de Asesoría Legal y que en promedio gastaron:

Si es Denunciado: 1.395€

Si es Denunciante: 810€

Como casi seguro el 70% de los intervinientes de un proceso penal asumieron este coste; es decir 150. 587 intervinientes que se dividen en:

75.293,50 Denunciados x 1.395€ = 105.034.432,50€

75.293, 50 Denunciantes x 810€ = 60.987.735,00€

TOTAL = 166.022.167,50€

TOTAL: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES, VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE Y 00/50 EUROS que han asumido, aproximadamente, las partes en un proceso penal.

Dejamos constancia que no hemos tomado en cuenta los costes de la parte civil que podría acarrear un expediente de denuncia de malos tratos, tales como divorcio, determinación de la pensión de manutención, custodia de hijos, entre otros.

Hay otros costes que se generan como consecuencia resultado de una denuncia de VG, como la determinación de quién se queda el domicilio conyugal, cómo afrontar las deudas en común, entre otros que a lo mejor no llegan al juzgado pero sí generan costes de negociación y de asumir dichos costes.

4.MATRIMONIOS, SEPARACIONES Y DIVORCIOS⁸⁷

⁸⁷ No nos vamos a referir a las nulidades porque además que son estadísticamente poco relevantes, tienen una connotación diferente pues para las separaciones y divorcios sólo hay voluntad de no continuar con la relación porque uno de ellos o ambos no quieren seguir con la relación. Mientras que para la nulidad, se invocan cualquiera de los cinco motivos previsto en el art. 73 del Código Civil Español, que contemplan las causas por las que el matrimonio desde su celebración, nació nulo.

La lógica nos lleva a pensar que sí hay efectos de las reformas penales recientes, en la creación de nuevas familias, en las familias ya creadas que han sufrido un suceso de violencia de algún miembro y en los divorcios. El tema central es saber hasta dónde ha influenciado. Es difícil saber los efectos de las Leyes Orgánicas 11/2003 y 1/2004, porque de por medio está la ley de Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, la cual ha modificado el sistema de incentivos de los divorcios, haciéndolos más fáciles de conseguir, con lo cual esto también ha motivado que desde ese año el número de solicitudes de divorcio⁸⁸ hayan aumentado.

Adicionalmente, a mediados de 2005 empezaron a funcionar los JVM y aproximadamente, un proceso de divorcio con acuerdo de ambas partes puede tardar seis meses en un juzgado de familia normal, mientras que en un proceso de JVM y si hay mutuo acuerdo se puede conseguir en dos meses (incluso en 30 días, depende de la carga procesal).

Hemos elaborado la tasa media por cada mil habitantes, para los matrimonios, separaciones y divorcios. Así, tenemos lo siguiente⁸⁹:

CUADRO 38

Año	Población	Matrimonio	Tasa media	Separaciones	Tasa media	Divorcios	Tasa media
1998	39.852.651	207.041	5,20	56.837	1,43	36.072	0,91
1999	40.202.160	208.129	5,18	59.547	1,48	36.900	0,92
2000	40.499.791	216.451	5,34	63.430	1,57	38.973	0,96
2001	41.116.842	208.057	5,06	65.555	1,59	37.586	0,91
2002	41.837.894	211.522	5,06	73.032	1,75	42.017	1,00
2003	42.717.064	212.300	4,97	79.423	1,86	47.319	1,11
2004	43.197.684	216.149	5,00	82.340	1,91	52.591	1,22
2005	44.108.530	208.146	4,72	55.632	1,26	93.536	2,12
2006	44.708.964	203.453	4,55	14.158	0,32	141.317	3,16
2007	45.200.737	201.579	4,46	10.211	0,23	130.880	2,90
2008	46.157.822	194.022	4,20	9.070	0,20	121.803	2,64
2009	46.745.807	174.062	3,72	8.468	0,18	115.951	2,48

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y Consejo General del Poder Judicial

Series de matrimonios del INE.

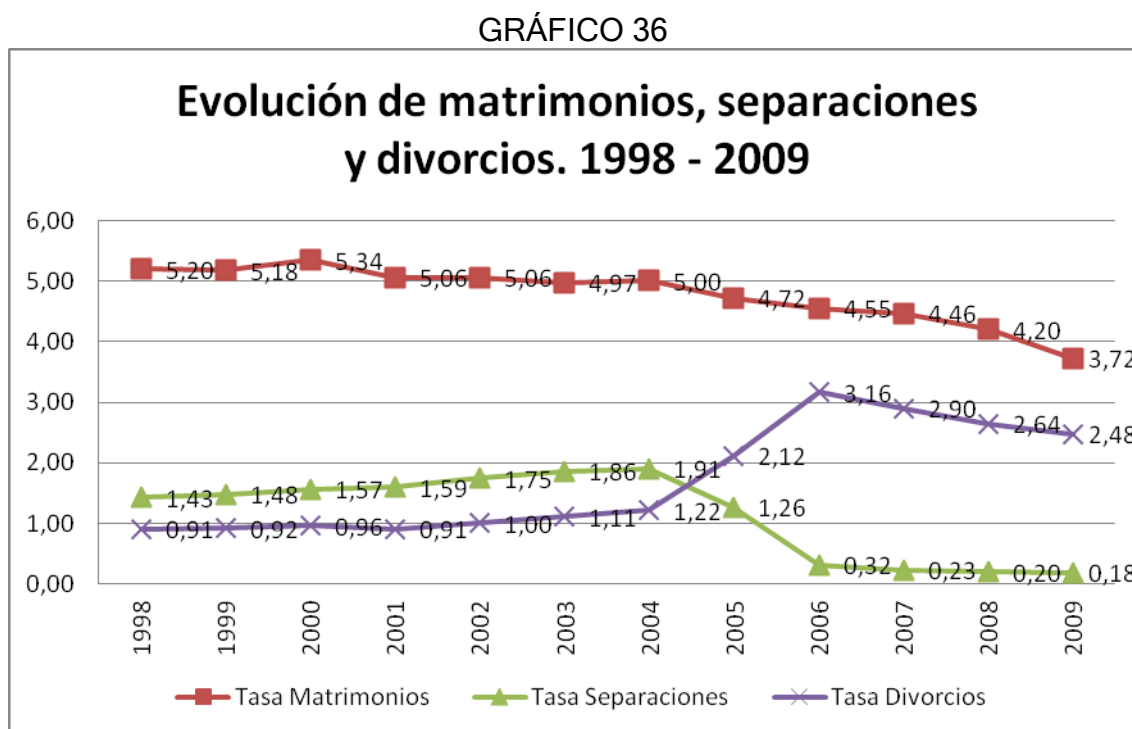
Series separaciones y divorcios: Memoria Anual del CGPJ hasta 1994 y Estad Judicial en PCAXIS desde 1995 hasta 2004. Desde 2005 en adelante uso los datos publicados en la página del poder judicial (que incorporan los procedimientos de todos los juzgados: primera instancia, instrucción y violencia contra la mujer)

⁸⁸ El divorcio disuelve el vínculo matrimonial, mientras que la separación esa la etapa previa al divorcio y las partes pueden desistir de la separación y queda sin efecto lo actuado en el proceso.

⁸⁹ Vale la pena mencionar que las tasas de matrimonios que hemos elaborado cuadran con las publicadas por EUROSTAT (2006), "Key figures on Europe. Statistical Pocketbook. Data 1995-2005", European Comission, P. 53. No tiene series históricas, sólo comparativa entre 1995, 200 y 2004. Donde difieren los datos es en los divorcios menos el del año 2003, que según EUROSTAT es 2,1 y nuestros cálculos es 1,11.

Nota: las separaciones y divorcios se refieren a procesos "ingresados", por lo que no coinciden con la estadística del INE, que publica los "resueltos"

Luego, si ponemos en un gráfico las tasas, tenemos:



Elaboración propia en base a datos del INE y Consejo General del Poder Judicial.

Aunque no podemos decir cuáles son los efectos exactamente, creemos que las reformas penales junto con la nueva ley del divorcio de 2005; todas en su conjunto han ayudado a que la tasa de matrimonios que había en 2004, que era de 4,72 haya disminuido hasta 3,72 en 2009.

Todo lo contrario ha ocurrido desde 2005 con los divorcios pues desde ese año empezó a aumentar. En 2006 obtuvo la tasa más alta en los últimos años con 3,16. De ahí, ha descendido hasta 2,48 por cada mil habitantes en 2009.

Las separaciones sufrieron un declive importante desde 2005. Ese año empezó con una tasa del 1,26 hasta terminar con 0.18. Es lógico que ahora se den menos separaciones porque obtener el divorcio es más fácil. Con lo cual la gente prefiere pedir el divorcio antes que la simple separación.

No vamos a profundizar más en este tema, pero antes de la Ley del divorcio "expres"; en los juzgados de familia de todos los procesos de separación y divorcio, había algunos donde se archivaba el proceso porque las parejas se reconciliaban.

Quien afronta el coste del divorcio son las partes, a menos que en un proceso de violencia doméstica la víctima tenga abogado de oficio y en ese caso lo cubre el estado.

Costes aproximados básicos, que asumirían cada parte serían⁹⁰:

Cuando es de mutuo acuerdo

Por la total tramitación del procedimiento:	750€
Por la negociación y redacción del Convenio Regulador sin especial complejidad:	<u>450€</u>
Total	1200€

Cuando es contencioso

Por toda la tramitación del procedimiento, incidentes y recursos excluidos, se minutará conforme a lo establecido para el juicio ordinario : **1500€**

Según Eurostat, en 2002, de cada 100 matrimonios en España se divorciaron 20⁹¹. Sería interesante saber cuántas de los divorcios se debieron a situaciones de violencia doméstica. Es posible conocer este dato si localizamos el número de divorcios presentados en los JVM. Tenemos:

CUADRO 38

AÑO	Divorcios consensuados	Divorcios no consensuados	Sub Total	Separación consensuada	Separacion no consensuada	Sub Total
2005	281	1274	1555	91	500	591
2006	572	4353	4925	143	795	938
2007	589	4636	5225	106	528	634
2008	598	5305	5903	116	490	606
2009	589	5427	6016	90	453	543
2010	609	5462	6071	67	355	422
Total	3238	26457	29695	613	3121	3734

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo General del Poder Judicial.

Ahora, lo comparamos con los matrimonios celebrados año tras año. No vamos a comparar con el 2005 porque los Juzgados empezaron a funcionar la segunda mitad de ese año.

CUADRO 39

AÑO	Separaciones ingresadas	Total Separaciones JVM	%	Divorcios ingresados	Total Divorcios JVM	%
-----	-------------------------	------------------------	---	----------------------	---------------------	---

⁹⁰ Op Cit. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID, “Criterios del Colegio ...”. P. 48

⁹¹ Op. Cit. EUROSTAT (2006), “Key figures on Europe...”, P. 53.

2006	55.632	938	1,69%	93.536	4.925	1,00%
2007	14.158	634	4,48%	141.317	5.225	0,45%
2008	10.211	606	5,93%	130.880	5.903	0,46%
2009	9.070	543	5,99%	121.803	6.016	0,45%
2010	8.468	422	4,98%	115.951	6.071	0,36%
Total	97.539	3.143	3,22%	603.487	28.140	0,52%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo General del Poder Judicial.

Vemos que las separaciones tramitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer son una mínima parte del total, no llegó al 5% el año pasado. Luego, por los divorcios vemos que la tendencia no ha llegado al 1% en los últimos años.

Parece ser que los divorcios y separaciones por violencia doméstica, sólo significan el 5% del total de divorcios y separaciones solicitadas. No podemos saber cómo era antes de 2005 porque los JVM no existían.

Se desconocen las cifras de parejas de hecho (existe un registro de parejas de hecho, pero no representa la totalidad de parejas de hecho) que deciden poner fin a la convivencia. El hecho de no formalizar su relación mediante el matrimonio, no significa que no incurran en costes cuando pojen fin a la relación. En España además hay una fuerte preferencia por comprar la vivienda, antes que alquilarla. Aunque no tienen que acudir al juzgado a solicitar el divorcio, incurren costes de transacción para llegar a un acuerdo en cómo pagar la hipoteca y quién se la queda.

CAPÍTULO VII

EFICIENCIA DEL DERECHO PENAL COMO INSTRUMENTO DE DISUASIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

1. JUSTICIA Vs. EFICIENCIA

Presentamos un cuadro resumen con la redacción de los artículos del Código Penal que recogen los delitos de violencia de género, con las últimas modificaciones dadas por la Ley Orgánica 1/2004. Presentamos en un cuadro la parte de la descripción del tipo que más nos interesa y la pena, para que sea más fácil comparar unas penas con otras.

CUADRO 40. RESUMEN DE LOS DELITOS DE VG, SEGÚN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN REALIZADA POR LA LEY ORGÁNICA 1/2004:

Artículo del Código Penal	Descripción del Tipo	Pena
Art. 148 Lesiones de V.G.	<p>Lesión que requiera tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico...</p> <p>3o) Si la víctima fuere menor de 12 años o incapaz</p> <p>4o) Si la víctima fuere o hubiese sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una relación de afectividad aún sin convivencia...</p>	<p>Prisión de 2 a 5 años.</p> <p>Prisión de 2 a 5 años.</p>
Art. 153 Malos tratos en el ambiente familiar	El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpear o maltratar de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor será castigado con pena de...	<p>Prisión de de 6 meses a 1 año, o TBC de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, , así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años.</p> <p>Se impondrá la pena en la mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima o se realice quebrantando una pena contemplada en el art. 48 o medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.</p>

<p>Art. 173 Violencia Habitual de género</p>	<p>1º) El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. 2º) El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con...</p>	<p>Prisión de 6 meses a 3 años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 2 año a 5 años, y en su caso cuando el Juez el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 1 a 5 años.</p> <p>Se impondrá la pena en la mitad superior cuando los actos se perpetren en presencia de menores o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena contemplada en el art. 48 o medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.</p>
<p>Art. 171 Amenazas VG</p>	<p>4o) El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una relación de afectividad aún sin convivencia , será castigado con...</p> <p>Si la víctima es persona especialmente vulnerable que conviva con el autor...</p> <p>5º) El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el art. 173.2, exceptuadas las del numeral 4...</p>	<p>Prisión de de 6 meses a 1 año, o TBC de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas, etc. Se impondrá la pena en la mitad superior cuando los actos se perpetren en presencia de menores o se realicen quebrantando una pena contemplada en el art. 48 o medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.</p> <p>Igual pena</p> <p>Prisión de 3 meses a 1 año, o TBC de 31 a 80 días, y en todo caso privación del derecho de tenencia y porte de armas de 1 a 3 años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 6 meses a 3 años.</p> <p>Se impondrá la pena en la mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima o se realice quebrantando una pena contemplada en el art. 48 o medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.</p>
<p>Art. 172 Coacciones VG</p>	<p>2º) El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una relación de afectividad aún sin convivencia , será castigado con...</p>	<p>Prisión de de 6 meses a 1 año, o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas, etc. Se impondrá la pena en la mitad superior cuando los actos se perpetren en presencia de menores o se realicen quebrantando una pena contemplada en el art. 48 o medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.</p>

	Si la víctima es persona especialmente vulnerable que conviva con el autor...	Igual pena Se impondrá la pena en la mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima o se realice quebrantando una pena contemplada en el art. 48 o medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.
--	---	--

Nota: TBC se lee como Trabajos en Beneficio de la Comunidad.

Cuando existe violencia dentro de la esfera del hogar; la mujer pareja no siempre es la persona más vulnerable, pueden ser los hijos menores de edad, los abuelos, una trabajadora del hogar sin papeles, o una mujer con algún tipo de discapacidad. Cuestión diferente es el nivel de protección que el regulador pretenda otorgar a todas las personas descritas anteriormente.

El regulador, desde la Ley Orgánica 11/2003, ha incrementado las sanciones penales para delitos de violencia doméstica. Con la Ley Orgánica 1/2004 fue más allá, y optó por incrementar la pena más todavía cuando el perpetrador del delito sea el marido o novio y la víctima una mujer⁹². Está claro entonces que el objetivo del regulador es incrementar las penas para delitos de violencia doméstica en general y de violencia contra la mujer pareja en particular.

Aún así hay incongruencias sobre quiénes serían los sujetos de protección, los calificados como víctimas. Los arts. 153 (Malos tratos en el ambiente familiar) y 172.2 (Coacciones de Violencia de género), con las modificaciones realizadas por la L.O. 1/2004, contemplan como víctimas dos personas:

- La mujer pareja o ex pareja; y
- Persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

De esta manera, han omitido a las otras posibles víctimas de violencia doméstica, como pueden ser ascendientes e hijos mayores de edad, los cuales sí están contemplado en el art. 171.4 (Amenazas de género) y 173.2 (Violencia habitual de género). Esta parte no tiene concordancia con la intención del legislador de aumentar la sanción cuando la víctima sea un integrante del núcleo familiar.

Para evitar caer en la omisión, creemos que sería mejor plantear en cada tipo penal un agravante si la víctima es parte del núcleo familiar.

Por otro lado, el art. 173.2 añade habitualidad a la violencia doméstica y de pareja. Creemos que es correcta la exigencia de habitualidad, porque de lo contrario, se estaría penalizando inclusive un manotazo puntual a la mujer pareja, -que aunque estamos de acuerdo que no debería suceder- lo cual llevaría a la sobre criminalización de situaciones que al verse impedida de detener un proceso penal de investigación con todas las consecuencias que eso genera, al final esas consecuencias le perjudican más que ayudan. Más adelante enumeraremos los efectos de la sobre criminalización de la violencia

⁹² Para mayor detalle, se puede revisar la evolución de las modificaciones de la legislación penal en la materia, en el Apéndice de este trabajo.

de género en EEUU, país pionero en políticas preventivas y correctivas de este tipo de delitos.

Si el agresor es hombre, es delito y tiene mayor pena. Justicia Vs. Eficiencia

Según reza la exposición de motivos de la Ley 1/2004, “la violencia de género es símbolo de la desigualdad existente en nuestra sociedad, se da sobre las mujeres por el mero hecho de serlo pues sus agresores las consideran carentes de derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.

Dado que la mayor parte de las normas penales de esa ley, agravan las penas para los delitos de pareja⁹³; nos preguntamos si siempre que hay violencia en la pareja es por motivos machistas, por eso los detractores de las normas de discriminación positiva en materia penal han cuestionado duramente esta motivación. De todas formas y al margen de la polémica, lo cierto es que no tiene sustento empírico -que nosotros sepamos- y es igualmente difícil de probar en un juicio.

De lo que sí hay evidencia empírica (de índole económica y sociológica) es de la importancia del factor empleo (directamente relacionado con la renta, las fuentes de financiamiento del hogar), más concretamente, el estrés que genera la falta de empleo en el hombre. Es de los variables que más influyen en el aumento de la violencia.

No se puede negar que algún efecto tiene la histórica discriminación de la mujer en distintos ámbitos del desarrollo de su proyecto de vida, pero habrá que analizar cada caso. No es tarea fácil para los jueces dilucidar en los casos de violencia en la pareja, en qué casos hubo machismo o no. Mientras que por un lado el regulador justificó el aumento de penas hacia los hombres por la desigualdad entre hombres y mujeres; los propios jueces plantearon recursos de inconstitucionalidad a los artículos del Código Penal modificados por la Ley Orgánica 1/2004, que por cierto no ha prosperado ninguno ellos. El Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad, -valga la redundancia- de todas las normas penales más polémicas⁹⁴.

Luego, siendo objetivos, los índices de violencia de pareja sobre la mujer en España no parecen especialmente alarmantes, si lo comparamos con países vecinos. Como hemos dicho en el capítulo referente a la tasa de homicidios de mujeres en manos de su pareja, comparados con otros 34 países de diferentes continentes, e inclusive entre países europeos; España está por debajo de la media. Lo cual no quiere decir que por eso sea menos importante, pero sí nos

⁹³ Aunque en la parte 1 del Apéndice, se comprueba que en realidad la agravación de las penas y la ampliación del tipo penal empezó con la L.O. 11-2003.

⁹⁴ Así tenemos las sentencias más importantes, todas planteadas por Jueces:

- Sentencia 59/2008 sobre la inconstitucionalidad del art. 153 del C.P.
- Sentencia 127/2009; del art. 171.4 del C.P.
- Sentencia 151/2009; del art. 152.2 del C.P.
- Sentencia 60/2010; del art. 57.2 del C.P.
- Sentencia 77/2010 de octubre; de los artículos 171.4, 173.2 y 173.3 del C.P..
-

permite valorar la magnitud de la violencia más grave cometida por el hombre sobre la mujer.

En sociedades con economías estables y relativamente prósperas como la española u otros países europeos, donde las desigualdades entre clases sociales son más estrechas, la seguridad social es universal y las mujeres pueden estudiar y trabajar libremente sin ningún tipo de impedimento legal ni social (incluimos dentro de ello a las ideologías religiosas), las mujeres están en bastante mejor posición que otros países. El coste de oportunidad de separarse de una pareja violenta es menor en España, que en países latinoamericanos por ejemplo.

Creemos que no es necesario ir tan lejos buscando argumentos que justifiquen la discriminación positiva en el campo de la violencia de género. La violencia es violencia y debe ser contrarrestada con la ley penal; siendo una de las agravantes cuando la víctima es una mujer. Pero, habría que considerar un posible efecto de esta política; si ella comete un delito de semejantes características, es posible que le corresponda menos pena. Aunque no disponemos de datos comparativos de media de años de prisión entre hombres y mujeres por delitos de la misma categoría y siendo que las mujeres cometen menos delitos violentos que los hombres; puede generar incentivos para que los jueces y los jurados populares en base al argumento del machismo le podrían imponer una pena inferior a la mujer, lo cual no sucedería si fuera un hombre. Hace poco se ha dado un caso donde una mujer fue absuelta del delito de asesinato contra su marido, indicando que uno de los argumentos principales para eximirla de responsabilidad penal fue el maltrato que estuvo sufriendo durante año⁹⁵. Al final este tipo de situaciones no hace más que dar argumentos a los detractores de la discriminación positiva.

Habría que encontrar un equilibrio para por un lado proteger a la mujer en los casos de maltrato sin que eso genere desequilibrios en la disuasión de delitos para hombres y mujeres.

¿El maltrato de un marido a su mujer produce más daño que el ocasionado por la hija a su madre?

Si hay lesiones físicas, se puede medir el daño. Pero cuando el maltrato es psicológico -exclusivamente o acompañado de violencia física leve-, si quien lo infringe es una hija sobre su madre ¿Le causará menos daño psicológico que si lo hace el marido?.

¿El regulador puede observar los beneficios de los perpetradores de violencia de género?

El delito de violencia de género genera beneficios para quien lo comete, diferentes a los que puede proporcionar un delito patrimonial o un delito de lesiones cometido contra cualquier otra persona diferente de la pareja. La mayoría de esos beneficios son no monetarios, lo cual hace difícil medirlos.

⁹⁵ Un jurado popular de Navarra absolvió de todos los cargos a una mujer aunque estaba probado que fue ella quien clavó una cuchillada a su marido, motivo por el cual falleció. El hecho ocurrió en noviembre de 2009 y la absolvieron en octubre de 2010. La fiscalía consiguió anular la sentencia y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ordenó se repita el juicio con otro jurado y otro juez. En diario EL PAÍS, 25 de febrero de 2011.

Por la naturaleza del delito, se hace muy difícil determinar qué conflictos de pareja van a terminar en sucesos de violencia y hasta dónde puede llegar el agresor. En otras palabras, al margen del nivel de violencia, el regulador no puede saber *ex ante* los beneficios del ofensor.

Debido a ello, el legislador ha preferido optar por la agravación de las penas cuando el agresor es o ha sido pareja. Si se deja de lado el criterio de justicia y en aras de buscar una motivación desde el punto de vista de la eficiencia, decimos:

El bienestar social es la suma de todos los beneficios, menos el daño causado de todos los crímenes, menos el coste de imponer las sanciones⁹⁶. En nuestro escenario, y desde la perspectiva del que comete el delito de violencia sobre una mujer:

$$P_x < P_m$$

Donde

P_x = Pena para crímenes cometidos por cualquier persona

P_m = Pena para crímenes cometidos por el marido

Siguiendo a Garoupa en su intento por buscar argumentos para justificar la eficiencia de las agravantes penales por delitos raciales⁹⁷, la sociedad tiene como objetivo escoger los niveles más óptimos de P_x y P_m para la maximización del bienestar social; entonces los beneficios obtenidos de cometer crímenes de los m deberían descontarse más.

Por tanto, en términos marginales, tendríamos:

$$B_x < B_m$$

B_x = Beneficio marginal de disuadir a cualquier persona

B_m = Beneficios marginal de disuadir a los maridos

Finalmente, de forma intuitiva podemos decir que el coste de castigar a los X; en consecuencia, debería ser mayor que castigar a los M.

$$C_x > C_m$$

Donde:

C_x = Coste marginal de aumentar el castigo a los X

C_m = Coste marginal de aumentar el castigo a los M

Por tanto, sería óptimo tener una política donde $P_x < P_m$, siempre y cuando el coste marginal de aumentar el castigo a los X sea menor que cuando se aumente para los M.

⁹⁶ Polinsky and Shavell, (2000).

⁹⁷ GAROUPA, N. and DHARMAPALA, D. (2004). "Penalty enhancement for Hate Crimes: An economic analysis". *American Law and Economics Review*, Vol 6. N° 1.

Imponer castigo es costoso, pero que el coste de imponer un castigo sea mayor cuando se trata de un individuo cualquiera, que cuando se trata del marido; se podría explicar en parte por la probabilidad de detección y de ser finalmente condenado con una pena determinada (aumentada). Es claramente identificable el delito de violencia de género, cuando quien ejerce la violencia contra la mujer es su marido.

Está muy claro cuando se trata de un delito grave, como un homicidio o una lesión grave donde hay pruebas suficientes, efectivamente resulta más fácil aumentar la pena, pero si hablamos de un tipo de delito como los malos tratos psicológicos, o las vejaciones leves, coacciones leves, amenazas leves; la prueba es más difícil de conseguir. Es más, el coste marginal de aumentar el castigo para cualquiera de esos delitos, cuando lo cometa X o M, sería el mismo. Esta conclusión podría llevarnos a sugerir que para delitos no tan graves, aumentar la pena para delitos de violencia de género, cometidas por el marido contra la mujer; al final podría tener un efecto igual que si no se aumentara, desde el punto de vista del bienestar social⁹⁸.

Por la forma cómo terminan casi la mitad de los procesos por delitos de violencia de género, porque la mayoría son de hechos que no revisten gravedad⁹⁹; no creemos que sea eficiente aplicar incrementos a todas las sanciones penales cuando la víctima es una mujer, sin tener en cuenta los grados de violencia.

2. INCENTIVOS DE LA MUJER VÍCTIMA

Antes de entrar en una relación violenta, lo óptimo para ella y para la sociedad, sería que ella misma ex ante evite relacionarse con un hombre violento y ex post, que denuncie a la pareja y/o deje la relación.

Aparentemente lo primero es más fácil de realizar que lo segundo. Por la naturaleza del delito (síndrome de la mujer maltratada), denunciarle resulta costoso para la mujer.

Con las últimas reformas penales, el sistema de incentivos ha sido modificado de tal forma que estos últimos años las mujeres denuncian más, pero ¿A qué precio?. Se han concentrado todos los esfuerzos en la intervención del derecho penal para compensar la falta de esos incentivos para denunciar, pero pensamos que hay situaciones donde lo óptimo sería que el derecho penal intervenga menos, o tal vez sustituirla con otro tipo de intervención.

⁹⁸ Estamos simplificando mucho desde luego, porque sabemos que el hecho mismo de pasar por los Juzgados, por un proceso de violencia de género, genera costes para un ofensor averso al riesgo en cuyo caso, aunque no pueda ser condenador por falta de pruebas, la parte inicial del proceso serían disuasorio per se.

⁹⁹ Nos remitimos al análisis de las estadísticas judiciales en materia penal del numeral 7, capítulo III de este trabajo.

Hemos visto en el capítulo de estadísticas judiciales que el 45% de las denuncias ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se archivan en la etapa de instrucción porque no hay indicios suficientes que el delito se haya cometido. Luego, la mayoría de esas denuncias son por lesiones y malos tratos en el ambiente familiar (Art. 153 del C.P.). Por tanto se podría decir ese 45% corresponden a denuncias de hechos que no revisten gravedad, donde el uso del derecho penal ha servido solamente de advertencia seria para el individuo porque la probabilidad de la sanción depende que se pruebe la comisión del delito.

Por ende, creemos que para delitos menos graves como son los artículos 173.2 (Violencia habitual de género), 171.4 (Amenazas leves), 172.2 (Coacciones leves) y el 153 (Malos tratos en el ambiente familiar) del Código Penal; se debería optar por de forma obligatoria o alternativa una intervención tal vez del Juez de Familia a la vez que los Servicios Sociales. Un entorno donde se les brinde orientación y apoyo que es, a lo mejor, lo que más necesitan por encima de un proceso penal.

Todo esto nos lleva a sugerir que hace falta un seguimiento más personalizado de parte del estado, mediante ayuda psicológica, seguimiento con los Servicios Sociales pero no sólo para la víctima, sino también para el agresor. Creemos que durante este proceso, se reconocería mejor aquellas situaciones donde la violencia es más grave o menos grave.

En los procesos penales, el Juez de Instrucción (sea de JVM como JP), puede pedir un informe Psico-Social de la situación de la mujer, pero eso no es la regla, es la excepción. La valoración del riesgo además lo hace un Policía en la comisaría y luego de eso no hay ninguna otra herramienta que ayude a valorar si la situación de riesgo persiste y en qué grado.

3. *AVOIDANCE* DE LA VÍCTIMA

Las precauciones que ella debería tomar para evitar una relación violenta, dependen primero de saber reconocer a un hombre potencialmente violento, luego su bagaje cultural, convicciones religiosas, de educación le harán más o menos propensa a tener una relación con un hombre potencialmente violento. Muchas evitan las relaciones violentas, pero otras no lo hacen aunque les genera más costes tener una relación así, que no tenerla. No es lógico. Esto hace que sea muy difícil lograr persuadir a todas, porque es un tema muy personal. La labor de educación, concienciación mediante los medios de comunicación ayudan, pero al final quien decide es ella.

Si ya está inmersa en una relación con un hombre violento, el coste de oportunidad dependerá del número de hijos que tengan en común, dependencia económica, miedo a quedarse sola, entre otros factores. Esto nos lleva a pensar que las políticas deben orientarse a que una vez denunciado el hecho de violencia, se debería proporcionar apoyo psicológico permanente a la mujer y se afiance su independencia económica.

El nivel de precauciones que debería tener la víctima, cuando hay un exceso de protección, puede generar que la víctima tome menos precauciones para evitar relaciones conflictivas y cuando ya está en medio de la relación y se da cuenta que su pareja es violenta, no corte con la relación al primer “aviso”, sino que continúe hasta que finalmente se da la violencia.

Es posible que la víctima confíe en el amparo de la ley y siga con la relación hasta que se llegue al punto donde se da la violencia.

Por eso, la amenaza de denuncia por parte de ella, es bastante creíble dado el sistema penal de protección de víctimas de violencia de género que hay ahora mismo. Como siempre, para maltratadores aversos al riesgo, puede funcionar la amenaza; para los neutrales muchas veces no ayuda, todo lo contrario, puede hacer que las probabilidades de infligir violencia aumenten, conforme dicen los estudios.

Efectos de las ayudas públicas y privilegios laborales.

La Ley 1/2004 creó una ayuda financiera de un pago único de 2.556€ o 7.668€ si tiene hijos¹⁰⁰ destinada a víctimas de violencia de género¹⁰¹. La acreditación para obtener esta ayuda es la orden de protección o el Informe del Ministerio Fiscal donde indique que existen indicios de la comisión del delito¹⁰². Inicialmente, se pensó que las mujeres irían en masa a pedir esta ayuda, pero no ha sido así, aunque estos últimos años la situación ha cambiado.

Según datos del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, entre 2006 y 2009 se habían concedido 717 ayudas económicas a víctimas de violencia de género, de las cuales 210 correspondían al año 2009, y se denegaron 1058 solicitudes. Son cantidades insignificantes comparadas a la cantidad de denuncias de violencia de género que se dan año tras año. El límite del 75% del

¹⁰⁰ El 80% del IPREM de 2011 es 426 €. Las cantidades mencionadas resultan de multiplicar los 426 por 6 y por 18.

¹⁰¹ “Artículo 27. *Ayudas sociales*:

1. Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional.

2. El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, el importe sería equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo.

3. Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, serán concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. En la tramitación del procedimiento de concesión, deberá incorporarse informe del Servicio Público de Empleo referido a la previsibilidad de que por las circunstancias a las que se refiere el apartado 1 de este artículo, la aplicación del programa de empleo no incida de forma sustancial en la mejora de la empleabilidad de la víctima. La concurrencia de las circunstancias de violencia se acreditará de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de esta Ley.

4. En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.

5. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual”.

¹⁰² Art. 23 de la Ley 1/2004.

salario mínimo inter profesional (IPREM) es una barrera por sí misma; sólo pueden acceder a la ayuda quien carezca de rentas superiores a 481,05€, además que de sus especiales dificultades para obtener un empleo y que por dicha circunstancia no participaría en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional.

De todas formas, la Ley 1/2004 no es la primera en contemplar ayudas dinerarias. La primera referencia la encontramos en la Ley 35/95 de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y la R.D. 738/1997 de 23 de mayo que reglamenta su aplicación¹⁰³. No es exclusivo para mujeres. Está orientado para quienes sufren lesiones corporales graves o daños graves en su salud física o mental, o con el resultado de muerte, como consecuencia de delitos dolosos y violentos. Asimismo, se benefician las víctimas de delitos contra la libertad sexual, aun cuando éstos se perpetraran sin violencia¹⁰⁴. Cabe mencionar que esta ayuda no se aplica para víctimas en situación ilegal en España

Luego, mediante Real Decreto 1369/2006 por el que se regula el programa de Renta Activa de Inserción (RAI) para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. Los requisitos son: Tener acreditada por la Administración competente la condición de víctima de violencia de género o doméstica, salvo cuando conviva con el agresor, y estar inscrito como demandante de empleo, carecer de rentas superiores a 481,05€ (75% del IPREM), y demás requisitos exigidos¹⁰⁵, excepto el de ser mayor de 45 años y ser demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente como desempleado durante doce o más meses.

Para acreditar la condición de víctima de violencia de género, este Real Decreto exige¹⁰⁶:

- Orden de protección judicial o resolución judicial acordando medida cautelar penal de protección a favor de la mujer.
- Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que está siendo víctima de violencia de género en tanto se dicta la orden de protección.
- Sentencia condenando al agresor.
- Certificación de los servicios sociales de la Administración Autonómica, del Ayuntamiento, o del Centro de Acogida indicando su situación.

Se contemplan dos tipos de ayudas para mujeres víctimas de violencia de género:

¹⁰³ GANZENMÜLLER, ESCUDERO y FRIGOLA (1999); P. 223.

¹⁰⁴ Ver Art. 1 de la Ley 35/1995. Anotamos también como medida innovadora, que esta ley contempla dentro de los beneficiarios, al cónyuge del fallecido, si no estuviera separado legalmente, o la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido de forma permanente con análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con *independencia de su orientación sexual*, durante al menos los dos años anteriores al momento del fallecimiento.

¹⁰⁵ Art. 2

¹⁰⁶ Guía de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. P. 17-18. En www.migualdad.es.

- Percepción de la RAI, que es el 80% del IMPREM (426,00€), durante un máximo de 11 meses.
- Ayuda para cambio de residencia de víctimas de violencia de género o doméstica. Las víctimas de violencia de género o doméstica que se hayan visto obligadas y acrediten cambio de su residencia en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al programa de renta activa de inserción o durante su permanencia en éste, podrán percibir en un pago único una ayuda suplementaria de cuantía equivalente al importe de tres meses de renta activa de inserción (1.278,024€), a partir del día siguiente a aquel en que se solicite.

Los datos que hemos encontrado son los siguientes:

CUADRO 41. BENEFICIARIAS DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN (RAI)

Año	Mujeres beneficiarias	Variación anual %
2006	10924	
2007	13291	21,70
2008	16883	27,00
2009	22010	30,40

Fuente: III Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

Las beneficiarias de la ayuda para cambio de residencia enero de 2005 a diciembre de 2009, fueron 6011¹⁰⁷.

Estos dos tipos de ayudas, por el hecho de ser víctima de violencia de género, han aumentado significativamente el año 2009. Muy probablemente, el aumento de solicitudes de ayudas se explique en parte, a la situación difícil por la que está atravesando la economía española, por ende hay más gente que no tiene renta alguna o si la tiene es inferior a 481,05€.

Las beneficiarias de 2009, representan el 15% del total de denuncias de las denuncias por violencia de género de ese año. Teniendo en cuenta que desde el año 2006, el número de denuncias no ha ido en progresión; de hecho se ha estabilizado¹⁰⁸, todo hace suponer que la solicitud de RAI irá en aumento en la medida que ellas se sigan informando de este beneficio en concreto y la situación económica empeore.

No exigir una sentencia condenatoria que ratifique que existió violencia también facilita que más mujeres lo pidan. Parece acertado que otro de los requisitos sea que no conviva con el agresor, porque así se incentiva a la mujer a que se independice.

¹⁰⁷ III Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. P. 16. En ambos casos, sólo hay datos hasta 2009.

¹⁰⁸ Ver gráfico de la página 50. El 2010 cerró con 134.105 denuncias.

El Observatorio no menciona qué porcentaje de las beneficiarias son extranjeras.

Hay otro tipo de facilidades, como derecho de prioridad al acceso de vivienda protegida (Art. 28 de la L.O. 1/2004), para víctimas de violencia de género. En el III Informe Anual del Observatorio de Violencia Estatal de Violencia sobre la Mujer no hay datos de número de beneficiarias de vivienda protegida.

Finalmente, hay otros dos tipos de incentivos, dirigido a los empleadores, que deberían beneficiar la inserción laboral de la mujer maltratada:

- Bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, cuando formalicen contratos para sustituir a las víctimas de violencia de género¹⁰⁹; y
- Bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social 70,83 euros/mes (850 euros/año) durante 4 años cuando se formalice contrato indefinido para una víctima de violencia de género¹¹⁰.

Los contratos bonificados de sustitución de mujeres víctimas de violencia de género desde 2005 - diciembre de 2009, han sido 364.

Los contratos bonificados de contratación de víctimas de violencia de género, desde la publicación de la D.L. 5/2006 hasta 2009, han sido 2369.

No han sido muchas las altas de estos contratos, lo cual nos dice que no son incentivos suficientes para que los empresarios se animen a contratar víctimas de violencia de género, también puede ser que haya falta de información suficiente. Otro de los motivos podría ser que ella no quiera comunicar que es una víctima por vergüenza, por temor a la estigmatización que tendría en su centro de trabajo.

Otra idea para que esta ayuda, que es muy buena, sea más utilizada y funcione de verdad, es que el trámite de reconocimiento ante la Seguridad Social, lo haga ella directamente. Una vez que ella tenga este beneficio, se puede presentar a trabajar ante cualquier empresa, si quiere puede mencionar que tiene un beneficio ante la Seguridad Social que hace que la empresa pague cuotas sociales reducidas por contratarla y no sería necesario decir el motivo.

4, INCENTIVOS DE LAS VÍCTIMAS EXTRANJERAS

La Ley Orgánica 1/2004 no se pronuncia de forma especial sobre las mujeres inmigrantes víctimas de violencia doméstica. Sólo hace mención de ellas en la

¹⁰⁹ Art. 21.3 de la L.O. 1/2004.

¹¹⁰ Es parte de la batería de medidas que el Real Decreto Ley 5/2006 “Para la mejora del crecimiento del empleo”. Ver Numeral 3 del art. 2: “... Tendrán derecho, desde la fecha de celebración del contrato, a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 70,83 euros/mes (850 euros/año) durante 4 años.

En el caso de que se celebren contratos temporales con estas personas se tendrá derecho a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 50 euros/mes (600 euros/año), durante toda la vigencia del contrato”.

parte de planes de colaboración entre las distintas instituciones del Estado¹¹¹, que finalmente es una mera declaración de intenciones.

Resulta curioso que la Ley Integral 1/2004 buscaba proteger a la mujer de la violencia por el mero hecho de serlo y porque “En la realidad española, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia”¹¹², cuando las mujeres inmigrantes están sobre-representadas en todas las estadísticas de violencia sobre mujeres (muertes, lesiones, solicitudes de órdenes de protección, etc).

Los costes de este colectivo son superiores a los costes de las mujeres españolas en la mayoría de casos porque a diferencia de los inmigrantes de la Unión Europea, muchos de ellos vienen de familias muy humildes con ganas de buscar una mejora en sus condiciones de vida y la mayoría de ellos son de estratos sociales bajos por tanto vienen a cubrir puestos de trabajo que piden exigen poca cualificación educativa. En este escenario y al margen de la situación administrativa de la víctima, -tengan o no residencia legal en España- pueden darse las siguientes circunstancias:

- Muchas de ellas no tienen familia y si la tienen poca ayuda pueden prestarles porque tal vez están en la misma situación de ella. Si tienen amigos, los que pudo hacer durante su estancia aquí seguramente son parte del entorno cercano de la pareja, con lo cual no tendría incentivos para pedirles ayuda porque lo conocen. Si no fuera por el marido, estarían completamente solas en este país.
- Dependencia económica y legal del marido. Recordemos que como están actualmente las normas de extranjería, si un hombre trae a su esposa por reagrupación familiar, no tiene derecho a trabajar (Hasta que obtenga un permiso de trabajo, lo cual es complicado), con lo cual se incentiva que la mujer extranjera dependa de su marido económicamente. Luego, si hubiera querido separarse de él o divorciarse, tendría que haber esperado un tiempo reglamentario de 2 años para poder permanecer en el país legalmente, de forma independiente del cónyuge.

Por tanto, ellas son menos proclives a denunciar al marido maltratador. Esta situación se ha paliado en alguna medida con la nueva Ley de Extranjería de 2009¹¹³.

¹¹¹ Ley Orgánica 1/2004. Numeral 4 del Art. 32, sobre planes de colaboración: “En las actuaciones previstas en este artículo se considerará de forma especial la situación de las mujeres que, por sus circunstancias personales y sociales puedan tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta Ley, tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que se encuentran en situación de exclusión social o las mujeres con discapacidad.”

¹¹² IBID. Exposición de motivos. P. 1, cuarto párrafo.

¹¹³ Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El art. 34 dice: “Se añade un nuevo artículo 31 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 31 bis. *Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.*

1. Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como las medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente.

El Protocolo de Actuación de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, actualizado tras la aprobación de la Ley Integral, contempla la obligación de informar a las víctimas extranjeras en situación irregular de su derecho a regularizar su situación por razones humanitarias. Concretamente, la nueva Ley de Extranjería, contempla en el artículo 31bis, que la víctima de violencia de género extranjera que no tenga su situación en España regularizada, el expediente de expulsión quedará suspendido hasta que se resuelva el proceso penal. Podrá además, solicitar permiso de residencia temporal a una víctima de violencia de género, a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en su defecto, Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. Si el proceso penal concluye condenando al imputado, se concederá de forma definitiva la residencia temporal y de trabajo solicitada. Si es absuelto, el expediente de expulsión seguirá su trámite.

Existe el temor que por la redacción de la nueva Ley y por lo que probablemente se apruebe con el nuevo reglamento de Extranjería¹¹⁴, se incentive a las mujeres inmigrantes en situación irregular para que usen esta vía para obtener un permiso de residencia y de trabajo. Contrario a lo que se podría imaginar, las autorizaciones de residencia temporal a mujeres extranjeras concedidas en 2009 fueron 613. Sumando las autorizaciones concedidas de 2005 a 2009, son 1467 en total¹¹⁵.

GRÁFICO 36: CONTINENTE DE ORIGEN DE LAS BENEFICIARIAS DE AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA TEMPORAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA.

2. Si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, el expediente administrativo sancionador incoado por infracción del artículo 53.1.a) de esta Ley será suspendido por el instructor hasta la resolución del procedimiento penal.

3. La mujer extranjera que se halle en la situación descrita en el apartado anterior, podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en su defecto, Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. Dicha autorización no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal.

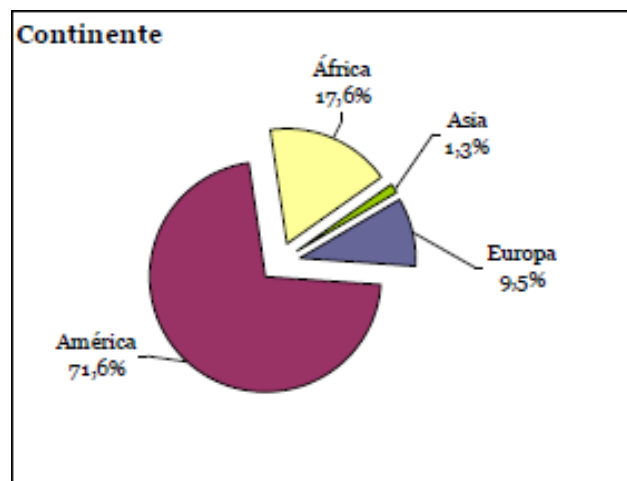
Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para otorgar la autorización por circunstancias excepcionales podrá conceder una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera. La autorización provisional eventualmente concedida concluirá en el momento en que se conceda o deniegue definitivamente la autorización por circunstancias excepcionales.

4. Cuando el procedimiento penal concluyera con una sentencia condenatoria, se notificará a la interesada la concesión de la residencia temporal y de trabajo solicitada. En el supuesto de que no se hubiera solicitado, se le informará de la posibilidad de conceder a su favor una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales otorgándole un plazo para su solicitud.

Cuando del procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la situación de violencia de género, continuará el expediente administrativo sancionador inicialmente suspendido.»

¹¹⁴ Borrador del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de febrero de 2011, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. Artículo 59, Numeral 2, Inciso B.

¹¹⁵ Fuente: III Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.



Fuente: III Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

La población inmigrante que más se ha beneficiado de esta ayuda es la que proviene de América. Para ser exactos, la mayoría proviene de América Latina, según hemos visto en cifras de población extranjera por continentes, en el apartado Cifras de población femenina por país de nacimiento¹¹⁶.

Esto llama mucho la atención cuando la mayoría de inmigrantes son de Rumanía y Marruecos. Esto puede significar dos cosas: Que son los que más población en situación irregular integran y que los inmigrantes latinoamericanos son muy proclives a hacer uso de los beneficios que otorga la Ley.

5. EL BENEFICIO ESPERADO DEL MALTRATADOR

En delitos de menor gravedad, la probabilidad de ser capturado y penado, según lo expuesto en el acápite anterior, es inferior por la falta de pruebas. Aunque el supuesto agresor no queda absuelto; se archiva el proceso. En este escenario no se ha conseguido la disuasión, como el beneficio esperado es mayor al valor esperado de la probabilidad y el coste de la sanción; cometerá el delito. Por eso, insistimos en la necesidad de un seguimiento psicológico y psiquiátrico, al margen que el agresor sea finalmente penado o no.

Además, nos preguntamos por qué el regulador decidió que para delitos de violencia de género, no se puede sustituir la pena de prisión por programas de reeducación y tratamiento psicológico y sólo deje sustituirla por la de trabajos en beneficio de la comunidad (Art. 88 del C.P.). Volvemos a ver otra señal indicativa de imponer el mismo nivel de sanción a todos los grados de violencia. Esto también va en contra de la disuasión marginal

Por otro lado, para los delitos de mayor gravedad la sanción sigue siendo la misma (Art. 148 del C.P., lesiones que requieren tratamiento médico; el homicidio y el asesinato). Para esos delitos no se han modificado los incentivos de los agresores, con lo cual están en la misma situación que antes de las reformas penales del 2003 y 2004.

¹¹⁶ P. 44 y 45

Para los delitos de mayor gravedad, todo indica que esos individuos son neutrales al riesgo; con lo cual se hace difícil lograr la disuasión en ellos. Tal vez sea casi imposible disuadirlos, por eso es muy costoso detectar cuándo nos encontramos ante un individuo así.

6. INTERVENCIÓN DEL DERECHO PENAL CON RESULTADO ÓPTIMO

Históricamente la discriminación positiva empezó a aplicarse por razón de raza. Hay abundante bibliografía sobre este tema, por la lucha federal contra las políticas discriminatorias de varios estados sureños de los Estados Unidos, referidos a segregación escolar y discriminación laboral. Al margen que han habido posiciones a favor y en contra de este tipo de políticas, el tiempo ha hecho que sean mayoritariamente aceptadas porque tienen justificación en los derechos fundamentales de las personas reconocidos por las Leyes internacionales, y porque intenta compensar la histórica y estadísticamente probada desigualdad.

Siguiendo la experiencia de E.E.U.U; desde el punto de vista económico, una de las ventajas de no ejercer discriminación racial puede ser en principio, se promueve el comercio interno pues, las contrataciones de los negros aumentarían.

Hay unanimidad cuando se afirma que aunque aceptadas, las leyes anti-discriminatorias son costosas. ¿Quiénes asumirían ese coste?. Los negros pagan como consumidores y como trabajadores su parte proporcional de todos los costes que las leyes contra la discriminación impongan a las empresas. Sin embargo los comparten con los blancos, mientras que los beneficios sólo llegan a los negros. Además, entre más cueste a las empresas contratar a trabajadores negros mayores serán los esfuerzos de éstas por minimizar la contratación de negros.

Los costes adicionales que deben asumir los empresarios pueden encarecer el coste del producto y por tanto quienes pagarán finalmente serán los consumidores. También es posible que la disminución de la discriminación en el empleo, puede generar un aumento de juicios por discriminación en el empleo¹¹⁷.

Desde el punto de vista económico, interesa saber ¿Quiénes deberían pagar estos sobrecostes? Becker dice que debería pagar toda la sociedad. Podemos estar de acuerdo con esa posición, pero al final habrá que analizar con profundidad los efectos en todos los agentes económicos, porque se podría beneficiar a personas distintas de las que queremos proteger o imponer sobre costes a quienes queremos proteger especialmente¹¹⁸.

¹¹⁷ POSNER, Richard. El análisis Económico del Derecho. Título XXVI sobre la Discriminación racial. En P. 616 y 617.

¹¹⁸ POSNER, Richard. Ibid. Pone un buen ejemplo de externalidades no deseadas de una Regulación que establezca reglas menos rigurosas para los negros, para el ingreso a las facultades de Derecho, porque la mayoría de la población afroamericana es pobre, y tiene resultados académicos inferiores como consecuencia de lo anterior. El ser negro, en estas políticas, se utilizan como el criterio de preferencia a

Así también, puede darse la situación que a veces paguen más los que las Leyes Anti-discriminatorias quieren proteger. Con el caso de la discriminación racial en las escuelas de los estados sureños de Estados Unidos, al principio el efecto de esas leyes era bastante reducido porque las familias blancas estaban dispuestas a pagar más -como mudarse a otro poblado- por llevar a sus hijos a otros colegios donde se mantenía la segregación. Lo mismo para escuelas universitarias, si se facilita el ingreso a negros por las razones que dijimos antes, se puede estar “incentivando” a las familias blancas, con dinero e influyentes, se lleven a sus hijos a otras escuelas donde no permitan negros, de tal manera que esto generará que los negros, a largo plazo, no se beneficien de las relaciones que podrían haber generado en las aulas universitarias que les proporcionaría un trabajo de mejor posición, o mejor remunerado en el futuro.

Hasta ahora hemos dado unas pinceladas sobre el análisis económico de las leyes anti-discriminatorias por razón de raza, para que nos sirva de punto de partida para abordar el tema de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja.

En materia de discriminación por razón de sexo, son muy conocidas las diferencias salariales entre hombres y mujeres, cifras de paro de las mujeres, el acoso laboral, etc. Los datos sobre discriminación de la mujer en el mercado laboral son abundantes y contrastables.

Erradicar la violencia en la pareja es imposible. Así como es imposible erradicar la delincuencia y la xenofobia. Máxime si los delitos donde existe afinidad sexual, la violencia es mayor. En términos económicos, la utilidad -para el autor del hecho criminal- de cometer el delito es mucho mayor que la probabilidad de sanción. Por tanto, cometerá el delito igualmente. De todas formas, este razonamiento se aplica a las formas más graves de ejercer violencia. No hay más que ver la descripción de los casos de asesinato de mujeres en manos de la pareja o ex pareja¹¹⁹. Para este tipo de casos, se necesita del derecho penal.

La polémica se centra en que el estado ha decidido usar el derecho penal también para casos donde un hombre le diga a su mujer “Te voy a pegar” y para cuando haya malos tratos continuados pero sin causar lesión facultativa. El papel del derecho penal en estas situaciones es por lo menos cuestionable, a la vista de los datos de sentencias condenatorias, absolutorias y principalmente los procesos que se archivan porque no se ha llegado a probar que se cometió el hecho o que quien lo cometió fue el denunciado.

fin de economizar los costos de búsqueda. Como resultado se podría estar dando beneficios adicionales a la población afroamericana de clase media y que no tienen resultados académicos inferiores al resto. P. 618.

¹¹⁹ CENTRO REINA SOFÍA, Femicidios de pareja. Descripción de los casos. Se puede encontrar la lista de las circunstancias de las muertes violentas de mujeres en manos de su pareja o ex pareja en <http://www.centroreinasofia.es/femicidios.asp>. También sería conveniente revisar las conclusiones del capítulo referido a homicidios, asesinatos de mujeres: Se produce en casa, con arma blanca y suelen ser muy crueles.

Cuando el legislador decide implantar medidas para favorecer a las mujeres, ¿Porqué sólo a la mujer pareja?, ¿Qué pasa con la violencia que ejerce un hijo contra la madre o la abuela?. ¿Es más vulnerable una mujer frente a su pareja que una madre con respecto a su hijo?, ¿Qué hay de las víctimas del tráfico sexual por ejemplo? ¿Y el acoso laboral?. Todo indica que se está usando el derecho penal¹²⁰ para “compensar” a las mujeres. ¿Qué se está haciendo para motivar mayor inserción laboral de las mujeres?, ¿Hay alguna política de estado seria para crear más guarderías y flexibilizar los horarios de las mismas?.

Acerca de la discusión de porqué vivimos una creciente criminalización del problema de la violencia doméstica, resulta fácil culpar a las feministas -más concretamente el feminismo oficial (que por cierto, no son un solo bloque, hay distintas posiciones y no pocas discrepantes con la excesiva criminalización de la violencia doméstica)¹²¹. España no es la excepción a esta nueva tendencia que es conocida como “Populismo Punitivo”¹²², una nueva forma de gobernar, mediante el delito; convirtiéndose el legislador en un legislador populista.

Los incentivos del legislador populista son muchos: la cobertura a nivel de comunicación social que se le ha dado a la violencia doméstica hace que sea aceptado casi con unanimidad la tolerancia “cero” a este tipo de violencia y que se debe hacer “todo lo que haga falta” para luchar contra ella. Tienen adicionalmente, el apoyo de grupos feministas importantes: La Asociación de Mujeres Juristas Themis, Asociación de Mujeres Progresistas, Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, El Lobby Europeo de Mujeres, entre otros. Finalmente, es de las pocas cosas donde el partido de gobierno y la oposición están de acuerdo¹²³.

Creemos que no está debidamente justificado utilizar sólo el derecho penal para solucionar los conflictos de una familia, de una pareja. Además, con los incentivos creados a raíz de las dos últimas reformas legislativas¹²⁴ y la cantidad de personas que están siendo detenidos y están pasando por las cárceles dan pie a que los detractores de la Ley 1/2004 tengan motivos para aducir discriminación. Y sí, existe discriminación positiva. Dependiendo de quiénes se quiere beneficiar y cómo, consideramos que en principio no tiene porqué ser perjudicial, todo lo contrario.

Hablemos de la mujer no como víctima, sino como persona que también comete delitos. La mujer comete menos delitos, rezan las estadísticas. ¿Será eso motivo suficiente para que reciba menos pena que un hombre? La respuesta es no. Porque con una respuesta estatal de infringir menor pena por

¹²⁰ También ayudas dinerarias y otras ventajas que tienen que ver con la seguridad social y sus derechos laborales.

¹²¹ Que por cierto no son un solo bloque, hay distintas posiciones y no pocas discrepantes con la excesiva criminalización de la violencia doméstica. Desarrolla este tema LARRAURI (2007).

¹²² GARLAND, D. (2001), *The culture of control*, Oxford, University Press. Trad. Castellana, *La cultura del control*, Madrid, Gedisa, 2005.

¹²³ Recordemos que si bien es cierto la Ley Orgánica 1/2004 fue creación del gobierno socialista -y tuvo la aprobación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria-; los incrementos de penas para delitos de violencia doméstica empezaron con la Ley Orgánica 11/2003 durante el gobierno del Partido Popular.

¹²⁴ IDEM.

el hecho de ser mujer, no se estaría creando los incentivos necesarios para lograr la disuasión de esos delitos.

Finalmente, está la voluntad de la víctima. Con la Ley Orgánica 1/2004 se sigue en la línea de desconocer la voluntad de la víctima. Los delitos de violencia de género son de acción pública; por tanto, no puede retirar la denuncia, si quiere dejar sin efecto la orden de protección tiene que ser valorado y aprobado por el Juez, tampoco puede pedir quede sin efecto la parte accesorio de la sentencia que ordena el alejamiento, prohibición de comunicación y/o acercarse al domicilio, lo cual desarrollaremos en detalle más adelante.

Es verdad que persiste el temor del legislador y la sociedad porque si el denunciado retorna a casa o se acerca a ella ejerza esta vez más violencia, pero quién mejor que ella para calibrar el peligro¹²⁵. Hemos visto que los casos de vida o muerte son pocos comparados con las denuncias por lesiones, malos tratos, amenazas,

Además la víctima puede tener razones para rechazar el alejamiento. ¿Por qué entonces no se toma en cuenta su opinión?

Al poco tiempo de promulgarse la Ley Orgánica 1/2004, dentro del Poder Judicial y los defensores del endurecimiento de las penas por delitos de Violencia de Género, mostraron intención de “retocar” el artículo 416 de la LECRIM¹²⁶, que permite la dispensa de declarar en contra la pareja. Como muchos procesos penales acaban en archivamiento o absolución porque no hay otra prueba más que la inculpativa, se pretende por un lado usar el testimonio inculpativo que la mujer hizo en la instrucción, en caso que ella opte por retratarse durante el juicio (Declaración acusatoria),

En este punto, no está demás recordar los sobrecostos que puede generar en la mujer la excesiva criminalización se puede dar en los siguientes ámbitos, como bien ha resumido Larrauri (2007), después de catalogar las críticas realizadas desde dentro del movimiento feminista, por dos reformas penales que se han producido en Estados Unidos: a) El *mandatory arrest*; La policía está obligada a detener en todo caso a la persona denunciada por violencia doméstica y b) *No drop policies*; Se ha favorecido que los diversos estados adopten la decisión política criminal de impedir a la mujer retirar la denuncia. A continuación detallamos las críticas:

1. Han aumentado los casos donde se arresta a la mujer (Dual Arrest), hasta el punto que veintidós estados se han visto obligados a desarrollar “guías” para que la policía determine en el acto quién es el agresor primario y no proceda a detener a ambos. Si es detenida, es una *batterer*

¹²⁵ LARRAURI, Elena. (2007). *Criminología Crítica y Violencia de Género*. Editorial Trotta, Madrid. P. 102. Afirma esta Profesora de Derecho Penal y Criminología que numerosas investigaciones muestran que es ella quien está en mejor posición para calibrar el peligro.

¹²⁶ El más reciente intento lo tenemos en “Informe del Grupo de Expertos y Expertas en Violencia doméstica y de género acerca de los problemas técnicos detectados en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género y en la de la normativa procesal sustantiva u orgánica relacionada y sugerencias de reforma legislativa que los abordan (Enero, 2011)”. Consejo General del Poder Judicial. P. 23. También disponible en: www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm

también, por lo cual se le deniega servicios sociales de apoyo a mujeres maltratadas o se le s impone pena de tratamiento y se las deriva a los programas previstos para agresores hombres.

2. Las políticas estatales que le impiden retirar la denuncia, ha generado que las mujeres sean coaccionadas, pues en ocasiones se les procesa por negarse a proseguir con la denuncia, y en algunos casos extremos, se castiga incluso con la privación de libertad a la mujer que rehúsa cooperar.
3. Aumento de órdenes de protección mutuas.
4. Mayor intervención de otras agencias protectoras de menores, lo cual ha generado que algunas mujeres tengan que afrontar denuncias por “no garantizar la protección” de sus hijos, o verse amenazada con la retirada de la guarda o custodia.
5. La mayor parte de los agresores detenidos son personas pobres, mayoritariamente pertenecientes a las minorías étnicas negra y latina, porque el racismo con el que tradicionalmente opera la aplicación de la ley penal se reproduce, como era previsible, también en estos casos.

Por todo esto, concluye Larrauri, con estas políticas no se está contribuyendo a dar más poder a las mujeres: “Más que dar poder a las mujeres, se ha producido una sustitución del poder del marido por el del Estado”.

Todo parece indicar que la voluntad de los operadores jurídicos y legisladores es la de seguir usando el derecho penal para dar una vuelta de tuerca ahí donde hay “fallos” en la legislación y el sistema penal creado alrededor de la violencia doméstica sobre la mujer. Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial propone eliminar las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño causado en violencia de género, porque los agresores suelen confesar para “jactarse” y “reafirmarse” de su actitud machista, más que por arrepentimiento¹²⁷.

Por distintas vías, se quiere conseguir que el estándar de la prueba sea menor para hombres que para mujeres. Consecuencia: Pena mayor para hombres. Y la presunción de inocencia ¿Dónde queda?. Con el aval del Tribunal Constitucional, que ha declarado no ha lugar la inconstitucionalidad de los tipos penales de violencia de género, mencionados antes, planteados en su mayor parte, por jueces; no parece que la situación vaya a cambiar¹²⁸.

Nuestra recomendación, a la vista del resultado de nuestro análisis sobre la estadística judicial y penitenciaria, es que se debería usar una vía distinta a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los Juzgados Penales para afrontar el problema de la violencia de pareja hacia la mujer.

A continuación resumimos lo que dijimos en el capítulo sobre estadísticas judiciales:

¹²⁷ Ibidem. P. 39.

¹²⁸ Las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional, que se han pronunciado sobre la legitimidad de la nueva regulación en materia penal de la violencia de género son:

- Sentencia 59/2008, de 14 de mayo.- Se planteaba inconstitucionalidad del artículo 153.1 del C.P.
- Sentencia 79/2010, de 26 de octubre.- Se planteaba inconstitucionalidad de los arts. 57.2 y 171.4, 5 y 6 del C.P.
- Sentencia 127/2009, de 26 de mayo respecto al art. 172.2 del C.P.
- Sentencia 60/2010, de 12 de octubre, respecto del art. 57.2 del C.P.

- Los JVM manejan el 75% de la carga procesal sobre delitos y faltas de violencia de género. Y el 45% de los procesos que pasan por los JVM se archivan por falta de pruebas. En ese sentido parecen más una jurisdicción de trámite.
- Los jueces de los JVM sólo dictan sentencia en el 20% de los casos: cuando se trata de sentenciar en juicios de faltas o cuando, durante la instrucción el imputado se declara culpable (Sentencia conformadas)-
- Tomando el resultado de sentencias condenatorias los JVM, Juzgados Penales y Audiencias Provinciales, Vs. el número de denuncias interpuestas año tras año, podemos decir que terminan en sentencia condenatoria en promedio el 21% de las denuncias.

Pensamos que con estos resultados, el resultado del papel de los JVM no es eficiente.

¿Qué pasaría si movemos la curva de denuncias?. Suponiendo que se exija un estándar de prueba mayor (o para este caso, que el daño producido sea mayor al que actualmente se pide para que un acto sea considerado delito), Eso generaría un menor número de denuncias para empezar.

En ese escenario ¿Los jueces emitirían más sentencias condenatorias o absolutorias que ahora?. Nos planteamos esta pregunta, porque el último año analizado nos ha mostrado que fueron 50 mil procesos aproximadamente que “terminaron” en sobreseimiento. En este punto, está claro que existe una gran oportunidad de mejorar el tratamiento que actualmente se está dando a sucesos de violencia de pareja.

Somos conscientes sin embargo que exigiendo un estándar de prueba mayor, muy posiblemente se incremente el porcentaje de sentencias absolutorias, lo cual generaría una presión social enorme sobre los jueces que es difícil de medir, pero existe y es importante. Sino no hay más que leer los titulares de los periódicos cada vez que se ve que un juez “dejó” de dictar una sentencia condenatoria o fue muy benévolo.

Nuestra postura es que no se debería tratar penalmente todo indicio de violencia doméstica. Siguiendo el principio de la Disuasión Marginal, no resultaría deseable castigar con la misma probabilidad de sanción un maltrato psíquico, un empujón y una lesión que cause baja médica. Porqué no darles el mismo enfoque con los que se tratan los problemas de relaciones de pareja en el derecho de familia: fomentando la mediación, la conciliación; por el bienestar de los hijos y de ellos mismos. Pasar por los juzgados es un “trauma” de por sí. Porqué no activar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, mediante la figura de un Mediador por ejemplo. Pensamos que bien valdría la pena abrir esta posibilidad.

Aunque la intención de las últimas reformas penales puede parecer buena, es decir, con penas más duras se busca prevenir la comisión de un delito peor, lo cierto es que la evidencia empírica nos dice que no se está consiguiendo la disuasión conforme veremos a continuación.

7. INDICADORES DE DISUASIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Detrás de las penas está el fin máximo, que es conseguir la disuasión de este tipo de delitos. Entonces, una de las formas de medir el éxito del endurecimiento de las penas establecidas por la Ley Integral 1/2004 y la de 2003 también, sería que comprobáramos que los indicadores de violencia disminuyan y cada vez sean menos las mujeres muertas por violencia doméstica, que es el resultado más grave de la violencia.

A partir de ahora, vamos a mencionar los resultados de análisis de datos, que nos podrían decir la eficiencia del endurecimiento de las penas. Serían tres, primero la tendencia de los ingresos en cárceles por delitos de violencia de género; segundo, si los delitos con resultado más violento han disminuido y finalmente, si el grado de confianza de confianza en la administración de justicia ha mejorado.

1er indicador) Tendencia de los ingresos en cárceles por delitos de Violencia de Género.

Como habíamos dicho en el capítulo referido a la penas de prisión, que son las sanciones más graves que puede dictaminar un juez, ha ido en aumento en los últimos años, como era previsible. En 2005 la población masculina en prisión por delitos de violencia de género fueron 218 y en 2010 cerró con 3853. Aunque, se ha estancado en 2010 con respecto a 2009, pues se registraron 3853 presos, cuando en 2009 se registraron 3848.

CUADRO 41. HOMBRES RECLUSOS POR DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, POR DELITOS DE MAYOR INCIDENCIA. 2005 2010.

Tipología delitos Violencia contra la Mujer	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Abusos sexuales de VG	1	0%	12	1%	17	1%	27	1%	37	1%	37	1%
Agresión sexual de VG	4	2%	46	4%	69	4%	91	3%	160	4%	180	5%
Amenazas de VG	15	7%	103	10%	186	11%	405	15%	580	15%	552	14%
Asesinato		0%	14	1%	37	2%	55	2%	85	2%	103	3%
Coacciones de VG	3	1%	14	1%	24	1%	31	1%	49	1%	63	2%
Contra la Integridad Moral de VG	2	1%	5	0%	9	1%	13	0%	12	0%	7	0%
Detención ilegal de VG	1	0%	7	1%	12	1%	21	1%	33	1%	39	1%
Falta de amaneza, coacción, injuria o vejación injusta de VG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	22	1%	25	1%

Falta de lesiones de VG	2	1%	7	1%	12	1%	17	1%	29	1%	18	0%
Homicidio de VG	2	1%	25	2%	38	2%	72	3%	118	3%	155	4%
Lesiones al feto de VG	14	6%	2	0%	1	0%	1	0%	2	0%	1	0%
Lesiones de VG	0	0%	116	11%	183	11%	348	13%	508	13%	587	15%
Malos tratos de VG	129	59%	495	48%	757	46%	1183	45%	1233	32%	1073	28%
Quebrantamiento de pena o medida de alejamiento VG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	576	15%	633	16%
Violencia habitual de género	45	21%	181	18%	283	17%	351	13%	404	10%	380	10%
Total	218	100%	1027	100%	1628	100%	2615	100%	3848	100%	3853	100%

Nota.- Para cada año, la fuente de la información ha registrado el número de internos al 1 de enero del año siguiente. A excepción del año 2010, donde los datos se tomaron hasta el 20 de enero de 2011.

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior.

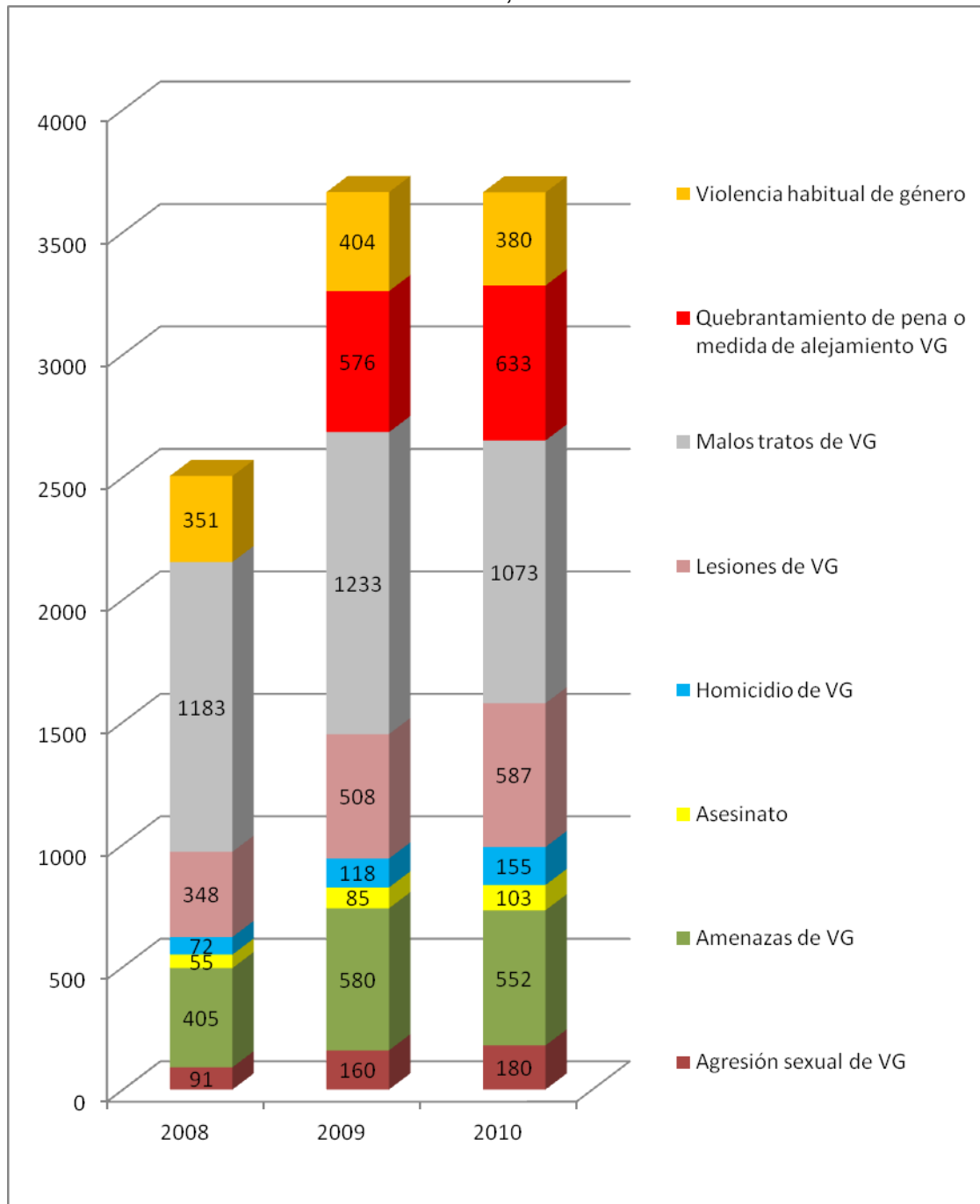
Hemos sombreado los cuatro motivos más importantes por los que ingresan en prisión los hombres, cuando se trata de delitos relacionados con la VG. De toda esa información, se advierte que:

- El ingreso a los Penales por motivo delito de lesiones de VG ha ido en aumento.
- El porcentaje del delito “Malos tratos de VG”, ha empezado a caer desde el año 2009. Al mismo tiempo desde ese año empiezan a registrarse ingresos por quebrantamiento de pena o medida de alejamiento.
- La incidencia del delito de malos tratos ha ido en aumento hasta el año 2009. En 2010 ha descendido. Para las amenazas ha sucedido lo mismo.
- Aunque la incidencia de ingresos por homicidios y asesinatos, porcentualmente hablando, sigue siendo prácticamente la misma; lo cierto es que sí que ha aumentado en números absolutos. En el año 2010 se internaron por asesinato 103 personas, prácticamente el doble que el año 2008. Lo mismo ha ocurrido con los homicidios.
- Los ingresos por asesinato subieron de un 2% a un 3% de 2009 a 2010 y en cuanto a los homicidios tuvieron también un ligero incremento en 2010.
- Los ingresos a cárceles por amenazas de género, se incrementaron al doble en el año 2008, volvió a subir en 2009 y finalmente en 2010 se ha reducido un poco.
- En el año 2009, fueron 29 hombres por falta de lesiones a la cárcel, en 2010 disminuyó a 18.
- Hasta antes de 2009, no habían presos por Faltas de amenazas, coacciones, injurias o vejaciones injustas de Violencia de género.
- Hasta antes de 2009, no habían presos por Quebrantamiento de pena o medida de alejamiento. Se empezó con 576 en 2009 y en 2010 fueron 633. Es alarmante comprobar que el último año se ha convertido en el

segundo motivo de ingreso en las cárceles, comparado con el total de delitos de VG.

En el siguiente gráfico, presentamos, en números absolutos, la población reclusa por tipología de delitos más importantes (Es decir, con mayor incidencia).

GRÁFICO 37: INTERNOS EN CÁRCELES POR PRINCIPALES TIPOS DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 2008-2010. Números Absolutos.



Elaboración propia en base a datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

En la introducción de las declaraciones de la representante de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de Noviembre de 2010, -a la que hicimos referencia en el capítulo correspondiente-, se señala como “Avances” en materia de Violencia de Género, **el aumento muy significativo de denuncias y condenas.**

A nivel teórico, este resultado parece ser lo deseable, pues se puede interpretar que se ha conseguido mediante la persecución del delito que vayan más delincuentes a la cárcel.

No obstante, nos parece que habría que hacer un análisis más profundo de este aumento del aumento de condenas y entradas en prisión.

Ingreso a cárceles por motivo de Faltas

Nos preocupa el ingreso a las cárceles por Faltas, que son menos graves que los delitos, por estos motivos:

- Las faltas de lesiones. En 2005 ingresaron 2 personas por este motivo, llegaron a ser 29 en 2009 y en 2010 fueron 18.
- Faltas de amenazas, o coacciones, injurias o vejaciones injustas.- Antes de 2008 el número era cero. A partir de 2009 entraron 22 y en 2010, 25 hombres están ingresados en prisión por cualquiera de estos motivos.

Decimos que nos preocupa cuando las penas por estos delitos son:

- Las faltas de lesiones. Pena: Localización permanente de 6 a 12 días o multa de uno a dos meses.
- Faltas de amenazas, o coacciones, injurias o vejaciones injustas. Cuando la víctima es una mujer, la pena será de localización permanente de cuatro a ocho días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a diez días.

¿Porqué estas conductas que no suponen gravedad y tienen una pena de localización permanente, vayan a la cárcel?

Puede ser porque el condenado es responsable de dos o más delitos o faltas, pues en ese caso se le impondrán todas las penas correspondientes para su cumplimiento simultáneo (Art. 73 C.P.). No sabemos a cuántos de los presos les puede haber aplicado esta situación.

Si el lector está pensando que puede ser por Quebrantamiento de pena, recuerden que en el cuadro de Presos por tipología delictiva, que se cuenta aparte los Quebrantamientos de pena o medidas de alejamiento de VG, los cuales analizaremos más adelante.

Ingreso a cárceles por motivo de Amenazas

Como se ha detallado en el Apéndice, las amenazas leves antes de la Ley Orgánica 1/2004 eran faltas. Desde esta ley son delitos y con la nueva redacción, funcionarían así:

- Amenazas leves con arma a una mujer pareja o expareja: Delito. Pena: Prisión de 6 meses a 1 año. (Art. 171.4 C.P.)

- Amenazas leves sin arma a una mujer pareja o expareja.- Delito. Pena: Prisión de 6 meses a 1 año. (Art. 171.4 C.P.)
- Amenazas leves con arma a la madre o la hija.- Delito. Pena: Prisión de 3 meses a 1 año. (Art. 171.5 C.P.)
- Amenazas leves sin arma a la madre o la hija. No es delito, es falta. Pena: Localización permanente de cuatro a ocho días o Trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a diez días). Art. 620 C.P.

Si se quiere proteger a la mujer por el mero hecho de serlo, por qué entonces le podría tocar una pena inferior al autor, cuando la víctima de unas Amenazas leves fue una hija o una madre. ¿Cuál es el argumento para sustentar esto? No lo sabemos.

El delito genérico de amenazas, recogido en el artículo 169 del Código Penal, no tiene como agravante si la víctima ha sido pareja o ex pareja. Pensamos que ésta habría sido la vía más fácil para que el Juez pondere en cada caso, si dándose esta condición se puede aplicar la pena superior en grado. Eso habría evitado las peticiones de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de la redacción de los numerales 4 y 5 del artículo 171 del C.P.

Acerca del perfil penal-penitenciario de la población reclusa por delitos de VG

Nos parecen preocupantes los siguientes datos, mencionados en el capítulo de la situación de hombres reclusos:

- Que el 40% de los reclusos condenados, cumplan penas inferiores a dos años.
- En el 73% de los encuestados no consta diagnóstico de psicopatología.
- El 38% niega los hechos que se le imputan.
- La demanda de participación en un programa es voluntaria. El 60% de los “delincuentes de género” no ha realizado demanda de participación.
- El 75,4% de los que participaron en el programa de Reeducción, fueron condenados por agredir físicamente a su pareja.

Es evidente que los que más acuden a los programas de Reeducción, son los que cometieron los delitos más graves, relacionados con agredir físicamente la pareja. De todas formas, nos preocupa que por delitos menos graves haya gente yendo la cárcel. ¿Es este coste social el óptimo?. Creemos que no.

Con estos datos, porqué no se ha previsto en la ley que se obligue a hacer el curso de Reeducción del condenado maltratador, para los delitos menos graves y si no lo cumple, ordenar la pena de prisión. Esto nos parece más acertado, tienen más sentido desde el punto de vista de la disuasión marginal. Pensamos que esto se podría recomponer si se modifica el régimen de sustitución de la pena de prisión para casos de violencia de género. ¿Porqué sólo puede ser sustituida por trabajos en beneficios de la comunidad?

El párrafo tercero del apartado 1 del artículo 88 del C.P. dice:

«En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o

deberes previstos en las reglas 1.^a y 2.^a, del apartado 1 del artículo 83 de este Código.»

Si se reformara en el sentido que la pena de prisión puede ser sustituida por la de reeducación y se incentiva a los jueces a que se inclinen por este tipo de pena cuando el delito no sea grave, creo que se podría mitigar en algo los efectos adversos del endurecimiento de las penas promovido por las últimas leyes.

2º indicador) Los delitos con resultado más violento, ¿Han disminuido?

No es verdad que cada vez se denuncie menos, todo lo contrario. Conforme a lo explicado en las conclusiones del sub-capítulo 1.3, capítulo 2 de este trabajo (Delitos y Faltas por violencia doméstica en las relaciones de pareja o ex pareja)¹²⁹.

Tampoco es verdad que cada vez existan menos muertes por violencia doméstica, aunque en 2009 ha disminuido bastante el número de mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja, con respecto a los últimos años. No podemos aventurarnos a establecer una tendencia a la baja, porque en lo que va de 2010 (julio) vamos por los 39 reportes de muertes.

En todo caso, deberíamos analizar si desde que se implantó la ley, en las situaciones que terminaron dando muerte a la mujer, ellas denunciaron previamente al agresor o no. Si se demuestra que ellas denuncian más, hemos conseguido algo. Vamos a buscar y analizar esas estadísticas.

Recordemos que este juzgado es de instrucción, sólo puede absolver y condenar las faltas, más no los delitos. Existe una excepción en cuanto a condenar, sólo puede condenar los delitos si y solo si el inculpado se declara culpable (sentencias conformadas). Esto quiere decir que al poco tiempo de presentada la denuncia, el Juez observa que falta algún requisito de forma o fondo y por tales motivos determina que no hay motivos suficientes para continuar con el proceso. Estamos hablando del sobreseimiento.

CUADRO 41. Porcentaje de mujeres que denunciaron a su agresor, antes de ser asesinadas.

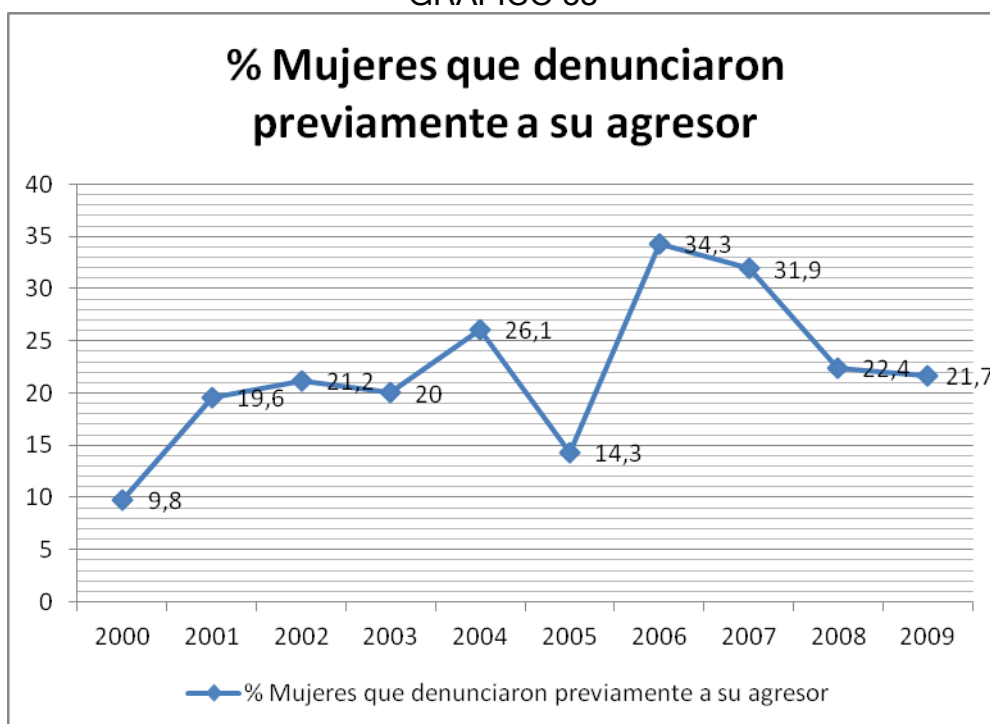
Año	Mujeres muertas por su pareja o ex pareja	De todas ellas, quienes denunciaron previamente a su agresor:	Porcentaje
2000	51	5	9,8 %
2001	46	9	19,6 %
2002	52	11	21,2 %
2003	70	14	20,0 %
2004	69	18	26,1 %
2005	63	9	14,3 %
2006	70	24	34,3 %
2007	72	23	31,9 %
2008	76	17	22,4 %

¹²⁹ Revisar la página 37.

2009	60	13	21,7	%
------	----	----	------	---

Fuente: Datos proporcionados por el Centro Reina Sofía.

GRÁFICO 38



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el Centro Reina Sofía.

- Vemos que el año 2006 fue cuando aquellas mujeres que se animaron a denunciar previamente a su agresor y sin embargo sufrieron violencia con resultado de muerte, tuvo el porcentaje mayor. Sin embargo, a partir de ahí los datos muestran un descenso.
- Los dos últimos años se observa que hemos llegado prácticamente a los niveles del año 2002.
- Aunque hemos visto con anterioridad que las cifras de muertes de mujeres como resultado de violencia doméstica, comparativamente en Europa y en el mundo, están por debajo de la media, este gráfico merece una profunda reflexión. Existe una oportunidad para seguir luchando contra la violencia doméstica más grave porque estos datos indican que a este nivel, no hemos logrado cambio alguno.

Breve acotación sobre las denuncias falsas. ¿Cómo reconocerlas?

Es extremadamente sensible abordar el asunto de las denuncias falsas. Es uno de los argumentos principales a los que se acogen los movimientos asociativos que representan la otra cara de la moneda: Los hombres “víctimas” del sistema penal, y aquellos que consideran que el tratamiento penal de la violencia familiar está haciendo mella precisamente en la armonía familiar tales como Custodia Compartida (custodiacompartida.org), Plataforma Ciudadana por la Igualdad, Asociación Pro-Justicia, Asociación de Abuelos separados de sus

nietos, entre los más destacados porque están intentando buscar apoyo de los partidos políticos, realizan congresos, conferencias, y elaboran sus propios estudios.

Lo cierto es que no es un tema sencillo de abordar porque, para empezar, encontrar datos que nos indiquen la incidencia de denuncias falsas es una tarea hasta el momento imposible de realizar.

No se puede decir que todas las renuncias de las víctimas a seguir con la denuncia inicialmente presentada por ella sean denuncias falsas. Detrás de esas renuncias puede haber maltrato. En todo caso eso sólo lo sabe ella. La falta de pruebas puede ser otro motivo por el que ella reconsidere su decisión inicial de denunciar.

Lo que sí podemos hacer es un ejercicio de aproximación, si tomamos las sentencias absolutorias de los Juzgados Penales, que aunque comparado con el total de procesos resueltos en los Juzgados Penales es el 45%, comparado con el total de denuncias presentadas, es verdad que significa sólo un 9%.

Y a esto sumarle los sobreseimientos libres¹³⁰, declarados por los JVM, que comparado al total de denuncias presentadas, son el 2%.

Para hacernos una idea del peso, si consideramos sólo el año 2009 como ejemplo; sumando las sentencias absolutorias de los JP y los sobreseimientos libres de los JVM, suman más 21.024 procesos para toda España. Resulta una cantidad ínfima, comparado a la cantidad de denuncias presentadas ese año. Sin embargo, tampoco se puede decir que detrás de todos esos procesos hubo denuncia falsa, lo único que se puede afirmar de este dato es que no se pudo probar que el hecho denunciado efectivamente se dio, o el hecho investigado no constituye delito o se determina que si existió delito, el responsable no es el imputado.

La casuística de denuncias falsas probadas y llevadas a los Juzgados es muy poca¹³¹. Aún así, sigue siendo generando polémica y se suman los detractores de las políticas públicas de la violencia de género. Pensamos que para evitar la sensación que no existe justicia para todos por igual, se debería abrir la posibilidad de incluir activamente a todas las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, que representan a los afectados del sistema penal y sus familias, en las futuras reformas legislativas, y en general en todas las políticas públicas que afecten de alguna manera la resolución de conflictos familiares por vías distintas del derecho penal.

Los costes que una denuncia falsa puede generar son atribuibles al Estado y a la propia víctima y a los hijos menores si los hay. El coste que puede significar para el Estado habrá que verlo con el tiempo, cuando algún denunciado

¹³⁰ Se puede revisar la definición de Sobreseimiento libre en las páginas 48 y 49.

¹³¹ En EL MUNDO, artículo del 15 de marzo de 2011, La Magistrada María Tardón, Presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid especializada en violencia sobre la mujer-, afirmaba que de diez mil procedimientos que han pasado por su Sección, sólo ha visto cinco o seis casos donde el Tribunal tuvo la convicción que había indicios serios que se encontraban ante una denuncia falsa. Algunos jueces de VM y de Instrucción durante las entrevistas concedidas para este trabajo, nos comentaron que durante un año, pueden haber 2 a 3 casos de claros indicios de denuncia falsa.

falsamente obtenga una indemnización por daños y perjuicios¹³². Para la víctima, los costes podrían ser:

- Responsabilidad penal por delito de difamación, castigado con prisión de seis meses a dos años, o multa de 12 a 24 meses. Las consecuencias de una sentencia condenatoria sobre la custodia de los hijos, es otra situación a tomar en cuenta. Los traumas psicológicos de los hijos generados por el conflicto, las denuncias mutuas, pueden afectar su desarrollo emocional, escolar.
- Responsabilidad civil por los daños causados al que antes era denunciado.

3er indicador) La Percepción Ciudadana: Grado de confianza en Administración de justicia.

Esta pregunta puede ser respondida por las encuestas de opinión a los ciudadanos, donde la muestra a usuarios y no usuarios del sistema judicial.

El Centro de Investigaciones Sociológicas de España (CIS), dentro de las distintas encuestas de opinión que realiza de forma periódica sobre la situación económica, política y confianza en las instituciones, se incluyen algunas preguntas para medir el grado de confianza en la Administración de Justicia.

A la pregunta, ¿Cómo considera Ud. que funciona actualmente la Administración de Justicia en España: muy bien, bien, mal o muy mal?. Las respuestas han sido las siguientes:

- Barómetro de Febrero de 2011: Muy Bien + Bien= 18,4%; Mal + Muy mal = 48,0%.
- Barómetro de Noviembre de 2008: Muy Bien + Bien= 8,8% Mal + Muy mal = 40,20%.
- Barómetro de Diciembre de 2005: Muy Bien + Bien= 19% Mal + Muy mal = 37,8%¹³³.

El último estudio (2011) es bastante detallado. Tiene algunos resultados que merecen la pena incluir en esta parte, tales como:

Pregunta 23. Sólo a quienes han tenido contacto personal o familiar con el mundo de la justicia. Esa última o única experiencia ¿Mejóro o empeoró la opinión que tenía anteriormente sobre el funcionamiento de la justicia?

Mejóro: 15.4 %, Ni mejoró ni empeoró: 41.1 %, y Empeoró: 39.5.

La respuesta de la pregunta 9, era que el 83% consideraba que las leyes favorecían a unos más que otros. Luego, surge esta pregunta: 9ª: Sólo a quienes creen que las leyes no son iguales para todos/as. ¿A qué tipo de personas, grupos sociales o gentes favorecen?

Las primeras posiciones son para:

¹³² Un ciudadano de Málaga, reclama un millón de euros al Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, tras haber estado dos veces preso por malos tratos y haber quedado absuelto del citado delito en las dos causas que activó contra él su ex esposa. Ver artículo de el diario EL PAÍS, de fecha 5 de enero de 2010.

¹³³ Datos tomados de los Estudios 2861 de febrero de 2011, Estudio 2778 de noviembre de 2008 y Estudio 2630 de Diciembre de 2005. En www.cis.es.

A los ricos: 48,6%

A los políticos: 25,9%

A los poderosos: 13,3%

A los inmigrantes: 12,7%

Y del resto, sin contar a los que No saben y No contestan, y por debajo de “Los famosos”, están “Las Mujeres” con un 1,4%.

De esta información, podemos concluir que la percepción ciudadana, sobre cómo funciona actualmente la Administración de Justicia, ha aumentado el índice de aquellos que consideran que está bien y muy bien, pero ha aumentado también el índice de aquellos que dicen que está Mal y Muy mal. Luego, de aquellos que han tenido contacto con la justicia, aquellos que piensan que ha empeorado con respecto al pasado, es casi 3 veces superior a aquellos que piensan que mejoró.

Definitivamente, la sensación y la experiencia del funcionamiento de la justicia, son indicadores mejorables.

Sería mucho mejor si tuviéramos encuestas de las denunciantes, usuarias de las herramientas no sólo de la Administración de Justicia en general (Nos gustaría saber qué opina la opinión pública y los usuarios, de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer), sino también de todas las ayudas que se ponen a su disposición, para medir el grado de satisfacción.

Como no existen este tipo de encuestas detalladas, sólo nos quedó reseñar la valoración general de la Administración de Justicia.

De todas formas, resulta interesante, el dato adicional sobre si considera la ciudadanía que si no todos somos iguales ante la ley. Un 1.4% considera que favorecen a la mujer, lo cual se puede interpretar que la opinión pública en general no considera que actualmente las leyes benefician a las mujeres, todo lo contrario.

8. LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN

a) Relación entre denuncias presentadas, O.P. solicitadas y concedidas

Si relacionamos denuncias presentadas por mujeres, en comisaría y en el juzgado, con las órdenes de protección solicitadas y finalmente concedidas, tendríamos esto:

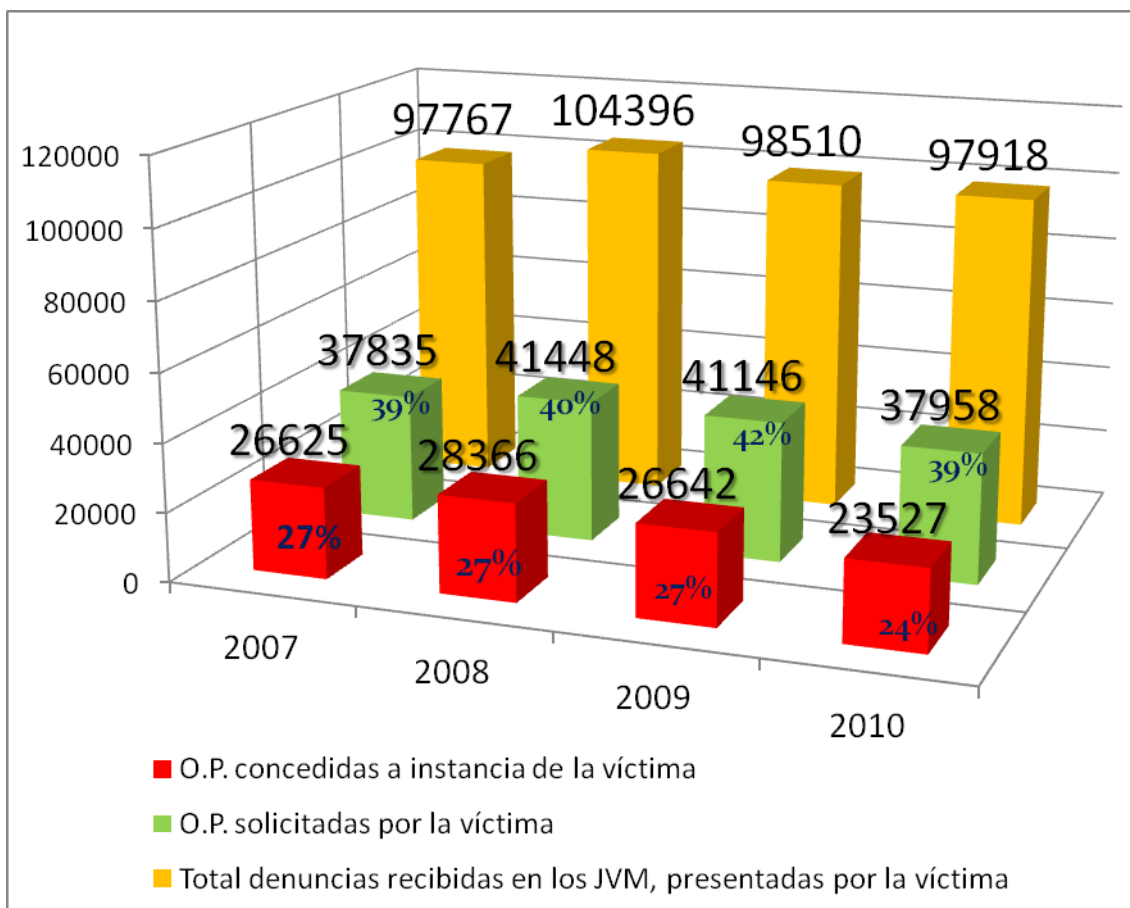
CUADRO 42. ÓRDENES DE PROTECCIÓN SOLICITADAS Y CONCEDIDAS, EN RELACIÓN CON LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN LOS JVM. 2007 - 2010.

(SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE)

Denuncias recibidas	2007	2008	2009	2010
Atestados policial con denuncia	83601	90724	87638	86760
Denuncias recibidas Presentada por en los victima en el JVM Juzgado	14166	13672	10872	11158
Total	97767	104396	98510	97918
Órdenes de Protección Solicitadas por la víctima	37835 39%	41448 40%	41146 42%	37958 39%
Órdenes de Protección Concedidas a instancia de la víctima	26625 27%	28366 27%	26642 27%	23527 24%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo General del Poder Judicial.

GRÁFICO 39



Con el cuadro resumen y el gráfico arriba mostrados, advertimos que no se conceden todas las órdenes de protección que se solicitan. La proporción actual es que de cada 10 expedientes, en 4 la víctima solicita O.P. y finalmente se concede en casi 3.

El Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica¹³⁴

No obtuvimos respuesta del Registro, a nuestro pedido de información sobre las órdenes de protección inscritas, cuántas de ellas se revocan, entre otros.

No obstante, en la red hemos encontrado algo aunque un poco antiguo, pero nos da una idea de la magnitud de las órdenes de protección. En un artículo del diario EL PAÍS¹³⁵, se da cuenta de 98.749 denuncias por maltrato desde agosto de 2003 hasta el 2 de septiembre de 2005. De todas esas denuncias, el 90,5% de los registrados como maltratadores son hombres (89.338). De ellos, el 76,2% son españoles (68.023), y el resto, extranjeros (21.315, el 23,8%). De las

¹³⁴ Creado el 5 de marzo de 2004 con el fin de mejorar la información de jueces, fiscales y Policía Judicial. Este registro recoge las denuncias por violencias familiar admitidas a trámite, contiene los datos personales del agresor (condenado o aún sin juzgar) y de la persona agredida. Los datos personales de los denunciados se retiran cuando la denuncia da lugar a una sentencia absolutoria o se archiva definitivamente.

¹³⁵ Artículo "El registro central de Maltratadores "ficha" a 90 mil hombres en dos años", en EL PAÍS, 3 de septiembre de 2005.

9.411 mujeres incluidas, 7.373 son españolas (78,4%), y 2.038, extranjeras (21,6%).

Luego, se menciona que se registraron 55.138 órdenes de protección concedidas y 5.732 denegadas.

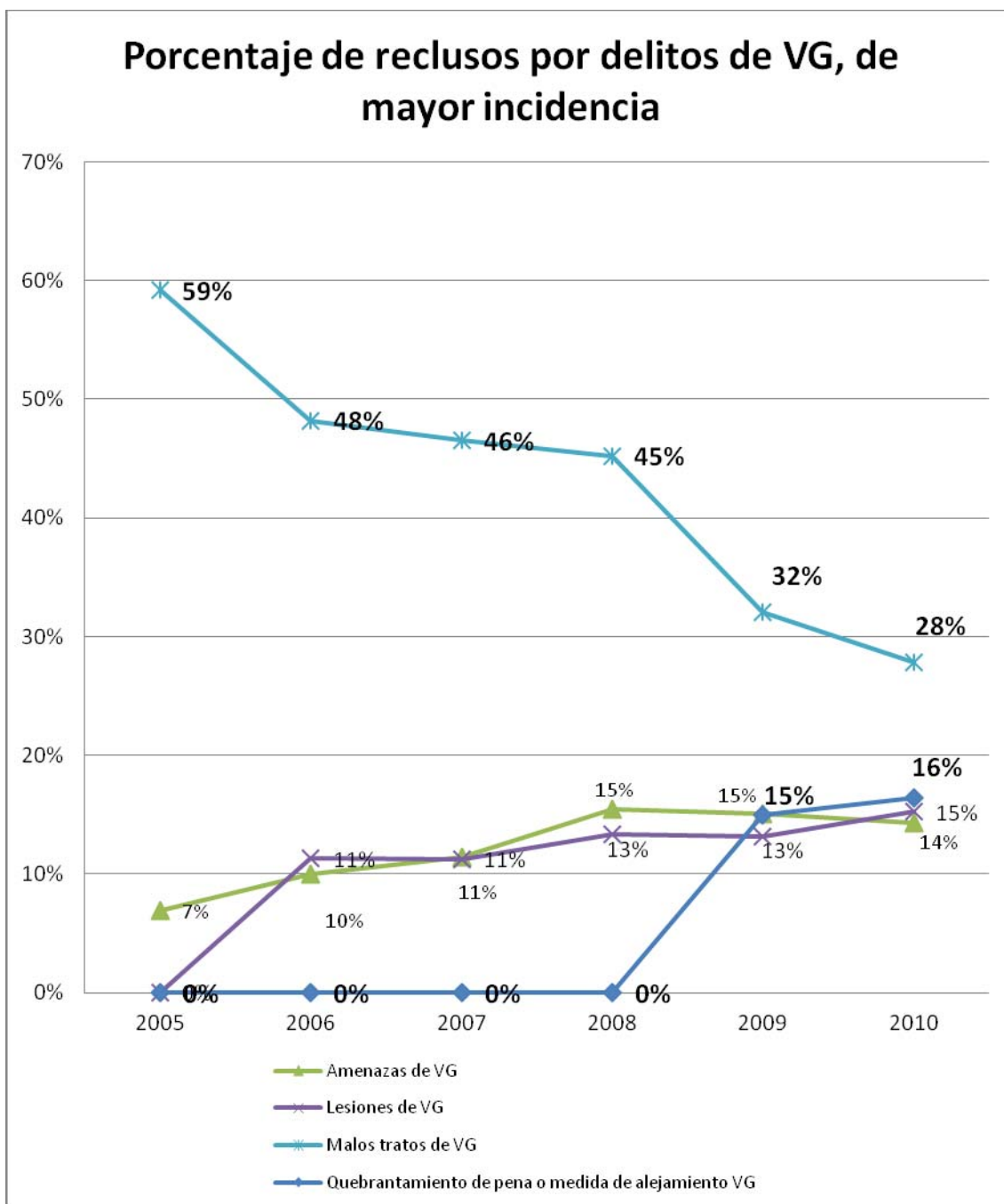
b) Aproximaciones de las Órdenes de Protección quebrantadas

Lamentablemente, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Registro de Maltratadores han publicado datos sobre las órdenes de protección que se quebrantan.

Lo que sí hemos obtenido es el dato de los ingresos en prisión por delitos relacionados con la violencia de género como delito principal, lo cual nos puede ayudar a aproximarnos a esa cifra, teniendo en cuenta que tanto el quebrantamiento de una orden de protección como de una pena, deriva la misma sanción.

Presentamos un gráfico de porcentajes de reclusos por quebrantamiento de medida y pena, comparado con las amenazas, lesiones y malos tratos (de VG), que son los tres delitos que más ingresos en penales se registran.

GRÁFICO 40



En el sub capítulo de Tendencia de los ingresos en cárceles por delitos de VG se advirtió que no había presos por delitos de quebrantamiento de Medida o de Pena hasta que en 2009 fueron 576 y en 2010, 633; convirtiéndose el pasado año el segundo motivo de ingreso en cárceles por delitos de VG.

Este fenómeno se podría explicar en parte por el giro que dio el Tribunal Supremo en 2008 -lo desarrollaremos más adelante-, al declarar que será delito un Quebrantamiento aunque haya consentimiento de la víctima.

Si relacionamos los datos de Denuncias por tipo delictivo con la cantidad de personas que van a la cárcel, y hacemos una comparativa entre los presos por delitos del Art. 153 (Malos tratos en el ambiente familiar), tenemos:

CUADRO 42. INGRESOS EN LA CÁRCEL Vs. DENUNCIAS PRESENTADAS POR TIPO DE DELITO. 2007 A 2010.

Ingresos en la cárcel Vs. Denuncias	Total Denuncias 4 años	Total ingresos cárceles 4 años	Porcentaje
Malos tratos Art. 153 CP	326.496	4.246	1,30%
Lesiones. Art. 148 y stes. CP	20.605	1.626	7,89%
Quebrantamientos (De Medidas y Penas) Art. 468 C.P.	26.818	1209 *	4,51%
* Ingresos en cárceles registrados entre 2009 y 2010. Anteriormente no se registró ningún ingreso por estos delitos.			

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo General del Poder Judicial.

Aunque resulta un análisis muy simple, se puede decir, a la vista del cuadro resumen, que la probabilidad de ir a la cárcel por el delito de Quebrantamiento de condena es mucho mayor que el de Malos Tratos. Cuatro veces más. Es lógico, porque la prueba del delito de quebrantamiento de Pena o Medida es demostrar que se ha quebrantado la misma, mientras que para el delito de malos tratos, demostrar que hubo menoscabo psíquico o que hubo maltrato de obra sin causar lesión es más difícil. Como hemos declarado antes, el 45% de las denuncias que se ingresan a los JVM se archivan por falta de pruebas¹³⁶.

Otra cuestión muy importante a considerar sobre la probabilidad de ir a prisión por el art. 468 del C.P., es que detrás de esos ingresos en cárceles, esas personas tienen antecedentes penales, porque de lo contrario es muy difícil que la pena de prisión se haga efectiva pues para el delito de Malos Tratos, corresponde la pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año y para el delito de Quebrantamiento de Pena o Medida Cautelar, corresponde la misma pena. Recuerden que si la pena es inferior a 2 años de prisión, no se cumple de forma efectiva.

Hay una situación no poco frecuente que ocurre durante la tramitación de los procesos penales o después de dictada la sentencia: que la pareja se reconcilia, o inclusive reanudan la convivencia, aún cuando existe orden de alejamiento y comunicación en vigor. No disponemos de cifras de cuántas órdenes de protección se quebrantan por este motivo, pero sabemos que existen, de lo contrario no habría generado tanta polémica por la sentencias contradictorias que iban desde la condena de la ofendida al igual que el quebrantador, hasta la absolución de éste último.

c) Efectos de la jurisprudencia sobre la relevancia del consentimiento de la víctima cuando se ha incumplido la orden de protección.

¹³⁶ Revisar el capítulo análisis de estadísticas judiciales.

Hasta noviembre de 2008, el Tribunal Supremo decía que cuando la mujer consentía el quebrantamiento de la O.P. no era delito. Luego establecieron un acuerdo de interpretación a partir del cual se estableció que aunque la víctima consienta o inclusive lo incite, el hecho es punible.

Vamos a repasar las sentencias más importantes y el mencionado Acuerdo, por orden cronológico para comprender por qué se empieza a ver ingreso en cárceles por quebrantamiento de penas/medidas desde el año 2008.

STS 5567/2005 del 26 de septiembre de 2005

Reproducimos la parte que más nos interesa de la sentencia, en la página 6:

"... Las reflexiones anteriores ofrecen interrogantes cuando se predicen de la pena o medida cautelar de prohibición de aproximación.

En uno y otro caso, la efectividad de la medida depende --y esto es lo característico-- de la necesaria e imprescindible voluntad de la víctima --en cuya protección se acuerda-- de mantener su vigencia siempre y en todo momento.

¿Qué ocurre si la víctima reanuda voluntariamente la convivencia con su marido o ex-conviviente que tiene dictada una medida de prohibición de aproximación a instancias de aquélla?

Si se opta por el mantenimiento a todo trance de la efectividad de la medida, habrá que concluir que si la mujer consiente en la convivencia, posterior a la medida cabría considerarla coautora por cooperación necesaria en al menos por inducción, ya que su voluntad tendría efectos relevantes cara al delito de quebrantamiento de medida del *art. 468 del Código Penal*, lo que produciría unos efectos tan perversos que no es preciso razonar, al suponer una intromisión del sistema penal intolerable en la privacidad de la pareja cuyo derecho más relevante es el derecho a "vivir juntos", como recuerda las SSTEDH de 24 de Marzo de 1988 y 9 de Junio de 1998, entre otras.

Por otra parte, es claro que la vigencia o anulación de la medida no puede quedar al arbitrio de aquella persona en cuya protección se otorga, porque ello la convierte en árbitro de una decisión que no sólo le afecta a ella, sino también a la persona de quien se debe proteger, por lo que un planteamiento que dejara la virtualidad de la medida a la voluntad de la persona protegida, tampoco es admisible por la absoluta falta de seguridad jurídica para la otra persona, que prácticamente podría aparecer como autor del quebrantamiento según la exclusiva voluntad de la protegida, además de que ello supondría dejar la efectividad del pronunciamiento judicial a la decisión de un particular, lo que no le consiente la naturaleza pública de la medida.

En esta materia parece decisión más prudente, compatibilizando la naturaleza pública de la medida dando seguridad jurídica a la persona, en cuya protección se expide, y al mismo tiempo, el respeto al marco inviolable de su decisión libremente autodeterminada, estimar que, en todo caso, la reanudación de la convivencia acredita la desaparición de las circunstancias que justificaron la medida de alejamiento, por lo que ésta debe desaparecer y queda extinguida, sin perjuicio que ante una nueva secuencia de violencia se pueda solicitar y obtener --en su caso-- otra medida de alejamiento.

Podemos concluir diciendo que en cuanto la pena o medida de prohibición de aproximación está directamente enderezada a proteger a la víctima de la violencia que pudiera provenir de su anterior conviviente, la decisión de la mujer de recibirle y reanudar la vida con él, acredita de forma fehaciente la innecesariedad de protección, y por tanto supone de facto el decaimiento de la medida de forma definitiva, por lo que el plazo de duración de la medida fijado por la autoridad judicial, quedaría condicionado a la voluntad de aquélla, sin perjuicio de que ante un nuevo episodio de ruptura violenta pueda solicitarse del Juzgado, si es preciso para la protección de su persona, otra resolución semejante.

Esta es la especificidad de esta medida/pena dado el específico escenario en el que desarrolla su eficacia.

Una aplicación de lo expuesto al caso de autos lleva a la conclusión de que en el presente caso se ha objetivado una duda en la propia sentencia acerca de si con posterioridad al otorgamiento del auto de prohibición de aproximación, se volvió o no a convivir, lo que proyecta al menos una duda seria y razonable sobre el núcleo del tipo penal: el mantenimiento de la voluntad de la ex-compañera de que el recurrente no se le acercara, basta y sobra esta situación para estimar que no ha existido quebrantamiento de medida ni por tanto delito del *art. 468 del Código Penal*.

Procede estimar esta parte del motivo y absolver al recurrente del delito de quebrantamiento."

Aquí son dos los argumentos del Tribunal para absolver al recurrente. Justifica no aplicar estrictamente el tipo penal porque irremediabilmente se estaría condenando como coautora de cooperación necesaria del delito de

quebrantamiento de condena, por el derecho de la pareja a vivir juntos y que no puede quedar en la voluntad de la víctima determinar que hubo quebrantamiento o no, con su consentimiento. Nótese que en este caso estamos hablando de Quebrantamiento de Medida Cautelar.

STS 100/2007 del 19 de enero de 2007

La parte que nos incumbe está en la página 4:

"El acceso a la casa el día 29 de octubre se produjo con la aquiescencia de la mujer, a cuyo argumento no se acoge el recurrente, porque es consciente de que el consentimiento de la ofendida en este caso no podría eliminar la antijuricidad del hecho. Primero, porque el consentimiento estaba condicionado o viciado por "presiones de la familia", según rezan los hechos probados; y segundo, porque la vigencia del bien jurídico protegido no queda enervada o empañada por el consentimiento de la mujer, ya que es el principio de autoridad el que se ofende con el delito de quebrantamiento de medida. Ciertamente que tal medida se acuerda por razones de seguridad en beneficio de la mujer, para la protección de su vida e integridad corporal -que tampoco son bienes jurídicos disponibles por parte de aquélla- pero en cualquier caso no es el bien jurídico que directamente protege el precepto (S.T.S. nº 1156/2005, de 26 de septiembre y nº 69/2006, de 20 de enero).

En definitiva, ningún error de derecho se aprecia en la subsunción llevada a cabo por la Audiencia Provincial. El motivo no puede prosperar."

Esta sentencia sí estaba a favor de omitir valor al consentimiento de la mujer porque el bien jurídico protegido es el principio de autoridad, no la protección de la vida e integridad corporal de la mujer. En este proceso en concreto, la entrada del agresor al domicilio familiar no fue pacífica, pues hubo violencia incluso con agresiones sexuales. No se refiere en forma específica a la responsabilidad penal de la víctima por consentir la entrada en el domicilio, pero se deduce que la eximen de responsabilidad porque su consentimiento se debió a presiones de familia.

STS 6386/2007 del 28 de septiembre de 2007

Citamos la parte que nos interesa, que está en la página 4:

"El Sexto motivo cuestiona la aplicación del artículo 468.2 del Código y, por ende, la atribución del delito de quebrantamiento de condena, ya que la víctima había perdonado al recurrente y ambos habían reanudado, de común acuerdo, la convivencia, de modo que el alejamiento previamente acordado carecería ya de fundamento.

Se refiere, a este respecto, la propia Resolución de instancia (Fundamento Jurídico Quinto) a la Sentencia de esta Sala de 26 de Septiembre de 2005, que absolvía a un acusado del delito de quebrantamiento de la medida de seguridad de alejamiento por el hecho de que fue la propia víctima la que consintió la aproximación. Aunque resulte cierto igualmente el que "obiter dicta" se hiciera referencia en la misma Resolución también a la pena de similar contenido.

Pero como muy bien dicen los Jueces "a quibus", en perfecta comprensión del significado esencial de nuestra doctrina, una cosa es el incumplimiento de una medida de seguridad que, en principio, sólo puede aplicarse a petición de parte y cuyo cese incluso podría acordarse si ésta lo solicitase al Juez, que además tiene por objeto, obviamente, una finalidad meramente preventiva, y más aún incluso cuando, además, no diere lugar posteriormente a la producción de ninguno de los ilícitos que precisamente pretendía impedir, y otra, muy distinta, aquella situación, como la presente, en la que, aún contando con la aceptación de la protegida, se quebranta no una medida de seguridad, sino una pena ya impuesta y cuyo cumplimiento no es disponible por nadie, ni aún tan siquiera por la propia víctima, cuando además se propicia, con ese incumplimiento, la comisión de hechos tan graves como los aquí enjuiciados.

Recordemos que la referida Sentencia de esta Sala partía del hecho de que "...la reanudación de la convivencia acredita la desaparición de las circunstancias que justificaron la medida de alejamiento..."

Constituiría, en el presente caso, un verdadero contrasentido el que precisamente la constatada frustración del fin pretendido por la pena precedente, que no era otro que el de la evitación de la

ulterior reiteración delictiva, tras resultar desgraciadamente justificada de modo pleno "a posteriori" esa previa imposición, por la comisión de nuevas infracciones, se venga a permitir la impunidad del autor de semejante quebrantamiento. Por ello no cabe excluir la comisión de este delito que tan acertadamente castiga la Sala de instancia."

En este proceso, estaba en cuestión el incumplimiento de una pena de alejamiento. La sentencia declara no excluir la responsabilidad del recurrente por la comisión del delito de quebrantamiento de condena. Menciona que no puede adoptar la posición de la STS del 26 de septiembre de 2005, no porque no esté de acuerdo con ella, sino para sostener que se trata de un caso distinto el de autos, pues lo que se incumplió fue una pena, no una medida cautelar. Por cierto, en este caso luego de la convivencia consentida, se produjeron hechos de violencia.

Acuerdo del Pleno de fecha 25/Nov/2008

El Tribunal Supremo adoptó mediante el mencionado: "Consagra el criterio de punibilidad de estas conductas desobedientes, con carácter absoluto, bien se trate de incumplimiento de pena o de medida de seguridad y cualquiera que fuere la actitud adoptada por la mujer", basándose en los siguientes criterios:

- La tradicional irrelevancia jurídica del perdón en nuestro sistema penal.
- El bien jurídico protegido es la Administración de Justicia.
- El grave problema práctico para determinar cada caso si el consentimiento de la víctima es verdaderamente libre o una simple manifestación más del denominado "Síndrome de la Mujer maltratada".

Sin embargo, es verdad que el mencionado Criterio Jurisprudencial deja la puerta abierta para que el denunciado o sentenciado quede libre de responsabilidad, cuando cometa el hecho en Error de Prohibición (Art. 14 del C.P.). Es decir, que el sujeto comete el hecho delictivo, creyendo actuar lícitamente o cuando ni siquiera se plantea la ilicitud del hecho. En el primer caso el autor desconoce la existencia de una norma que prohíba su conducta; en el segundo, el autor sabe que su conducta está prohibida en general, pero cree erróneamente que en el caso concreto se da una causa de justificación que lo permite, que actúa dentro de los límites de la misma o que se dan los presupuestos objetivos¹³⁷. En la práctica es mucho más frecuente la segunda forma de error que la primera. También hay que decir, que en la práctica, estos casos son escasos.

Sobre el argumento tercero, no nos parece que sea un problema práctico; es precisamente labor del Juez valorar la gravedad del delito supuestamente cometido (Para delitos no muy graves como tipificados en los artículos 153, 173, 171 y 172 del C.P.). Además, que indirectamente están reconociendo que la voluntad de la víctima al reanudar la convivencia está viciada y no entendemos por qué el Tribunal considera que siempre así.

Finalmente, el Acuerdo menciona que con respecto al carácter punible o no del consentimiento de la mujer; el Ministerio Fiscal, mediante Circular 3/3003 tomó la postura de no promover acusación alguna contra la mujer, cuando ha consentido el quebrantamiento del imputado o denunciado de la Orden de

¹³⁷ MUÑOZ CONDE, Francisco. (2010). *Derecho Penal, Parte General P.* 382-386.

Alejamiento y Prohibición. Con esto se ha evitado que en muchos casos, la mujer sea denunciada y luego condenada por coautoría, inducción, o cooperación necesaria del quebrantamiento.

STS 421/2009 del 29 de enero de 2009

Esta sentencia recoge ya la el criterio no jurisdiccional de noviembre de 2008 en estos términos (Página 10):

"... A) En primer lugar hemos de decir que lo aquí afirmado por el recurrente no respeta los hechos probados de la sentencia recurrida, pues lo que esta dice no es que la esposa hubiera consentido en el regreso de su marido al domicilio familiar, sino que este se quedó a vivir allí, "sin que la esposa pusiera en conocimiento de autoridad alguna tal circunstancia". Extremo que luego queda precisado en el fundamento de derecho 4º cuando nos dice que la víctima fue rotunda en este punto manifestando que le había retirado las denuncias pero no la orden de alejamiento.

B) Por otro lado, en cuanto al fondo del asunto, esto es, en cuanto a la relevancia que pudiera tener el consentimiento de la esposa para la exclusión de este delito del art. 468 CP en los casos de medida cautelar (o pena) contra el marido consistente en prohibición de alejamiento, el asunto fue tratado en una reunión de pleno no jurisdiccional, celebrada el pasado 25 de noviembre, en la cual, por una mayoría de 14 votos frente a 4, se acordó que "el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del art.

468 CP "; todo ello en base a la idea clave de la irrelevancia en derecho penal del perdón de la persona ofendida por la infracción criminal, principio que solo tiene su excepción en los llamados delitos privados, que es cuando expresamente la ley penal así lo prevé..."

Creemos conveniente citar también el voto particular de los magistrados Enrique Bacigalupo Zapater y José Manuel Maza Martín, de la página 11:

"...Es preciso ante todo distinguir entre el quebrantamiento de condena y el de una medida cautelar de protección, que, al parecer, la mayoría considera como una problemática unitaria. Desde el punto de vista aquí defendido, sin embargo, se trata de problemas diferentes. La irrelevancia del consentimiento respecto de las penas privativas de derechos previstas en el art. 48 CP es clara. Si la función social de la pena es la ratificación de la vigencia de la norma frente a la acción lesiva de un bien jurídico, tal función no puede depender de la voluntad de un sujeto privado, en la medida en la que no se trata de un interés individual.

Distinto es el problema que presenta la renuncia de hecho, por parte de la esposa, de la posición jurídica que le acuerdan las medidas cautelares adoptadas, a su solicitud, para su protección. Como es sabido, en la doctrina penal moderna el significado del consentimiento ya no se rige exclusivamente por el antiguo principio "volenti non fit iniuria". El fundamento de la relevancia del consentimiento, por el contrario, debe ser considerado desde la perspectiva constitucional del derecho a la autodeterminación y, más concretamente, del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad garantizado por el art. 10 CE .

En este sentido se ha entendido en la doctrina que, en aquellos supuestos en los que está implicado el derecho al libre desarrollo de la personalidad y, consecuentemente a la autodeterminación, no existe un derecho a lesionar bienes ajenos, pero sí un derecho a permitir, bajo las condiciones que acuerdan validez al consentimiento, que otro lesione los propios o a ponerse en peligro de que lo haga.

A partir de estas consideraciones, es preciso considerar el presente caso, en el que el acusado, no obstante la vigencia de la prohibición cautelar de acercarse a menos de 500 m. a su esposa e hija, regresó al domicilio de éstas, "quedándose a vivir allí, sin que la esposa pusiera en conocimiento de autoridad alguna, tal circunstancia".

Los Magistrados que suscriben son conscientes de que la continuidad de los malos tratos puede tener y tiene graves efectos degradantes sobre la personalidad de la mujer que es víctima de ellos.

Tampoco niegan que, comprobados estos extremos, el consentimiento de la víctima puede resultar irrelevante, dado que difícilmente podría cumplir en esos casos con las exigencias de su validez porque el sujeto pasivo carecería de la capacidad de juicio que el consentimiento requiere.

En consecuencia lo que en este voto particular se pone en duda es el carácter general la solución adoptada como interpretación del art. 468 CP , es decir, la irrelevancia absoluta del consentimiento independientemente de las condiciones en las que el mismo fue emitido. Ello tiene importancia en el presente caso, en el que no se han constatado en el hecho probado circunstancias reveladoras de circunstancias personales de la víctima, ni en la situación en la que actuó, que hayan privado de relevancia a su consentimiento (incapacidad de juicio, engaño,

amenaza, error). En realidad, en la sentencia de la Audiencia se ha presumido la incapacidad de consentir de la esposa. Si en el proceso se hubieran comprobado circunstancias que habrían reducido la capacidad de la víctima para consentir, se aplicarían, también en este caso, como es lógico, las reglas que invalidan el consentimiento. Es innecesario decir que negar valor a un consentimiento viciado no afecta el derecho a la autodeterminación, ni daría tampoco lugar a un trato incompatible con la dignidad de la persona.

Ciertamente la tesis sostenida por la mayoría no niega a la esposa el derecho a la autodeterminación en forma directa. Pero, en la medida en la que no le reconoce relevancia respecto de la conducta del marido, lo hace indirectamente, pues limita más allá de lo constitucionalmente admisible el derecho de aquella a intentar reanudar la vida matrimonial, mediante la amenaza de una pena de prisión para el marido.

Es posible pensar que esa limitación no existiría, dado que antes de permitirle al acusado compartir nuevamente la vivienda, la víctima podría haber solicitado el levantamiento de la medida. Sin embargo, esa sería una condición meramente formal, que, en todo caso, no justificaría reducir el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es evidente que esa solicitud no podría ser denegada por ningún juez, toda vez que ello implicaría, en primer lugar, una limitación del derecho constitucional acordado en el art. 32 CE no derivada de ninguna ley, y, en segundo lugar, implicaría una reducción de la mujer a un objeto de protección penal, incompatible con la dignidad de la persona (art. 10.1. CE). El derecho vigente no establece ninguna limitación para contraer matrimonio y, obviamente, tampoco para intentar reanudarlo después de una interrupción de la convivencia. Una limitación de esta especie, por lo demás, no puede ser deducida de la vigencia de una orden cautelar de alejamiento. Una persona adulta que quiere reanudar una relación matrimonial no puede estar indirectamente limitada, contra su voluntad, por medidas cautelares de protección que estima innecesarias, de la misma manera que no es posible impedirle contraer matrimonio por considerar que su decisión es irrazonable. La mujer que solicita una medida de protección no pierde su derecho al libre desarrollo de su personalidad.

Por todo ello, se estima que el acusado debió ser absuelto del delito del art. 468 CP, por quebrantamiento de una medida cautelar. “

Debemos decir, que estamos de acuerdo con el voto particular de esta sentencia, pues con el nuevo criterio jurisprudencial adoptado por el citado Acuerdo de Pleno, se está poniendo al mismo nivel incumplir una medida cautelar y una pena. Esto podría generar que produzcan más sentencias condenatorias por incumplimiento de medida que las óptimas. No tiene sentido condenar al marido cuando ella ha consentido reanudar la convivencia y ésta se da de forma pacífica porque reanudaron la relación.

Además, siempre está la opción de la mujer de volver a solicitar una Medida Cautelar cuando ella lo necesite.

d) Eficiencia de las órdenes de las órdenes de alejamiento y comunicación como pena.

1. Hay más penas privativas de derechos¹³⁸ pero las que más se usan como pena accesoria en las sentencias condenatorias de delitos de VG, son las de prohibición del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, prohibición de aproximarse a la víctima y prohibición de comunicarse con la víctima.

En casi todas las sentencias condenatorias de VG, está presentes las dos primeras al mismo tiempo y la duración media de este extremo de la pena es de 3 años¹³⁹.

2. Insertar en la gran mayoría de las sentencias condenatorias (al margen que la pena principal pueda ser de trabajos en beneficio de la comunidad, no

¹³⁸ Las penas privativas de derechos están contempladas en el artículo 39 del C.P.

¹³⁹ Según nos indica el personal judicial entrevistado del JVM Nro. 1 de Madrid.

sólo de prisión), alguna pena privativa de derechos no sería eficiente y en algunos casos hasta contraproducente.

Existen lazos por los cuales es inevitable el contacto en la pareja, tales como hijos en común, gastos que se comparten, el que era domicilio conyugal y demás relacionados. Pensemos además la vida en una ciudad pequeña o un pueblo, o inclusive si viven en el mismo vecindario, resulta muchas veces “inevitable” quebrantar la orden. Hemos conocido no pocos casos, que los padres se tienen que mudar de vecindario porque “no pueden estar cerca”, o quedar en un sitio diferente porque no puede acudir al domicilio. Si hay hijos de por medio los que más sufren son ellos porque los sobre costes que genera en un padre ir a visitar a su hijo, los terminará pagando el menor. En otras palabras, con esto se estaría incentivando a que el padre tal vez visite menos a su hijo y/o se promueva que descuide sus responsabilidades como padre más fácilmente. Todo esto en detrimento de la mujer que es quien mayoritariamente se queda con los hijos. De esta manera no se está promoviendo que la mujer sea más independiente.

Desde luego, esta reflexión parte de la premisa que el proceso penal se originó por una denuncia que no ha revestido gravedad en forma de atención médica para la mujer o para los hijos.

3. Para aquellos que tienen antecedentes, penales sí podría ser disuasorio. Para todos los delitos en general, si la pena de prisión es inferior a 2 años de prisión, no se cumple la pena de forma efectiva. Lo mismo pasa para el delito tipificado en el Art. 468 del C.P. es pena de prisión de 6 meses a 1 año y con la pena de multa de 12 a 24 meses en los demás casos. Por tanto los que cumplen condena de prisión son aquellos que tienen antecedentes penales o ya están en prisión. Se podría decir entonces, que casi todos los que han entrado tienen antecedentes penales.
4. Está por ver si las condenas accesorias que contengan orden de alejamiento y comunicación son realmente disuasorias. Hasta que no conozcamos los datos, no sabemos cuántas condenas de este tipo realmente se incumplen. Por ahora sólo conocemos los datos de aquellos que tienen antecedentes penales, pero faltan los que no tienen dichos antecedentes, que presumimos serán la mayoría pues las denuncias de violencia de género, son de delitos que no revisten gravedad, en su mayoría.
De todas formas, para hacer un estudio más completo, deberíamos conocer la eficacia de esta pena en otro tipo de delitos, como los sexuales, de lesiones y así intentar ver si es un tema inherente al delito o la naturaleza de la pena.

e) Eficiencia de las órdenes de las órdenes de alejamiento y comunicación como O.P.

1. Primero, debemos mencionar el numeral 2 del artículo 61 de la Ley Integral:
“En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el Juez competente, de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los

servicios de atención a las víctimas o su acogida, deberá pronunciarse en todo caso sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de aseguramiento contempladas en este capítulo, determinando su plazo, si procediera su adopción”.

El “en todo caso” se ha cuestionado mucho y con razón. Con tal redacción, se está diciendo a los jueces que siempre interpongan orden de protección. Pero, la realidad nos dice que los jueces otorgan O.P. sólo en el 27% de los casos. Y en 2010, este porcentaje bajó a 24%.

Mientras esto pasa con el criterio de los jueces; las denuncias por delitos por quebrantamiento de medida se mantienen relativamente estables.

Si a esto le sumamos que las denuncias por el delito de incumplimiento de pena han pasado de ser el 2.66% de las denuncias ingresadas a los JVM, a ser el 1,72% en 2010; podemos decir que las O.P. se incumplen más que las penas.

Aunque la sanción de incumplir una Medida Cautelar es la misma que si se incumple la pena, la probabilidad de incumplirla es mayor.

2. Según un estudio hecho por el Centro Reina Sofía, referido a las muertes de mujeres en manos de su pareja o ex pareja, al menos uno de cada 10 asesinos tenía una orden de alejamiento¹⁴⁰. Con este dato podríamos decir que para los delitos más graves, las víctimas no utilizan las Órdenes de Protección. Si a esto le añadimos, como hemos visto en el apartado de mujeres asesinadas, que el porcentaje de mujeres fallecidas por violencia de la pareja que le denunciaron previamente no supera el 20%, advertimos que es muy difícil llegar hasta esas mujeres que están pasando por una situación de violencia de pareja grave. El problema está que, para los delitos más graves, ellas no denuncian tanto como deberían. Esto genera que el mecanismo de protección integral que ha previsto la ley, siendo una de sus formas la orden de protección, no funcione al cien por cien.
3. La pena del delito de quebrantamiento de orden de protección disuade la acción de incumplir lo que manda el juez, pero ¿Qué pasa con el presunto delito de violencia de género que le dio origen?. Teniendo en cuenta que el 45% de las denuncias se archivan por falta de pruebas y aunque no conozcamos qué porcentaje de esos quebrantamientos lo ha consentido la mujer; es probable que -en no pocos casos de quebrantamiento de la O.P.- el resultado final del expediente derivado de la denuncia por violencia de género que dio origen a la O.P., sea de absolucón o archivamiento de la causa, lo cual nos lleva a concluir que el exceso de órdenes de protección no contribuya necesariamente a que el delito se disuada o la violencia cese. De todas formas, vemos que con el tiempo estamos llegando a algún equilibrio. El pasado año los jueces deniegan algo más las órdenes de protección que piden las víctimas, comparado a 5 años atrás; ya no se está procesando a la mujer cuando consienta el quebrantamiento de la pena o medida... Todo esto hará que mejore la eficacia de las órdenes de protección, pero creemos que deberían existir otras medidas obligatorias que promuevan el seguimiento de la mujer víctima para que mantenga su

¹⁴⁰ CENTRO REINA SOFÍA. “Informe Mujeres asesinadas por su pareja 2000-2009”. En Estadísticas, Violencia en el ámbito familiar en España, p. 15.

posición de rechazar todo tipo de violencia mediante programas de educación y atención psicológica en coordinación con los Servicios Sociales.

El consentimiento de la víctima del quebrantamiento de la O.P., no tiene relevancia en el proceso. El perdón no existe en el derecho penal. Si ella decide reanudar la relación, inclusive la convivencia, sufrirá ella y su familia los efectos de una sentencia condenatoria, vaya o no vaya a la cárcel el supuesto agresor. Todo esto nos lleva a insistir con el tema de alternativas al incumplimiento de medidas cautelares.

Las reflexiones anteriormente planteadas no incluyen a los quebrantamientos de O.P. o penas hechos con violencia. Está claro que si se añade este ingrediente al quebrantamiento, no deja lugar a dudas que la medida fue acertada y la pena necesaria. Para estos casos, sí que habría sido eficaz una u otra.

La complicación está en la labor de los jueces relacionada con diferenciar qué casos son los que pueden generar más violencia que otros. Por eso, creemos que los informes psicosociales de las víctimas -que se usan poco-, deberían ser pedidos por el Juez siempre que exista una Medida Cautelar por medio, tanto para revocarla como para mantener su vigencia¹⁴¹.

CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

A) INDICADORES DE VIOLENCIA DE PAREJA EN ESPAÑA

¹⁴¹ Esta idea no es originalmente nuestra. La Consejera del Colegio de Abogados del Estado, Dña. Isabel Variberas, propuso en un Congreso para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en 2009 que: “Debería solicitarse informe al equipo Psico-Social del Juzgado o Tribunal que haya de pronunciarse sobre la revocación de la medida o la suspensión de la pena, en cuanto a la realidad de la reconciliación, las circunstancias en que sea producido la reanudación de la convivencia y sobre la desaparición de la situación de peligro para la víctima que llevaron a la adopción de la medida o la imposición de la pena”. En VALRIBERAS ACEVEDO, Isabel (2009). “Quebrantamiento de condena y medida cautelar. Especial referencia a la actuación en contra de la voluntad de las víctimas”

1. La tasa de homicidios de mujeres cometidos por la pareja en España no es especialmente alarmante comparado con otros países. La media europea por millón de mujeres está en 3,94 mientras que España tiene el 2,81. Mientras que la media del continente americano¹⁴² es de 8,15.
2. A nivel interno la tasa -por cada mil habitantes- de homicidios dolosos y asesinatos en general (víctima mujeres y hombres, sin distinción de parentesco ni móvil) ha descendido desde 2003 de forma paulatina, hasta mostrar la tasa más baja en 2010, de 2,35.

Por otro lado, en nueve años, de 2000 a 2009, la tasa más alta de asesinatos por millón de mujeres en manos de su pareja, se dio en el año 2003, con 3,89. Disminuyó en 2005 a 3,27 para luego volver paulatinamente a subir hasta el 2008 con 3,79. El año 2009 tuvo uno de los índices más bajos: 2,96. Por tanto, se puede afirmar que, a excepción del año 2009, la tasa de homicidios de mujeres en manos de su pareja ha ido incrementándose de forma paulatina.

En cuanto al perfil de los asesinos, hemos visto que al menos el 23,53% tenía empleo y de ellos el 61,70% tenía un empleo no cualificado. Y por parte de las víctimas, al menos el 29,25% tenía empleo y de ellas el 76,57% tenía un trabajo no cualificado. De lo que sí hay evidencia empírica (de índole económica y sociológica) es de la importancia del factor empleo (directamente relacionado con la renta, las fuentes de financiamiento del hogar), en concreto, el estrés que genera la falta de empleo en el hombre. Es de los variables que más influyen en el aumento de la violencia.

En cuanto a nacionalidad de los asesinos, los extranjeros representaban el 15% en 2003, y la tendencia ha ido en aumento hasta llegar a 45% en 2009.

3. La tasa de los delitos de lesiones en España, por mil habitantes, se ha mantenido a lo largo de los últimos diez años; en 2009 la tasa fue de 0,86.
Por otro lado, la tasa de los delitos de lesiones en el ambiente doméstico pasó de ser 0.81 en 2003, a ser de 1,38 en 2009. Los incrementos más significativos coinciden con las reformas legislativas de los años 2003 y 2004.
Las reportes de denuncias de mujeres por delitos de lesiones, malos tratos, y análogos, producidos por la pareja o ex pareja, se incrementaron en 328%, de 2003 a 2005. Igualmente, los reportes de hombres por delitos de lesiones, malos tratos, y análogos, producidos por la pareja o ex pareja, se incrementaron en 419%, de 2003 a 2005
4. No sólo por lo que dice la encuesta realizada por el Instituto de la Mujer en 2006, sino porque desde distintos fueros (juzgados, fiscalías, asociaciones, prensa), se advierte un alarmante incremento de los

¹⁴² Sólo de nueve países americanos.

reportes de violencia de hijos a padres, en los últimos años. Este fenómeno merece una atención especial por parte de las autoridades y la comunidad científica.

B) ALGUNOS COSTES DEL SISTEMA JUDICIAL

5. Sólo en salarios de funcionarios de los Juzgados de Madrid y Barcelona, en 2010 se ha gastado aproximadamente 7.418.138,16€ como mínimo.
6. El coste en promedio de los honorarios de un abogado del turno de oficio en un proceso penal, es de 316€. Se desconoce exactamente cuántos expedientes han sido llevados por abogados del turno de oficio.
7. El coste del denunciado de asumir los costes de un abogado en un proceso penal, serían 1.305€ por expediente, aproximadamente. Con datos de 2009, los denunciados en los procesos penales habrían gastado 105.034.432,50€ aproximadamente.

El coste aproximado en el que incurriría la denunciante, si ella asume el coste de pagar un abogado sería de 810€ por expediente, aproximadamente.

Con datos de 2009, las denunciadas en los procesos penales habrían gastado 60.987.735,00€ aproximadamente.

En total, los intervinientes en un proceso penal habrían gastado 166.022.167,50€ sólo en honorarios de abogados, sólo en el año 2009, aproximadamente.

8. En promedio, sólo en honorarios de abogados, cada proceso de divorcio de mutuo acuerdo como mínimo cuesta 1200€ para cada una de las partes y 1750€ en promedio si es contencioso.

C) ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INCENTIVOS

9. Eficiencia del derecho penal.
La eficiencia del aumento de las penas para delitos de violencia de género vendría determinada por:

El bienestar social es la suma de todos los beneficios, menos el daño causado de todos los crímenes, menos el coste de imponer las sanciones. En nuestro escenario, y desde la perspectiva del que comete el delito de violencia sobre una mujer:

$$P_x < P_m$$

Donde

P_x = Pena para crímenes cometidos por cualquier persona

P_m = Pena para crímenes cometidos por el marido

La sociedad tiene como objetivo escoger los niveles más óptimos de P_x y P_m para la maximización del bienestar social; entonces los beneficios obtenidos de cometer crímenes de los m deberían descontarse más.

Por tanto, en términos marginales, tendríamos:

$$B_x < B_m$$

B_x = Beneficio marginal de disuadir a cualquier persona

B_m = Beneficios marginal de disuadir a los maridos

Finalmente, de forma intuitiva podemos decir que el coste de castigar a los X; en consecuencia, debería ser mayor que castigar a los M.

$$C_x > C_m$$

Donde:

C_x = Coste marginal de aumentar el castigo a los X

C_m = Coste marginal de aumentar el castigo a los M

Por tanto, sería óptimo tener una política donde $P_x < P_m$, siempre y cuando el coste marginal de aumentar el castigo a los X sea menor que cuando se aumente para los M.

Imponer castigo es costoso, pero que el coste de imponer un castigo sea mayor cuando se trata de un individuo cualquiera, que cuando se trata del marido; se podría explicar en parte por la probabilidad de detección y de ser finalmente condenado con una pena determinada (aumentada). Es claramente identificable el delito de violencia de género, cuando quien ejerce la violencia contra la mujer es su marido.

Está muy claro cuando se trata de un delito grave, como un homicidio o una lesión grave donde hay pruebas suficientes, efectivamente resulta más fácil aumentar la pena, pero si hablamos de un tipo de delito como los malos tratos psicológicos, o las vejaciones leves, coacciones leves, amenazas leves; la prueba es más difícil de conseguir. Es más, el coste marginal de aumentar el castigo para cualquiera de esos delitos, cuando lo cometa X o M, sería el mismo. Esta conclusión podría llevarnos a sugerir que para delitos no tan graves, aumentar la pena para delitos de violencia de género, cometidas por el marido contra la mujer; al final podría tener un efecto igual que si no se aumentara, desde el punto de vista del bienestar social¹⁴³.

¹⁴³ Estamos simplificando mucho desde luego, porque sabemos que el hecho mismo de pasar por los Juzgados, por un proceso de violencia de género, genera costes para un posible ofensor averso al riesgo en cuyo caso, aunque no pueda ser condenado por falta de pruebas, la parte inicial del proceso tendría algún efecto disuasorio.

Por la forma cómo terminan casi la mitad de los procesos por delitos de violencia de género, porque la mayoría son de hechos que no revisten gravedad; no creemos que sea eficiente aplicar incrementos a todas las sanciones penales cuando la víctima es una mujer, sin tener en cuenta los grados de violencia.

Por tanto, para los delitos que no revisten especial gravedad, abogamos por un sistema distinto al penal, como puede ser la figura del Juez de Familia, y que a su vez mediante esta tutela se tenga acceso al apoyo psicológico permanente, en coordinación directa con los Servicios Sociales, donde se fomente primero la mediación, conciliación para agotar una vía que no sea la penal para frenar la violencia y empezar con los trámites del divorcio si así lo desean. No hay evidencia que indique que el asesoramiento de las parejas que acuden a programas de asesoramiento, incrementa el riesgo para la mujer. Pensamos que valdría la pena intentarlo.

10. Sobre la eficacia de las penas. La gran mayoría de las penas no se cumplen de forma efectiva. La pena de prisión de los artículos 153, 171 y 172 va de 6 meses a 1 año, y la del 173 es de 6 meses a 3 años.

Las penas privativas de libertad en general, menores a dos años no se cumplen de forma efectiva; se suspenden. La parte de la pena condenatoria que se cumple es la accesoria, que incluye las órdenes de incomunicación y alejamiento (las más habituales). Sobre estas últimas nos referiremos con detalle en el punto

Además, haría falta saber la media de tiempo que pasan en la cárcel aquellos que cumplen sentencia y cuántos de ellos reinciden. A la fecha de elaboración de este trabajo, estos datos no están disponibles.

11. Incentivos de la mujer víctima

Con las últimas reformas penales, el sistema de incentivos ha sido modificado de tal forma que estos últimos años las mujeres denuncian más, pero nos preguntamos si es el adecuado. Pensamos que hay situaciones donde lo óptimo sería que el derecho penal intervenga menos, o tal vez sustituirla con otro tipo de intervención.

Creemos que para delitos que revisten especial gravedad como son los artículos 173.2 (Violencia habitual de género), 171.4 (Amenazas leves), 172.2 (Coacciones leves) y el 153 (Malos tratos en el ambiente familiar) del Código Penal; se debería optar por de forma obligatoria o alternativa por la intervención tal vez del Juez de Familia a la vez que los Servicios Sociales. Un entorno donde se les brinde orientación y apoyo que es, a lo mejor, lo que más necesitan por encima de un proceso penal.

Sugerimos también, el uso más frecuente del Informe Psico social, que se usa muy poco en los Juzgados de Instrucción, y puede ayudar mucho al Juez a valorar mejor situaciones donde hay más riesgo que otras, si hace de forma periódica.

Avoidance de la víctima

Las precauciones que ella debería tomar para evitar una relación violenta, dependen de sus preferencias para seleccionar pareja.

Muchas evitan las relaciones violentas, pero otras no lo hacen aunque les genera más costes tener una relación así, que no tenerla. No es lógico. Esto hace que sea muy difícil lograr persuadir a todas, porque es un tema muy personal. La labor de educación, concienciación mediante los medios de comunicación ayudan, pero al final quien decide es ella.

El coste de oportunidad de dejar la relación dependerá del número de hijos que tengan en común, dependencia económica, miedo a quedarse sola, entre otros factores.

La amenaza de denuncia por parte de ella, es bastante creíble dado el sistema penal de protección de víctimas de violencia de género que hay ahora mismo. Como siempre, para maltratadores aversos al riesgo, puede funcionar la amenaza; para los neutrales muchas veces no ayuda, todo lo contrario, puede hacer que las probabilidades de infligir violencia aumenten, conforme dicen los estudios.

Efectos de las ayudas públicas y privilegios laborales.

La Ley 1/2004 creó una ayuda financiera de un pago único de 2.556€ o 7.668€ si tiene hijos¹⁴⁴ destinada a víctimas de violencia de género¹⁴⁵. La acreditación para obtener esta ayuda es la orden de protección o el Informe del Ministerio Fiscal donde indique que existen indicios de la

¹⁴⁴ El 80% del IPREM de 2011 es 426 € Las cantidades mencionadas resultan de multiplicar los 426 por 6 y por 18.

¹⁴⁵ “Artículo 27. *Ayudas sociales*:

1. Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional.

2. El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, el importe sería equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo.

3. Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, serán concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. En la tramitación del procedimiento de concesión, deberá incorporarse informe del Servicio Público de Empleo referido a la previsibilidad de que por las circunstancias a las que se refiere el apartado 1 de este artículo, la aplicación del programa de empleo no incida de forma sustancial en la mejora de la empleabilidad de la víctima. La concurrencia de las circunstancias de violencia se acreditará de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de esta Ley.

4. En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.

5. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual”.

comisión del delito¹⁴⁶. Se concedieron sólo 717 ayudas y se denegaron 1058 solicitudes.

Son cantidades insignificantes comparadas a la cantidad de denuncias de violencia de género que se dan año tras año. El límite del 75% del salario mínimo inter profesional (SMI) es una barrera por sí misma; sólo pueden acceder a la ayuda quien carezca de rentas superiores a 481,05€, además que de sus especiales dificultades para obtener un empleo y que por dicha circunstancia no participaría en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional.

Se contemplan dos tipos de ayudas para mujeres víctimas de violencia de género:

- Percepción de la RAI (Renta Activa de Inserción), que es el 80% del IMPREM (426,00€), durante un máximo de 11 meses. Las beneficiarias de esta ayuda de 2006 a 2009 fueron 63108 mujeres.
- Ayuda para cambio de residencia de víctimas de violencia de género o doméstica (1.278,024€), a partir del día siguiente a aquel en que se solicite. Las beneficiarias de la ayuda para cambio de residencia enero de 2005 a diciembre de 2009, fueron 6011.

Cada vez más se solicita la Renta Activa de Inserción. Todo indica que la tendencia irá creciendo, conforme más gente tenga dificultades económicas y no supere los 481,05€ (75% del IPREM).

12. La mujer extranjera víctima y sus incentivos

Las extranjeras víctimas de violencia de género, están sobre representadas, considerando que el 15,83%¹⁴⁷ de la población femenina en España es extranjera y el porcentaje de denuncias de violencia de pareja, donde la víctima es extranjera está en torno al 30%.

El 30% de las mujeres asesinadas entre 2000 y 2009, por su pareja, son extranjeras. De ellas el 15% son latinoamericanas, pero también es verdad que ellas representan el 40% de la población femenina inmigrante. No es que los hombres maten más a latinoamericanas, son más numerosas.

De todas aquellas supuestas víctimas que denunciaron pero luego renunciaron al proceso penal, el 45% son extranjeras.

Los últimos 3 años, el 35% de las mujeres que solicitan al Juez Orden de Protección son inmigrantes.

Con estos datos, las mujeres extranjeras deberían merecer una especial protección como colectivo.

Relacionado con las ventajas concedidas por la Ley para ayudar a este colectivo, la principal es la autorización temporal de residencia. Contrario a lo que se esperaba, no se han concedido muchas de estas

¹⁴⁶ Art. 23 de la Ley 1/2004.

¹⁴⁷ Porcentaje elaborado en base a datos provisionales a 1/01/2011, según INE.

autorizaciones. De 2005 a 2009, han sido 1467 autorizaciones de residencia temporal en total.

No se conocen datos sobre el porcentaje de mujeres extranjeras beneficiarias de la RAI (Renta Activa de Inserción).

Creemos que hace falta un seguimiento, apoyo psicológico continuo y el asesoramiento y control de los Servicios Sociales para las mujeres víctimas de violencia de género en general; con mayor razón para el colectivo de mujeres inmigrantes pues está comprobado que son más vulnerables.

13. Beneficio esperado del maltratador.

Si bien las penas por delitos de violencia de género son más altas, la pena de prisión no se hace efectiva, si no tienen antecedentes penales.

La pena para delitos que no revisten especial gravedad es la orden de alejamiento. Es posible que se imponga la misma pena para un intento de agresión física que una amenaza verbal. Con esto se podría caer en el error de imponer la misma probabilidad de sanción para distintos grados de violencia. Esto va en contra del principio de disuasión marginal.

Por lo anteriormente expuesto, creemos que valdría la pena que el legislador permita sustituir la pena de prisión por programas de reeducación y tratamiento psicológico.

14. En los últimos años, se han incrementado las solicitudes de divorcio en los JVM. En 2006, de todas las denuncias por violencia de género entre parejas casadas, tramitadas en los JVM; se pidió el divorcio en el 38,25% de los casos. Año tras año se ha incrementado este porcentaje hasta que en 2010 se alcanzó el 54,58%.

La facilidad de tramitar la denuncia y el expediente de divorcio en el mismo juzgado incentiva a que las partes cada vez, lo usen más.

D) INDICADORES DE DISUASIÓN

15. Sobre los posibles indicadores de disuasión, creemos que uno de los más importantes es el porcentaje de mujeres muertas en manos de su pareja y que habían presentado denuncia antes del suceso de muerte. Antes de las reformas legislativas importantes, es decir antes de 2003, el porcentaje estaba en 20%. Los últimos años 2008 y 2009 -de los que se tienen datos- nos dicen que el porcentaje es prácticamente el mismo: 22,4 y 21,67%. Esto nos podría indicar que no se ha logrado disuadir los delitos de violencia de género más graves.

16. Un segundo indicador podría ser los hombres que finalmente van a la cárcel por delitos de violencia de género. Tenemos que:

- El ingreso a los Penales por motivo delito de lesiones de VG ha ido en aumento.
- El porcentaje del delito “Malos tratos de VG”, ha empezado a caer desde el año 2009. Al mismo tiempo desde ese año empiezan a

registrarse ingresos por quebrantamiento de pena o medida de alejamiento.

- La incidencia del delito de malos tratos ha ido en aumento hasta el año 2009. En 2010 ha descendido. Para las amenazas ha sucedido lo mismo.
- Aunque la incidencia de ingresos por homicidios y asesinatos, porcentualmente hablando, sigue siendo prácticamente la misma; lo cierto es que sí que ha aumentado en números absolutos. En el año 2010 se internaron por asesinato 103 personas, prácticamente el doble que el año 2008. Lo mismo ha ocurrido con los homicidios.
- Los ingresos por asesinato subieron de un 2% a un 3% de 2009 a 2010 y en cuanto a los homicidios tuvieron también un ligero incremento en 2010.
- Los ingresos a cárceles por amenazas de género, se incrementaron al doble en el año 2008, volvió a subir en 2009 y finalmente en 2010 se ha reducido un poco.
- En el año 2009, fueron 29 hombres por falta de lesiones a la cárcel, en 2010 disminuyó a 18.
- Hasta antes de 2009, no habían presos por Faltas de amenazas, coacciones, injurias o vejaciones injustas de Violencia de género. En 2009 se registraron 22 ingresos y en 2010, 25.

17. Otro indicador sería la eficiencia de las órdenes de órdenes de protección más usadas, las de alejamiento y prohibición de comunicación.

Eficiencia de las órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación, como Orden de Protección.

Está claro que el estado pretende asumir todos los costes preventivos posibles, lo cual nos parece un derroche de recursos que se podrían reorientar de otra manera para conseguir eficiencia.

Los delitos de violencia doméstica son los más difíciles de prever. Puede ocurrir en todas clases sociales, de distinto nivel educativo, con hijos, sin hijos, sin antecedentes de violencia, etc. Lo cual tampoco quiere decir que todas las mujeres sufrimos violencia o la sufriremos en algún momento.

Centrándonos en la violencia de pareja, lo más certero y eficiente sería, evitar las relaciones de pareja violentas. Con eso eliminamos la probabilidad de violencia de pareja. Lamentablemente, las mujeres están dispuestas a asumir los riesgos que suponen estar con una persona violenta.

De todas las solicitudes de protección, se concedieron sólo el 27% de las solicitudes en 2007, y así se mantuvo el porcentaje hasta que en 2010 se ha concedido el 24%. El informe psico social de forma periódica, puede ayudar al juez a valorar los casos donde la orden de protección debe continuar, o debe revocarse.

Eficiencia de las órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación, como pena accesorio.

Idoneidad de la pena accesorio de alejamiento y prohibición de comunicación, según la situación particular de cada familia.

Por ejemplo, si hay hijos de por medio los que más sufren son ellos porque los sobre costes que genera en un padre ir a visitar a su hijo, los terminará pagando el menor. En otras palabras, con esto se estaría incentivando a que el padre tal vez visite menos a su hijo y/o se promueva que descuide sus responsabilidades como padre más fácilmente. Todo esto en detrimento de la mujer que es quien suele quedarse con los hijos. De esta manera no se está promoviendo que la mujer sea más independiente.

Desde luego, esta reflexión parte de la premisa que la denuncia se originó por una denuncia que no ha revestido gravedad en forma de atención médica para la mujer o para los hijos.

Está por ver si las condenas accesorias que contengan orden de alejamiento y comunicación son realmente disuasorias, para lo cual deberíamos conocer la eficacia de esta pena en otro tipo de delitos, como los sexuales, de lesiones y así intentar ver si es un tema inherente al delito o la naturaleza de la pena.

18. Aunque no hay datos diferenciados acerca de cuántos son de unos y de otros, lo cierto es que los ingresos de hombres en cárceles por delitos de Quebrantamiento de Medidas y de Penas del art. 468 del C.P. suman 1209 entre dos años (2009 y 2010), mientras que por el delito de Lesiones (Art. 148) se han dado 1626 ingresos en cuatro años. Así, los delitos de quebrantamiento de Medidas y Penas de protección, se ha convertido, en el año 2010 -último año del que contamos con datos-, en el segundo motivo de ingreso de hombres en las cárceles españolas, comparado con el total de delitos de violencia de género.

APÉNDICE

EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Políticas Públicas sobre violencia doméstica y de género, antes de la Ley 11/2003.

- Código Penal de 1973. Por primera vez en este código se regula la falta de malos tratos de obra, con la sanción de cinco a quince días de arresto menor. Los códigos anteriores, partiendo desde el Código penal de 1848 y en adelante con algunas modificaciones, castigaba con arresto de uno a cuatro días o multa de uno a cuatro duros y reprensión, al marido que maltratase a la mujer sin causarle lesiones y la mujer que desobedece a su marido, o le provocase o injuriase.¹⁴⁸
- Reforma del Código Penal en 1989¹⁴⁹. La Ley Orgánica 3/1989 del 21 de junio modificó sustancialmente el régimen de los diversos delitos de lesiones del Código Penal de 1973. Insertaron el artículo 425º, que tipificaba por primera vez este tipo de conducta como delito, cuando anteriormente estaba considerado como falta a la violencia física de modo habitual y con cualquier fin sobre el cónyuge, descendientes, pupilo, tutelado o persona sobre la que se ejerza la guarda de hecho.
- Código Penal de 1995. Modificó el artículo 425º, eliminando la expresión “con cualquier fin”, consideró también como víctimas a los ascendientes, se requirió que la relación análoga a la matrimonial fuera estable y se elevó la anterior pena de arresto mayor de uno a seis meses, a pena de prisión de seis meses a tres años. También se innovó en cuanto a las restricciones de derechos de una sentencia condenatoria: volver o acudir a determinados lugares, aproximarse o comunicarse con determinadas personas. Y como medidas cautelares, durante el proceso de investigación de un delito, el Juez o Tribunal podía imponer la prohibición de residir o de acudir a determinados lugares, barrios, municipios u otras entidades locales, o Comunidades Autónomas, o de aproximarse o comunicarse con determinadas personas.
- El primer Plan de acción contra la violencia doméstica, vigente hasta el 2000, fue elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e impulsado por el Instituto de la Mujer fue aprobado por el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 1998, con una dotación presupuestaria de alrededor de 54 millones de euros. Estaba compuesto por 57 medidas enmarcadas en seis áreas: Legislación y práctica jurídica, sensibilización y prevención, educación y formación, recursos sociales y sanidad. En este periodo se crearon a lo largo de todo el país los servicios de atención especializada de la policía (SAM) y de la Guardia Civil (EMUNE).

¹⁴⁸ Para mayor detalle de los antecedentes históricos, revisar ACALE SÁNCHEZ M. “El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar”. P. 17 y 18. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2000.

¹⁴⁹ Cabe mencionar el comentario de TRABADO ÁLVAREZ, Concepción: “La falta de tipicidad penal de las conductas de violencia dentro del ámbito familiar, venía dada por la calificación de conductas que incumbían exclusivamente al ámbito doméstico o privado, y así se ha considerado históricamente, lo que unido a la teoría de intervención mínima que debe tener el Derecho Penal, favoreció a la ausencia de regulación penal en la materia”. En “El delito de malos tratos. Novedades introducidas en el delito de malos tratos por la Ley Orgánica 14/99”. P. 29, cuarto párrafo.

- Ley Orgánica 14/1999 del 9 de junio de “Modificación del Código Penal de 1995 en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Así, el nuevo artículo 153 del Código Penal, tipificó por fin la violencia psíquica, clarificaba qué debía entenderse por habitualidad (se entenderá tal situación, cuando ejercida contra diferentes sujetos o de que los actos hayan sido objeto de enjuiciamiento anteriormente) y ampliaba el ámbito de protección, abarcando situaciones en las que la convivencia ya ha cesado. Aumentó la pena de prisión de seis meses a tres años al que habitualmente ejerce violencia física sobre alguna de las personas en él enumeradas. Y hace constar que se apreciará la habitualidad independientemente de que la violencia se haya ejercido contra diferentes sujetos o de que los actos hayan sido objeto de enjuiciamiento anteriormente.
También se contempla la posibilidad de imponer como pena accesoria una pena de alejamiento de las recogidas en el art. 57 del Código Penal.
- Convenio para la creación de los servicios especializados en violencia doméstica del 29 de junio del 2000. Mediante este convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española, el Ministerio se comprometía a financiar la implantación y el funcionamiento de servicios de asistencia jurídica especializada a las víctimas de la violencia doméstica en todos los Colegios de Abogados de su ámbito competencial, en forma gratuita. Se tramitaban las solicitudes de asistencia jurídica gratuita y una vez acreditada la necesaria insuficiencia de recursos económicos para litigar se procede inmediatamente al nombramiento de un abogado de oficio. El 23 de julio de 2003 se amplió este Convenio de colaboración, incrementándose la aportación económica por parte del Ministerio de Justicia en un 69%. Nuevamente, el 4 de diciembre de 2003 se incrementó en un 32.80%.¹⁵⁰
- El segundo Plan, con un presupuesto de más de 78 millones de euros, estuvo vigente hasta marzo del 2004. Contenía 58 actuaciones que tenían como objetivos incidir en la educación como medida preventiva, mejorar la legislación y práctica jurídica, mayores recursos sociales y potenciar la coordinación entre los diferentes organismos y organismos sociales que trabajan en la prevención y eliminación de la violencia doméstica, así como la asistencia a las víctimas.
- Una de las medidas adoptadas por este plan, fue la creación del Observatorio contra la Violencia Doméstica¹⁵¹, mediante convenio del 26 de setiembre del 2002 suscrito por el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, incorporándose posteriormente la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia. Su ámbito de actuación reside fundamentalmente en el tratamiento de la violencia doméstica en el ámbito de la Administración de Justicia. Su

¹⁵⁰ MAYORDOMO RODRIGO, Virginia. “La violencia contra la mujer. Un estudio de derecho comparado”. Editorial Diles S.L. Madrid, 2005. P. 33.

¹⁵¹ Nació con el nombre de “Observatorio de Violencia Doméstica”. A partir del 8 de julio del 2003 es denominado “Observatorio contra la Violencia Doméstica y de género”.

objetivo más importante es hacer un seguimiento de las sentencias y demás resoluciones judiciales dictadas en este ámbito (el de la violencia doméstica se entiende), a fin de plantear pautas de actuación en el seno del Poder judicial y a la vez sugerir aquellas modificaciones legislativas que se consideren necesarias para conseguir una mayor eficacia y contundencia en la respuesta judicial¹⁵².

- Ley Ordinaria 38/2002, del 24 de octubre de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado¹⁵³. “El gran epicentro de la reforma descansa sobre la coordinación policial-judicial”¹⁵⁴. La policía judicial se constituye en protagonista absoluto de la etapa de la investigación policial, con la finalidad de hacer las diligencias necesarias a fin de conformar el atestado policial.
- Ley 27/2003 del 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica, mediante la cual se añade la posibilidad de que el Juez acuerde la aplicación de la orden de protección prevista en el art. 544ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como medida cautelar. Posteriormente se creó la Comisión de Seguimiento para la implantación la orden de protección (22 de julio de 2003) y el Registro Central para la Protección de las víctimas de la violencia doméstica (5 de marzo de 2004). Este registro recoge las denuncias por violencias familiar admitidas a trámite, contiene los datos personales del agresor (condenado o aún sin juzgar) y de la persona agredida. Los datos personales de los denunciados se retiran cuando la denuncia de lugar a una sentencia absolutoria o se archive definitivamente.

2. Ley Orgánica 11/2003.-

Esta ley orgánica de fecha 29 de septiembre es producto de la sensación de impunidad generalizada en cuanto a la sanción de este tipo de delitos que contemplaba la Ley anterior 14/1999. Las principales modificaciones e innovaciones son las siguientes:

- Con esta ley se estableció que cuando la falta de lesiones se cometa en el ámbito doméstico pasa a considerarse “delito”, permitiendo por tanto imponer la pena de prisión del artículo 617 del Código Penal. Esto conllevó a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional (Ley Orgánica 13/2003, que desarrollaremos líneas abajo) y la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, por la que se intenta poner orden en las reformas del Código Penal, con incidencia en:
- Penas de alejamiento.- Introduce la suspensión, respecto de los hijos, del régimen de visitas, comunicación, estancia, que en su caso, se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de la pena, haciendo este control inclusive mediante medios electrónicos. También se amplía la duración máxima de esta pena accesoria: hasta diez años si el delito es grave y puede ampliarse hasta después de cumplida la pena de prisión.

¹⁵² En “Memoria del Observatorio contra Violencia Doméstica y de género desde su creación el 26 de setiembre del 2002 al 15 de marzo del 2004”. Pag. 2.

¹⁵³ Luego, con rango de Ley Orgánica 8/2002 del mismo día, es la denominada Ley de Juicios Rápidos.

¹⁵⁴ MAYORDOMO RODRIGO, V. “La violencia contra la mujer...”, Op. Cit. P. 35, segundo párrafo.

- Medidas cautelares de alejamiento.- se establece que si el inculpado incumple la medida de alejamiento, se le impondrá prisión provisional.
- La nueva redacción del art. 153, según la Ley Orgánica 11/2003, retira la habitualidad a los “malos tratos”, concediéndosela al 173, que se ubica, por ello, en el apartado de “Contra la integridad moral”. También se incluyó dentro de las consideraciones como sujeto activo del delito, a la relación análoga de afectividad, aún sin convivencia. Además, da cabida a las relaciones conyugales o de convivencia ya extinguidas.
- Introduce el nuevo delito de “Mutilación genital”, en el apartado “contra las personas”, se incorpora el delito de “Sustracción de menores”, en el apartado de “Resto”, y finalmente el delito de “Coacción a la prostitución” pasa a denominarse “Coacción/Lucro sobre la prostitución”.
- Ley Orgánica 13/2003 de 24 de octubre, de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, según el cual la prisión provisional durará el tiempo que sea necesario, cuando se trate de un delito cometido en el ámbito de la violencia doméstica, para lo cual no será de aplicación el límite respecto de la pena regulado por el ordinal 11, apartado 1 del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

3. Ley Orgánica 1/2004

Denominada Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de fecha 28 de diciembre de 2004, como su mismo nombre lo indica establece una serie de reformas e innovaciones en distintas áreas, desde el ámbito de la publicidad en los medios de comunicación, ayudas económicas, hasta las reformas sustantivas y procesales en materia penal, civil y de seguridad social. En adelante, nos referiremos a esta norma como “Ley de Protección Integral”.

A continuación, mencionamos las innovaciones más importantes:

- Agravación del delito de lesiones previstas en el artículo 148 del Código Penal¹⁵⁵. Conforme al artículo 36 de la Ley de Protección Integral, se incluyen dos nuevos apartados de sujetos pasivos de este delito: si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, y cuando la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.
- Modificación del artículo 153, sobre protección contra malos tratos en el ámbito familiar. Con esta última modificación, establecida el artículo 37 de la Ley de Protección Integral, desaparece la referencia a las amenazas leves con armas u otros instrumentos peligrosos; se incluye como sujeto pasivo a persona especialmente vulnerable que conviva con el autor; si se impone la pena de prisión va de seis meses a un año, y lo que sí supone una novedad en este artículo, es que se permite imponer las penas inferiores en grado en

¹⁵⁵ Anteriormente se contemplaba la agravación cuando el delito de lesiones sólo cuando la víctima es menor de doce años o incapaz, por la circunstancia de indefensión, vulnerabilidad en que se encuentran.

atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la relación de hecho.

- Elevación a delito de las amenazas y coacciones leves sobre la mujer y personas especialmente vulnerables. Artículos 38 y 39 respectivamente. La pena de prisión no supera el año en ninguno de los casos y se contempla la posibilidad de inhabilitar el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años si resulta adecuado al interés del menor o incapaz.¹⁵⁶
- Se añade la posibilidad de suspender la condena al infractor, mediante la participación en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares (artículo 33 de la Ley de Protección Integral).
- Creación de una jurisdicción especial: los juzgados de la violencia sobre la mujer. Por primera vez no sólo conocerán causas en orden penal, sino también en materia civil¹⁵⁷. Los juzgados son denominados de Violencia sobre la mujer y al Juez se le denomina “De violencia de género”.

¹⁵⁶ Para evaluar la técnica legislativa e implicaciones constitucionales, revisar COBOL DEL ROSAL, Manuel (Coordinador); CARMONA SALGADO Concepción; DEL ROSAL BLACO Bernardo; GONZÁLES RUS, Juan José; MORILLAS CUEVA, Lorenzo y QUINTANAR DÍEZ, Manuel. “Addenda. Derecho Penal Español. Parte Especial.” Editorial Dykinson. Madrid, 2005

¹⁵⁷ El artículo 44 de la Ley Orgánica 1/2004, señala la competencia de estos juzgados:

“Se adiciona un artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción:

1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos:

a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior.

c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.

d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado.

2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos:

a) Los de filiación, maternidad y paternidad.

b) Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio.

c) Los que versen sobre relaciones paterno-filiales.

d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar.

e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores.

f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.

g) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.

- Establecimiento de un conjunto de medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas. Las medidas cautelares de orden de salida del inculcado del domicilio familiar, impedirle regresar al mismo, aproximarse a la persona protegida fijando la distancia mínima que no podrá rebasar, y comunicarse con las personas que se le indique, órdenes que deberá respetar so pena de incurrir en responsabilidad penal; podrán mantenerse hasta la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos (Artículos 64 y 66 de la Ley de Protección Integral).
- Creación del Fiscal contra la Violencia sobre la mujer, encargado de la supervisión y coordinación del Ministerio Fiscal en este aspecto, así como mediante la creación de una sección equivalente en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales a las que se adscribirán Fiscales con especialización en la materia.
- Derecho a la asistencia jurídica gratuita. El artículo 20 de la Ley de Protección Integral modifica el apartado 5 del artículo 3 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, quedando redactado en los siguientes términos:
 “5. Tampoco será necesario que las víctimas de violencia de género acrediten previamente carecer de recursos cuando soliciten defensa jurídica gratuita especializada, que se les prestará de inmediato, sin perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la misma, éstas deban abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención”.
- Servicio de tele-asistencia integral para las víctimas de violencia de género. Las víctimas de violencia, que no convivan con su agresor y cuenten con orden de protección, pueden ser beneficiarias de este servicio basado en la utilización de un teléfono móvil que dispone de un sistema de localización geográfica por GPS, a través del cual el Centro de Atención conoce la ubicación de la víctima. Durante las veinticuatro horas al día, la víctima puede utilizar los servicios de: 1) Seguridad, ante una situación de emergencia, el Centro de atención avisa inmediatamente a las autoridades policiales y servicios sociales más cercanos a la víctima. 2) Actuación preventiva: el centro de atención contacta periódicamente con las usuarias, para comprobar el funcionamiento del sistema e intervenir si es necesario.

3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:

- a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo.
- b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1 a) del presente artículo.
- c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género.
- d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.

4. Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente.

5. En todos estos casos está vedada la mediación.”

3) Atención psicológica y social: se atienden llamadas de usuarias en busca de comunicación o demanda de información.¹⁵⁸

- Protección en el ámbito social, modificando el Decreto Legislativo 1/1995 que aprueba la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para resolver problemas laborales que les genera a las trabajadoras que sufran formas de violencia en el ámbito doméstico, entre los que se destacan: adaptación y reducción de la jornada laboral, la suspensión y extinción del contrato de trabajo, la movilidad geográfica, y la inclusión, en el marco del Plan de Empleo, de un programa de acción específico para ellas. Beneficios que también se regulan en el caso de las funcionarias:

- En cuanto a las mujeres trabajadores por cuenta ajena se les aplica: derecho a una bonificación del cien por cien de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes a aquellas empresas que contraten eventualmente a mujeres para sustituir a las empleadas que hayan sido víctimas de violencia de género mientras estén ausentes, o que la situación legal de desempleo durante el periodo de suspensión de la trabajadora no suponga la minoración de los periodos de ocupación cotizada.

- Para las funcionarias, el derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, se regula de forma idéntica a lo previsto para las mujeres trabajadoras por cuenta ajena. Además, toda funcionaria víctima de violencia doméstica, que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su cuerpo o escala y de análogas características que se encuentre vacante y sea de necesaria provisión. Adicionalmente, las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género, se considerarán igualmente justificadas durante el tiempo que estimen necesario los servicios sociales de atención.

Las funcionarias víctimas de malos tratos tendrán asimismo derecho a solicitar la situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de aplicación en la misma”. Es más, durante los seis primeros meses también tendrán “derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable a efectos de trienios y derechos pasivos”, prorrogables hasta un máximo de dieciocho meses –siempre y cuando el Juez lo estimase necesario para garantizar la “efectividad del derecho de protección de la víctima”.

Para la materialización de todos estos derechos también deberá acreditarse la condición de víctima de violencia de género a través de la orden judicial de protección que resulte de la demanda penal; o excepcionalmente, con el

¹⁵⁸ Según lo referenciado por SANZ-DIEZ DE UZURRUN ESCORIAZ, Jaime y MOYA CASTILLA, José Manuel. “Violencia de Género. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. Una Visión Práctica”. Ediciones Experiencia. Primera Edición. Barcelona, septiembre de 2005, este programa forma parte del Plan de Medidas Urgente para la Prevención de la Violencia de género, para su ejecución se ha suscrito un convenio entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (INMSERSO) y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Debe tenerse en cuenta no todos los ayuntamientos facilitan dicho servicio, ya que es necesario adherirse antes al convenio suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (INMSERSO). P. 163 y 164.

informe del Ministerio Fiscal de que existen indicios de que la funcionaria ha sido víctima de malos tratos, en tanto no se dicte dicha orden de protección.

BIBLIOGRAFÍA

ACALE SÁNCHEZ M., *“El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar”*. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2000.

ALMARCHA BARBARDO A., “La violencia en el ámbito familiar”, ponencia para el libro *“La mujer como víctima: aspectos jurídicos y criminológicos”*. P. 135 a 148. Coordinadoras: RODRIGUEZ YAGÜE Ana Cristina, VALMAÑA OCHAITA Silvia. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2000.

AZAGRA MALO, A. y FARNÓS AMORÓS, E (2006), “La violencia doméstica en los derechos estatal y federal de los EEUU”. *Revista para el análisis del derecho INDRET* N°. 375. En <http://www.indret.com>

BANCO MUNDIAL (2003), *Gender equality and the Millennium development goals*. World Bank, Washington D.C.

BANCO MUNDIAL (2007), *Gender: Working towards greater equality*. World Bank, Washington D.C.

BECKER, G. S.(1968). “Crime and Punishment: An economic approach”. *Journal of Political Economy*. Vol. 76, No. 2, pp. 169-217.

BECKER, G. S. (1974). “A theory of marriage: Part II”. *Journal of Political Economy*, N° 82, pp. 511-526.

BECKER, G. S. (1981). *A treatise on the family*. Cambridge. Harvard University Press. Edición ampliada (1993).

BERKOWITZ, L. (1993). *Agression: Its causes, consequences and control*. Philadelphia: Temple University Press.

BLOCH F. and RAO V. (2002). “Terror as a bargaining instrument: A case study of dowry violence in rural India”. *The American Economic Review*. Vol. 92, No. 4, pp. 1029-1043.

BROWNING, M. and CHIAPPORI P.A. (1998). “Efficient Intra-Household allocations: A general characterization and empirical tests”. *Econometrica*, 1241-1278.

BOBONIS, G.; CASTRO, R.; GONZÁLEZ-BRENES, M. (2009). “Public Transfers and Domestic Violence: The Roles of Private Information and Spousal Control”. *Department of Economics, University of Toronto*. Working Paper 362.

CABRILLO RODRIGUEZ, F. (1996). *Matrimonio, familia y economía*. Editorial Minerva, Madrid.

CANO-MAILLO REY, Pedro Vicente. “Los juicios rápidos: Orden de protección, análisis y balance”. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2005.

CATALINA BENAVENTE, M. A. y OUBIÑA BARBOLLA S.. “Prisión Provisional: ¿Una solución a los malos tratos?. Comentario a la STC, Sala 2ª, 62/2005, 14/03/2005”. *Revista para el análisis del derecho INDRET* N°. 302. En <http://www.indret.com>

CENTRO REINA SOFÍA. “Informe Mujeres asesinadas por su pareja, España 2000-2009”. En Estadísticas, Violencia en el ámbito familiar en España. www.centroreinasofia.es

CENTRO REINA SOFÍA: “III Informe Internacional, Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Estadísticas y Legislación (2010)”. www.centroreinasofia.es

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2010). “Presentación de los Presupuestos Generales del Estado 2010 para el Congreso de los Diputados”. En www.lamoncloa.es

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (2010). “La Reeducación del agresor en las Instituciones Penitenciarias”. Intervención de la representante de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En Primer Congreso para el estudio de la Violencia contra las Mujeres. Sevilla, 30 de noviembre de 2010. www.congresoestudioviolencia.com/ponencias/18_concepcion_yague.ppt

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA. Barómetros:
Estudio 2861 de febrero de 2011.
Estudio 2778 de noviembre de 2008
Estudio 2630 de Diciembre de 2005.
Todos disponibles en www.cis.es.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (2006). “Informe del Grupo de expertos en Violencia doméstica y de género acerca de los problemas técnicos detectados en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género y sugerencias de reforma legislativa que los abordan. (Abril, 2006)”. *Consejo General del Poder Judicial*.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (2011). “Informe del Grupo de Expertos y Expertas en Violencia doméstica y de género acerca de los problemas técnicos detectados en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género y en la de la normativa procesal sustantiva u orgánica relacionada y sugerencias de reforma legislativa que los abordan (Enero, 2011)”. Consejo General del Poder Judicial.

Disponible en:

www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpi/cgpi/principal.htm

DUFLO, E. (2003), “Grandmothers and Granddaughters: Old-age pensions and intrahousehold allocation in South Africa”. *The World Bank Economic Review*, 17(1), P. 1-25.

DUFLO, E. (2005),, "Gender Equality in Development", Manuscrito, Departamento de Economía, MIT.

EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF THE JUSTICE (2010). Data from 2008, European Commission for the Efficiency of Justice. Disponible en:

[https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ\(2010\)Evaluation&Language=anEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864](https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2010)Evaluation&Language=anEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864)

EUROSTAT (2006), "Key figures on Europe. Statistical Pocketbook. Data 1995-2005", European Commission.

FAGAN, J. (1989), "Cesation of Family Violence: Deterrence and Disuassion", in L. Ohlin and M. Tonry eds., *Family Violence*, Vol. 11, *Crime and Justice: A review of Research*, University of Chicago Press, pp. 377-425.

FAGAN, J. (1999), "The criminalization of domestic violence: promises and limits". *National Institute of Justice*. Presentation at the 1995 Conference on criminal justice research and evaluation.

FERRER GARCÍA, Ana y MAGRO SERVET, Vicente. "*Setenta y tres criterios adoptados por magistrados de Audiencias Provinciales con competencias exclusivas en violencia de género*". Seminario de formación organizado por el Consejo General del Poder Judicial para magistrados pertenecientes a secciones especializadas en violencia de género organizado por el Observatorio de Violencia doméstica y de género, Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2005. *El Derecho Editores*. Publicación. 9 de enero de 2006.

FRIEZE, I. and BROWNE A. (1989), "Violence in marriage". in L. Ohlin and M. Tonry eds., *Family Violence*, Vol. 11, *Crime and Justice: A review of Research*, University of Chicago Press, pp. 163-218.

GANZENMÜLLER ROIG, Carlos; ESCUDERO MORATALLA, José Francisco; FRIGOLA VALLINA, Joaquín (1999). *La violencia doméstica. Regulación legal y análisis sociológico y multidisciplinar*. Editorial Bosch, Barcelona.

GAROUPA, N. (2000). Draft "An economic analysis of criminal law". *Department d'Economia i Empresa, Universitat Pompeu Fabra*.

GAROUPA, N.(1997). "The Theory of Optimal Law Enforcement". *Journal of Economic Surveys*.

GAROUPA, N. and DHARMAPALA, D. (2004). "Penalty enhancement for Hate Crimes: An economic analysis". *American Law and Economics Review*, Vol 6. Nº 1.

GELLES, R. (2007), "The politics of research: The use, abuse and misuse of social science data. The cases of intimate Partner Violence". *Family Court Review and Conciliation Courts*, Vol. 45, Nº 1, pp 42 - 51.

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID (2001): "*Criterios del Colegio de Abogados de Madrid en la emisión de dictámenes sobre honorarios profesionales a requerimiento judicial*". En Atención al Ciudadano. www.icam.es

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID (2010). "Proyecto de Presupuesto 2010" del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. En www.icam.es.

INSTITUTO DE LA MUJER. Estadísticas Violencia. En www.inmujer.es

"IV Informe del Observatorio de Justicia Gratuita", (2009), Consejo General de la Abogacía Española y La Ley. En www.abogados.es.

JAYARAMAN, R. (2004), "Modeling Domestic Violence", Center for Economic Studies, University of Munich, Germany.

JOHNSON, M. P. and FERRARO, K. J. (2000), "Research on Domestic Violence in the 1990's: Making Distinctions", *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 62, Nº 4, pp 948-963.

LABORATORIO DE SOCIOLOGÍA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (2003). "El tratamiento de la violencia familiar de género en la administración de Justicia. Resultados de la investigación y primeras conclusiones. 2000-2002". *Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza para el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género*. CALVO GARCÍA, Manuel (Coordinador).

LARRAURI, E. (2007). *Criminología Crítica y Violencia de Género*. Editorial Trotta, Madrid.

LOBBY EUROPEO DE MUJERES. Observatorio de Violencia. Estadísticas. Noticias. En: www.observatorioviolencia.org.

MANSER, M. and BROWN, M (1980). "Marriage and Households decision making: A Bargaining Analysis", *International Economic Review*, Nº 21, pp. 31-44.

MAYORDOMO RODRIGO, Virginia (2005). *La violencia contra la mujer. Un estudio de Derecho comparado*. Editorial Diles S.L., Madrid.

McELROY, M. S. and HORNEY M.J. (1981), "Nash-bargained household decisions: Toward a generalization of the theory of demand", *International Economic Review* Nº 22, pp. 333-349.

MINISTERIO DEL INTERIOR (2010). Balance de Criminalidad 2010, Junio de 2009 a Julio de 2010. Gabinete de Prensa. Se puede acceder en:

<http://www.mir.es/DGRIS/Balances/>

MONTANER FERNÁNDEZ, R. (2007) “El quebrantamiento de penas o medidas de protección a las víctimas de la violencia doméstica”, *Indret* (www.indret.com, Revista para el análisis del derecho). Nº 4, *Universitat Pompeu Fabra de Barcelona*.

MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M. (2010). *Derecho Penal Parte General*. Octava edición, Editorial Tirant Lo Blanch, Octava edición, Valencia.

OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO (2009). “Denuncias, procedimientos penales y civiles registrados, órdenes de protección solicitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y sentencias dictadas por los Órganos jurisdiccionales en esta materia en el año 2009”. En Estadísticas Judiciales de los Juzgados de la Violencia sobre la mujer. Elaborado por Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. *Consejo General del Poder Judicial*. www.poderjudicial.es

OHLIN, L. and TONRY M, (1989) “Family Violence in perspective”, in L. Ohlin and M. Tonry eds., *Family Violence*, Vol. 11, *Crime and Justice: A review of Research*, University of Chicago Press, pp. 1-18.

PASTOR PRIETO, Santos (2008). “¿Penuria de Medios? Un análisis empírico de los costes públicos y privados visibles y ocultos de la justicia”, en *La justicia procesal, Cuadernos de Derecho Judicial VI-2008*, Consejo General del Poder Judicial., Madrid. P. 347 - 434.

PINDYCK, Robert y RUBENFIELD, Daniel. *Microeconomía*. Editorial Prentice Hall. Séptima Edición. Madrid, 2009.

POLINSKY, M. and SHAVELL, S. (2000). “The economics of Theory of Public Enforcement Law”. *Journal of Economic Literature*. Vol. Nro. 38..

POLLACK, R. A. (2002), “An intergenerational model of domestic violence”, *Department of Economy*, Washington University in St. Louis.

POSNER, Richard (1985). “An economic theory of the criminal law”. *Columbia Law Review*. Vol. 85 Nº6.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2004). “Informe de la Real Academia Española sobre la expresión violencia de género”. *Real Academia Española*. Madrid, mayo de 2004.

SAMUELSON, P.A. (1956), “A social indifference curve”. *Quarterly Journal of Economics*, Nº 70, pp. 1-22.

SANAHUJA, María (2007). “Las últimas reformas legislativas y su repercusión en la violencia doméstica.”, *Revista La Factoría*, Nro. 32, Enero - Abril 2007, pp. 17-64.

SEN, A. (1989). "Cooperation, Inequality and the family". *Population and Development Review*, Vol. 15, Supplement: Rural Development and Population: Institutions and Policy, P. 61-76.

SERRANO MOYA, E. D. (2006). "Familia y teoría de juegos". *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, Vol. 4, Nº. 2. Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en Niñez, Juventud, Educación y Desarrollo. Universidad de Manizales, Colombia, P. 130-166.

SHAVELL, S. (2004). *Foundations of Economic Analysis of Law*. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachussets.

SHULTZ, T. P. (2004). "School subsidies for the Poor: Evaluating the Mexican Progres a Proverty Program". *Journal of Depevelopment Economics*. 74(1), P. 199-250.

STRAUS, M. A ; GELLES, R.J., and STEINMETZ, S.K. (1980), *Behind closed doors: Violence in the American family*. New York: Doubleday/Anchor

TAUCHEN, V.; WITTE, A. D.; LONG, S. (1991). "Domestic Violence: A Nonrandom affair". *International Economic Review*, Vol. 32, Nº 2, pp 491-511.

TAUCHEN, V. and WITTE, A. D. (1995). "The dynamics of domestic Violence". *The American Economic Review*, Vol. 85, Nº 2, pp 414-418.

Tercer Informe Anual (2010). Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. En:

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193049890379&pagename=Ministeriolgualdad%2FPage%2FMIGU_listado

THOMAS D. (1990). "Intra-household resource allocation: An Inferential approach". *Journal of Human Resources*, 25(4), P. 635-664.

TORREJÓN CUÉLLAR, Tatiana.

(Febrero, 2007) "Tratamiento de la Violencia de Género en España y en la Comunidad de Madrid". Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Documento de Trabajo Nro. 7.

(Mayo, 2006) "Regulación de la violencia de género en España. Análisis económico". Tesina para la obtención del DEA, programa de doctorado en Economía e Instituciones de la facultad de derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

TOUFIQUE, M. M. K. and RAZZAQUE, M. A. (2007), "Domestic Violence Against Women. Its Determinants and Implications for Gender Resource Allocation", *United Nations University and World Institute for Development Ecomomics Research*, Research Paper No. 2007/80.

WALBY, Sylvia (September 2004). "The cost of Domestic Violence". Publicado por *Women and Equality Unit. Department of Trade and Industry*. Se puede acceder al trabajo en:

<http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/walby-costdomesticviolence.pdf>

